

Imaginarios a cielo abierto

una mirada alternativa
a los conflictos mineros
en Perú y Bolivia

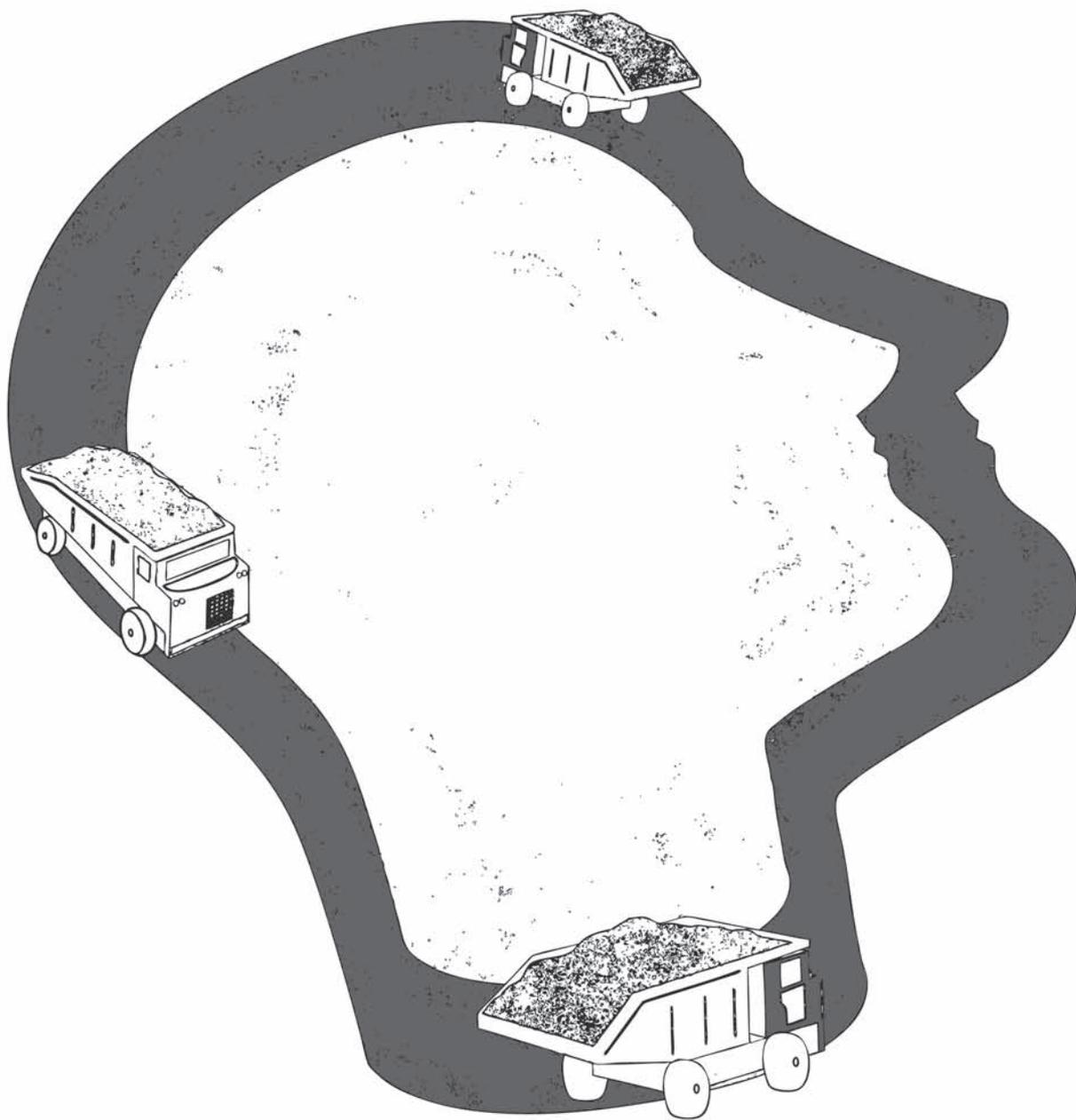


Antonio Rodríguez-Carmona

Miguel Castro

Pablo Sánchez

Imaginarios a cielo abierto



**Imaginarlos a cielo abierto.
Una mirada alternativa a los conflictos mineros en Perú y Bolivia**

Autores: Antonio Rodríguez-Carmona
Miguel Castro
Pablo Sánchez

Coordinación Editorial: ACSUR LAS SEGOVIAS
Diseño y maquetación: María López Vivas
Ilustraciones: Martín Elfman
Imprime: Editorial Quatro Hnos.



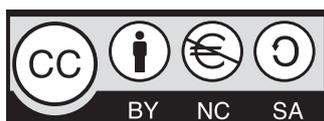
ACSUR LAS SEGOVIAS, 2013

Asociación de Cooperación con el Sur ACSUR – Las Segovias
Plaza Doctor Laguna, nº 10 Local C. 28009 Madrid.
www.acsur.org



Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de ACSUR - Las Segovias y no refleja necesariamente la opinión de la AECID

ISBN-13: 978-84-695-7374-7



Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 2.5 España

Este documento está bajo una licencia de Creative Commons. Se permite libremente copiar, distribuir y comunicar públicamente esta obra siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para fines comerciales. Licencia completa en: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc->

PRÓLOGO

El presente informe de investigación es resultado de una **reflexión abierta** entre los sectores que trabajan en la minería desde un enfoque de derechos. La complejidad y dinamismo de los desafíos que encara la minería en Los Andes, así como la existencia de múltiples intereses y continuos posicionamientos, requiere poner en común inquietudes y percepciones desde diferentes miradas. En este sentido, la investigación no pretende ofrecer conclusiones cerradas, sino más bien abrir preguntas e interrogantes para estimular un debate público informado, discutir amenazas y oportunidades, identificar desafíos y trazar líneas de acción.

En este sentido, el informe está pensando como **caja de herramientas** e instrumento al servicio de las luchas sociales. Se pretende que pueda ser utilizado como material de trabajo por las organizaciones sociales, activistas, técnicos de ONG, profesionales y expertos que trabajan en el área. Con el fin de ampliar miradas y horizontes para diseñar y poner en marcha nuevas estrategias de resistencia frente las crecientes amenazas de la megaminería en América Latina.

El **equipo de sistematización** está formado por Antonio Rodríguez-Carmona, Miguel Castro y Pablo Sánchez, quienes desde ACSUR se han encargado de recoger insumos, preparar un primer esquema de contenidos y lanzar una propuesta de discusión con las organizaciones socias de ACSUR en Perú y Bolivia.

De este modo, el informe ha contado con los **valiosos aportes** de Mirtha Vázquez, Marco Arana y Sergio Sánchez (GRUFIDES), José de Echave y Julia Cuadros (CooperAcción), así como Marco Gandarillas y Pablo Villegas (CEDIB). Además, muchos contenidos ideas han surgido a partir de conversaciones e intercambio de ideas con otras organizaciones sociales, ONG, activistas y profesionales que trabajan en el campo de la minería. En Perú queremos agradecer los aportes de Alejandra Alayza (Red GE), y Raphael Hoetmer, Mar Daza y Diego Saavedra (PTDG), entre otros. En Bolivia, agradecemos las contribuciones de Iván Bascopé, Miguel Vargas y Polo de la Riva (CEJIS), Patricio Mendoza (FRUTCAS), Iván Aranda (asesor de COMIBOL), Emilio Madrid y Sarah Friederich (Colectivo CASA), entre otras personas.

El presente informe de incidencia es una apuesta de ACSUR, en el marco del **Convenio con financiación AECID** sobre “Fortalecimiento de la sociedad civil para la exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y la gestión sostenible de recursos en Bolivia y Perú”. Los socios del convenio son las organizaciones COOPERACIÓN y GRUFIDES (Perú), así como CEDIB y Agua Sustentable (Bolivia). Las cinco socias coordinan acciones para promover los derechos humanos en la minería, ya sea a través del acompañamiento a organizaciones sociales, la capacitación de dirigentes, la generación y distribución de información, el impulso de estrategias de incidencia política, o el trabajo en redes regionales.

La **Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR-LAS SEGOVIAS)** es una organización ciudadana, pluralista y laica, comprometida con una acción de transformación social para construir un modelo de desarrollo equitativo, sostenible y democrático a escala global para hombres y mujeres. www.acsur.org

Antonio Rodríguez-Carmona

ÍNDICE

Resumen ejecutivo

La minería en Los Andes: ¿debate de ideas a lucha de imaginarios?..... 11

Glosario

Introducción

La mirada de los imaginarios.....21

I. IMAGINARIOS

1. Los Andes como región extractiva en la memoria colectiva: la continua recreación de los mitos de origen.....27

1.1 Un imbricado tejido de mitos: ¿qué hay detrás del sincretismo andino?.....27

1.2 La instrumentalización de los mitos de origen por parte del lobby minero en Perú.....30

1.3 El imaginario heroico de las luchas mineras en Bolivia.....31

1.4 La producción minera entendida como relación sexual fértil: ¿por qué las mujeres no pueden entrar en la mina de socavón?.....33

2. Y... llegaron las políticas neoliberales.....35

2.1 Los gobiernos del MNR en Bolivia.....35

2.2 Los gobiernos de Fujimori y el APRA en Perú.....36

2.3 La expansión minera en cifras.....38

2.4 La transnacionalización de la minería: ¿pérdida de soberanía?.....46

2.5 La masa gris: la megaminería como instrumento de “desarrollo sostenible”.....55

2.6 El rol subordinado de las mujeres en la megaminería a cielo abierto.....57

3. Los imaginarios que sostienen la expansión minera.....59

- 3.1 El imaginario de la pobreza como puerta de entrada de las transnacionales y motor de la expansión minera.....59
- 3.2 La construcción del imaginario de modernidad en Perú sobre el excedente minero.....63
- 3.3 El imaginario de la minería nacional en Bolivia: ¿quimera o realidad?.....68
- 3.4 La integración regional fagocitada por el sector extractivo y energético: ¿recursos naturales para la región?.....72
- 3.5 Los no-territorios: ¿son los pasivos mineros y conflictos socioambientales sacrificios inevitables del progreso?.....74
- 3.6 La megaminería y el imaginario retórico de la Responsabilidad Social Empresarial: ¿algo más que un lavado de imagen?.....76

4. Las dificultades para construir nuevos imaginarios de resistencia.....81

- 4.1 El imaginario de la Madre Tierra y las contradicciones del MAS en materia de políticas extractivas.....81
- 4.2 El “buen vivir”: ¿cómo se aterriza?.....86
- 4.3 La extracción como imaginario masculino: ¿cómo se rompe el círculo vicioso?.....88

II. RESISTENCIAS

5. Las resistencias desarticuladas de los movimientos sociales en Perú.....93

- 5.1 La desarticulación del tejido social en torno a la minería en Perú.....93
- 5.2 Movimientos locales y regionales con tendencia a la atomización.....96
- 5.3 ¿Cuál es el papel de las mujeres en las resistencias peruanas?.....98
- 5.4 Las redes peruanas de ONG con vocación de actores nacionales en minería: sus aportes y límites.....99

6. Las tensiones al interior del “proceso de cambio” en Bolivia.....103

- 6.1 El alejamiento de las organizaciones sociales del MAS: ¿un distanciamiento sin rupturas?.....103
- 6.2 Dispersión de esfuerzos y redes paralelas de ONG bolivianas en minería: ¿un reino de taifas?.....105
- 6.3 La emergencia de una oposición ambiental al MAS con capacidad creciente de convocatoria.....108
- 6.4 ¿Cuál es el papel de las mujeres bolivianas en los debates sobre minería?.....109

7. El universo de la resistencia minera.....111

- 7.1 Acciones de defensa del territorio.....111
- 7.2 Análisis y difusión de información.....113
- 7.3 Acciones legales y judiciales.....114
- 7.4 Incidencia política.....115
- 7.5 Acciones en la esfera regional y global.....116
- 7.6 Acciones culturales alternativas.....119

8. Resistencias mineras como lucha de imaginarios: dos experiencias.....123

- 8.1 La defensa del cerro Quilish (Cajamarca): continúa la amenaza.....123
- 8.2 El NO a la minería de Challapata en Oruro: “50 años de producción sin contaminación”.....136

III. CONCLUSIONES

9. ¿Cómo se construyen los imaginarios de resistencia minera?.....145

• Bibliografía de referencia.....157

ÍNDICE DE RECUADROS

I. IMAGINARIOS

Capítulo 1

1. El origen de Potosí.....29
2. El síndrome del cuarto de rescate.....31
3. El imaginario de la mujer palliri.....33

Capítulo 2

4. TLC firmados por Perú.....37
5. Mil comuneros criminalizados en Perú.....37
6. La minería peruana en cifras.....39
7. La minería boliviana en cifras.....42
8. San Ramón. La fiebre del oro.....43
9. El traslado de Morococha en beneficio de la minera Chinalco.....45
10. Los terribles impactos de la megaminería a cielo abierto.....46
11. Contrato de seguridad privada: Ejército peruano y minera Afrodita.....47
12. Grupo Norte.....48
13. El “Club de los Soñadores”.....49
14. La “Bancada Yanacocha”.....50
15. Inti Raymi y su estrategia de cierre de La Joya.....51
16. Mineras, embajadas y cables de Wikileaks en Perú.....52
17. Aznar, embajador de oro.....52
18. El Caso DOE RUN en La Oroya.....53-54
19. El informe Abriendo Brechas: El camelo de la minería sostenible.....56
20. Carta Abierta de 50 Europarlamentarios.....57
21. Programa de empleo temporal de Xtrata en Las Bambas.....58

Capítulo 3

22. “Satisfacción de la idiosincrasia pedilona”.....60
23. Síndrome del perro del hortelano.....66
24. Vale: una transnacional pulpo.....73
25. La mina seca el Poopó.....74
26. La RSE de Yanacocha.....76

Capítulo 4

27. La Nueva Constitución Ecuatoriana, 2008.....82
28. La Nueva Constitución Boliviana, 2009.....83
29. Desafíos del Buen Vivir.....87

II. RESISTENCIAS

Capítulo 5

30. La crisis de CONACAMI.....	95
31. Campaña “Alternativas al extractivismo”.....	100
32. Espionaje a GRUFIDES.....	101

Capítulo 6

33. La lucha de las mujeres contra los mitos de los socavones.....	110
--	-----

Capítulo 7

34. Los “anti-mapas”.....	113
35. Tambogrande.....	120

Capítulo 8

36. La minera Yanacocha en cifras.....	123
37. Yanacocha enjuició y persiguió a 51 dirigentes.....	125
38. La penetración minera.....	126
39. Coplas de Carnaval.....	128
40. El cerro Quilish en cifras.....	128
41. “Primero el agua, después la mina”.....	131
42. Challapata en cifras.....	136
43. Cerro Achachucani en cifras.....	137
44. Castillian Resources en cifras.....	141
45. Instrumentos de la campaña.....	143

ÍNDICE DE GRÁFICOS

I. IMAGINARIOS

Capítulo 2

1. Mapa de concesiones mineras en Perú.....	38
2. Evolución de la producción y exportación minera en Perú (1995 – 2010).....	40
3. Evolución de la inversión minera en Perú (1995 – 2010).....	40
4. Evolución de la producción y exportación minera en Bolivia (1995 – 2010)....	41
5. Evolución de la inversión minera en Bolivia (1995 – 2010).....	41

Capítulo 3

6. Consecuencias de transnacionalización de la minería.....	47
7. El Iceberg de la RSE.....	80

La minería en Los Andes: ¿debate de ideas o disputa de imaginarios?

Perú: el país de la nueva minería

A nadie se le escapa que **la gestión de Alan García (2006-11) combinó un sostenido crecimiento económico con un alto coste social**: si su mandato se inició con 82 conflictos, terminó con 217 (de un marcado carácter socioambiental). En la campaña electoral de 2011, las ONG activas en derechos humanos y medio ambiente reclamaron un cambio de rumbo. La Red Muqui dio a conocer una agenda concertada sobre minería y desarrollo, con 102 propuestas concretas. Y otra **alianza de ONG reclamó un nuevo acuerdo de gobernabilidad para las industrias extractivas** en las páginas del diario *La República*. La agenda mínima de cinco puntos incluía demandas sociales (ley de consulta previa e impuesto a las sobreganancias mineras), exigencias técnicas (evaluación ambiental), reivindicaciones de gobiernos regionales (ordenamiento territorial), e incluso guiños a la población urbana, como la defensa de la Amazonía o la promoción de energías renovables. Dos semanas antes de la primera vuelta, la alianza promovió un foro público sobre alternativas al extractivismo, con la participación de expertos y representantes de partidos políticos. Los organizadores propusieron una amplia batería de preguntas. Sin embargo, los candidatos utilizaron el espacio para vender la imagen verde de sus programas, sin entrar a discutir ideas ni propuestas. ¿Tan difícil es debatir? Los representantes de PPK (Kuczynski) y Gana Perú (Humala) se enzarzaron en una agria polémica a cuenta del carácter pre-moderno de las comunidades nativas. Ése fue el principal debate de la noche. La campaña, en todo caso, tuvo cierto eco: el impuesto a las sobreganancias mineras fue asumido por Gana Perú en su programa electoral y se convirtió en tema de debate público. Fue, sin embargo, una gota en el océano mediático, dominado por los mensajes pro-mineros.

La industria minera es un actor omnipresente en los medios peruanos. Emiten spots en radios y televisiones, financian proyectos de desarrollo rural, convocan premios en humanidades y artes, o promueven campañas para designar las siete maravillas ambientales del Perú, todo ello bajo el paraguas de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). “La minería que tú quieres existe”, asegura la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El despliegue “responsable” de algunas mineras como Yanacocha cubre todo el espectro ideológico, desde intervenciones típicas de desarrollo rural hasta acciones de educación inclusiva y salud rural (que recuerdan a los programas del ALBA) o el apoyo a emprendedores (más propio de los esquemas de cooperación de la derecha). ¿Un lavado de cara? Ojalá fuera solamente eso, pero **las acciones de RSE son parte de una política más amplia de generar un cordón social de seguridad en torno a las minas, ofrecen una pantalla paraestatal y sirven para cultivar las redes clientelares de empleo creadas por las mineras en las regiones.**

Más allá de los discursos mediáticos, la agudización de conflictos socioambientales posicionó nuevos elementos en el debate peruano. El violento conflicto que estalló en Puno contra la minera Santa Ana (subsidiaria de *Bear Creek Mining*) en junio 2011, aparte de una profunda reivindicación étnica, puso con mucha claridad la política de concesiones mineras sobre la mesa. Por primera vez, una región entera cuestionaba los procedimientos del Ministerio de Energía y Minas para autorizar concesiones o realizar audiencias públicas. De fondo, lo que estaba en tela de juicio era la gobernabilidad ambiental, un tema que las redes de ONG, pese a sus notas de prensa e informes de incidencia, no pudieron colocar en el debate público. Tras la ajustada victoria de Humala, la SNMPE no se quedó cruzada de brazos. A los empresarios les faltó el tiempo para cercar al nuevo presidente con el sacrosanto discurso de la seguridad jurídica para la inversión. Con motivo de la Copa América, la Sociedad emitió un *spot* en el intermedio de la semifinal Perú-Uruguay. El comercial señalaba que Chile era el 8º país del mundo en atraer inversión minera frente al puesto 48º del Perú, debido a la elevada presión fiscal. “¿Vamos a dejar que Chile nos siga ganando en minería?”... El spot generó una fuerte polémica en *facebook* y *twitter*, y varios expertos demostraron en prensa que los datos del comercial eran falsos. La reacción fue tal que las mineras se vieron obligadas a retirar el spot.

¿Fue un gol en propia puerta de las mineras? Tal vez erraron el tiro en esa ocasión, pero **la industria minera ha demostrado históricamente contar con munición para posicionar sus mensajes en la sociedad.** Utilizan la bandera de la lucha contra la pobreza para penetrar en los territorios y apelan al mito de la modernidad como promesa de progreso y desarrollo para las regiones mineras. “No hay peor contaminación que el hambre”. “Somos un país pobre sentado en un cerro de riquezas”. “Por cada empleo directo, la minería genera cuatro empleos indirectos”. Esta es la cara amable, por así decirlo. **Pero la moneda de la modernidad porta también el reverso del racismo contra los actores indígenas y campesinos,** así como la discriminación contra las mujeres, que tienen un rol subsidiario en la megaminería a cielo abierto.

Y por encima de todo, presentan la imagen del Perú como país aventajado de la nueva minería con tecnología punta. **“Perú, el país de la nueva minería” constituye el lema principal de la campaña de la SNMPE (www.perupaisminero.pe).** El más vivo símbolo de ese imaginario se encarna en la opulencia de Lima, una megaciudad autorreferenciada que ha construido su progreso sobre el excedente minero que captura del resto del país. Pero el mismo artefacto de modernidad se encuentra en *El Quinde Shopping Plaza* de Cajamarca, construido para las élites mineras en la ciudad. La modernidad se expresa así en una desmedida capacidad de consumo, a espaldas de los altos costes sociales y ambientales de la megaminería.

En manos de unos pocos, la riqueza minera se ha levantando sobre una montaña de pasivos ambientales que ha multiplicado la conflictividad social hasta niveles sin precedentes en el Perú. El conflicto armado de los 90 dejó a la **sociedad civil desarticulada** y herida de desconfianza. Desde entonces, se suceden intentos dispersos de rearticu-

lación tendentes a conformar un nuevo sujeto político frente al extractivismo de corte neoliberal. Constituidos en actores con voz propia, las redes de ONG mantienen vivo ese sueño de articulación nacional. Sin embargo, la penetración minera en muchas regiones peruanas parece no tener freno. **Las regiones se han dividido entre actores pro-mineros y anti-mineros, lo que ha socavado la capacidad colectiva de resistir.** En este contexto, la victoria electoral de Humala en 2011 supone una ventana de esperanza, si bien los anclajes del neoliberalismo son sólidos en la sociedad peruana, y el blindaje de los TLC firmados por el gobierno de Alan García deja un margen escaso de maniobra. De hecho, las primeras señales emitidas por Humala, incluyendo su tímida reforma fiscal, se dirigen a dar un mensaje de estabilidad al sector empresarial.

Bolivia: el mito de la nacionalización y la industrialización

¿Cuál es el debate en Bolivia? ¿Qué se discute sobre minería en los medios de comunicación? A diferencia de Perú, las organizaciones sociales han protagonizado históricamente la lucha por los recursos naturales. No en vano, **los bolivianos poseen el imaginario heroico de las luchas mineras como vanguardia sindical del país. Fruto de la Guerra del Gas en 2003, la denominada “agenda de octubre” incluyó la nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización del gas.** Las organizaciones sociales lograron también importantes conquistas en la Constitución de 2009, que reconoce el “buen vivir” como principio ético-moral (art. 8) y la industrialización de los recursos naturales como “fin y función esencial” del Estado (art. 9). Además, el éxito fiscal que supuso la Ley de Hidrocarburos de 2005 ha alentado a muchas organizaciones campesinas a reclamar un impuesto directo también en la minería. “Ya que se llevan, por lo menos que quede algo”. Los retoques tributarios que se adoptaron en 2007-08 al sector minero, sin embargo, no cambiaron el modelo heredado de la época neoliberal.

La minería nacional es el primer imaginario al que apela el Gobierno del MAS. En su publicidad, el Ministerio de Minería y Metalurgia muestra una fotografía de Evo Morales con guardatojo (casco minero), taladro y guirnalda de hojas de coca: “La riqueza minera ¡para todos los bolivianos!” ¿Quimera o realidad? La recuperación del histórico yacimiento de Huanuni (Oruro) para la minera estatal COMIBOL es el buque insignia de esta política. Sin embargo, el Estado sólo representa el 7,7% del empleo minero, y Huanuni presenta no pocos problemas de eficiencia y contaminación ambiental. ¿Es sostenible un imaginario así? Por su parte, **la industrialización de la minería ha sufrido retrasos y contratiempos múltiples.** “No se puede hacer en 5 años lo que no se hizo en 180 años de vida republicana”, alega el vicepresidente García Linera para justificar los retrasos, mientras que el diario oficialista *Cambio* da amplia cobertura a los proyectos industriales mineros: el complejo siderúrgico del Mutún (en asocio con la minera india *Jindal*), la planta hidrometalúrgica de cobre en Corocoro (con la coreana Kores), o la planta metalúrgica de Karachipampa en Potosí. Pese a los retrasos, se mantiene así vivo el imaginario de la industrialización, que encuentra su máxima expresión en los planes para explotar el litio del Salar de Uyuni. En ese afán el gobierno tiene plena sintonía con la Federación Regional Única de Trabajadores del Campo del Altiplano Sud (FRUTCAS): “Explotación para los bolivianos con técnicos bolivianos”.

El tercer mensaje clave se refiere a la defensa de la madre tierra. **El gobierno de Evo Morales ha desplegado una intensa actividad internacional para defender la causa ambiental** en las cumbres mundiales sobre cambio climático de Copenhague (2009) y Cancún (2010), con propuestas audaces para reconocer la deuda ambiental Norte-Sur y rechazar la división internacional del trabajo entre países ricos (contaminantes) y países pobres (guardabosques). Al interior del país, sin embargo, su política se tiñe de contradicciones. En la Cumbre de los Pueblos celebrada en Tiquipaya (marzo 2010), varias organizaciones indígenas y ONG quisieron constituir la mesa 18, fuera del pro-

grama oficial, para debatir los impactos ambientales de los megaproyectos energéticos y mineros en el país. El gobierno no lo vio con buenos ojos, y argumentó que los trapos sucios mejor se lavan en casa. La mesa se celebró finalmente bajo presiones, lo que suscitó una dura polémica entre el gobierno y organizadores en los medios.

Las contradicciones del MAS en canalizar (y traducir en políticas) el imaginario de la madre tierra o el buen vivir ha profundizado las tensiones al interior del “proceso de cambio”. Y ha sumido a las organizaciones sociales en un estado de confusión, al crecer la brecha entre bases y dirigencias nacionales, y ser más difícil la canalización de demandas. Se ha abierto así un escenario de recomposición de alianzas y liderazgos, en el que varios sectores sociales (clases medias, ONG y organizaciones indígenas) han encontrado en el medio ambiente un flanco fértil de oposición al gobierno. Atribuyen al modelo oficial de desarrollo seguir fórmulas rentistas y extractivistas. Un grupo de 39 intelectuales, liderado por conocidos ex-funcionarios del gobierno, abanderó en junio 2011 un Manifiesto por la Reconducción del Cambio, acusando al ejecutivo de restaurar las viejas estructuras neoliberales, endeudar el país, ahondar el modelo extractivista y violar la democracia. La respuesta del vicepresidente no tardó en llegar. En un enrabiado documento titulado *El Oenegismo: enfermedad infantil del derechismo*, García Linera se defendió de las críticas: “¿Por qué tenemos que pagar nosotros con nuestro «inmovilismo productivo», con nuestra miseria y desvinculación, las consecuencias de la orgía depredadora de los países industrializados? Como país y como sociedad tenemos derecho a mantener un intercambio metabólico con la naturaleza para satisfacer las necesidades del ser humano y de la propia naturaleza”. Y denunció el negocio ambiental de las transnacionales, así como la apropiación de la bandera ambientalista por parte de ONG y oligarquías cruceñas.

¿Por qué descarga el vicepresidente contra las ONG? La verdad es que dan motivos para la crítica. Por un lado, hay instituciones que hacen un trabajo valioso de análisis, difusión de información y acompañamiento a organizaciones sociales, pero otras se aferran a sus dinámicas autorreferenciadas. Las coordinadoras nacionales han entrado en crisis de conducción estratégica, como es el caso de la Comisión para la Gestión Integral del Agua (CGIAB) o el propio Observatorio de Conflictos Mineros (OBCOM). En este contexto, cada ONG promueve su propia plataforma y observatorio de análisis. ¿Con qué resultado? Redes paralelas y dispersión de esfuerzos. **La competencia por la legitimidad social y los fondos de las agencias financieras se ha traducido en un fenómeno creciente de “oenegización” de los observatorios**, y lo que es más preocupante, de apropiación de casos emblemáticos. Con todo, las sucesivas movilizaciones que se han producido en torno a las marchas indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS) desde octubre de 2011 revelaron, la vitalidad de la agenda indígena y la habilidad para aprovechar los errores del gobierno y conectar así con sectores urbanos de clase media. Pero también han puesto de relieve lo difícil que ha sido mantener en el tiempo una agenda indígena única y consensuada entre todos los miembros del actualmente debilitado Pacto de Unidad.

Por su parte, las transnacionales mineras han preferido mantener un perfil bajo, y trabajar a rebufo de las políticas gubernamentales. Adoptan, como en Perú, nombres en quechua (*Inti Raymi* o *Sinchi Wayra*) para remitir al imaginario de lo indígena y de la madre tierra. Prodigan, además, la imagen de su RSE con pequeñas inversiones de alto impacto local (parques infantiles o canchas de fútbol). Las estrategias de infiltración institucional no son tan depuradas como en el país vecino, pero se advierten prácticas de cooptación de líderes campesinos y fomento de divisiones sociales. **En un país como Bolivia, donde las organizaciones sociales tienen un alto concepto de soberanía, las transnacionales están en el punto de mira.** En 2009, un conjunto de instituciones impulsaron un estudio independiente sobre el uso del agua en el sudeste de Potosí, donde opera la minera San Cristóbal (subsidiaria de la japonesa *Sumitomo*). El informe *Minando el Agua* lanzó algunos mensajes contundentes: “San Cristóbal extrae diariamente entre 42.000 y 50.000 metros cúbicos de aguas subterráneas, más agua que toda la ciudad de Potosí”. “Su consumo de aguas fósiles supera la capacidad

de recarga de la capa freática, lo que secará fuentes superficiales y bofedales” y... “no paga por el agua que usa”. El informe logró posicionar el tema en los medios de comunicación y despertar la conciencia sobre los peligros de la megaminería a cielo abierto.

Con todo, los debates sobre minería tienen dificultad para permear en la sociedad

Desde las organizaciones sociales y ONG se recogen demandas y se proponen nuevos temas de debate. De hecho, **la agenda no ha hecho más que ampliarse**. Al debate histórico sobre salud y contaminación minera, se han sumado en los últimos años otras preocupaciones. La problemática del *agua* se ha situado en el centro del debate, con gran capacidad de articular intereses transectoriales (entre comunidades campesinas en cabecera de cuenca y agricultores de valle, o entre el campo y la ciudad). Amparado por la legislación internacional, el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas entronca con la defensa de la “tierra y territorio”, emergiendo como nueva lucha simbólica en el continente. Por otro lado, las secuelas de dos décadas neoliberales plantean ahora la necesidad de reinventar los esquemas de gobernanza ambiental y control público de las actividades extractivas. La fuerte expansión minera ha generado un rebalse de minería informal y artesanal de creciente magnitud, que ya no se puede ignorar. En Bolivia, se discute intensamente, además, sobre cómo industrializar la minería, y en Perú el debate más novedoso versa sobre transición al post-extractivismo.

Muchos de estos **debates tienen lugar, sin embargo, en un circuito cerrado**. Hay proyectos, foros de discusión, plataformas, informes sesudos y boletines, incluso agendas mínimas de incidencia, pero el debate no permea al conjunto de la sociedad. ¿A qué se debe? A menudo, los documentos están escritos para ser leídos por las propias ONG que los promueven: sin capacidad de convocar a los medios de comunicación ni de llegar al gran público. Y las resistencias mineras apenas trascienden su carácter local para articularse nacionalmente. Sólo cuando los conflictos estallan —como en Bagua (Perú) en 2009, o en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécuré (Bolivia) en 2011—, las problemáticas socioambientales tiñen las portadas de los periódicos, pero la polarización no ayuda a entablar un debate sereno. **Mientras tanto, las transnacionales y los gobiernos despliegan sus poderosos aparatos de comunicación. No lo hacen sobre ideas ni argumentos racionales sino que apelan directamente a los imaginarios colectivos**. De este modo, las aspiraciones de progreso, modernidad y salida de la pobreza se convierten en los principales aliados del negocio minero.

La minería como disputa de imaginarios

En realidad, la lucha más importante se dirime a nivel de imaginarios, a favor y en contra de la mina, incrustados en el subconsciente colectivo. Los que aseguran, por ejemplo, que los andinos son pueblos pobres sentados sobre la riqueza de sus minas. O que la inversión minera es sinónimo de empleo y riqueza. ¿Son los indígenas pueblos pre-modernos y actúan, por tanto, como el “perro del hortelano” cuando se oponen a la minería? ¿O utilizan su condición indígena para chantajear a las empresas y sobreponerse al interés nacional? **Son finalmente los imaginarios colectivos los que abren o cierran la puerta a los debates. Forman un sustrato más profundo que los programas de los políticos, los argumentos técnicos de los expertos o las agendas de las ONG**. ¿Cómo se sale de la modernidad? ¿Cómo se sale del consumo ligado al estatus? ¿Cómo se sale de la lucha contra la pobreza? ¿Cómo se resuelve el progreso? ¿Es posible salir del patriarcado minero? ¿Cómo se sale, pues?

Como nunca antes en la historia, la nueva minería responde a las lógicas de la globalización y transnacionalización del capital. Sin embargo, y pese a lo que pudiera parecer a simple vista, su primer motor propulsor no es económico sino cultural. En la última década, la industria minera transnacional ha trascendido la publicidad, el márketing o la RSE. Esos instrumentos están al servicio de una estrategia mayor: lograr un cambio cultural en las poblaciones locales. Apelan a la tecnología del futuro, a esquemas de diálogo y concertación... lo que no dicen es que apuntan a manipular los imaginarios colectivos para lograr penetrar y ocupar territorios, en un proyecto de colonialismo hegemónico. **Esta nueva estrategia de la industria minera ha generado una inevitable lucha de imaginarios.** De un lado, el gran relato de la modernidad y la lucha contra la pobreza constituyen las principales bazas sobre las que se asienta el avance de la nueva megaminería. El consumo abusivo de agua, la proliferación de conflictos sociales y el reguero de pasivos ambientales son presentados como costes inevitables del progreso. La estrategia de comunicación minera es tan poderosa que las organizaciones locales se han visto obligadas a trazar nuevos caminos por los que resistir. Tierra y territorio, soberanía alimentaria, derechos de la madre tierra, justicia ambiental, feminismo comunitario o buen vivir son algunas de las banderas renovadas para frenar el avance imparable de la extracción minera. Prefiguran un horizonte emancipatorio, sin duda, pero se trata aún de intuiciones que precisan consolidarse en consignas y artefactos tangibles con capacidad de convocatoria.

La lucha de imaginarios es palpable en los medios de comunicación, en las vallas publicitarias y en las poleras de los activistas, pero también en las obras de infraestructura, en el urbanismo de las ciudades mineras, o en los planes de desarrollo regional. La industria minera pone toda la carne en el asador para consolidar su hegemonía en los medios de comunicación, infiltrarse en las instituciones y adueñarse así del subconsciente local. **Se trata, por tanto, de un problema cultural que no se puede enfrentar desde esquemas de gobernanza o un enfoque de derechos. Es mucho más profundo y requiere un abordaje distinto.**

Una lucha asimétrica y dura, pero no una lucha perdida

La industria minera transnacional se apropia e instrumentaliza los imaginarios existentes en la sociedad. Sus departamentos corporativos de comunicación y estrategia empresarial dedican no pocas energías a estudiar qué aspiraciones colectivas y temores dominan en la población local, así como a diseñar la mejor forma de neutralizar sus banderas de resistencia. En el sur de Cajamarca, Yanacocha logró arraigar la idea de que la agricultura era una actividad de subsistencia que no permitía salir de la pobreza. Tras la derrota para explotar el Quilish en 2004, sin embargo, la minera aprendió de sus errores e intensificó su campaña orientada a “cosechar agua”. “Primero el agua, después la mina”, se convirtió en el nuevo lema para ingresar en Celendín con el proyecto “Conga” y sustituir lagunas en cabecera de cuenca por represas que duplican supuestamente la capacidad hídrica. Para incidir en los imaginarios colectivos, las mineras **hacen uso de artefactos deliberados de acción repetitiva, usando las técnicas de la publicidad.** Emiten *spots*, programas de radio, construyen represas, sistemas de depuración de agua por ósmosis inversa o exhiben granjas ecológicas junto a las minas, con la intención clara de diseminar el mito de la modernidad y vender la minería como vía natural para superar la pobreza. Los artefactos operan en una doble dimensión: colectiva e individual. Inaugurado en 2006, *El Quinde Shopping Plaza* de Cajamarca es el mayor artefacto para irradiar la modernidad en la ciudad. El centro comercial se ha convertido en territorio reservado a las pudientes clases mineras. Apela a una nueva identidad cajamarquina insertada en la globalización, que puede mirar de tú a tú a la capital limeña. Pero también opera en el subconsciente individual a través del consumo. La bisutería, ropa de moda, o electrónica más avanzada crean un vínculo personal con la modernidad. Se trata, no obstante, de una modernidad excluyente para la gran parte de la población: se mira pero no se toca.

David contra Goliath. La lucha de imaginarios se entabla en un tablero profundamente asimétrico. **Esa asimetría se expresa, sin duda, en términos de disponibilidad de recursos económicos, tiempos de reacción, o en la temible capacidad que tienen las transnacionales de acumular poder en el tiempo.** De hecho, una vez que han penetrado en un territorio, su capacidad de infiltración institucional y social es de tal calibre que juegan con ventaja cualquier batalla. El lobby global de la industria minera tiene expertos diseñando las estrategias de comunicación para dentro de diez y veinte años. A través de películas como Avatar, Hollywood empezó ya a apropiarse de la comunión con la naturaleza, un imaginario que ya no es patrimonio exclusivo de los pueblos indígenas. Es más, las resistencias exitosas son puntuales, ya sea en el tiempo (la defensa del Quilish en 2004 en Cajamarca) o en el espacio (el caso singular de Challapata en Oruro). En términos generales, **el avance minero parece, hoy por hoy, incontestable en el mundo, y en América Latina en particular. En ese contexto, los focos de resistencia podrían estar cumpliendo una función legitimadora, ya que visibilizan los límites ambientales de la minería y justifican así su negocio global.**

Sin embargo, los imaginarios de la industria y los movimientos sociales no están contruidos con los mismos resortes. Sus procesos de construcción obedecen a diferentes parámetros. Las transnacionales mineras se apropian e instrumentalizan imaginarios, y utilizan artefactos deliberados. Su principal baza es disponer de recursos económicos y recursos humanos altamente cualificados, pero también contar con una organización jerárquica, cadena de mando, seguridad privada y, en ocasiones también, fuerza paramilitar (por ejemplo, en el caso de Colombia, o en las áreas fronterizas). No tienen reparo, además, en aprovecharse de los intereses particulares a través de la cooptación sistemática de autoridades locales o la corrupción de funcionarios públicos. Otro recurso a su favor es la visión global con que acometen su negocio, lo que amplía sus márgenes locales de maniobra. Las estrategias de comunicación constituyen un importante recurso a la altura de su talonario.

Los movimientos sociales, en cambio, dedican una gran cantidad de energías a combatir imaginarios y contrarrestar los argumentos mineros. Con ser necesaria, esta estrategia reactiva no es suficiente, y puede volverse incluso en contra porque cede la iniciativa a las mineras y proyecta mensajes en negativo. Pero los movimientos también rescatan y recrean imaginarios de lucha, en un trabajo de revisión histórica, reapropiación cultural y proyección al futuro. Esa tensión impregna los nuevos imaginarios de resistencia minera en Los Andes, ligados por ejemplo a la *madre tierra*, el *buen vivir*, o la justicia ambiental. La principal arma de las organizaciones sociales es la propiedad del territorio y la movilización social y política, si bien su forma de organización en red, las dinámicas de autogestión y la cultura asamblearia ralentizan su capacidad de movilización. Portan sueños y utopías colectivas, a diferencia de la industria minera que se apoya en intereses particulares. Para las resistencias mineras, los artefactos surgen como una expresión cultural espontánea. **El territorio con identidad o el conflicto con legitimidad (escenificado en los medios de comunicación) constituyen dos de sus expresiones más tradicionales. Ambos artefactos se convierten en espacios privilegiados para convocar identidad y reproducir la resistencia. En los últimos años, algunas organizaciones sociales han entendido que la lucha tenía una importante vertiente cultural y han diseñado artefactos intencionales.** Es el caso de la campaña “Sin limón no hay ceviche” en Tambogrande contra *Manhattan Minerals* (2001), los documentales “Los conquistadores no han muerto” del CEDIB (2009), o las performances de la “Última reina de Cerro de Pasco”. Se trata de esfuerzos novedosos orientados a poner en juego imaginarios de resistencia que buscan conectar con un público mayoritario apelando a su identidad colectiva.

En suma, los procesos de construcción de imaginarios no son comparables. Los imaginarios de resistencia no se pueden improvisar ni diseñar a golpe de talonario. **Sería un error que los movimientos sociales reprodujeran la forma en que la industria minera o los gobiernos arman sus estrategias de comunicación. Harían mejor en ser fieles a sí mismos y confiar en sus fortalezas y posibilidades.**

América Latina: integración para exportar recursos naturales

La integración regional no responde al principio de “recursos naturales para la región”. Antes al contrario, **el programa IIRSA y la creciente hegemonía brasileña en la región revelan un patrón de integración regional fagocitado por el sector extractivo y energético**. La reproducción de un modelo económico que prima la exportación de materias primas ha propiciado la conformación de conglomerados transnacionales de vocación multisectorial, que combinan producción de minerales, agronegocios, construcción, transporte y energía. Son estos nuevos gigantes los actores protagonistas del proceso de integración regional.

A nivel regional, Bolivia y Perú desempeñan roles diferentes en la minería. En la última década, **el Perú se convirtió en un gran laboratorio de la industria minera para la región**. Las mineras transnacionales han ensayado estrategias sagaces para instrumentalizar imaginarios, y han probado prototipos de artefactos, que con seguridad podrían ser replicados en otros países de la región. Todo indica que del Perú van a salir los consultores más reputados para asesorar a la industria en áreas claves como relacionamiento comunitario, gestión cultural, o comunicación. En cambio, **Bolivia se revela como un laboratorio de nuevos imaginarios de resistencia**. Lo fue en el pasado, y lo sigue siendo en la actualidad con búsquedas colectivas como la soberanía nacional, la industrialización de la minería, la defensa de la *madre tierra*, el feminismo comunitario, o el *buen vivir*. En ese tapiz de sueños y utopías existe un juego continuo de reapropiaciones y recreaciones entre el Estado y los movimientos sociales. A veces como aliados, a veces como adversarios. No es posible entender el vuelo que ha tomado el imaginario de la *madre tierra* sin el apoyo explícito –si se quiere, contradictorio e incoherente también– del gobierno del MAS. Como tampoco se puede comprender la consulta sin las críticas vertidas por las organizaciones indígenas contra la política extractivista del MAS. Se trata incluso de un juego reversible de ida y vuelta, ya que las organizaciones sociales también se adueñan de los imaginarios estatales. Es el caso, por ejemplo, de los mineros cooperativistas que se han apropiado de la épica de las luchas sindicales mineras con el fin de consolidar su emergencia como productores mineros.

Los desafíos de las resistencias mineras

No hay resistencia posible sin la construcción de un sujeto social con identidad. Ello requiere tender puentes entre áreas urbanas y rurales, entre sociedad civil y gobiernos locales y regionales, entre productores y grupos ecologistas, entre dirigentes veteranos y nuevas generaciones. En este contexto, **la lucha por el agua tiene una gran capacidad de articulación, pero no genera identidad. En cambio, los imaginarios ligados a la vocación productiva local/regional han tenido buenos resultados**. Las provincias cafetaleras de Jaén y San Ignacio (norte de Cajamarca) y la industria lechera de Challapata (Oruro) son dos ejemplos ilustrativos. La organización de regantes de Challapata ha librado una lucha consciente de imaginarios con la industria minera, a partir de lemas como “La leche es primero”, o “50 años de producción sin contaminación”. La represa Tacagua se convirtió en artefacto anti-minero, y la celebración festiva de su 50º aniversario, a bombo y platillo, fue un acto de reivindicación cultural e identitaria, que arrancó compromisos públicos de las autoridades regionales.

Otro requisito es el **acceso a la información**. Las universidades públicas, los observatorios y los estudios independientes son cruciales para tener una versión fiel de los impactos ambientales de la megaminería, fiscalizar su actividad y construir una memoria de la resistencia.

Un tercer reto consiste en **combatir los imaginarios que sostienen la extracción minera**. Para ello es necesario develar la manera en que la industria minera y los gobiernos manipulan los imaginarios que están operando en el subconsciente colectivo. Se trata de un arduo trabajo de observación, monitoreo de medios, análisis y reconstrucción. **Pero tampoco la denuncia es suficiente. Las estrategias meramente reactivas, a la defensiva, pueden estar condenadas al fracaso. Resulta imprescindible trabajar una contrapropuesta en el terreno de los nuevos imaginarios alternativos al extractivismo.** Rescatar y recrear, por ejemplo, los imaginarios de la *madre tierra*, el *vivir bien*, el *desarrollo territorial con identidad*, o las propuestas más recientes de transición al post-extractivismo. En Perú, se ha intentado ligar la producción agropecuaria a la nueva cocina peruana como forma novedosa de crear un vínculo entre productores y consumidores en el marco de una nueva identidad nacional: el *comer rico*.

Otra tarea consiste en **rescatar el papel de las mujeres en las resistencias mineras**. Por un lado, visibilizar el papel de las mujeres al interior de las comunidades, organizaciones sociales, y frentes de defensa ambiental, pero también el importante rol que poseen las mujeres como portadoras de cultura e identidad. No en vano son mujeres las artistas que han protagonizado las acciones culturales de resistencia minera en Perú, como es el caso de la “última reina de Cerro de Pasco”. Los aportes del feminismo comunitario boliviano son vitales para entender el rol de las mujeres desde una perspectiva intercultural, así como para abrir el espectro de análisis y trascender los enfoques de género basados exclusivamente en patrones de igualdad.

Las acciones culturales se revelan como un espacio fértil de resistencia. La creación y discusión colectiva de artefactos (para rescatar y recrear imaginarios) posee un potencial aún no suficientemente aprovechado. Algunas iniciativas en este sentido son el impulso de *blogs* en Internet, documentales audiovisuales, películas de ficción, relatos, teatro político, noticieros interculturales, fiestas comunitarias, comparsas y canciones de carnaval, festivales musicales, *performances* en la calle, o incluso esquemas de contracultura.

El principal **rol de las ONG no es otro que acompañar** a las organizaciones sociales en sus procesos de resistencia, brindando asistencia técnica, asesoría legal, o prestando un servicio de información y análisis. **Pueden jugar también su propia actoría a partir de su pertenencia a un movimiento social.** Si siguen operando a través de profesionales urbanos que se perciben a sí mismos como expertos infalibles, entonces no pueden pretender formar parte de la resistencia ni tampoco entender sus dinámicas identitarias y culturales.

INTRODUCCIÓN

La mirada de los imaginarios

Si la última década del siglo XX fue una etapa intensa de desregulación neoliberal y flexibilización de leyes, la primera década del siglo XXI se ha caracterizado por una **nueva estrategia de la industria minera** transnacional: la creación del discurso teórico de la “minería sostenible y responsable” y la promoción de un “cambio cultural” en las poblaciones locales. Esta apuesta obliga a explorar ópticas alternativas de análisis para comprender el avance del extractivismo minero y los nuevos retos que enfrentan las resistencias.

La minería ha sido analizada en Los Andes desde el punto de vista de la reestructuración de los marcos legales (Pinto, 2009), los patrones de extracción (Acosta, 2009; y Gudynas, 2009), el territorio y los conflictos sociales (De Echave, Hoetmer y Palacios, 2009; De Echave et al, 2009), la ecología política, la gobernanza ambiental y las transformaciones del territorio (Bebbington, 2007a y 2007b), o las instituciones de distribución de renta minera (Arellano, 2011). Todos esos trabajos han creado un rico bagaje para entender las dinámicas transnacionales y locales que rigen la minería. Esta investigación se propone explorar un **abordaje complementario** desde los imaginarios sociales. Se inscribe así en los esfuerzos realizados en los últimos años para desvelar la manipulación deliberada que la industria minera hace de los imaginarios. Las sociólogas argentinas Maristella Svampa y Mirta Antonelli (2009) han explorado, por ejemplo, las narrativas del desarrollo y los dispositivos culturales utilizados por la megaminería en Argentina.¹ Ligada al Observatorio Canadiense de Minería, la periodista Jennifer Moore (2009) ha contrastado los mitos y realidades de la minería transnacional. Y el colectivo *Voces de Alerta* (2011) ha realizado un ejercicio comparativo similar en el caso de la megaminería argentina.²

El origen del término *imaginario social* se enmarca en el debate marxista acerca del determinismo del mundo material. El concepto fue creado, de hecho, por el filósofo griego Cornelius Castoriadis (1975) para reconocer la sustantividad y autonomía de lo imaginario en la vida colectiva y relativizar así la influencia de lo material sobre la vida social. Si bien los orígenes se sitúan en Europa, la necesidad de aplicar y desarrollar el concepto ha sido especialmente sentida en América Latina, en el área de los estudios urbanos, la religión, la política, la antropología, o más recientemente, las industrias extractivas.³ Desde la sociología, se define *imaginario social* como los esquemas de representación y matrices de sentido que construye cada sociedad y cada tiempo para percibir, explicar o intervenir en la realidad (Randezzo, 2011). Las ciencias de la

¹ En otro trabajo, Svampa (2011), hace un análisis de la utilización de fuertes imaginarios desarrollistas, en sus distintas actualizaciones –en clave nacionalista o industrial-obrerista– por parte de los gobiernos progresistas de la región (Evo Morales en Bolivia, o Cristina Kichner en Argentina) para justificar la apuesta extractiva de sus políticas.

² La periodista Jennifer Moore del Observatorio Canadiense sobre Minería (www.miningwatch.ca) publicó en 2009 un artículo titulado “Mitos y realidades de la minería transnacional” en la Revista *Memoria de México* (octubre-noviembre 2009). En abril de 2011, el colectivo argentino *Voces de Alerta* dio a conocer “15 Mitos de la Megaminería Transnacional”. El libro es fruto de la campaña a favor de la ley nacional de protección de glaciares, sancionada por el congreso argentino en septiembre de 2010, y la necesidad de responder, punto por punto, a los argumentos falaces y los indicadores económicos falsos presentados por el lobby minero.

³ El prisma de los imaginarios sociales ha sido aplicado en América Latina, por ejemplo, a los estudios urbanos (por el colombiano Armando Silva o el ecuatoriano Eduardo Kingman), a la antropología de la naturaleza (por la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil), a la religión (por el chileno Manuel A. Baeza), a las dictaduras militares (por Manuel Baeza) o a las industrias extractivas. En un interesante estudio, el venezolano Eudes Navas aborda un análisis del petróleo y sus imaginarios sociales, incluyendo los imaginarios de progreso, modernidad, bienestar, salud y seguridad (véase <http://gceis.net/contenido/el-petroleo-y-sus-imaginarios-sociales>). La propia América Latina ha sido también objeto de análisis. Un grupo de investigadores del GCEIS, Cabrera y Figueira (2009), han explorado los imaginarios sociales sobre el continente a partir de las miradas de migrantes latinoamericanos que viven en Galicia y las miradas hegemónicas del Parlamento y la prensa española. El resultado del trabajo “Pobre Latinoamérica” expresa la contradicción de un imaginario que se reconstruye en torno a la riqueza corporativa y la pobreza de las poblaciones latinoamericanas, que se ven despojadas de las riquezas emanadas de sus territorios.

comunicación ponen el acento en el poder del imaginario social como productor de creencias e imágenes colectivas, que hacen de la comunicación pública un espacio de construcción de identidades colectivas (Cabrera, 2004). Es decir, los imaginarios sociales se refieren al conjunto de elementos culturales que remiten a una identidad colectiva y operan en el subconsciente de la población. Prefiguran aspiraciones colectivas, cristalizadas a lo largo de un proceso histórico y cultural que funda sus mitos de origen y sus propias narrativas. Es decir, no hay imaginario sin cultura ni identidad colectiva. Sin embargo, aun teniendo una dimensión colectiva, los imaginarios operan en las pulsiones más básicas de los individuos. Su capacidad para influir en la sociedad pasa por crear relaciones de pertenencia, en un primer nivel, y por despertar deseos y desatar miedos en un segundo nivel más hondo. Por eso son tan eficaces.⁴

Los imaginarios dominan los medios de comunicación y los discursos de los partidos políticos, pero también impregnan los debates técnicos y las propuestas de los expertos. Se ha seguido la metodología de investigación basada en el análisis de artefactos para ilustrar cómo operan los imaginarios en la práctica. Desde el punto de vista de la comunicación, los imaginarios se canalizan en expresiones tangibles, ya sean visuales, sonoras, textuales o arquitectónicas (a través de afiches, imágenes, publicidad, videos, eslóganes, acciones en la calle, protestas, marchas, canciones, declaraciones, edificios, u objetos cotidianos, entre otros muchos). Cada uno de esos canales responde a un lenguaje propio de comunicación, acorde a la codificación propia de cada medio. Los artefactos cumplen una doble función. Por un lado, encarnan los imaginarios sociales en espacios y objetos físicos con los que la población puede interactuar directamente. Por otro, esa interacción física retroalimenta el imaginario y refuerza la identidad colectiva.

Esta operativa la ha entendido muy bien la industria minera transnacional, que la ha orientado y reproducido en su propio beneficio. Han utilizado diferentes imaginarios para penetrar en los territorios y llevar a cabo sus proyectos mineros, pero también para sostener en el tiempo la explotación extractiva frente al creciente descontento y la proliferación de conflictos. Desde los movimientos sociales, también se rescata y recrean imaginarios de resistencia. Se trata de imaginarios ligados a su cultura, a su bagaje organizativo de luchas sociales. Lo que está en juego, en definitiva, es una feroz **disputa de imaginarios**, sin tregua, y que se libra en términos desiguales entre los poderosos aparatos de las transnacionales mineras, el *establishment* de los gobiernos y los movimientos sociales.

La investigación pretende también hacer un nuevo aporte al análisis de la minería andina desde una **perspectiva binacional Perú-Bolivia**. Los dos países gozan de un contexto social y político muy diferente, y precisamente por eso se produce un interesante juego de espejos entre ellos. La preeminencia de imaginarios distintos puede servir para interpelar y trasladar reflexiones novedosas entre ambas realidades. La investigación presta también especial atención a las **cuestiones de género**. Al ser un sector fuertemente masculinizado, la perspectiva de género ha sido tradicionalmente marginada de las investigaciones sobre minería. Algunos estudios han explorado los impactos diferenciados de la minería en las mujeres, especialmente en salud, violencia sexual o acceso al trabajo (Bastidas, 2009; Ascarrunz, 2009; Cuadros, 2010; o López Canelas, 2011), o también las percepciones sociales de las mujeres sobre la contaminación minera (Arana, 2005 y 2010; Tapia, 2010). Desde la antropología, se ha investigado el mito de origen que no permite a las mujeres entrar en las minas de socavón (Absi, 2009), pero muy poco se ha avanzado sobre el rol de las mujeres en la nueva megaminería a cielo abierto. Otro desafío pendiente reside en investigar el papel de las mujeres en las resistencias mineras.

⁴ Un resumen del debate teórico sobre el concepto “imaginario social” se puede encontrar en los trabajos del semiólogo argentino Daniel H. Cabrera (2004). También se puede consultar la página web del Grupo Compostela de Estudios sobre Imaginarios Sociales (<http://gceis.net>), adscrito a la Universidad de Santiago de Compostela.

El informe se divide en dos partes. La primera parte está dedicada a los imaginarios. El *primer capítulo* analiza Los Andes como región extractiva en la memoria colectiva y la continua recreación de los mitos de origen. El *segundo capítulo* aborda el papel de las políticas neoliberales en la expansión minera. Los imaginarios que sostienen la expansión minera han sido objeto de estudio en el *tercer capítulo*, y las dificultades para construir nuevos imaginarios de lucha son exploradas en el *cuarto capítulo*. La segunda parte debate el alcance y significado de las resistencias mineras. Los *capítulos quinto y sexto* se focalizan en analizar los movimientos sociales en torno a la minería en Perú y Bolivia, respectivamente, poniendo especial interés en analizar críticamente el papel desempeñado por las organizaciones sociales y las instituciones de apoyo (ONG). El *capítulo séptimo* plantea una sistematización del universo plural de acciones que comprende la resistencia minera. Y el *capítulo octavo* aborda la sistematización de dos experiencias emblemáticas de resistencia minera en clave de lucha de imaginarios: la defensa del Quilish en Cajamarca (Perú) y el NO a la minería en Challapata-Oruro (Bolivia). Por último, el *capítulo noveno* recoge las principales conclusiones de la investigación.

I. IMAGINARIOS



CAPÍTULO 1

Los Andes como región extractiva en la memoria colectiva: la continua recreación de los “mitos de origen”

Los Andes fueron históricamente una región agrícola, con una fuerte cultura de manejo del agua. En ese contexto, la riqueza minera desempeñaba un rol simbólico y ceremonial. En Colombia, por ejemplo, los *muiscas* realizaban, en noche de luna llena, ofrendas de oro macizo y esmeraldas en la Laguna de Guatavita para congraciarse con las divinidades y fertilizar la tierra. Pero ese equilibrio entre ser humano y naturaleza empezó a mutar a raíz de la conquista y colonización española, que hizo de esas costumbres andinas el origen de la leyenda de “El Dorado”. El desarrollo de la minería como sector preferente de la economía no dejó de crecer desde entonces hasta invertir los valores de uso. En la actualidad, es el agua el recurso que se sacrifica para obtener el oro. Ese metamorfosis no ha consistido solamente un proceso económico, sino que ha requerido también un profundo cambio cultural. Y acuñar nuevos mitos de origen para fundar una nueva memoria colectiva como región extractiva.

1.1 Un imbricado tejido de mitos: ¿qué hay detrás del sincretismo andino?

Desde el norte de Argentina hasta el Perú, pasando por Bolivia, **la figura del Tío** (diablo) habita las profundidades de las minas de socavón. Su apariencia más común es la de un viejo sentado con cuernos que muestra un ostensible falo en erección, para disipar cualquier duda sobre su libido desenfrenada. Un falo al que se le coloca serpiente, se lo *ch’alla* con alcohol. Los mineros le ofrecen coca y cigarros al Tío en señal de compañerismo, y para ganarse también sus favores. ¿Un ángel caído exiliado por Dios al subsuelo? ¿Una *wak’a* (deidad prehispánica) enterrada por los españoles? ¿El alma de los *mitayos* muertos en la mina? ¿Hijo del diablo y una montaña? El Tío posee múltiples orígenes míticos, que combinan elementos de los cultos mineros prehispánicos (*otorongo*, *mama*, antepasados...) con creencias llegadas de Europa (el diablo,

los santos patronos, trasgos de las minas, vampiros...). Pero a diferencia de los dioses cristianos, no es una figura distante sino más bien el compañero ideal, un arquetipo de la profesión. Y a diferencia de los *apus* de las montañas que tutelan las comunidades campesinas, no está ligado a un linaje ni a una región, sino a un gremio. El Tío personifica como nadie al gremio ambivalente de los mineros, su marginalidad pero también su posición social emergente. En los tiempos de la omnipresente COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia), el Tío era aliado del proletariado revolucionario; en la época de las cooperativas, su dimensión diabólica transmutó hacia la acumulación de riqueza. De este modo, el Tío y el minero se habrían construido juntos a lo largo de la historia, uno en relación al otro. El trabajador recibe el aliento del diablo para aumentar su producción, mientras el Tío, antropófago, asimila e incorpora la identidad de sus víctimas.

¿Y qué mayor mito que el **Cerro Rico de Potosí**? La explotación de la plata marcó el inicio del ciclo de la minería en el territorio que hoy es Bolivia. En apenas un siglo,



Tío de la mina del Cerro Rico de Potosí
(Bolivia) Fotografía de Iván Aranda

el auge minero situó a Potosí como la tercera ciudad más poblada del mundo. El Estado boliviano se articuló en torno a ese milagro (Sucre creció como centro residencial; Cochabamba y Tarija como centros de acopio de granos; La Paz como lugar de paso para el comercio que ligaba *Cusco* con Potosí...). Sin embargo, el *boom* minero despoló la región y desarticuló su producción agrícola. El uso intensivo de leña deforestó y degradó el altiplano de forma irreversible. Dos siglos más tarde, el departamento de Potosí lidera el mapa de pobreza del continente. En una interesante investigación, la antropóloga francesa Pascale Absi (2009) ha desentrañado el proceso de recreación de mitos y leyendas sobre el origen de las minas de Potosí (véase recuadro 1). Su trabajo muestra la minería andina como un poderoso tapiz de múltiples mitos de origen que se entrelazan unos con otros tejiendo un universo simbólico, que liga lo sagrado con lo profano, los ancestros con la colonia, la abundancia con el sacrificio y la enfermedad,

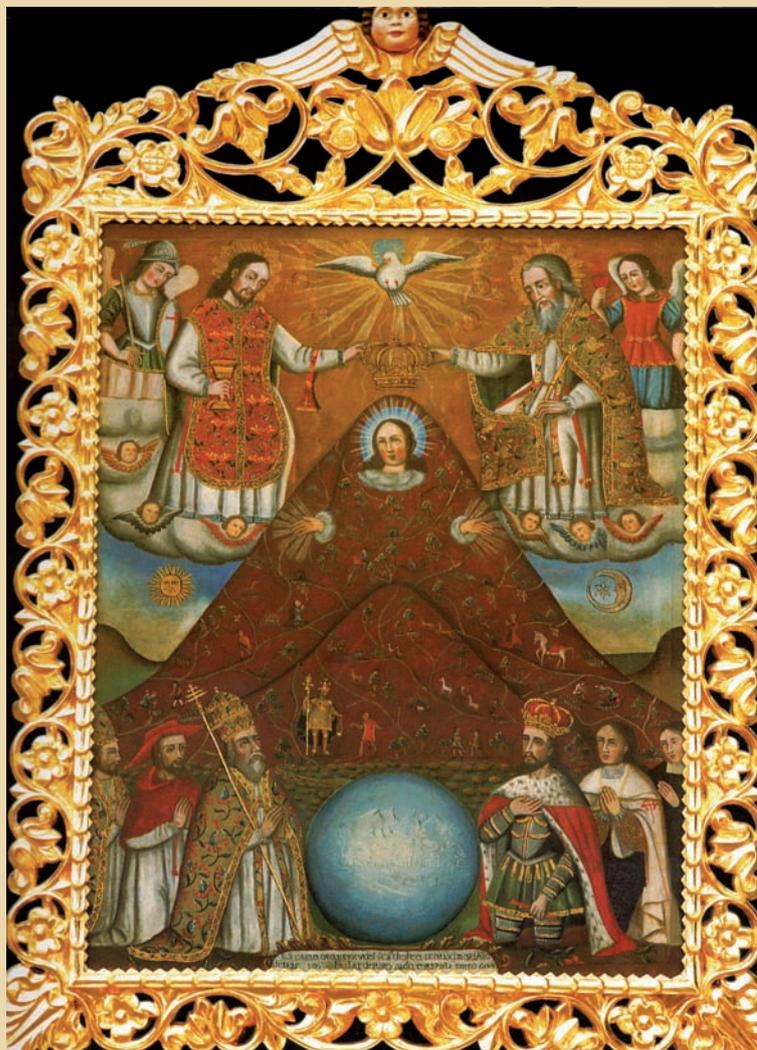
y lo extractivo con lo germinativo-sexual. Este juego de contrarios ha sido interpretado como muestra característica del sincretismo andino. Sin embargo, no se trata de una mera yuxtaposición o fusión de elementos opuestos, sino más bien de un *continuum*, un equilibrio dinámico de influencias recíprocas. ¿Pero cómo se construyen los mitos de origen? ¿Con qué propósito? ¿Qué intereses están en juego?

En otras palabras, los mitos no son inmutables. En el caso de Potosí, la recreación de su mito de origen es funcional al intento colonial de legitimar el saqueo de los yacimientos más ricos de plata. Bien es cierto que los dioses cristianos adoptaron, a cambio, perfiles andinos, pero la mitología habría servido, en última instancia, para naturalizar la explotación colonial... ¿Podría repetirse la historia con motivo del actual desembarco masivo de mineras transnacionales en Los Andes? ¿Cómo construye la nueva minería del siglo XXI (sin vetas) sus mitos de origen? Y una pregunta más allá... ¿manejan acaso las transnacionales mineras un proyecto de apropiación de imaginarios?

El origen de Potosí

Las crónicas de la Colonia relacionan el origen de Potosí con el fracaso de los indígenas de la federación Qhara Qhara en explotar el Cerro Rico antes de la Conquista: Un estruendo habría salido de la montaña... ¡Potocsí!... ordenando de inmediato a los mineros detener su trabajo, ya que, según la voz salida de las cavernas, la plata del cerro “estaba reservada a otros”. Es posible que la ausencia de una explotación intensiva en la época prehispánica estuviera ligada a una voluntad divina, pero no del Dios de los católicos sino de las *wak’as*. Ese “Potocsí” pronunciado por los indígenas bien podría haber sido el nombre de la *wak’a* del lugar. El indio Diego Huallpa pasó a la historia como descubridor de sus yacimientos en 1543. Tras perseguir a una de sus llamas perdidas en el cerro, se dispuso a pasar la noche. Por acción del fuego que había prendido para calentarse, una afloración de plata empezó a chorrear por la ladera. El indio explotó la plata antes de ser denunciado por un amigo a los españoles de la vecina Porco, que tomaron posesión del cerro. Además, se ganó la enemistad de las autoridades de Cantumarca por traicionar el aviso divino, y fue castigado por el gran Pachamac.

La reticencia de las montañas a ser explotadas no comporta un rechazo incondicional, sino más bien expresa una advertencia: el precio para acceder a su riqueza es elevado. Cada grano de quinua, cuya forma evoca un feto, representa la muerte de un hombre, puesto que los cerros vírgenes tienen hambre de vidas humanas. La necesidad del sacrificio previo aparece también en la versión de los cronistas de la colonia, quienes relatan que los indios habían sufrido muchas pérdidas humanas cuando la *wak’a* se manifestó indicando que el mineral “estaba reservado a mejor gente y con más voluntad de sacrificio”. Como señala Absi (2009:143), estas palabras combinan la tradición española -el carácter predestinado de la explotación colonial- con la lógica indígena del sacrificio. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Potosí, el tributo humano debido a la *wak’a* aún no había sido saldado. Así se explica el genocidio cometido en el Cerro Rico durante la colonia. Algunos lo estiman en ocho millones de mitayos muertos, una cantidad ligeramente inferior a toda la población actual de Bolivia. Dicen que es la sangre de estos indígenas la que confiere su singular tono rojizo al cerro. Por su parte, la tradición oral que se ha apropiado de los relatos de los cronistas ha hecho suya la idea de que el Cerro Rico estaba reservado a los españoles. El hecho de que los conquistadores no dudaran en pagar el tributo exigido por la *wak’a* cierra el círculo de la predestinación maldita del cerro. Como concluye Absi (2009:143), “al asumir esta leyenda, que permite concebir la ruptura colonial en términos de continuidad con un pasado que ya lo contenía en forma embrionaria, la historiografía popular reconoce implícitamente el carácter inevitable de la hispanidad de Potosí, inscribiéndola al mismo tiempo en un orden andino de las cosas”.



1.2 La instrumentalización de los “mitos de origen” por parte del lobby minero en Perú

La socióloga argentina Mari Stella Svampa (2009) ha descrito cómo las mineras transnacionales han creado mitos de origen en Argentina para transitar desde una identidad de país agrícola y ganadero a otra de país minero. En Bolivia y Perú, semejante esfuerzo no es necesario. Basta con apropiarse de los numerosos mitos que rodean la minería en el subconsciente colectivo. Domesticarlos y utilizarlos para la causa de la expansión minera. Esta tarea es la que parecen haber emprendido algunos políticos. Antonio Brack, ex-ministro de medio ambiente de Alan García, sostiene que los peruanos tienen que superar el “síndrome del cuarto de rescate” (véase recuadro 2). El ex-ministro aludía a la famosa escena del **apresamiento de Atahualpa**, el último emperador inca, en manos del conquistador Pizarro. La historia es de sobra conocida. Para su liberación, los españoles exigieron dos cuartos repletos de oro y plata. La noticia corrió como la pólvora, y jefes y curacas enviaron alhajas desde todos los rincones del imperio. El rescate fue, sin embargo, en vano. Pizarro se quedó con el botín y terminó quemando a Atahualpa en la hoguera. Una escena que permanece viva en la memoria colectiva.

Otro ejemplo de manipulación de los mitos de origen los encontramos en algunos materiales educativos editados para las empresas mineras. Por ejemplo, la minera Moly-Cop Adesur, editó en 2006 un libro de texto para niños, niñas y jóvenes con motivo de 25 años de presencia en Arequipa. Titulado “En el Reino de los Minerales”, el material resulta una reinterpretación de la historia peruana a partir de su vocación minera. Llama la atención la descripción del **hombre andino minero** y sus instrumentos de trabajo (véase fotografía), que recrea el estereotipo de unos incas aguerridos y valientes con ribetes renacentistas (Moly-Cop Adesur, 2006:84):

El hombre andino minero y sus herramientas de trabajo

“El hombre andino minero, antes de la Colonia, era una persona especializada ya sea en trabajos de extracción, trituración, metalúrgicos y artísticos, hombres y mujeres participaban en esta labor según sus cualidades, en bien de la comunidad”.

Fuente: Moly-Cop Adesur (2006), p. 84.



“El síndrome del cuarto de rescate”

“Tenemos que superar el síndrome del cuarto de rescate de Cajamarca. Ahí está gran parte del meollo de este asunto. Llega un grupo de 180 analfabetos españoles en busca de oro, se hacen llenar el cuarto del rescate, matan al inca, el oro se pesa, se envía el diezmo para el rey y listo. Esto es lo que ha prevalecido durante mucho tiempo... Y hasta hoy día, a las grandes empresas mineras les cuesta decir: ‘Ok, comunidad: me han dado el subsuelo para explorar o para lo que sea, pero el suelo es tuyo. Perfecto, tú vas a ser accionista con el 5% y vas a ganar plata. Y cada año, además del canon, vas a recibir tanto’... ¿Por qué no se da ese paso?... A la larga saldrían ganando, pues el proyecto, en primer lugar, no les saldría en siete años, sino en cinco. Y en segundo lugar, no gastarían un montón de plata haciendo canchitas de fútbol y no sé cuántas cosas más para apaciguar a la gente, para que no les cierre la carretera. Falta, pues, madurez en el país”.

Fuente: Barnechea y Tume (2011), p. 231.

1.3 El imaginario heroico de las luchas mineras en Bolivia

Durante varios siglos Bolivia acuñó, a golpe de barreno, su **imagen de país minero**. A principios del siglo XX, la explotación del estaño fue providencial para la economía boliviana que vivía el desplome del precio de la plata. Surgieron así los llamados “barones del estaño” (Patiño, Hochschild y Aramayo) que acapararon el 80% de la producción nacional, lo que les dio el dominio económico y político del país. La producción estañífera de concentrados pasó de 16.000 a 48.000 Tn. en 1900-20. De este modo, Bolivia se convirtió en el segundo productor mundial de estaño tras Malasia, puesto que ocupó hasta la década de los setenta. El estaño llegó a suponer, nada más y nada menos, que el 75% de las exportaciones bolivianas. ¿En qué benefició este “boom” al país? Muy poco, ya que el gobierno cobraba un impuesto de apenas el 3% de las exportaciones. Con todo, la minería suponía un significativo 17 % de los ingresos fiscales en la década de 1920.⁵

Tras la Revolución del 52, el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) nacionalizó las tres mineras más grandes del país conformando la COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia). A partir de ese momento, la **minería estatal** vivió su particular edad de oro. A principios de los 70, la minería suponía aún el 15% del PIB nacional y la COMIBOL contaba con 30.000 trabajadores contratados, que suponían la mayor fuerza laboral del país. En 1980, la COMIBOL aportaba el 11,4% de los ingresos del Tesoro General de la Nación, pero la mayor contribución de la minería se medía en divisas (60% de las exportaciones nacionales en 1980) (Morales y Evia, 1995). Ante la escasa presencia del Estado en las áreas rurales, la COMIBOL operaba también como un estado paralelo en los centros mineros. Proveía numerosos beneficios sociales a sus afiliados (clínicas de salud, educación para 60.000 niños y pulperías subvencionadas...) en un rol ciertamente paternalista de desarrollo.



Fotograma de la película
“El coraje del Pueblo”

⁵ De acuerdo a sus intereses, Patiño prefirió comprar las empresas fundidoras europeas y norteamericanas de estaño antes que instalar una fundición en Bolivia. Estas decisiones empresariales condenaron a Bolivia como exportador de materia prima sin agregar valor añadido.

En ese mismo contexto, la **minería protagonizó las luchas sociales** de la época. Así lo atestigua el gran poder del sindicato orgánico de la COMIBOL y su capacidad de paralizar el país con huelgas y marchas. Sus demandas combinaban reivindicaciones de clase con demandas en clave nacional. Esa visión hizo a los mineros acreedores de una **imagen heroica** en todo el país como la vanguardia revolucionaria del movimiento obrero. Su carácter heroico estaba ligado a la fatalidad, la enfermedad y la inmolación física como fuente de valentía y legitimación social. La silicosis, el desgaste físico y la corta vida de los mineros, antes que ser concebidos como un problema de salud pública, constituían la médula de la identidad minera. El poder sindical minero ha quedado retratado en *El coraje del pueblo* (1971), película memorable de Jorge Sanjinés. El cineasta boliviano más emblemático de todos los tiempos rememora la masacre minera de Catavi de 1942. Con un montaje fotográfico, recoge las imágenes de seis masacres posteriores, para dar paso a la reconstrucción de la última, en la noche de San Juan durante el gobierno del General Barrientos (1967). La película inmortaliza el compromiso de lucha de la clase minera, y refuerza, desde el cine, la iconografía de la identidad minera y su capacidad de inmolación en clave nacional.

Pero además, la Central Obrera de Bolivia (COB) fue capaz, de la mano de su matriz minera, de impulsar **prácticas de co-gobierno** en Bolivia. La figura del mítico líder sindical Juan Lechín, secretario ejecutivo de la COB (1952-87) es prueba de ello, ya que fue vicepresidente con el MNR en el periodo 1960-64. El presidente reformista Torres también contó con él para presidir la Asamblea Popular, y Lechín volvió a polarizar la situación política al intentar crear un gobierno paralelo sustentado en sindicatos y asambleas populares. En definitiva, el sindicato minero mantuvo un rol protagónico en el país, en términos de liderazgo social, capacidad de movilización, organización política y negociación con visión nacional.

El imaginario de las luchas heroicas mineras ha tenido un carácter masculino. Algunas investigaciones recientes han tratado de rescatar el **papel que desempeñaron los Clubes de Amas de Casa** durante los años 60 y 70 del siglo pasado. Por ejemplo, la antropóloga argentina María Lagos (2006) sistematizó la historia del *Comité de Amas de Casa* del distrito minero del Siglo XX-Catavi (en Potosí): “Nos hemos forjado así: al rojo vivo y a puro golpe”. En ocasiones, esta apuesta de visibilización ha ido acompañada de una dosis excesiva de “heroificación”, al enfatizar que las mujeres formaban la primera fila de las marchas y eran carne de cañón en la lucha. La figura histórica de Domitila Chungara, una de las cuatro mujeres mineras que entró en huelga de hambre contra la dictadura de Bánzer a fines de los 70, ha contribuido a consolidar este imaginario. La construcción de una imagen heroica y sacrificada de las mujeres, sin embargo, servía implícita o explícitamente para legitimar la distribución tradicional de roles en las familias mineras. Mostrar a las amas de casa como “heroínas de las luchas mineras” surte los mismos efectos que el patrón machista que eleva a las mujeres al rango de “reinas de la casa”.

1.4 La producción minera entendida como relación sexual fértil: ¿por qué las mujeres no deben entrar en la mina de socavón?

“Los hombres te van a montar, te van a bajar, te van a penetrar”; la profecía del mito de origen de la explotación de la montaña ya lo insinúa: en una relación casi incestuosa, los mineros que levantan las faldas de la Pachamama se convierten en sus amantes y la desfloran con sus herramientas, la fertilizan mediante sus ofrendas y su trabajo para finalmente ser parteros de su mineral. La actividad minera también es una posesión sexual. Soñar que uno hace el amor con una mujer quizá presagie la aparición de una veta, pero también anuncia una jornada difícil, ya que la relación sexual con la mina requiere de una energía que compite con la libido humana. Este dispendio erótico en el trabajo es parte del sacrificio minero”.

Pascale Absi (2009), p. 287

Uno de los mitos más extendidos entre los mineros relaciona la aparición de vetas en la mina con la **relación sexual** de los hombres con el cerro. Celosas y esquivas, las vetas pueden desaparecer en cualquier momento. Este abandono se interpreta como la capacidad de la Pachamama de ser infiel al minero. “Cuando más confías en tu esposa”, explica un minero, “el rato menos pensado te pone cuernos. Es lo mismo con el mineral, se puede ir con otro...” (Absi, 2009: 289). Y claro, de acuerdo a esta lógica, la presencia de otra mujer en el interior de la mina es razón suficiente para que la Pachamama se ponga celosa. El ingreso de las mujeres perturba la relación sexual fértil de los hombres con el cerro, lo que hace que desaparezcan las vetas.⁶

La minería es una actividad tradicionalmente masculina en Los Andes, que apenas ha contado históricamente con un 10% de mano de obra femenina. La creencia de que las **mujeres traen mala suerte** en la mina es el argumento que históricamente se ha utilizado para mantenerlas alejadas del oficio. En vísperas de la Revolución del 52, la COMIBOL prohibió a las mujeres trabajar en el interior de la mina y las recluyó a labores secundarias en el exterior, como la selección de mineral, la fabricación de cuñas de arcilla para explosivos o la explotación de vetas a cielo abierto. La prohibición se justificó para proteger a las mujeres de la dureza física del trabajo, los accidentes y los comportamientos irrespetuosos. Ahora bien, ¿son esas razones suficientes para justificar la discriminación laboral contra las mujeres?

Desde ópticas afines al feminismo de la igualdad, se insiste en denunciar la **inserción desigual de las mujeres en la minería**. Sin duda, el imaginario de la mujer *palliri* ha condicionado en las últimas décadas no sólo la inserción laboral de las mujeres sino también su propia visibilidad profesional (véase recuadro 3). Cuando las mujeres quieren trabajar en el interior de la mina sufren todo tipo de discriminación y censura. Algunas optan por vestirse como hombres, lo que hace que reciban el tratamiento de marimachos. Desde una óptica legal, nada impide a una viuda heredar el paraje minero de su marido y continuar su explotación. Sin embargo, las presiones motivan que las *palliris* prefieran solicitar un lugar de trabajo a cielo abierto. De este

⁶ La interferencia entre la fertilidad de la mujer y de la mina es una herencia del mundo agrícola y campesino. En las áreas de Potosí, las mujeres que están menstruando no deben acercarse a los campos de cultivo para no secar la cosecha. Este alejamiento temporal en el mundo agrícola se ha hecho, sin embargo, permanente en las minas por razones simbólicas y retos prácticos. Véase Absi (2009), p. 297.

Recuadro 3

El imaginario de la mujer *palliri*

El vocablo *palliri* se utilizaba en la época colonial para designar indistintamente a hombres y mujeres seleccionadores de mineral. Sin embargo, posteriormente se reservó para las mujeres que trabajan en el exterior de la mina. En los años 80, el declive de la minería del estaño y su reemplazo por yacimientos de plata, suprimió las tareas de selección, que eran las principales empleadoras de mano de obra femenina. Las *palliris* tuvieron que conformarse con las actividades a cielo abierto, especialmente el reciclaje de los desmontes y el barrido de residuos. En la actualidad, *palliri* es sinónimo de informalidad laboral y salarios de subsistencia. Una *palliri* gana entre seis y diez veces menos que un minero de socavón.

Fuente: Absi (2009), p. 298.

modo, los hombres logran reducir la competencia en un contexto de agotamiento de las vetas. Desde esta óptica, los mitos de origen habrían sido instrumentalizados para legitimar **relaciones de dominación entre géneros**. Lo simbólico sustenta la primacía económica de los hombres, que se reservan la explotación subterránea, mucho más rentable.

Sin embargo, existen otras lecturas. ¿Es una conquista de las mujeres entrar al socavón? ¿En todos los casos? Desde otras perspectivas, más cercanas al *feminismo de la diferencia*, se pone el acento en la necesidad de abordar una mirada intercultural más amplia. Sin duda, la minería es una actividad netamente masculina (siempre lo fue), ligada a fenómenos de explotación laboral, informalidad o violencia sexual. En este contexto, el mito de la “mala suerte” de las mujeres podría ser una forma de preservarlas del interior de la mina para garantizar así la salud de la comunidad: la supervivencia de la especie. Además, las mujeres ejercieron el rol histórico de negociar con patrones y autoridades, ya que los varones, tras las exhaustas jornadas mineras, no estaban en condiciones de negociar. Esa distribución de roles podría expresar un **equilibrio constitutivo del mundo andino**, que combina dimensiones ciertamente patriarcales con otras más comunitarias.

Mucho menos se ha investigado los mitos de origen desde una perspectiva de género en el caso de otros tipos de minería. La **minería aluvional**, por ejemplo, confiere un papel protagónico a las mujeres, si bien lo hace bajo esquemas de informalidad e incluso de clandestinidad. También la nueva **minería a cielo abierto** (basada en lixiviación o en el uso de mineroductos) plantea nuevos retos de análisis. ¿Cuál es la nueva distribución de roles entre hombres y mujeres? ¿Cómo ha afectado la nueva megaminería a las relaciones de género? ¿Ha construido sus propios mitos de origen para justificar su patrón de explotación?

CAPÍTULO 2

Y... Llegaron las políticas neoliberales

La desregulación y liberalización del sector minero se ha producido de forma cíclica en la historia de Los Andes. Tanto el siglo XIX como el XX han estado plagados de *boom* mineros, que dieron lugar al surgimiento de una clase política rentista, la generación de economías de enclave y el deterioro del medio natural. El ciclo neoliberal de los años 80-90, sin embargo, se diferencia de los anteriores por haberse dado de forma más planificada, y por acometer unos **niveles de desregulación sin precedentes** en la historia extractiva de la región. Una desregulación que afectó a los sistemas de tenencia de la tierra, la normativa que rige las inversiones y el sistema impositivo (Bebbington, 2007:284).

2.1 Los gobiernos del MNR en Bolivia

La promulgación del célebre Decreto 21060 por el gobierno de Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en 1985 significó la primera medida para adoptar **políticas de ajuste estructural y liberalización económica**. El Estado dio un paso al costado, y confió al sector privado la iniciativa económica. El Decreto reemplazó el monopolio minero del Estado por la libre comercialización y explotación de minerales. El desmantelamiento de la COMIBOL y de otras minas privadas dio lugar a la denominada *relocalización minera*, que provocó el éxodo de 35.000 trabajadores (fundamentalmente varones, 25.000 de la minería pública) y sus familias hacia tierras bajas. El cierre de minas fue vivido como una derrota colectiva en su dimensión más trágica, generando un profundo quiebre de identidades e imaginarios en el país. Las dramáticas escenas de pies ensangrentados y cuerpos doloridos en la “marcha por la vida” convocada por la COB (1986), o el fenómeno de crucifixiones populares, constituyen el más vivo reflejo de las rupturas de la época.⁷

El gobierno de Sánchez de Lozada (1994-97) impulsó las denominadas **reformas de segunda generación**, encaminadas a dulcificar el ajuste con medidas sociales, tales como la Ley de Participación Popular (1994) o la Reforma Educativa (1995). En este contexto de reformas de rostro amable, la aprobación en 1997 del *Código Minero* supuso, sin embargo, un nuevo hito neoliberal (aún vigente en 2011, pese al mandato de la Nueva Constitución de 2009). La nueva legislación consideró la actividad minera de *utilidad pública*, es decir, con preferencia sobre otras actividades agrícolas en el uso de recur-

⁷ El sociólogo García Linera (2010:168-98) ha analizado las claves del proceso. El sindicato minero, vanguardia del movimiento obrero, carecía de cualquier otra perspectiva que no fuera el capitalismo de Estado. Habían interiorizado, como un componente indisoluble de su identidad de clase, la cercanía al Estado y el anhelo de integrarse en él. El cierre de las minas se vivió entonces como la ruptura unilateral de un pacto de sangre. La dramática marcha minera por la vida de 1986 escenificó un tormento colectivo a lo largo de 300 km. en una exhibición pública de dolor. Esta actitud reactiva se correspondía con un imaginario de clase que narraba su paso por la historia a través del recuento de las masacres, el dolor y la injusticia de una patria ingrata que maltrataba a quienes la sostenían. Ello explica que la marcha abriera un largo ciclo de marchas, crucifixiones populares y suicidios en las siguientes décadas, marcando el nacimiento de una época de impotencias de las clases populares. Como si se tratara del último peldaño del ser dominado que ya nada puede hacer para revertir su situación subalterna y que se refugia en el drama del cuerpo para lograr reconocimiento.

tos naturales (por ejemplo, agua). El código, además, contemplaba concesiones de una extensión máxima de 62.500 ha. por persona. Y permitía realizar el pago de las regalías mineras a cuenta del Impuesto de Utilidades a las Empresas (IUE), lo que minimizaba la factura fiscal de las empresas. No hay que olvidar que el propio presidente Sánchez de Lozada era dueño de COMSUR, la mayor minera del país en la época.

Fruto de las reformas neoliberales, la **minería se cayó de la agenda de los movimientos sociales** y perdió el poder simbólico que tuvo en el pasado. La conformación de nuevas organizaciones sociales tomaron el relevo de las luchas sociales (movimiento campesino, indígena, sindicatos cocalleros, organizaciones de mujeres y juntas vecinales, entre otros). El imaginario de la minería heroica no desapareció de la memoria colectiva sino que pervivió sumergido: los mineros “relocalizados” se insertaron en otras organizaciones sociales trasladando consigo su identidad de lucha. De hecho, el casco y guardatojo minero han permanecido hasta la actualidad como elemento visible en marchas populares y vecinales (en especial, en El Alto). Pero no se queda ahí. El desmantelamiento de la minería pública supuso, además, la transferencia de sus activos al sector cooperativista, lo que originó un modelo pequeño capitalista, así como la emergencia de este sector como nuevo actor público con una notable influencia político-económica.

2.2 Los gobiernos de Fujimori y el APRA en Perú

El proceso neoliberal fue aún más profundo en Perú. Las *primeras reformas legales* llegaron a principios de los 90 de la mano del **Gobierno de Fujimori** (1990-2000). El gobernante aprovechó la existencia de un régimen sumamente presidencialista para obtener facultades del parlamento y gobernar vía decretos. La *Ley de Promoción de la Inversión Extranjera* (1991) abrió la economía al capital extranjero, eliminando todas las restricciones para repatriar ganancias y dividendos, acceder al crédito doméstico y adquirir suministros y tecnologías en el exterior. Además, el gobierno ofreció paquetes de estabilidad tributaria a los inversores extranjeros por plazos de 10 a 15 años. De este modo, las empresas mineras gozan de exenciones temporales del pago de regalías o, en todo caso, de tasas muy reducidas (entre 1 y 3%). La reestructuración del uso y propiedad de la tierra no se produjo al mismo ritmo. La modificación del catastro minero permitió únicamente transacciones “de mercado”. Sin embargo, frente a un Estado ausente, los agentes económicos con acceso a información y plenitud de recursos (las empresas transnacionales) impusieron a la población rural sus criterios para adquirir las tierras. Por último, la *privatización de CENTROMIN* en 1997 supuso el final de la minería pública peruana, dando paso a un modelo basado en el sector privado. Desde entonces, se impuso la atomización de la lucha sindical al ámbito de empresa, y la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) perdió fuelle a nivel nacional. Pero eso no es todo. En casos como La Oroya, los mineros sindicalizados actúan como rehenes de las transnacionales en los conflictos ambientales.

Una nota diferencial del caso peruano reside en que el neoliberalismo se impuso en un **contexto de post-guerra**. Fue posible hacerlo porque se trataba de un país roto tras un conflicto armado que dejó 70.000 muertos, sumido en una aguda crisis social y política. Como han señalado algunos analistas, el vacío producido por el conflicto armado explica el arraigo que el modelo neoliberal ha tenido en el Perú (Pajuelo, 2009:73). Y la penetración de los proyectos mineros, cuyo objetivo geoestratégico no era otro que ocupar nuevamente las zonas altas de la sierra.

Tras el gobierno de transición de Toledo, el Gobierno de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), liderado por Alan García (2007-11) supuso una vuelta de tuerca neoliberal, al consolidar la alianza entre Estado y empresas extractivas. Esta alianza ha permitido profundizar el modelo neoliberal vía decretos de urgencia y tratados de libre comercio:

- **Tratados de Libre Comercio (TLC)**
La gestión de García se ha caracterizado por una carrera acelerada de liberalización comercial que ha llevado a firmar 13 TLC en apenas 6 años. El capítulo de inversiones de los TLC no siempre es favorable al Perú ya que concede medidas no recíprocas de protección de inversiones privadas. Es el caso del TLC con China, que incorpora el concepto de “expropiación indirecta”, gracias al cual las inversiones chinas pueden demandar al Estado peruano por cambios normativos que disminuyan las ganancias esperadas. Aunque parezca mentira, esta concesión peruana no es recíproca (Torres, 2010:65-67).

- **Decretos de Estabilización Tributaria**
La continuidad de la política de estabilización tributaria supone, en la práctica, un candado que impide la revisión de los contratos de inversión de las mineras. Para compensar esta quita de impuestos, el gobierno del APRA creó un *Fondo Social Minero*, dotado con aportes voluntarios de las transnacionales para acometer inversiones sociales. La medida significa una peligrosa sustitución de impuestos por donaciones.

- **Decretos para adoptar el TLC con EE.UU. en la región amazónica**
El propósito de los “101 Decretos de Bagua” no era otro que recortar los derechos de los pueblos indígenas, limitar la propiedad comunal de la tierra a pequeños reductos de territorio, y concesionar así el acceso a los recursos naturales. Fruto de la movilización amazónica de agosto de 2008, el gobierno peruano retiró los Decretos 1015 y 1073 orientados a flexibilizar la disolución de comunidades. Sin embargo, otros decretos lesivos para los derechos indígenas, como el 1064 y 1090, quedaron vigentes.⁸ Los paros y bloqueos se radicalizaron por los departamentos amazónicos. La incapacidad del gobierno de manejar las protestas provocó la matanza en Bagua (5 junio 2009), con un saldo de 33 muertos (24 policías y 9 indígenas).

- **Decretos de criminalización de la protesta**
En 2007, el gobierno promulgó también 11 decretos legislativos para combatir el crimen organizado. Esta reforma legal, sin embargo, significó un endurecimiento deliberado de la criminalización de la protesta, al militarizar los conflictos sociales, impedir la imputabilidad de militares y policías, habilitar el concepto de extorsión social para reprimir movilizaciones sociales, conferir mayor arbitrariedad a la policía, y modificar el proceso penal para restringir el derecho a la defensa (APRODEH, 2007).

Recuadro 4

TLC firmados por Perú

2005	Tailandia
2006	Estados Unidos, Canadá y Chile
2008	Singapur
2009	China
2010	Unión Europea
2011	Corea Sur, Japón México y Panamá

⁸ Dichos decretos vulneran no sólo el Convenio 169 de la OIT sino también la propia Constitución peruana, que contempla la imprescriptibilidad de la propiedad comunal de la tierra. Suponen, además, la culminación de la agenda neoliberal en el Perú, en su última etapa de reorganización del espacio físico e inserción al mercado de las áreas indígenas. El Decreto 1064 elimina la negociación por servidumbres de industrias extractivas, lo que concede al Estado la posibilidad de imponer proyectos extractivos en tierras comunales. Además, el artículo 7 deshabilita la protección de la propiedad comunal. En caso de conflicto entre propietarios de una comunidad y un asentamiento humano, el decreto hace prevalecer el derecho de estos últimos, si el centro poblado posee 4 años de antigüedad.

Recuadro 5

Mil comuneros criminalizados en Perú

Según datos de la Coordinadora Nacional de Comunidades afectadas por la Minería (CONACAMI), más de mil comuneros fueron criminalizados en 2011 por defender sus territorios de agresiones del Estado y mineras. Magdiel Carrión, presidente de CONACAMI, ha denunciado esa política: “Se nos ha presentado como enemigos del desarrollo, como los que no dejamos progresar al país y por ello se han dado una serie de medidas con las que hoy se criminaliza el justo derecho a la protesta”.

Fuente: CONACAMI, 9 febrero 2011.

- Decretos para agilizar 33 megaproyectos
El último paquete de decretos de urgencia fue aprobado en enero 2011 para exonerar de exigencias ambientales a 33 megaproyectos de infraestructuras. Entre ellos, hidroeléctricas, gaseoductos, puertos y carreteras (la mayoría en la Amazonía).

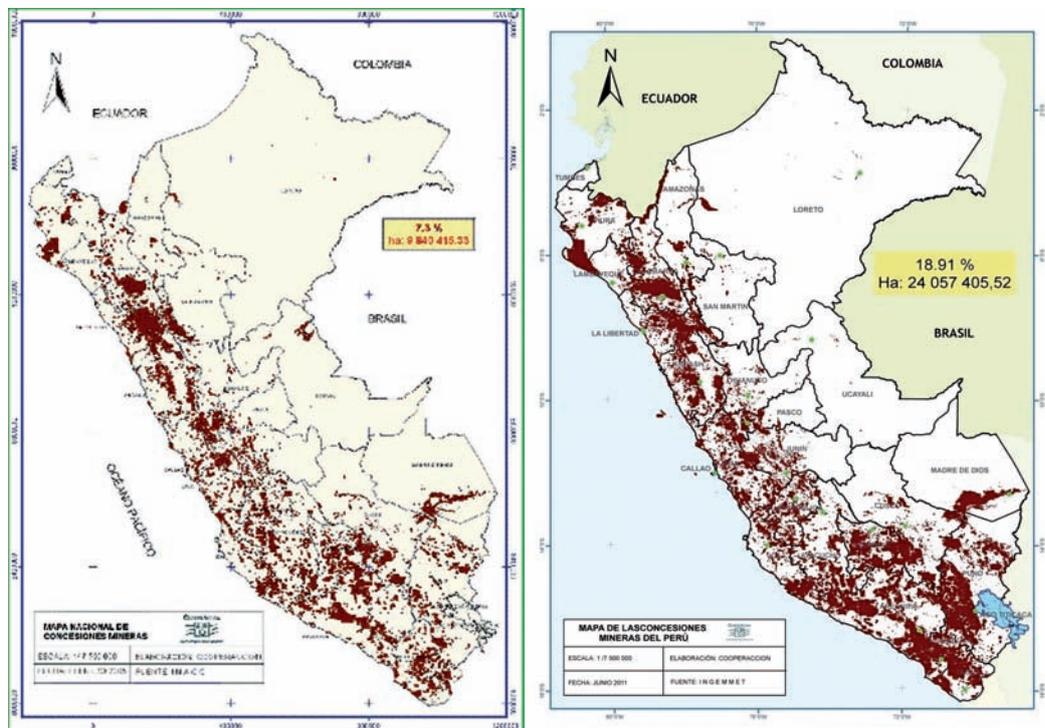
En febrero, el ejecutivo de Alan García derogó parcialmente los decretos.

2.3 La expansión minera en cifras

El imaginario histórico sugiere que Bolivia es un país minero mucho más consolidado que Perú. Sin embargo, los datos actuales dicen otra cosa. Las políticas neoliberales de los años 90 dieron pie a una **expansión acelerada de la minería en Perú**, basada en la atracción de capitales transnacionales y el impulso de la “nueva minería”, es decir, la megaminería a cielo abierto. Ello ha sido posible gracias a una actitud deliberada de los gobiernos que han practicado una política permisiva de concesiones mineras.⁹ De hecho, éstas experimentaron un crecimiento exponencial, al pasar de 2,26 millones de ha. en 1991 a más de 19 millones en junio de 2011, lo que representa el 15% del territorio peruano (véase gráfico 1). Este porcentaje es mucho mayor en la sierra. En junio de 2011, entre los departamentos con mayor territorio concesionado figuraban Moquegua (73,03%), Tacna (56,87%), Apurímac (56,5%), Arequipa (49,45%) y Cajamarca (48,5%), según las estadísticas ofrecidas por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú (INGEMMET). Sólo en el departamento de Puno las concesiones mineras, que representaban el 21,5% del territorio en 2009, se dispararon al 38% en junio de 2011.

⁹ Se define concesión minera como el acto del poder ejecutivo que faculta a personas físicas y/o sociedades mercantiles para realizar la exploración, explotación y aprovechamiento de las sustancias mineras contenidas en el lote minero que ampara. No implica la operativización efectiva de la exploración y/o explotación, sólo el derecho.

GRÁFICO 1: Mapa de concesiones en Perú (comparativa de 2005 y 2011)



Fuente: CooperAcción a partir de INGEMMET, Perú

El peso de la minería en Perú se expresa también en otras cifras elocuentes. La inversión extranjera, por ejemplo, se multiplicó por cinco en quince años al pasar de \$Us 746 a 4.026 millones en 1996-2010 (gráfico 3). Fruto de esa fuerte apuesta inversora, la minería aumentó su peso en la economía peruana en todos los órdenes. Su contri-

bución creció del 4,7% al 5,7% del PIB nacional en 1997-2009, como puede observarse en el gráfico 2. Y su cuota en las exportaciones totales del país escaló del 40% al 61% en igual periodo. ¿No son ésas las hechuras de un país minero en su máxima expresión? Por otro lado, la renta minera ha mostrado una evolución descendente en los últimos años, ya que las mineras gozan de un tratamiento fiscal favorable, merced a los acuerdos de estabilidad presupuestaria, o las exenciones tributarias por reinversión de beneficios que minimizan el pago de impuestos. En septiembre de 2011, el presidente electo Humala acometió una reforma fiscal de la minería y anunció 3.000 millones de soles en nuevas contribuciones anuales (alrededor de \$Us 1.000 millones).¹⁰ Los fondos estarían destinados a sufragar obras de infraestructura en los departamentos más pobres del país (*La República*, 28 septiembre 2011). Diferentes estudios independientes, sin embargo, han rebajado notablemente el aporte de la reforma a una tercera parte, apenas \$350 millones (Monge, 2011).¹¹

Recuadro 6

La minería peruana en cifras

- La principal producción minera se debe al **oro, cobre y zinc** (Perú es el 2do productor de cobre y zinc, 3ro en estaño y 6to en oro).
- Las mayores **transnacionales mineras** del planeta tienen presencia en Perú, tales como *BHP Billinton* (Australia), *Barrick* (Canadá), *Newmont* y *Doe Run* (EE.UU.), *Xstrata* y *Glencore* (Suiza), *Sumitomo* y *Mitsubishi* (Japón), *Gold Fields* (Sudáfrica), *Southern Copper* (México), o *Vale* (Brasil), entre otras.
- En los últimos años, las corporaciones mineras chinas han entrado con fuerza. Las 4 grandes (*Minmetals*, *Chinalco*, *Shougang* y *Zijin Mining*) planean invertir \$Us 7.500 millones en 2012-16. La firma de los TLC con EE.UU., UE y China abre la puerta a una mayor inversión minera extranjera (capítulo de protección de inversiones).
- Las **exportaciones mineras** alcanzaron un récord histórico de \$Us 21.974 millones en 2010 (lo que representa el 62% del total de exportaciones). El rubro de sidero-metalurgia y joyería exportó solamente \$Us 902 millones (2,54% del total).
- Desde 2002, el **aporte tributario** del sector minero crece hasta llegar al 24,7% del total de impuestos internos en 2007. En 2009, se derrumbó al 10,7%.
- Debido a la vigencia de los Contratos de Estabilidad Tributaria, tan solo el 47% de la producción minera de 2010 estaba afectada al pago de regalías mineras.
- La **reforma fiscal realizada por Humala** (septiembre 2011), estimó el aumento de recaudación en \$Us 1.000 millones anuales. Sin embargo, estudios independientes rebajan el impacto a sólo \$Us 300 millones.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MEM); Echave (2011); y Diario Gestión, 31 agosto 2011.

¹⁰ Impulsada en septiembre de 2011, la reforma fiscal minera del presidente Humala incluyó tres leyes tributarias, la primera norma modificó la Ley de Regalías Mineras, la segunda estableció el marco legal del Gravamen Especial a la Minería, y la tercera creó el Impuesto Especial a la Minería.

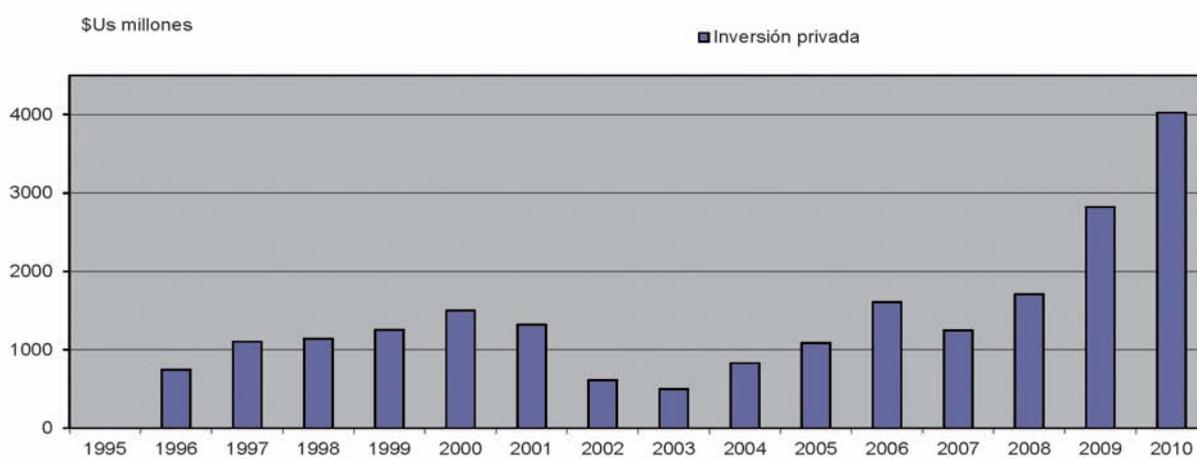
¹¹ De acuerdo al experto peruano Carlos Monge (2011), los nuevos impuestos supondrán una recaudación anual estimada en s/. 3.000 millones, pero las mineras dejarán también de aportar s/. 500 millones del óbolo voluntario, s/. 500 millones de regalías y s/. 1.000 millones en concepto de impuesto a la renta. En suma, la contribución adicional neta se sitúa en s/. 1.000 millones (apenas \$Us 300 millones) La nueva reforma fiscal, además, recentraliza el presupuesto, ya que los impuestos que disminuyen (regalías e impuesto a la renta) son los que se asignan preferentemente a las regiones y municipios de las zonas de producción. Por el contrario, los tributos que crecen (impuesto y gravamen extraordinario) engrosan las arcas del gobierno central.

GRÁFICO 2: Evolución de la producción y exportación minera en Perú (1995-2010)



Fuente: INEI Perú, MINEM

GRÁFICO 3: Evolución de la inversión minera en Perú (1995-2010)



Fuente: Ministerio de Energía y Minas (MINEM)

Se trata, en todo caso, de dos modelos diferentes de expansión. Si en Perú el proceso obedece a una política deliberada de multiplicar la presencia de la inversión transnacional por todo el territorio, en **Bolivia la expansión minera responde al boom de los minerales** en el mercado internacional. A diferencia del Perú, las reformas neoliberales no sirvieron para impulsar el sector. De hecho, el peso del sector minero en la economía se estancó en el periodo 1990-2005, disminuyendo su contribución al PIB y peso en las exportaciones (véanse gráficos 4 y 5).

La recuperación de la cotización de los minerales a partir de 2005 motivó una fuerte reactivación de la inversión privada (tanto transnacional como cooperativista), lo que impulsó el valor económico de la producción hasta alcanzar el 6,7% del PIB y superar el 34% de las exportaciones en 2010 (véase gráfico 4). Sin embargo, la brusca caída de los precios en 2008 motivó una contracción del 58% de la inversión privada en 2009 (*La Prensa*, 3 abril 2009). Desde entonces, la inversión no se ha reactivado. La falta de una normativa que sustituya el Código de Minería, así como la incertidumbre que pro-

voca la migración de contratos y los avasallamientos, explican el desplome de la inversión privada. Por el contrario, el Estado boliviano ha querido retomar el protagonismo económico que tuvo en el pasado de la minería, a través de la COMIBOL y de algunas nacionalizaciones puntuales (Vinto y Huanuni). Su inversión se incrementó desde 3,6 M\$Us en 2006 hasta 48,2 y alrededor de 26,5 M\$Us millones en 2009 y 2010, respectivamente (véase gráfico 5).¹² Con todo, el peso de la minería pública es todavía muy limitado. En la actualidad, un reducido grupo de transnacionales mineras dominan el valor de la producción minera. Por otro lado, la renta minera resulta ínfima desde cualquier ángulo que se mire. Los montos de \$Us 92 y 19 millones que recibieron las gobernaciones de Potosí y Oruro no alcanzarían siquiera para reparar mínimamente los daños ambientales provocados por la minería en sus territorios (véase recuadro 7)

GRÁFICO 4: Evolución de la producción y exportación minera en Bolivia (1995-2010)

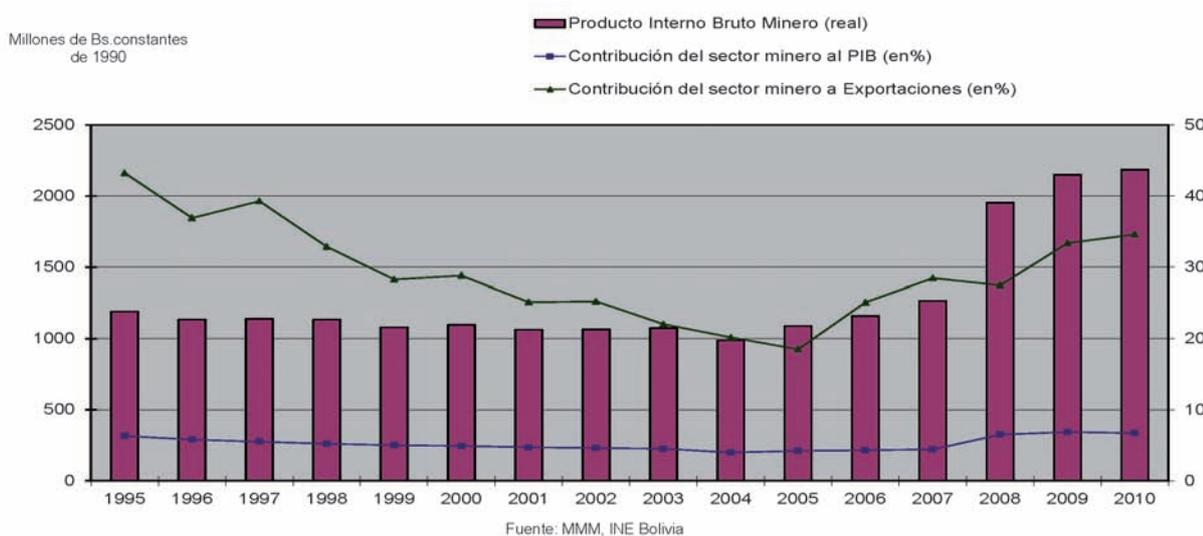
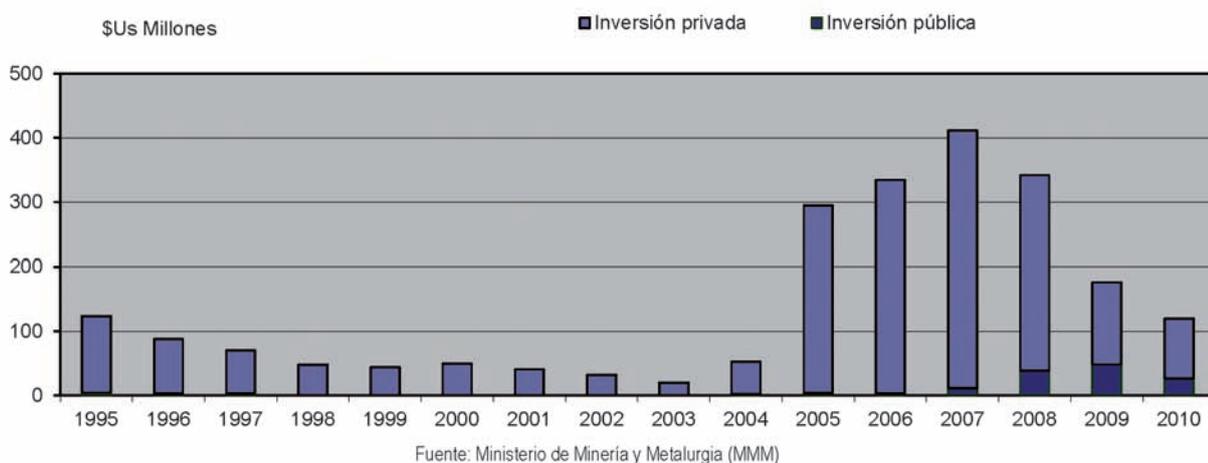


GRÁFICO 5: Evolución de la inversión minera en Bolivia (1995-2010)



¹² La mayor parte de los recursos de inversión pública se destinaron a estudios de prospección y preinversión para grandes proyectos (litio en Salar de Uyuni y hierro en El Mutún), así como a la puesta en marcha de plantas piloto. Frente a un presupuesto de inversión de 71 \$Us millones, el Ministerio de Minería y Metalurgia apenas fue capaz de ejecutar 26,5 \$Us millones, lo que representa el 37,35% del total. (MMM, Informe de Gestión 2010:42). La fuerte subejecución se debió a la paralización de los proyectos de Karachipampa, El Mutún, el litio del Salar de Uyuni y la licitación de un ingenio en Huanuni.

La minería boliviana en cifras

- La principal **producción minera** se debe al **zinc y plata**, que han desplazado en términos de valor económico a la histórica extracción de estaño.
- La producción minera se concentra en manos de un **reducido grupo de transnacionales**, entre las que se encuentran la *Sumitomo* (San Cristóbal), *Glencore* (*Sinchi Wayra*), *Panamerican Silver* (San Vicente), o *Coeur d'Alenes Mines Corporation* (Manquiri). Sólo la minera San Cristóbal concentró el 70% del total de producción minera en 2009.
- Existen 635 **cooperativas mineras** registradas en el país, con 65.890 socios (2010). Suponen el 83% del empleo (2010) y cerca del 20% de la producción de minerales (2008).
- En 2010, las **exportaciones mineras** marcaron un máximo histórico en \$Us 2.405 millones (34,6% del total de exportaciones). En el 1er semestre 2011, las exportaciones crecieron todavía un 46% (hasta \$Us 1.679 millones), nivel que disputa la supremacía del gas como principal rubro exportador (\$Us 1.753 millones en igual periodo).
- En 2010, el 77,4% de las exportaciones mineras se debieron a **concentrados de mineral**, por tan sólo el 22,6% de productos metálicos.
- En 2009, **Corea del Sur, Japón y China** recibieron el 50,14% de las exportaciones mineras.
- El **Estado protagoniza la producción de metálicos**, tanto en estaño (a través de la función Vinto) como en la producción marginal de cobre y bismuto.
- La **renta minera** ascendió a \$Us 290,2 millones en 2010 (en concepto de regalías, patentes e impuestos), muy por debajo de la renta de hidrocarburos que captó \$Us 1.688 millones.
- El monto de renta minera representó el 12,2% del total de exportaciones mineras en 2010 (\$Us 2.405 millones), un porcentaje que resulta todavía inferior al 13,8% que dejaron los **barones del estaño** durante la década de los 30 del siglo pasado.

Fuente: Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM), Memoria institucional 2010, y Estadísticas del Sector minero-metalúrgico 1980-2008; Plataforma Energética, 18 marzo 2011; PetroPress, n° 25; Michard (2008); e YPFB.

¹³ Se trata de una estimación aproximada. De acuerdo al INEI, la población peruana en edad de trabajar (PET) alcanzó 17.276.085 personas en 2008, y la tasa de actividad económica se situó ese año en 73,5%, lo que origina una Población Económicamente Activa (PEA) de 12.697.922 personas. Si se estima una tasa de desocupación del 10%, la PEA ocupada serían 11.428.130 personas. El empleo minero directo significaría entonces el 1,29%.

¿Y en términos de empleo? La ocupación laboral del sector minero no se corresponde con su importancia en términos económicos. Es decir, **la minería se revela poco intensiva en mano de obra:**

- La minería peruana ocupaba directamente a 147.374 trabajadores/as (MEM, 2010:75), lo que representa alrededor del 1,3% de la población activa ocupada peruana, muy por debajo en su aporte en términos de producción.¹³ Y es que la nueva megaminería transnacional resulta intensiva en capital y tecnología, pero no en mano de obra. Además, en 2010 se disparó la mano de obra que trabajaba para subcontratistas mineras (90.430 personas) frente a la contratada directamente por las compañías mineras (56.944).
- El caso de la minería boliviana resulta también ilustrativo. La ocupación laboral muestra una clara evolución positiva en la última década, desde 50.464 empleos en 2001 hasta 79.311 en 2010 (MMM, 2010). Lo que representaría el 1,7 % de la población ocupada.¹⁴ Lo más llamativo es que el sector cooperativista representa el 83% del empleo, frente a un 7,7% de la minería estatal y tan solo un 6,9% de la gran minería (MMM, 2011:40). Tras la relocalización minera y el derrumbe de la minería estatal en los 80, las cooperativas operan como un sumidero de mano de

¹⁴ Según el INE, la población activa laboralmente ascendió a 4.672.361 personas en 2010. El empleo minero supondría entonces apenas un 1,7% del empleo total.

obra en condiciones laborales no siempre dignas. Muchas cooperativas, especialmente potosinas, adolecen de precariedad, informalidad y carencia de derechos laborales y sociales (Díaz Cuéllar, 2011:26). En el otro extremo, los grandes capitales de la minería transnacional, pese a su discurso de modernidad y progreso, no son capaces de absorber mano de obra.¹⁵

La expansión de la minería posee también una dimensión territorial. Los proyectos mineros ya no se contentan con trepar los rincones de la cordillera de Los Andes (su zona natural de expansión), sino que buscan **nuevas áreas geográficas**. En la región andina, la minería ha incursionado en zonas no explotadas anteriormente, tales como ceja de selva, llanuras, ríos amazónicos o incluso en zonas urbanas y periurbanas. ¿Cuáles son los nuevos patrones de expansión?

→ Minería aluvional amazónica
Llama la atención la acelerada expansión que ha experimentado la minería aluvional aurífera en la cuenca amazónica, tanto en Perú (Madre de Dios) como en Bolivia (norte de La Paz, Pando, Beni y Santa Cruz). A menudo, este tipo de minería se practica en condiciones de informalidad, clandestinidad y contrabando. Así lo ponen de manifiesto los operativos militares impulsados en ambos países para confiscar las dragas ilegales que contaminan el agua con químicos y presentan niveles alarmantes de explotación laboral. En 2010, la ADEMAF (Agencia para el Desarrollo de las Macrorregiones y Zonas Fronterizas) de Bolivia realizó operativos en los Ríos Orthon y Madre de Dios (Pando), Suches (La Paz), San Simón (Beni) y San Ramón (Santa Cruz). Fuentes oficiales estimaron en más de 500 las barcasas que operaban en toda la cuenca amazónica (hasta 20 horas al día) y en \$Us 100 millones anuales el negocio ilegal del oro (*Cambio*, 15 julio 2010). En un estudio sobre minería en tierras bajas realizado por el CEDIB, la investigadora Alicia Tejada (2011:56-57) reveló que las dragas se habían comido en San Ramón parte del cementerio, y que el negocio del oro había desplazado las actividades agropecuarias. El gobierno peruano impulsó un operativo similar en febrero de 2011, por medio del cual

Recuadro 8

San Ramón, fiebre del oro

“Mientras los ramoneños sobrevivían, los empresarios dueños de la maquinaria se volvían ricos. El director ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Minera, Henri Zeballos, indicó que un solo brasileño, Elpidio Almansio Lima, sacaba tres kilos de oro día, valorados en el mercado nacional en \$Us 120.000. Calcula que la operación ilegal en las zonas de San Ramón, San Javier y Concepción arrojaba unos 10 kilos del metal por día o \$Us 400.000, de los cuales los municipios no veían ni un solo dólar”.

(*El Deber*, 28 febrero 2011)

“Sé que la gente pobre y humilde se dedica a la minería, la mano de obra de las mujeres ha desaparecido porque las mujeres se han volcado de lleno a realizar el lavado de oro en forma manual, esta situación es muy peligrosa porque ya se han reportado dos muertes y constantes mutilaciones. Sin embargo, rescato este trabajo de la gente hormiga porque ellos no utilizan mercurio para separar el oro. Actualmente, hay una paralización debido a que hay una supuesta acción del Estado. El trabajo minero es una amenaza debido a que los dragueros están usando químicos y deforestando, afectando mayormente a los ríos Quizer y San Julián, y depredando los montes”.

(Aponte Quity. Directora de *CRE-Coop. Rural de Electrificación* de San Ramón, noviembre 2010)

Fuente: Tejada (2011), pp. 52 y 55.

¹⁵ La incorporación de mujeres al mercado laboral es escasa y lenta. Si en 2000, las mujeres representaban alrededor del 3,2% de la fuerza laboral peruana, en 2008 su participación se mantenía todavía en un exiguu 4,9% (MEM, 2009:72). En Bolivia, alrededor del 10% de los socios cooperativistas son mujeres (Michard, 2008:56). Su inserción en la minería se produce en condiciones de invisibilidad, informalidad y desigualdad salarial. La cuestión ha sido analizada en profundidad en el epígrafe 1.1.3.

¹⁶ Según el investigador Miguel Santillana (2011), periodista económico especializado en temas mineros que trabaja en Willax TV (un canal privado afín a los intereses mineros), entre el 15-18% del oro producido en Perú es informal.

¹⁷ Tras la aprobación del Código Minero en 1997, las primeras explotaciones grandes en tierras bajas fueron impulsadas por COMSUR, propiedad del propio Sánchez de Lozada, y la canadiense Orvana en Chiquitos (Santa Cruz), como nuevamente COMSUR y EMSA en San Ramón (Santa Cruz). En la actualidad, Santa Rosa de la Mina, propiedad de Hernán Antelo, ex-ministro de comunicaciones de Sánchez de Lozada, explota oro en la región San Ramón-San Javier. Véase Tejada (2011), pp. 29-41.

el ejército peruano destruyó 20 dragas en Madre de Dios, incluido un negocio operado por chinos informales (Coelho, 2011). No hay claridad en los datos sobre el alcance de este fenómeno. La investigadora Julia Cuadros (2011) tasa en 50.000 las familias que viven de la minería artesanal en Perú, y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, estima que 80.000 personas trabajan en la actividad minera ilegal (no artesanal) en el país. Otras fuentes reportan incluso cifras mayores.¹⁶

→ Nuevos yacimientos metálicos de llanura en Bolivia

Desde 1976 el gobierno boliviano ha impulsado diferentes estudios de la región precámbrica, que identificaron la existencia de ricos yacimientos de minerales metálicos y no metálicos. Si bien, esos territorios mantuvieron el carácter de reserva fiscal, el Código de Minería aprobado por Sánchez de Lozada (1997) liberalizó el sector y abrió la veda a su explotación minera. El estudio de Tejada (2011) ha revelado la presencia de intereses político-empresariales ligados al ex-presidente Sánchez de Lozada.¹⁷ De igual modo, El Mutún (uno de los yacimientos de hierro más ricos del mundo, con 42.000 millones de toneladas de reservas) fue entregado a la brasileña *EBX* en zona franca, y con condiciones muy ventajosas. El gobierno del MAS renegoció el contrato de riesgo compartido con la india *Jindal*, si bien la explotación acumula varios años de retraso.

→ Minería urbana y periurbana con desplazamientos

Otro fenómeno creciente es la expansión minera en zonas urbanas y periurbanas. En Corocoro (La Paz) la población vive con naturalidad los traslados de casas debido al descubrimiento de nuevas vetas de cobre bajo el perímetro urbano. En Perú, se acometen incluso traslados forzados. El caso más conocido es el de Morococha (Junín), a favor de la minera *Chinalco* (véase recuadro 9). Pero no se trata de un caso aislado. La comunidad de Fuerabamba (Apurímac) será desplazada por el proyecto Las Bambas de la minera *Xstrata*, y la ciudad de Cerro de Pasco (Junín) está a punto de desaparecer carcomida por el tajo abierto de la minera *Volcán*. El Estado peruano no contaba con las herramientas legales y operativas para garantizar los reasentamientos motivados por proyectos de inversión que respeten los derechos de los pobladores, o permitan evaluar y fiscalizar los planes de reubicación. Ante este vacío legal, el ejecutivo de Alan García envió, en febrero de 2010, un proyecto de ley al Parlamento para facilitar los desplazamientos forzados. La ley fue aprobada. El artículo 7.2c prohíbe los desplazamientos arbitrarios en caso de “proyectos de desarrollo en gran escala que no estén justificados por un interés público superior o primordial”. Es decir, una puerta abierta a los desplazamientos mineros.

→ Minería transfronteriza

Un último patrón de expansión se relaciona con la explotación minera de las fronteras entre países, en condiciones crecientes de desregulación. Con frecuencia, la minería transfronteriza aprovecha incluso la figura jurídica de áreas protegidas o parques naturales para encubrir sus acciones.¹⁸

¹⁸ Las zonas fronterizas no sólo son aprovechadas por las transnacionales, también por la minería informal o cooperativista. Un ejemplo se encuentra en el Río Suches, frontera entre Perú y Bolivia al norte del Lago Titicaca. En septiembre 2010, el ejército boliviano desalojó a 400 mineros peruanos que explotaban ilegalmente oro en la zona de Antaquilla. El informe señaló que operaban 20 cooperativas mineras (conformadas por bolivianos y peruanos), y 89 lavaderos de oro, y que la explotación había motivado el desvío del curso del río así como la modificación de fronteras entre ambos países. Véase PetroPress (2010), n° 22, p. 35.

El traslado de Morococha en beneficio de la minera Chinalco

La Chinalco

La existencia de cobre y molibdeno bajo sus tierras motiva que los más de 5.000 habitantes de Morococha sean desplazados ante la decisión del gobierno de priorizar el proyecto minero Toromocha. La adquisición del yacimiento por Perú Copper en 2003 dio pie a la política de compra de viviendas a propietarios de Morococha y tierras a la comunidad de Yauli para la construcción de una cancha de relaves. En agosto de 2006, la Municipalidad Distrital realizó una audiencia pública. De los 700 pobladores que asistieron, 617 se pronunciaron a favor de la reubicación y 10 en contra. La población exigió que la nueva zona tuviera todas las condiciones para la reubicación, como una vivienda, servicios básicos, infraestructura educativa y pública, así como empleo y compensaciones económicas. Sin embargo, el contrato de transferencia de la mina a la transnacional minera Chinalco en 2007 no consideró la propuesta de convenio marco para la compensación urbana. Por el contrario, la nueva empresa prosiguió el plan de compra de casas presionando a propietarios e inquilinos. Chinalco nunca pretendió discutir una propuesta de reubicación integral sino destinar \$Us 40 millones para construir 1,200 viviendas y mantener un trato individual con los propietarios (33.000 \$/vivienda). Sin embargo, los propietarios de las casas exigieron 2.000 dólares por metro cuadrado.

Traslado a tierras pantanosas

El lugar elegido por Chinalco para el reasentamiento (Carhuacoto, ex Hacienda Pucará) no es seguro. Las autoridades han avisado que existen en la zona humedales que requieren un estudio de viabilidad. En época de lluvias, el lugar se inunda. Pese a estas denuncias, Chinalco ya inició la construcción. Además, la zona está concesionada, por lo que no existe garantía de que en el futuro no se desarrolle un nuevo proyecto minero ya sea necesario un nuevo desplazamiento (la minera Volcán transfirió en noviembre 2010 los derechos a un nuevo concesionario). La incertidumbre no termina ahí. La ubicación de la nueva ciudad se encuentra a 3 km. aguas abajo de la Laguna Huascacocha, proyectado depósito de relaves mineros que carece de un estudio de riesgo de desastres, vitales para garantizar la seguridad.

Estudio de Impacto Ambiental

Ene. 2010	La audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero dio lugar a un enfrentamiento entre policía y pobladores locales, que protestaban porque no fue permitido su ingreso al local donde se desarrollaba la audiencia. La compañía china fletó varios buses con morocochanos residentes en otras ciudades como Ilo y Huancayo para expresar apoyo incondicional al proyecto y acallar así el rechazo general (http://www.youtube.com/watch?v=V9Uqrvck3dk).
Ene. 2010	Ante esta situación, el alcalde de Morococha interpuso ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM) la nulidad de la audiencia. Presentó además un informe de observaciones a la EIA.
Nov. 2010	Pese a las múltiples observaciones y recomendaciones de la población, el MEM aprobó el EIA del proyecto, que incluye el polémico e incierto plan de reasentamiento.
Ene. 2011	En respuesta, la municipalidad impugnó el 12 de enero la resolución de aprobación del EIA, que no fue respondida.

¿Es posible un traslado humano?

“Queremos un traslado con rostro humano, no somos ningún material para que se nos lleve así, somos humanos, tenemos historia, pasado y presente. Queremos tener el mejor futuro para nuestros jóvenes”, ha demandado Víctor Raúl Anchate, presidente de la Comisión Multisectorial del Distrito de Morococha. Para abundar en irregularidades, el Plan de Reubicación ha sido aprobado sin la participación del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Social (MIMDES), que es el ente regulador del tema de desplazamientos por proyectos de desarrollo.

Fuente: Cooperación, Boletín Actualidad Minera, n° 130, febrero 2010 (www.cooperacion.org)
y Red Verde, Boletín Informativo, n° 41, marzo 2011 (www.noticiasaliadas.org/red_verde)

2.4 La transnacionalización de la minería: ¿pérdida de soberanía?

Todos los estudios disponibles insisten en el fenómeno de transnacionalización como uno de los elementos distintivos del actual ciclo expansivo de la minería. ¿En qué consiste? Desde luego, se refiere a la entrada de capital transnacional en el negocio minero. Pero es un fenómeno más complejo, multifacético, que comprende **múltiples dimensiones**:

I) *Participación de empresas transnacionales*

El primer rasgo de la globalización alude a la participación de mineras transnacionales en las fases de exploración, explotación y comercialización de minerales. En este contexto, se destaca la emergencia de conglomerados asiáticos —chinos e indios— como nuevos actores globales en el continente latinoamericano. Tanto en Perú como en Bolivia la presencia de transnacionales mineras resulta muy significativa.¹⁹

II) *Procesos de “financiarización” y tercerización*

Las transacciones financieras en mercados internacionales son una característica fundamental de las operaciones mineras a gran escala. El reparto de trabajo en el sector ha dado lugar a la conformación de mineras *major* (muy capitalizadas y centradas en explotar yacimientos) y las denominadas *junior* (especializadas en exploración, relacionamiento comunitario y la puesta en marcha de los proyectos para su posterior venta). La tercerización de la fase de explotación, a su vez, propicia cadenas de subcontratación que diluyen sucesivamente los derechos laborales y las responsabilidades ambientales.

III) *Impulso de megaproyectos mineros*

La presencia creciente de transnacionales en el sector minero conlleva el impulso de megaproyectos mineros a cielo abierto. Este tipo de explotaciones arroja altos índices de rentabilidad al externalizar costes sociales y ambientales.

Recuadro 10

Los terribles impactos de la megaminería a cielo abierto

- Consumo abusivo de agua (incompatible con actividades productivas como la agricultura, ganadería o pesca)
- Desaparición de fuentes de agua y desecación de lagunas y bofedales
- Vertidos de sustancias tóxicas (contaminación de cursos fluviales y tierras)
- Contaminación de acuíferos fruto de los procesos de lixiviación
- Polución del aire (polvo en suspensión)
- Remoción de grandes superficies de tierra y su cobertura vegetal (alteraciones irreversibles del paisaje)

IV) *Introducción de tecnologías con impactos ambientales a gran escala*

La adopción de nuevas tecnologías intensivas en capital, uso de agua y lixiviación con sustancias tóxicas (por ejemplo, cianuro o mercurio para extraer oro o cobre) generan fuertes impactos a gran escala (véase recuadro 10). En los últimos años, ha surgido una nueva tecnología de explotación que sustituye el proceso de lixiviación por mineroductos que transportan el concentrado de mineral directamente a los puertos de exportación. Además de multiplicar exponencialmente el uso de agua, el transporte de mineral en forma de aglomerados permite extraer minerales adicionales de forma opaca. ¿Con qué fin? Evadir el pago de impuestos y aumentar las ganancias.

V) *Liberalización comercial*

Otro pilar básico de la transnacionalización reside en la firma de Tratados de Libre Comercio (TLC) para favorecer el libre tránsito de materias primas, insumos y capitales. Estos tratados introducen garantías de seguridad jurídica para las inversiones del capital transnacional (como es la posibilidad de demandar a los Estados por lucro cesante), así como la libre repatriación de beneficios a las matrices de las mineras.

¹⁹ El acaparamiento de los minerales por las economías emergentes está cambiando los frágiles equilibrios de la globalización. Un análisis interesante de este proceso se encuentra en Rodríguez (2011), *Saca el metal y corre: los países emergentes, la Unión Europea y las materias primas no energéticas del Sur global*.

VI) *Monopolios regionales de comercialización*

Sin embargo, los esquemas de comercio distan mucho de responder a los principios de libre mercado. A nivel regional, las mineras practican monopolios de comercialización, con capacidad de fijar precios.

VII) *Infraestructuras a escala regional*

La construcción de infraestructuras a escala regional permite la conformación de conglomerados transnacionales, capaces de crear economías de escala en régimen oligopólico.

VIII) *Desregulación de fronteras*

Otro rasgo se relaciona con el auge de la minería entre fronteras (analizado en el epígrafe anterior). Los proyectos de minería transfronteriza promueven islas de desregulación, creando una especie de "tercer país" con una institucionalidad y un régimen propio de seguridad. En estos lugares, incluso las fuerzas armadas se supeditan a las mineras transnacionales (véase recuadro 11).

Recuadro 11

**Contrato de Seguridad Privada
Ejército Peruano y minera Afrodita
(Amazonas, frontera con Ecuador)**

El pueblo Awajún del Cenepa (Provincia Cordoncanqui, Departamento Amazonas) ha denunciado la existencia de un Convenio de Colaboración Recíproca entre la minera Afrodita y la Sexta Brigada de Selva del Ejército peruano. La brigada se compromete a proveer transporte de personal hasta la zona misma de las concesiones, así como servicios de seguridad y comunicaciones. La contraprestación de la minera se materializa en suministro de energía eléctrica, atención médica, y un pago trimestral de 20.000 soles al ejército. El convenio está fechado el 2 de mayo 2010, y tiene una vigencia de dos años.

Fuente: Convenio de Colaboración Recíproca y AIDSESP, 28 abril 2011.

¿Y cuáles son las CONSECUENCIAS?

GRÁFICO 6: Consecuencias de transnacionalizar la minería



- ① La multiplicación de unidades financieras y operativas que cruzan países y hemisferios **otorga a las empresas transnacionales el control de la cadena productiva**. Además, la entrada de capital transnacional delega las decisiones empresariales a las sedes financieras de las transnacionales, muy lejos de los centros mineros. Esta dinámica garantiza los intereses del capital, pero no siempre (casi nunca) el de las poblaciones locales.
- ② Esta posición de predominio motiva que las transnacionales desplieguen una batería de **prácticas financieras al margen del poder fiscalizador de los Estados**. Algunas de ellas son, por ejemplo:
 - Las grandes corporaciones mineras especulan con las reservas de los países, con el fin de obtener financiación y apalancar recursos.
 - La repatriación de dividendos constituye una fuga continua de capitales, que socava las posibilidades del desarrollo local.
 - La operación de fondos de capital riesgo que operan a corto y medio plazo. Su objetivo es comprar mineras deficitarias o concesiones sin explorar, aplican medidas de reducción de costes, aumentan el valor de los activos y los venden a un precio mayor sin consideraciones de costes ambientales o sociales.
- ③ Desbalance de poder en los territorios. La introducción de poderes sin control en las áreas rurales concede a las mineras la condición de actores muy poderosos frente a alcaldías, gobiernos regionales e incluso Estados. Incluso forman *lobbies* para aumentar su radio de influencia, caso del Grupo Norte en Perú (véase recuadro 12).
- ④ Por otro lado, las mineras transnacionales impulsan una estrategia de infiltración en la institucionalidad pública y cooptación de espacios en las regiones mineras. El caso del Perú resulta paradigmático del abanico diverso de prácticas que ponen en marcha las transnacionales:
 - Promoción de medios de comunicación pro-mineros, y cooptación de periodistas populares (creadores de opinión) para difundir el mensaje de la minería como fuente de desarrollo y empleo para la región.

Recuadro 12

Grupo Norte

El Grupo Norte es una asociación de varias empresas mineras y actores económicos afines que operan en el norte del Perú. Esta suerte de patronal contrata los servicios de consultores especializados en inteligencia y expertos en movimientos sociales. El caso más notable es Dante Vera, antiguo militante de izquierda que desempeñó funciones de coordinación y elaboró varios documentos.

La revista *Dignidad Regional* de Cajamarca, publicó en febrero de 2005 el Informe: “Dante en el infierno”. El artículo se hacía eco de la filtración de un documento elaborado por el citado consultor que planteaba una completa estrategia de desarticulación social para el departamento. El informe contenía un análisis detallado de los dirigentes ronderos, que identificaba su adscripción política y valoraba su posición frente a la mina en tres categorías: “negociable, opositor y opositor radical”.

Entre sus principales recomendaciones, figuraba la construcción de un “cordón social de seguridad” para las minas, formado por rondas campesinas, policía, jueces de paz, tenientes gobernadores y alcaldes. El fin del cordón sería el “aislamiento social, político y cultural de los sectores confrontacionales y violentistas”. Proponía, además, un lema a las mineras: “Juntos por el Desarrollo y la Paz”. Y recomendaba lanzar campañas de denuncia de infiltración del narcotráfico en los movimientos de protesta anti-minera.

Fuente: Dante Vera (2004), “Minería: oportunidades y amenazas en la Región Cajamarca”, y Salas Rodríguez (2006), pp. 184-86.

- Creación de ONG afines para canalizar inversiones sociales. La financiación de fiestas populares, eventos culturales y deportivos propicia, en el largo plazo, una naturalización de la presencia minera en las regiones.

Algunas de las ONG “mineras” no tienen problema de acceder a los canales de subvención de las agencias donantes europeas. Por ejemplo, la Asociación de Los Andes de Cajamarca (ALAC, www.losandes.org.pe), en la órbita de la minera Yanacocha, ha logrado acceder a fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

- Promoción de organizaciones campesinas paralelas. De nuevo, la Yanacocha en Cajamarca (Perú) ha alentado una ronda campesina afín, que rivaliza con la organización tradicional.²⁰ En la Provincia Nor Lítpez de Potosí (Bolivia) opera el *Club de los Soñadores*, ligado a la minera San Cristóbal-Sumitomo (véase recuadro 13).

- Promoción de comités de desarrollo local. En una entrevista, la gerente de Poderosa, Eva Arias, explica el programa de gobernabilidad que la minera promueve en La Libertad (en Perú). La propia minera se encarga de capacitar a los Comités de Desarrollo Comunal (CODECO) (Barnechea y Tumi, 2011:175):

“Hay 14 anexos y comunidades en nuestro actual radio de influencia. Cada uno de ellos elige a los representantes de la población que van a los comités; eligen miembros promotores a cargo del desarrollo económico, seguridad, educación, salud, medio ambiente... Los CODECO son los encargados de elaborar los planes de desarrollo local con su comunidad, y con ellos se coordina qué cosa hacer en cada lugar... escuela, posta médica, veredas, agua potable, desagüe... Una vez que ellos saben qué presupuesto tienen e identifican las necesidades, están preparados para ir al presupuesto participativo del distrito (...) Inicialmente estructuramos y financiamos el programa de gobernabilidad; también cofinanciamos las iniciativas priorizadas que así lo ameriten de acuerdo con los CODECO y el presupuesto participativo”.

- Infiltración en procesos de concertación entre Estado y la sociedad civil. Las mineras están presentes en la mesa de concertación de lucha contra la pobreza activa en Perú (con el fin de influir en los planes de desarrollo concertado) o en las comisiones ambientales regionales y/o locales (para incidir en los planes de ordenamiento territorial). Un documento filtrado del Grupo Norte, elaborado por la consultora Jessica Morales (2009), reveló la estrategia de convertir el proceso de Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) de Cajamarca en una oportunidad para las mineras.²¹ La estrategia de las mineras pasa por ocupar los espacios de concertación, mediante la participación de organizaciones sociales afines y un nutrido y preparado equipo técnico, que protagonicen las intervenciones.

- Infiltración de asesores en los gobiernos regionales. En los últimos años, la región de Cajamarca ha sido gobernada por partidos regionales independientes. Ello no ha sido obstáculo para que las administraciones regionales acepten incorporar asesores financiados por los conglomerados mineros. No son pocos los casos en que gerentes de

Recuadro 13

El “Club de los Soñadores” (Provincia Nor Lítpez, Bolivia)

Se trata de una red de promotores de desarrollo que opera de forma paralela a la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), a la que tacha de ser política y de no ocuparse de la creación de empleo seguro. Hacen asambleas y realizan actividades sindicales. En enero de 2011, discutieron en Santa Cruz un Plan Regional de Desarrollo para la provincia. El evento fue financiado por la minera San Cristóbal, que dispone de fondos para el desplazamiento logístico de dirigentes.

Fuente: Entrevista a Patricio Mendoza, ex-dirigente de la FRUTCAS (julio 2011).

²⁰ En Cajamarca, las mineras promovieron una federación paralela de rondas campesinas. Aprovecharon que muchas rondas no habían legalizado sus juntas directivas, para inscribir las rondas paralelas en el registro. Una explicación de este proceso se puede consultar en Chacón (2002).

²¹ El documento recomienda al Grupo Norte conformar un equipo técnico especializado en ZEE, así como elaborar mapas georeferenciados de las zonas en las que trabajan (de forma participativa) para ponerse un paso por delante del proceso impulsado por el gobierno regional. Véase Morales (2009).

²² Otro impacto de la explotación minera tiene que ver con el efecto de traspase de escalas que provoca en el territorio (Bebbington, 2007:301). La gran minería origina que los espacios locales segmentados se conviertan en formas territoriales continuas que articulan zonas rurales y urbanas, y, por otro lado, áreas directamente afectadas con otras que lo son indirectamente.

Los efectos de la contaminación provocan una mayor toma de conciencia de la interdependencia ecológica. Por ejemplo, en las cuencas hidrográficas la contaminación genera efectos que se sienten aguas abajo. Al dejar de ser puramente locales, los territorios afectados por la minería se han transformado en espacios “glocales”, influidos por la dinámica de los conflictos pero por actores internacionales e ideas que vienen de fuera. La “glocalización” se deja ver en la vida cotidiana, en las estrategias de vida, en los discursos, o en las formas de hacer política. En otras palabras, los territorios se han vuelto “híbridos”. El proceso de hibridación refleja la amalgama entre lo campesino-indígena y lo minero, y entre circuitos económicos locales y transnacionales.

Yanacocha transitan de la empresa privada a la administración pública (por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas) y viceversa, sin ningún tipo de restricción.

- **Cooptación de alcaldes locales.** De sobra es conocido que las mineras “patrocinan” candidatos en las elecciones municipales bajo promesas de financiar inversiones en infraestructuras. De hecho, en el ámbito local de algunas regiones se naturalizó hablar de los “candidatos de la minera”. En diciembre de 2003, la revista *Encuestas y Debates* publicó el informe sobre los 7.856 dólares que percibió de Yanacocha el entonces alcalde aprista Emilio Horna Pereyra de Cajamarca para financiar sus estudios de maestría en administración pública (Salas, 2006).
- Y también **financiamiento electoral de congresistas.** En las elecciones nacionales peruanas de 2011, el diario *La Primera* de Perú denunció que Yanacocha financió la campaña electoral de 22 diputados al Congreso Nacional (véase recuadro 14).

Recuadro 14

La “Bancada Yanacocha” (Cajamarca, Perú)

La ONG *Reflexión Democrática*, propiedad de Roque Benavides (accionista de Yanacocha), financió la campaña electoral de 22 candidatos al Congreso. De un amplio abanico de partidos políticos, con la excepción de *Gana Perú* (Ollanta Humala). La lista quedó en evidencia cuando el candidato de *Perú Posible* por Cajamarca, Mesías Guevara, rechazó los \$Us 20.000 ofrecidos para su campaña. El aporte forma parte del programa “Impulso para un mejor Congreso”, que según la ONG busca “promover la postulación de ciudadanos sobresalientes como candidatos al Congreso de la República”. El apoyo incluye: material de campaña, contratación de publicidad electoral en medios masivos, asesoría comunicacional, así como capacitación en gestión parlamentaria, transparencia, democracia y vocación de servicio eficiente al país.

Sin embargo, *Alerta Perú*, detectó una curiosa coincidencia. De las doce regiones priorizadas por el programa de Reflexión Democrática, ocho concentraban una fuerte inversión minera. Tras revelarse el escándalo, la ONG declaró que su apoyo era transparente y sólo buscaba fortalecer la democracia. Sin embargo, cabe preguntarse qué tipo de evaluación hizo la institución para considerar, por ejemplo, que Luz Salgado –una de las más agresivas defensoras de la dictadura de Fujimori– podía considerarse una “ciudadana sobresaliente” con vocación de “fortalecer la democracia”. También declaró que buscaba “comprometer el esfuerzo de todos los sectores del país en la construcción de una sociedad democrática, justa, estable y próspera, donde cada peruana y peruano pueda gozar de las condiciones de bienestar que posibiliten una vida digna y plena de oportunidades”. Bellas palabras que esconden la defensa de los intereses mineros.

Fuente: Diario La Primera de Perú, 26 febrero 2011; y Alerta Perú, 1 marzo 2011.

- 5 Otra consecuencia de la expansión transnacional de la minería es la **redefinición de los territorios**. El *medio natural* (el espacio físico) se transforma en un espacio de múltiples usos conflictivos, por el que compiten las poblaciones locales que aprovechan los recursos naturales como medio de vida, las empresas mineras que tienen intereses meramente extractivos, y el propio Estado que busca maximizar las rentas o ingresos públicos que el espacio puede generar. La tensión y conflictividad genera nuevas *relaciones sociales* y, en consecuencia, una nueva construcción social del territorio (Bebbington, 2007:300).²²

- ⑥ Además, la megaminería provoca **procesos de desintegración comunal**, ya que alienta conflictos entre residentes, así como la proliferación de estrategias individuales de supervivencia. La reducción en el acceso y disponibilidad de recursos naturales (básicamente, tierra y agua) incrementa la vulnerabilidad de los medios de vida de las poblaciones locales, generando incertidumbre.
- ⑦ La **minería a pequeña escala constituye un eslabón funcional de la industria transnacional minera**. En algunos casos, esa relación es formal y transparente. Por ejemplo, la minera San Bartolomé (subsidiaria de *Coeur d'Alene*) firmó en 2007 un acuerdo de riesgo compartido con el sector cooperativo potosino. Sin embargo, la mayoría de las veces las transnacionales adoptan estrategias opacas. En primer lugar, utilizan a la minería artesanal como “estrategia de entrada” para incursionar en nuevas áreas de explotación. La investigadora peruana Julia Cuadros (2011) asegura que en regiones no tradicionales de minería metálica, como Piura y Chumbivilcas (Cusco), la gran minería permite que los mineros artesanales se instalen en sus concesiones. Su estrategia es atribuirles el cliché de contaminantes para poder presentarse luego como los “salvadores” y preparar el ingreso minero. A raíz de la presencia de minería artesanal en Tambogrande, Las Lomas y Suyo (Piura), las mineras transnacionales han acusado a los actores “antimineros” de haberles sacado para dar paso a la minería artesanal. Pero también la industria minera utiliza a los pequeños como “estrategia de salida”. A menudo, cuando la rentabilidad de las minas decae, se traspasa el negocio a los pequeños para eludir así sus obligaciones ambientales. La experiencia del cierre de los yacimientos de *Inti Raymi* (subsidiaria de *Newmont*) en La Joya (Oruro) muestra las estrategias maquiavélicas que involucran la transferencia a contratistas y comunidades (véase recuadro 15).

Recuadro 15

Inti Raymi y su estrategia de cierre en La Joya

En manos de la norteamericana *Newmont* (que posee el 88% de sus acciones), la minera *Inti Raymi* opera en Bolivia desde mediados de los 80. En la comunidad La Joya desarrolla tres grandes proyectos mineros (Llalagua-Nueva Esperanza, Kiwiri y Huayna Potosí). Aprovechando que el pueblo tenía saturación de desocupados mineros, la minera decidió explotar la concesión de Huayna Potosí mediante contratistas. De este modo,

En 2003, en el marco de su retirada de la zona, *Inti Raymi* ofreció traspasar las concesiones del cerro Huayna Potosí. Ante la negativa de los contratistas, los dos sindicatos agrarios de La Joya aceptaron en 2006 y crearon una empresa comunitaria. El “desinteresado regalo” motivó un conflicto de intereses, ya que los contratistas se negaron a aceptar las nuevas reglas del control comunitario. Además, existían intereses creados del 15% de los contratistas mayoristas, que percibían más del 80% de los ingresos. El traspaso oficial en diciembre 2008 dio lugar a un conflicto violento entre empresa comunitaria y ex-contratistas, con agresiones, secuestros y amenazas. El conflicto sirvió para encubrir la retirada de *Newmont* de la zona y soslayar su responsabilidad social y ambiental.

Fuente: PetroPress, n° 15 (junio 2009), pp. 18-20.

- ⑧ ¿Qué dicen los cables diplomáticos de *Wikileaks* acerca de la minería? Insinúan que las **embajadas juegan un papel subsidiario** al servicio de las transnacionales mineras. Esa práctica se ha constatado en las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Suiza y Sudáfrica en Perú (véase recuadro 16), pero no es un fenómeno exclusivo de los países de inspiración neoliberal. La Embajada Francesa en La Paz (Bolivia) ha tenido un papel muy activo en la defensa de los intereses de la minera *Bolloré* para entrar en el negocio del litio. Se da la circunstancia de que el dueño de la corporación industrial,

Recuadro 16

Mineras, embajadas y cables de Wikileaks en Perú

Los cables de Wikileaks han revelado la existencia de reuniones entre representantes de las principales mineras que operan en Perú (Antamina, *Barrick*, *BHP Billiton*, Quellaveco y Yanacocha) con los embajadores de EE.UU., Reino Unido, Canadá, Suiza y Sudáfrica. Los ejecutivos mineros plantearon exigir al gobierno peruano que rotase a los maestros rurales incómodos, y hacer lo propio con la Iglesia Católica para cambiar a los obispos que apoyaban a las comunidades. Además, atribuyeron a las ONG la culpa de todo. Ante estas peticiones, los diplomáticos se mostraron dispuestos a reunirse con el gobierno, la Iglesia y líderes de partidos políticos.

Fuente: CooperAcción, 9 febrero 2011.

Vincent Bolloré, es amigo íntimo del presidente del gobierno francés Sarkozy.

9 Ex-presidentes al servicio del negocio minero.

Algunos políticos y ex-presidentes de gobierno no tienen dilema ético alguno en trabajar para las transnacionales mineras. El caso más llamativo es el del ex-presidente español Aznar, contratado por la canadiense *Barrick Gold* para prestar servicios de diplomacia en América Latina (véase recuadro 17). Pero no es un caso aislado. La Fundación Clinton trabaja codo con codo con las mineras de Cajamarca para impulsar programas sociales. Así, por ejemplo, firmó un convenio interinstitucional con *Gold Fields La Cima* y la Asociación Los Andes de Cajamarca-ALAC (ONG afín a Yanacocha) para dotar con fondos al Programa de Alivio a la Pobreza en Cajamarca. Este programa puso en marcha en 2009 un centro de servicios económicos dirigido a empresas y productores, con el fin de promover negocios con potencial económico y dinamizar la economía regional (*Panorama Camarquino*, 14 julio 2009).

- 10 **Diplomacia de las materias primas.** Así se ha bautizado esta política en el seno de la UE. Otras potencias industriales como EE.UU. y Japón reconocieron hace tiempo su dependencia crítica del abastecimiento de materias primas y adoptaron estrategias de acumulación. Pero Europa se durmió en los laureles. En un interesante artículo, *Saca el metal y corre*, la activista ambiental Guadalupe Rodríguez (2011) analiza la nueva Estrategia Europea de Materias Primas No Energéticas (2008) orientada a sostener su competitividad. Consiste en exigir a los países del Sur que eliminen las restricciones al comercio de materias primas. ¿Cómo? A través de incentivos. Acuerdos de asociación y ayuda al desarrollo a cambio del acceso a las materias primas. Y transferencia de tecnología de extracción a cambio de facilitar las negociaciones con mineras europeas.

Recuadro 17

Aznar, embajador de oro

La *Barrick Gold* es la mayor corporación minera del mundo en extracción de oro a cielo abierto: posee 25 minas operativas y proyectos en 15 países. La minera ha recibido varias denuncias de violación de derechos humanos. En julio de 2011, Greenpeace publicó un informe: "Barrick: minería responsable de destruir los glaciares" (<http://www.greenpeace.org/argentina/es/informes/barrick-responsable/>). Por este motivo, el Fondo de Pensiones Noruego, el segundo mayor fondo soberano del mundo, ha incluido a la minera canadiense en su lista negra.

Ello no ha sido problema para que Aznar haya entrado en su consejo asesor. Ya en 2008 el ex-presidente español asistió al VIII Simposium Internacional del Oro en Lima. Pero en 2011 dio un paso adelante. El 7 de julio, medios argentinos revelaron que la presidenta Cristina Kichner le recibió como representante de Barrick. Su nuevo empleo, sin embargo, no figura en la página web de la minera, aunque ha sido confirmado por la Fundación FAES. Lo que busca *Barrick Gold* en Aznar son sus lazos con América Latina. Un embajador de oro para seguir lucrando, sin cuidado de violar el medio ambiente y los derechos humanos.

Fuente: El Mundo y El País, 16 septiembre 2011.

¿Son las transnacionales mineras actores comprometidos con el desarrollo? Los hechos apuntan tozudamente en la dirección contraria. La transnacionalización de la minería implica una mayor concentración de la riqueza y una evidente pérdida de soberanía nacional. Las corporaciones mineras no solamente socavan la institucionalidad de gobiernos locales y regionales; tampoco tienen pudor en arremeter contra los gobiernos nacionales. El caso de la *DOE Run* en Perú resulta muy ilustrativo. La minera norteamericana no sólo ha incumplido sus obligaciones ambientales sino que, además, ha recurrido al TLC firmado con EE.UU. en 1996 para demandar una indemnización de \$Us 800 millones al Estado peruano (véase recuadro 18).

“La megaminería se funda en una provocativa particularidad: la autoinhibición del propio Estado nacional para disponer de su territorio, de su soberanía. El mapa de esta megaminería corresponde entonces al de una supranación, cuyo territorio (...) ha instituido, desde el cuerpo normativo de los 90, la figura del superficiario ante el beneficiario del subsuelo. Así, el Estado no puede ser sino socio de la desapropiación, en una posición asimétrica de cesión, no sólo de territorio sino de recursos y aparatos estatales, según leyes producidas a escala de los intereses corporativos”.

(Antonelli, 2009:52)

Recuadro 18

El caso DOE RUN en La Oroya: Cronología de un golpe a la soberanía y dignidad del Perú

La privatización

- 1996 Antes de la privatización, la empresa estatal Centromin que gestionó el Complejo Metalúrgico de La Oroya (Junín) durante 1974-97 presentó el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) ante el Ministerio de Energía y Minas (MEM).
- 1997 Al momento de la privatización, la empresa mexicana Peñoles ganó la licitación internacional por una suma de \$Us 180 millones, pero el clima de protestas sociales la hizo desistir meses después de la adjudicación.
- 1997 Doe Run adquirió finalmente el complejo por \$Us 121,5 millones y un compromiso de inversión de \$Us 120 millones para modernizar sus instalaciones. La transnacional se comprometió a implementar el PAMA en 10 años y programas sociales en La Oroya.

¿Quién es Doe Run Perú?

Doe Run Perú SRL (DRP) es una subsidiaria de *Doe Run Resources Corporation*, con sede en Missouri (EE.UU.). A su vez, la empresa forma parte de *Renco Group*, un conglomerado de 20 empresas. El dueño es el multimillonario Ira Leon Rennert, que posee el 98% de las acciones del grupo. El industrial cuenta con un largo y documentado historial de abusos ambientales en EE.UU.

Cuatro modificaciones al PAMA

- Dic. 1998 DRP solicitó una primera modificación al PAMA para postergar las principales inversiones en tratamiento de emisiones y calidad del aire hasta 2004.
- Abr. 2001 DRP solicitó una segunda modificación al PAMA.
- Oct. 2002 DRP solicitó una tercera modificación al PAMA.

- Mar. 2004 DRP solicitó una nueva modificación al PAMA para extender el plazo del PAMA a 15 años (hasta 2011), que fue declarada improcedente.
- 2005 Un estudio realizado por la Universidad de Saint Louis (Missouri) reveló que el 97% de los niños de La Oroya presentaba niveles tóxicos de plomo en sangre (además de otros metales pesados como arsénico, cadmio y antimonio).
- Abr. 2006 El Tratado de Libre Comercio Perú-EE.UU. fue firmado el 12 abril de 2006 y ratificado por el Congreso peruano el 28 de junio de ese mismo año. La Cámara de Representantes de EE.UU. lo ratificó en noviembre 2007, y el Senado en diciembre.
- May. 2006 Vencido el plazo para cumplir el PAMA en enero, DRP logró un aplazamiento por dos años y 10 meses (hasta octubre de 2009). La ampliación tenía el carácter de improrrogable y no admitía excepciones.

Incumplimiento del PAMA

- Oct. 2006 La Oroya es incluida por el Instituto Blacksmith en la lista de 10 ciudades más contaminadas del mundo, encabezada por la ciudad ucraniana de Chernobyl.
- Dic. 2008 A pocos meses de vencerse nuevamente el plazo, la empresa paralizó las inversiones de remediación ambiental. En los siguientes meses, reportó problemas financieros, argumentando que la crisis financiera mundial había perjudicado sus ingresos.
- Jun. 2009 Doe Run paralizó actividades en la Oroya, y poco después acudió al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) para declararse en reestructuración e insolvencia. Sin embargo, la empresa obtuvo \$Us 180 millones en el periodo 2004-08.
- Sep. 2009 Creada a instancias del presidente García, la Comisión Multisectorial (conformada por ejecutivo, gobierno regional de Junín y trabajadores) decidió prorrogar por un plazo de 20 meses las obligaciones ambientales de DRP (si bien el anterior aplazamiento tenía el carácter de improrrogable). DRP no se quedó satisfecha. A través de un comunicado fechado el 22 de septiembre, indicó que requería un plazo de 36 meses.
- Oct. 2009 El Congreso peruano aprobó una ley que concede una prórroga de 30 meses a DRP.

Demanda contra el Estado peruano

- Jun. 2010 Más de 3.500 trabajadores iniciaron un paro indefinido, reclamando el inicio de las operaciones de DRP. El 11 de junio el MEM emitió un decreto para reducir el aporte mensual de DRP al fideicomiso para la implementación del PAMA (del 100% al 20%).
- Jun. 2010 DRP impone condiciones para reanudar operaciones, desde la impunidad por juicios hasta el fraccionamiento de deudas tributarias y la exoneración de multas ambientales.
- Ene 2011 Doe Run anunció un arbitraje internacional ante el CIADI contra el Estado peruano, amparado en el capítulo de inversiones del TLC firmado entre Perú y EE.UU. Lejos de asumir su responsabilidad, DRP reclama una indemnización de \$Us 800 millones

Fuente: Cooperación, Boletín Actualidad Minera, n° 136, 147 y 148 (2010 y 2011), notas de prensa; y Gómez y Gamonal (2010) (www.cooperación.org); y Mamani Mayta (2010).

2.5 La masa gris: el discurso de la megaminería como instrumento de “desarrollo sostenible”

Si los noventa se caracterizaron por la desregulación neoliberal, los esfuerzos de la siguiente década se dirigieron a promover el **cambio cultural** que lo hiciera posible. Son los años de construcción del discurso de la “minería responsable y sostenible” (incluso minería “ecológica” y oro “verde”), producido por redes globales que financian las mayores corporaciones minero-metalíferas del planeta. Se trataba de *inventar la nueva minería*, capaz de convertir los problemas y daños (constatados y reportados) de las explotaciones a gran escala en “oportunidades” y “desafíos”. En resumen, la minería como “palanca de cambio” al alcance de las poblaciones locales para accionar su desarrollo.

Podemos situar en 1999 las actas fundacionales de esta nueva estrategia de comunicación. Ese año, bajo la Iniciativa Global para la Minería, nueve de las mayores mineras transnacionales encargaron al Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo (IIED, por sus siglas en inglés) el **Proyecto Mining, Minerals & Sustainable Development (MMSD)**.²³ Tres años después, en 2002, el Instituto publicó el reporte final bajo el título “Abriendo Brechas”, que sentaba las bases de la nueva estrategia:

▶ Acto de contrición y propósito de enmienda

El informe reconoce los antecedentes negros de la megaminería en el pasado, tales como la financiación de guerrillas en países con yacimientos, la corrupción política o la financiación de cargos políticos, entre otras lindezas. Y las mineras globales reconocieron, al más alto nivel, que el sector afrontaba significativos problemas de reputación para sostener beneficios, expandir sus acciones y mantener la confianza de los inversores. En su propia autofundación, la minería transnacional anunciaba, por tanto, que hacía propósito de enmienda. Este explícito “realineamiento” sería su más poderosa coartada para desautorizar resistencias y conflictos. Por iniciativa propia, la industria había emprendido el camino de la “sostenibilidad”.

▶ Redención en el futuro

Otro pilar de la estrategia se basa en apelar al mito de los *avances tecnológicos* como solución a todos los problemas. Existen “vacíos” a superar, pero el futuro hará responsable a la minería. Los avances científicos y tecnológicos en marcha mitigarán los problemas ambientales con la cooperación de todos los actores.

▶ Diálogo y concertación

La megaminería más poderosa del mundo se autodefine como “lugar de acuerdo mediante la interlocución”. El nuevo enfoque apuesta por un modelo democrático de diálogo y concertación entre todos los actores, como medio para superar “esquemas confrontativos y aislacionistas” (lo que revela la concepción negativa que la estrategia minera tiene de los conflictos sociales). Además, el sector invoca un “cambio cultural” para construir el diálogo y el consenso, pero se olvida de las profundas asimetrías que rigen las relaciones entre empresas y comunidades (no es un diálogo entre iguales).

Una vez legitimada la minería como “factor de desarrollo”, se invierte el orden de los factores. Se hace equivaler entonces la minería sustentable a la **sostenibilidad del negocio minero**. Y más bien el informe se pregunta qué puede hacer la minería por una errática región suramericana que sufre crisis financieras recurrentes y que no ha podido encontrar vías de desarrollo. Mucho, puede hacer mucho. El informe del proyecto MMSD asienta la sostenibilidad de la industria minera en América latina sobre tres pilares: i) reservas mineras probadas de gran tamaño; ii) construcción de infraestructuras (el proyecto MMSD coincide en el tiempo con el arranque de la IIRSA (véase epígrafe 3.4); y iii) consolidación de la cultura del acuerdo.

²³ Entre los patrocinadores comerciales del proyecto MMSD, se hallaban Alcan, Alcoa, AngloAmerican, Anglovaal, Barrick Gold, BHP Billinton, Codelco, De Beers, Feepport-McMoran, Gold Fields, Lonmin, MIM Holdings, Mitsubishi Corporation, Mitsui Mining & Smelting, Newmont, Nippon Mining & Metals, Noranda, Normandy Mining, Norsk Hydro ASA, Pasmenco, Phelps Dodge, Placer Dome, Rio Tinto, Sibirsky Aluminium, Somincor, Sumitomo Metal Mining, Teck Cominco, Western Mining. Entre sus patrocinadores no comerciales se encontraban la Comisión Chilena del Cobre, Colorado School of Mines, Conservation International, DFID, gobierno del Reino Unido, Global Reporting Initiative, gobierno de Australia, gobierno de Canadá, ICEM, IUCN-The World Conservation Union, Mackay School of Mines, Pricewaterhouse Coopers, Fundación Rockefeller, PNUMA y Banco Mundial. El proyecto MMSD fue el paso preliminar para crear, en 2001, el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) para defender los intereses de las mineras líderes a nivel mundial.

El Informe *Abriendo Brechas:* El camelo de la “minería sostenible”

“Este proyecto no se pregunta por la sostenibilidad de la industria, sino por cómo la industria puede contribuir al desarrollo sostenible de regiones y países mineros, fue el planteamiento inicial del proceso y, a partir del mismo, se identificaron temas clave como el de la capacidad del sector minero de garantizar sostenibilidad a largo plazo, el rol que puede jugar la minería para impulsar el desarrollo de las economías nacionales, la forma como la minería puede mejorar su desempeño ambiental, entre muchos otros. Estos temas parten de reconocer que América del Sur es una importante región minera que, no obstante ello, lleva muchas décadas buscando encontrar la fórmula o la vía más adecuada para salir de la lista de países en vía de desarrollo y combatir eficazmente la pobreza, que atraviesa recurrentes crisis económicas-financieras y crisis políticas, que demanda medidas inmediatas a urgentes problemas y que quiere aprovechar el potencial de sus recursos humanos y naturales como instrumento efectivo de desarrollo”.

“No se trata de culpar exclusivamente al operador minero por los impactos que su actividad genera, ni al Estado por su imperiosa necesidad de promover la inversión para generar crecimiento, ni a la comunidad por sus reclamos orientados a mejorar sus condiciones de vida. La responsabilidad compartida obliga a construir entre todos los actores una visión de país, una visión de desarrollo y una visión de sostenibilidad (...) La sostenibilidad plantea retos complejos (...), los cuales deben ser dinamizados, no por fuerzas centrífugas que llevan al riesgo de visiones aislacionistas, sino por fuerzas centrípetas orientadas hacia un núcleo, el de la sostenibilidad del desarrollo”.

Fuente: Equipo MMSD América del Sur (2002), p. 12 y 13.

En el mundo contemporáneo, los discursos y prácticas significantes son producidas por redes transnacionales a partir de múltiples actores y escalas. La socióloga argentina Antonelli (2009:53) ha analizado el trasfondo de esta “**rosca**” **global minera**, capaz de tejer el nuevo discurso con la habilidad de Ariadna, la diosa griega. De su análisis se concluye el rol funcional que juegan determinadas consultoras y medios de comunicación, la cooptación de varias universidades públicas latinoamericanas, y el papel de comparsa que desempeñan el Estado y organizaciones internacionales como la CEPAL o el Banco Mundial. En definitiva, la connivencia de lo público y privado al servicio del negocio minero. Antonelli ha revelado, por ejemplo, como el Área de Recursos Naturales e Infraestructuras de la CEPAL ha jugado un papel clave en promover el discurso de la minería sustentable.²⁴

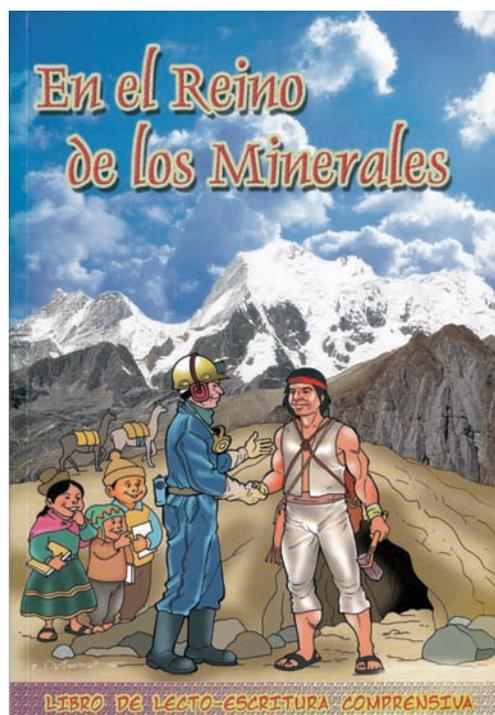
²⁴ La autora denuncia el papel jugado por el director del área. Eduardo Chaparro, como coordinador de concursos de minería responsable o mullidor de alianzas entre estados y empresas mineras. Véase Antonelli (2008), pp. 5-6.

A través de programas y medios de comunicación afines, la industria minera se lanzó a promover un “cambio cultural” de hondas proporciones. Sólo la victoria en el terreno cultural le permitiría afianzar su posición en el futuro. ¿En qué consiste ese cambio? En **modificar los imaginarios colectivos** de la población, influir en ellos con “eficacia simbólica” (esto es, con poder). Las narrativas del desarrollo sustentable requieren penetrar en el presente, colonizando representaciones sociales y modelando visiones prometedoras de futuro. Pero, como toda narrativa, tiene también que reinterpretar el pasado, fundar un linaje y apropiarse de los mitos de origen. O crearlos donde no existe pasado minero. El objetivo último de las nuevas narrativas es operar en el subconsciente colectivo y hacer un uso político de las pasiones: desatar *miedos* (pobreza, atraso, inadaptación al cambio, ser tachado de radical), y activar *deseos* y *promesas* (progreso, consumo, identidad nacional, modernidad, acuerdos).

Para ello no han escatimado recursos. Para ser eficaz la industria minera recurre a **múltiples instrumentos**. Utilizan espacios de interacción social como talleres, mesas de diálogo, foros de prevención de conflictos, consultas comunitarias, ONG locales y asociaciones público-privadas. Hacen también uso de medios gráficos y virtuales, informes de mediadores, consultores y grupos de trabajo, cartillas informativas, manuales

de “buenas prácticas”, publicidad empresarial y estatal, incluso material educativo de uso escolar. A este respecto, la minera Yanacocha ha editado un material escolar en Cajamarca para naturalizar la minería en la vida cotidiana de la población (Antonelli, 2009:78). Y la minera *Cory-Dup Adesur* financió en 2006 un material de lecto-escritura para jóvenes que reescribe la historia del Perú a través de su vínculo con la minería (véase imagen). Esta avalancha de actividades pro-mineras se produce en condiciones de **profunda asimetría** con las propuestas reflexivas y alternativas que plantean los movimientos sociales. Es una lucha desigual de símbolos, narrativas e imaginarios sobre el sentido último del desarrollo y el modelo de sociedad.

El discurso de la minería sustentable ha permeado en la propia **Unión Europea** (Rodríguez, 2011). En 2008, la Comisión elaboró una “Guía de Compatibilidad Natura 2000 y la Industria Extractiva No Energética”, para hacer concesiones a la industria que se quejaba del difícil acceso a la tierra y la extracción de materias primas en las áreas protegidas de la Red Natura 2000. La guía permite la explotación minera “sostenible” haciendo el análisis de impactos caso por caso. La financiación de proyectos mineros por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha motivado la preocupación del parlamento (véase recuadro 20).



Fuente: Moly-Cop Adesur (2006), tapa de publicación.

Recuadro 20

Carta Abierta de 50 Europarlamentarios

“Los beneficios para el desarrollo de proyectos mineros son muy controvertidos”, declara el europarlamentario socialdemócrata holandés Thijs Berman, en relación a la Carta Abierta presentada por 50 miembros del Parlamento Europeo en mayo de 2011 ante la Presidencia de la Comisión y el propio Parlamento. Piden una moratoria a la financiación pública europea de proyectos mineros. El Banco Europeo de Inversiones destina sus fondos de cooperación al desarrollo a financiar este tipo de proyectos. Y concluyen, “rara vez se beneficia el país productor y su población de la minería”.

Fuente: Rodríguez (2011).

2.6 El rol subordinado de las mujeres en la megaminería a cielo abierto

El papel de las mujeres en la nueva megaminería a cielo abierto no ha sido aún analizado con toda la profundidad necesaria. Los estudios disponibles se han centrado, sobre todo, en explorar los **impactos diferenciados** que la nueva minería ejerce en las mujeres. Abordan los impactos desde una perspectiva integral, aunque con fuerte énfasis en salud:

- * El aspecto más estudiado ha sido la salud. Los estudios han confirmado las peores hipótesis, como la presencia de plomo en sangre en La Oroya (Pajuelo, 2005), la existencia de daños genotóxicos en madres y niños en Oruro (Ascarrunz, 2009), o las terribles secuelas que produjo el derrame de mercurio entre la mujeres de Choropampa (Cajamarca) (Arana, 2005 y 2010).

- * Otros estudios se han centrado en analizar el estrecho vínculo existente entre minería y violencia sexual (Bastidas, 2009).
- * Además, la expansión de la minería en zonas rurales de la cordillera andina pone en riesgo el rol productivo de las mujeres. De acuerdo a la investigadora boliviana López Canelas (2011), la actividad minera afecta la ganadería y, por tanto, la actividad productiva tradicional de las mujeres (debido a la disminución de las tierras de pastoreo, y el aumento de enfermedades del ganado).
- * El estudio de Julia Cuadros sobre el impacto de las megaminería en Las Bambas y Tintaya (Apurímac y Cusco) ha demostrado las barreras que enfrentan las mujeres en regiones mineras para participar en política, las resistencias de los varones y los avances logrados en visibilizar agendas de mujeres.

Al igual que otros sectores laborales, la megaminería ofrece un **acceso desigual al trabajo**. Los empleos directos de la minera suelen ser para varones. Algunas mineras como Yanacocha en Cajamarca han hecho una campaña publicitaria sobre las mujeres que manejaban camiones *Haulpack*, pero se trata de esfuerzos de cara a la galería. En general, la oferta laboral para las mujeres se centra en servicios no cualificados y en el sector del comercio informal. En Colombia, la nueva minería a cielo abierto reserva a las mujeres trabajos de “pare-siga”, es decir, trabajos temporales no cualificados y mal pagados como el de ordenar el tráfico carre-

tero con walki-talki y letreros que indican “pare” o “siga”. Se consolida así la división del trabajo entre hombres y mujeres (tanto en brecha de salarios como en la desvalorización del trabajo de la mujer). Por si fuera poco, la economista peruana Julia Cuadros ha investigado los efectos perjudiciales que comportan los programas de empleo temporal para las mujeres (véase recuadro 21). En definitiva, la minería aumenta la inseguridad económica de las mujeres. Al poner en riesgo los medios tradicionales de vida ligados a la agricultura, las mujeres están en constante preocupación por su porvenir y el de sus hijos/as, lo que termina quebrando su salud. Con todo, los estudios centrados exclusivamente en analizar los impactos diferenciados entraña el riesgo de “victimizar” a las mujeres (ofreciendo, además, una visión sesgada de la realidad).

Recuadro 21

Programa de Empleo Temporal de *Xtrata* en Las Bambas

El programa de empleo temporal contempla que cada familia trabaje al menos 60 días/año, con un jornal de 30 soles (1.800 soles anuales). La empresa asigna un número de jornales por comunidad. La asamblea comunal acuerda las familias que brindarán sus servicios, y cada familia reparte el empleo en base a criterios prácticos. Si el marido ya tiene trabajo, es la mujer la que trabaja para la empresa. El programa comporta perjuicios para las mujeres:

- Aumento de carga de trabajo para las mujeres
- Cargas adicionales para niños y niñas (el trabajo temporal supone transferencia de tareas de pastoreo, hilado y tejido a menores, las tareas domésticas recaen en las niñas, generando problemas de ausentismo escolar)
- Tensiones entre hombres y mujeres por el acceso al programa de empleo temporal
- Aumento del índice de alcoholismo (debido a la inyección de recursos económicos)

Fuente: Cuadros (2010), p. 47 y 50-53.

CAPÍTULO 3

Los imaginarios que sostienen la expansión minera

3.1 El imaginario de la *pobreza* como puerta de entrada de las transnacionales y motor de la expansión minera

Cuenta la leyenda que cuando el explorador italiano Antonio Raimondi (1824-1890) llegó al Perú a mitad del siglo XIX, y vislumbró tanta abundancia rodeada de miseria, expresó que el país era un **“mendigo sentado en una banca de oro”** para resumir así la situación paradójica de los pueblos andinos.²⁵ Desde entonces, la metáfora se ha convertido en la imagen más socorrida para justificar la expansión minera. El argumento ha sido usado por políticos de muy distinto signo y ámbito competencial, desde el presidente Correa en Ecuador hasta alcaldes distritales o líderes evangelistas en Perú:

>>> RAFAEL CORREA, *presidente de Ecuador*

Cuando en enero de 2009, el presidente ecuatoriano se dispuso a participar en el Foro Social Mundial, celebrado en Belem (Brasil), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) exhortó al Foro a declarar persona non grata al presidente de Ecuador y hacer público un mensaje de repudio a las violaciones de derechos indígenas cometidas por su gobierno. A su llegada, Correa declaró que el rechazo indígena se debía a “un infantilismo ambiental” que quería someter al país a vivir “sentado como mendigo sobre un saco de riqueza”. (*El Tiempo*, 27 enero 2009)

>>> ISMAEL BECERRA, *alcalde distrital de Hualgayoc (Cajamarca, Perú)*

“En Hualgayoc aunque estamos sentados en el oro y la plata existe mucha pobreza (...) El pueblo no cuenta con centro de salud, pero sí con un presupuesto para construirlo en la actual gestión: 4 millones de soles, de los que 1,1 son aporte de la alcaldía y 2,35 de la minera *Gold Fields*”. (*Panorama Cajamarquino*, 27 marzo 2011).

>>> ALEJANDRO QUISPE, *líder evangelista en Porcón (Cajamarca, Perú)*

“Dios ha puesto esos minerales ahí para que los explotemos”, así justificó el líder evangelista y también administrador de la Cooperativa “Granja Porcón” la firma de un acuerdo con la Minera Yanacocha para vender sus tierras y construir una infraestruc-

²⁵ Se trata de una atribución popular. Los investigadores indican que la famosa frase no nace de la pluma de Raimondi, ni de ningún otro escritor de la época. No figura en los textos que dejó escritos el explorador.

tura de piscigranja. Su argumentación parece una versión actualizada de la parábola cristiana de los talentos.

“No hay peor contaminación que la pobreza”. Con esta célebre frase la presidenta india Indira Gandhi (1917-1984) conmocionó al mundo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo (1972). En los últimos años, se ha convertido en otro de los axiomas predilectos que repiten los funcionarios y operadores del discurso hegemónico de la megaminería. Puede que la minería tenga daños colaterales, conceden, pero no hay que olvidar: es peor morir de hambre.

>>> ABEL NONINO, *Subsecretario de Minería del gobierno provincial de la Rioja (Argentina)* Andalgalá. Catamarca. Encuentro de empresas mineras y administraciones públicas. Septiembre 2006. En un encendido discurso, Nonino defendió la actividad minera y advirtió que la producción hortofrutícola “libera al ambiente más cianuro por año que el que se utiliza en varias etapas de la minería”. “Cuando veo que se ataca injustamente la actividad minera desde el punto de vista ambiental no puedo de dejar mencionar la erosión severa del 50% de los suelos fértiles de nuestro país por la agricultura intensiva, que no escriban una letra para la protección del 13% de los bosques nativos que quedan en nuestro territorio respecto a los que existían en 1920, que se olviden del problema mientras mastican las últimas merluzas que quedan de nuestro mar territorial”, sostuvo el funcionario riojano. Y pronunció unas palabras enérgicas para concluir: “Minería es desarrollo y trabajo. Estancamiento, ignorancia y mala intención es pobreza, la peor de las contaminaciones” (*Riojavirtual*, 30 septiembre 2006).

El **discurso oficial de la pobreza** ha generado condiciones para la expansión minera y el ingreso del capital transnacional en las áreas rurales andinas. Se trata de un discurso perverso, ya que coloca a la población local en un papel pasivo de víctimas o “pedilones”. La pobreza permite entonces adoptar esquemas asistencialistas (ya sea

Recuadro 22

“Satisfacción de la idiosincrasia pedilona”

“Los pedidos son parte de la idiosincrasia de la población: por eso las empresas deben tener desde el primer día fondos para responder a ellos, que no representan mucho económicamente”.

“En todo lugar, la gente pide apoyo económico: si aparece una empresa con el anuncio de una gran inversión, es lógico que esas demandas se dirijan a ella y que incluso se amplíen. Últimamente, al menos quienes desean participar en los gobiernos locales entienden que, para hacer un pedido, requieren un expediente técnico, pero falta mucho para que esto se convierta en moneda corriente. Las empresas tienen que saber que esa lógica paternalista no va a cambiar sino en el muy largo plazo”.

“Signos de opulencia”

“El representante de una empresa en una localidad no puede ofender a la gente exhibiendo su capacidad de gasto u opulencia”.

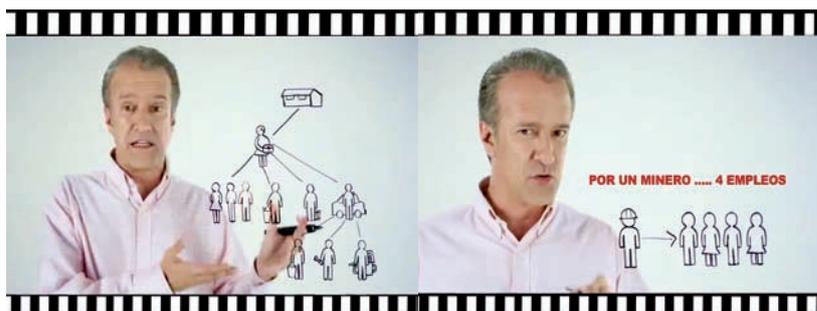
“Que un ejecutivo vaya a comprar gasolina y pague con un billete de 200 soles, por ejemplo, ofende a las comunidades. El malestar nace desde el momento en que llega ese primer explorador, si no tiene la cortesía de explicar quién es, qué es lo que va a hacer, por dónde va a andar. En una sociedad que ha sido marcada por el terrorismo, desde el primer momento hay que tener cortesía y buenas formas. Si no las asperezas, brotan a cada momento”.

Fuente: Barnechea y Tumi (2011), p. 361.

con comunidades o gobiernos locales), lo que genera patrones clientelares y efectos de desarticulación social a mediano plazo. Financiado por la *Southern Copper*, el libro pro-minero *El Síndrome del Rescate* resulta un altavoz de estos puntos de vista. En su capítulo final, los autores recomiendan expresamente a la industria lidiar con la “cultura pedilona” (véase recuadro 22). Por otro lado, la falta de satisfacción de necesidades básicas y la ausencia del Estado en el área rural es una oportunidad de oro para las empresas mineras: financian obras sociales y venden así nuevamente su discurso de lucha contra la pobreza.

Tras la victoria de Humala en las elecciones presidenciales de junio 2011, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú (SNMPE) lanzó varios spots publicita-

rios televisivos en horario de máxima audiencia. En uno de ellos, el conocido empresario limeño Nano Guerra se esforzaba, mediante un despliegue de dibujos y flechas en una pizarra de cristal, en explicar las bondades del efecto de encadenamiento hacia abajo de la actividad minera: “Por cada empleo que da la minería, al toque se crean cuatro empleos indirectos en su propia región. Con más inversiones mineras, más grande será esta cadena”. ¿Por qué tanta insistencia? ¿Es realmente la minería a gran escala una **actividad generadora de empleo local**? La realidad es otra:



El spot del Nano Guerra. Fuente: <http://www.youtube.com/user/SNMPE>

- La megaminería es poco intensiva en recursos humanos
Genera pocos empleos pero bien pagados. Se ha alentado así un fenómeno de demostración social: los que trabajan para la mina acceden a un nuevo estatus económico y social (reconocido y envidiado por el resto de la población).
- Los programas de empleo temporal generan relaciones clientelares
Las mineras aprovechan la escasez de trabajo para impulsar sus programas de empleo temporal. Estos programas crean relaciones clientelares: a través de ellos los comunarios se convierten en rehenes de las empresas mineras. Son, además, germen de futuros conflictos, al no verse cumplidas las expectativas laborales previstas.
- El empleo es acaparado por varones
La tercera cuestión es para quiénes: los pocos empleos directos son para varones, y las mujeres acceden preferentemente a empleos no cualificados y mal pagados (véase epígrafe 2.6).

El imaginario de la pobreza ha tomado **derroteros distintos en la región**, en los países que históricamente adoptaron políticas neoliberales —Perú y Colombia— y los que optaron por políticas de izquierdas —Ecuador y Bolivia—. Pero el imaginario campa a sus anchas por el continente:

En PERÚ, el discurso de la lucha contra la pobreza *ha sido fuertemente apropiado por sectores de la derecha*, que hacen de la inversión minera extranjera la principal estrategia de desarrollo para las zonas rurales atrasadas. Este planteamiento recupera el modelo clásico del crecimiento económico como motor del desarrollo, sin reparar en aspectos de redistribución de la riqueza o equidad social.

En BOLIVIA, el discurso oficial de la pobreza ha sido sustituido por otro de *dignidad y soberanía* frente a la inversión extranjera. Esta política motivó una reforma tributaria que aumentó la presión fiscal al sector petrolero. Desde 2005, la aplicación del Impuesto de Hidrocarburos (IDH) a las transnacionales del sector ha multiplicado por cinco

la renta petrolera disponible para hacer políticas sociales. Y el gobierno del MAS impulsó una decidida política de bonos sociales, que mejoró sustancialmente los indicadores de inclusión social en el país. Mejoras que han quedado también ligadas a la captación de rentas extractivas, lo que ha generado nuevas dependencias. Dicho de otro modo, los esfuerzos para erradicar la pobreza encuentran en las industrias extractivas su piedra angular. “¡IDH para la minería!”, se ha convertido en una de las proclamas más comunes entre las organizaciones campesinas e indígenas para subir la tributación también al sector minero. “Ya que se llevan, que se quede algo”, resume en un frase el pensamiento popular. El discurso de la pobreza podría haber mudado de piel en Bolivia a otro nuevo imaginario: *la renta extractiva*.



Grafiti en La Paz. Fotografía:
Giovana Ferrufino

¿Y cuándo subes? Ésa es la pregunta habitual entre los profesionales mineros de Cajamarca para saber qué día de la semana se desplazan al campamento minero. Pero la expresión tiene también una connotación de ascenso social. La minería transnacional ofrece pocos empleos que, por su alta cualificación, están muy bien retribuidos. De este modo, **la minería ha creado un nuevo estatus social** en muchas ciudades intermedias del país andino. La proliferación de nuevos ricos no es sino la confirmación de la penetración de esas aspiraciones. Los sectores emergentes ejercen un poderoso efecto demostrativo que retroalimenta el imaginario al resto de la población.

Tan así que el *boom* minero de los últimos años ha permeado también en las clases populares. Un estudio sociológico realizado en la Provincia Caylloma (Arequipa) reveló que la minería se convirtió en la principal aspiración de los jóvenes con educación superior universitaria (Rivas, 2009:65). Y las expectativas de los padres de sectores populares pasaban porque sus hijos trabajasen de chofer para la mina. La “riqueza” minera se ha trasladado también al sector de la minería informal. El alza de la cotización de los minerales ha atraído a esta actividad a un número creciente de campesinos. La generación de ingresos inmediatos se traduce a menudo en vagonetas, autos con lunas tintadas, lo que reproduce el imaginario de que la minería soluciona la pobreza. En Bolivia, algunos socios de las cooperativas mineras han amasado fortunas en los últimos 10 años, y han disparado sus niveles de consumo e inversiones suntuarias: compra de casas coloniales, adquisición de haciendas y viñas para vacacionar... ¿Son los nuevos “pequeños barones” de la minería? ¿Es su nueva riqueza un modo sostenible de vida?

Pobreza y acumulación de la riqueza: las dos caras inseparables de la ecuación minera. Porque lejos de resolverla, la minería acentúa la pobreza. Así lo parecen confirmar algunos estudios recientes. En un trabajo de investigación doctoral, Javier Arellano (2008), miembro del Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS) de la Universidad de Sussex, plantea si el resurgimiento minero en Perú no es sino la versión moderna de la vieja “maldición de los recursos naturales”. Y el recrudecimiento de conflictos sociales, su síntoma más patente, que opera en forma de círculo vicioso (Arellano, 2008:83):

“El intento de las empresas de calmar los conflictos y de mostrar a la población los beneficios que la mina puede proporcionar las lleva a interactuar con los actores locales de forma disfuncional: a) promoviendo clientelismo; b) presionando para que los gobiernos locales inviertan los recursos rápidamente, incluso si se reduce la calidad de la inversión; y c) sustituyendo al Estado en sus funciones. El resultado es un círculo vicioso en el que la frustración popular genera conflictos que, a su vez, refuerzan las condiciones para nuevos conflictos”.

En los últimos años, se han producido algunos **intentos de ruptura** con el imaginario de la pobreza, todavía tímidos. Un caso singular sería el de la Mesa de Concertación contra la Pobreza en Cajamarca. La asistencia de algunos miembros a un taller sobre buen vivir generó cuestionamientos sobre la trayectoria de la institución. Tras un año de discusiones internas, la mesa ha discutido ampliamente sobre la posibilidad de cambiarse el nombre y transformar su estrategia de incidencia en políticas públicas.

3.2 La construcción del imaginario de *modernidad* en Perú sobre el excedente minero

Cuando la Yanacocha (*Newmont*) dio a conocer su proyecto de explotación aurífera apeló a la **tecnología punta** para convencer a la sociedad cajamarquina: la lixiviación con cianuro incluía el uso de *geomembranas* para preservar las capas freáticas de la contaminación tóxica. Se trataba de una tecnología limpia ya que las membranas de plástico hacían resbalar la disolución de oro con cianuro hacia unas balsas impermeabilizadas. Totalmente inocuas. Una vez concluida la vida útil de explotación, la minera era capaz también de devolver las cosas a su estado natural. La técnica para recuperar el suelo y el paisaje consistía simplemente en colocar una capa de 40 centímetros de tierra vegetal y en sembrar pastos nativos. Y aquí no ha pasado nada. Por las dudas, mostró una maqueta de la mina a cielo abierto, recubierta de tersas praderas de pastos nativos. Veinte años de trasladar los cerros de un lado a otro (remover millones de metros cúbicos de tierra y lixiviar con toneladas de cianuro), y todo puede volver a ser igual. Veinte años no es nada, como dice el tango... ¿Y los casos de contaminación? ¿Los derrames “accidentales” de mercurio? ¿La desecación de afluentes? ¿La desaparición de ojos de agua? Para estos casos, la nueva “minería sostenible” también tiene una respuesta: la tecnología disponible no ha evolucionado lo suficiente, pero lo hará. La industria minera apela entonces al futuro como forma de conjurar todos los males.

También Manquiri (*Coeur d'Alene*) o la San Cristóbal (*Sumitomo*) en Bolivia apelaron a la tecnología “innovadora” para argumentar la improbabilidad de impactos ambientales. Esta magnificación de la tecnología es presentada como cualidad particular de cada operador, y un valor diferencial respecto de anteriores explotaciones (Madrid, 2011). Sin embargo, una mirada retrospectiva permite plantear otra pregunta: **¿Tecnología punta o enclaves tecnológicos aislados?** La historia evidencia que la minería andina se caracteriza por crear colosos tecnológicos que conviven con actores rurales dotados de tecnologías precarias. En un estudio sobre minería y crecimiento económico en Bolivia, los economistas Morales y Evia (1995:22) revelaron que la principal contribución de la minería a la economía nacional había sido a través de la generación de divisas. En cambio, los efectos de “derrame” (*spillovers*) tecnológicos de la minería a otros sectores eran muy limitados; y los procesos de industrialización hacia adelante (fundición, soldaduras, artesanías), muy modestos.

Pero también la minería se presenta como **símbolo de acceso a la modernidad**, apelando a un imaginario tan intangible como eficaz. No sólo permite luchar contra la pobreza material, la minería es además sostén de las aspiraciones de inserción en la globalización. Es el mecenazgo minero el que posibilita la transferencia de tecnologías a otros sectores (Antonelli, 2009: 67). Y es la llegada de corporaciones transnacionales la que puede diseminar los patrones de eficiencia y los valores de emprendedurismo asociados a la globalización. La minería aurífera recurre a mencionar la medicina como campo de exploración tecnológica para el bien de la humanidad, si bien este uso resulta mucho menor que el de joyería o reserva financiera. Los nuevos usos terapéuticos del oro: el futuro hecho presente. Este pensamiento modernizante se desprende, por ejemplo, de las palabras de Abel Nonino, ex-subsecretario de minería del gobierno riojano (norte de Argentina):

“Hoy la minería es, aparte de todo esto, economía, planificación, mercados, externalidades, chips, información, satélites, transportes de punta, perforadoras láser, nanotecnología (...)

²⁶ El capitalismo chacarero es una obvia referencia a quienes priorizan la agricultura en perjuicio de la minería, y niegan que ambas actividades puedan coexistir.

Y es cuidado ambiental, visualizado en parámetros de futuro, porque si no el futuro sólo seguirá contemplándose por la retaguardia. Pobre del país que busque para el beneficio económico y cultural de sus ciudadanos el mantenimiento de sus economías primarias, injustas y con concentración del poder de unos pocos dentro de un capitalismo chacarero”.²⁶ (Riojavirtual, 30 septiembre 2006)

Este imaginario se ha reforzado con la tesis del **milagro económico** que vive la economía peruana, capaz de sortear la grave crisis financiera y económica (2008-11) con tasas sostenidas de crecimiento del PIB por encima del 5%. Y todo ello gracias a la inversión extranjera en la minería, sector que ha escudado al país de la crisis mundial. Y no se trataría solamente de bienestar material, sino que el *boom* económico sería reflejo de un éxito colectivo como sociedad. ¿Cómo se manifiesta? En una desorbitada capacidad de consumo de los sectores emergentes urbanos, que experimentan en la fiesta del consumo la vía privilegiada de inserción a la modernidad. Ese modelo se ha trasladado a ciudades intermedias como Cajamarca mediante la apertura de un moderno centro comercial que se ha convertido en el mayor artefacto de modernidad en la ciudad (véase recuadro).

El Quinde Shopping Plaza: territorio minero

Quinde significa colibrí en quechua. Fue el nombre escogido por el grupo promotor Ekimed, de capitales peruanos y españoles, para levantar el centro comercial más moderno de Cajamarca. El centro se inauguró en 2006 y el primer presidente de su directorio fue Eduardo Quiroz, un profesional vinculado al sector minero.* El centro comercial comparte el enfoque de desarrollo pregonado por ALAC (ONG afín a la minera Yanacocha). En un informe publicado por esta institución se propone al Quinde como ejemplo paradigmático del nuevo modelo de desarrollo minero (Guiulfo, 2006:21): “La minera Yanacocha ha traído como consecuencia positiva la creación de un número importante de empresas contratistas y proveedoras para la minería y, que a su vez, por el efecto multiplicador, ha producido también un desarrollo empresarial importante en las diferentes actividades del sector servicios, que se ha constituido en el segundo sector en importancia en contribuir al PIB de Cajamarca (...) Una muestra más de lo que está significando este desarrollo en Cajamarca, es la futura inauguración de *El Quinde Shopping Plaza*”.



Fotografía: muro de El Quinde en facebook

Los nuevos ricos de Cajamarca

La minería transnacional ofrece pocos empleos, pero bien pagados (por ser de alta cualificación). Tanto el sector profesional como el personal obrero perciben ingresos muy por encima del salario que cobra el cajamarquino promedio. La emergencia de esta nueva élite social propició un aumento del comercio y servicios, frecuencia de vuelos y precio de los alquileres, así como un auge de la venta de inmuebles, la construcción de barrios residenciales, la proliferación de *night clubs*, restaurantes de lujo, o la implantación de colegios exclusivos con educación bilingüe (en especial, el *Davy College*). En otras palabras, un tipo de modernidad ligada a la capacidad de consumo.

El Quinde: artefacto de modernidad

La propia gerencia se jacta de haber “convertido el centro comercial en gestor del ingreso de Cajamarca a la modernidad”. Como señala el folleto publicitario para celebrar su 5º aniversario, “la idea de crear un centro comercial en Cajamarca nació como una necesidad de insertar al pueblo cajamarquino en la vía de la modernidad y por ende, en la tendencia de la globalización” (Quinde, 2011). Salas de cine, ropa de moda, electrónica, telefonía y comunicación, regalos, bisutería y comida rápida constituyen su principal reclamo de consumo. Pero también El Quinde aglutina una oferta financiera con la mayor concentración de bancos de la ciudad. Pero el artefacto no sólo remite al consumo como un ritual de libertad individual y/o familiar. Además, trabaja también la dimensión de pertenencia colectiva al imaginario de la modernidad.

De hecho, el centro realiza eventos sociales como sorteos de autos, retransmisiones de partidos de fútbol en patio de comidas, ferias de jóvenes emprendedores, celebración del día de los derechos del niño o concursos infantiles. Del 15 al 21 de noviembre de 2011 tuvo lugar una exhibición de pinturas del alumnado del *Davy College*, “donde dieron a conocer su talento artístico”. No hace falta decir que se trata del colegio exclusivo donde las familias mineras hacen estudiar a sus hijos.

Una modernidad que se mira pero no se toca

Todo ese lujo ejerce un efecto demostrativo sobre la ciudad, por el que los cajamarquinos son invitados a mirar pero no se toca (Niño y Pérez, 2011:20): “Atrapados dentro de la ciudad tradicional, siendo bloqueados los acceso a los nuevos servicios e infraestructura que son erigidos como símbolo de lo que es ser moderno, los cajamarquinos tienden a adoptar una postura de observadores frente a lo moderno. La modernidad es algo que se observa, mas no se toca, pues ese derecho no les corresponde debido a que no cuentan con educación ni oportunidades adecuadas para lograr comprenderla (...) El mejor ejemplo de esto es el Centro Comercial El Quinde, el cual la mayoría de los habitantes de la ciudad ha visitado

Fuente: elaboración propia a partir de www.elquinde.com.pe, Guiulfo (2006), El Quinde (2011)

(*) Antes de ser alcalde provincial de Cajamarca, Eduardo Quiroz fue presidente del Directorio de *El Quinde Shopping Plaza* (2006-08). Ha trabajado en mineras como San Manuel, La Zanja, Algamarca o Titán, entre otras. Para la minera Yanacocha SAC, diseñó y ejecutó proyectos de generación de empleo masivo para mujeres.

Pero la aspiración de modernidad se ha construido en Perú también a partir de la negación del otro y sobre un **racismo estructural contra el mundo indígena**. Ya en los años 60, el escritor peruano José María Arguedas introdujo una transnacional minera en su novela *Todas las Sangres*. El Ingeniero Cabrejos Seminario da cuenta de la visión que la minera *Whister & Bozart* tiene de los indígenas de San Pedro, nombre ficticio de San Juan de Lucanas (sur de Ayacucho) (Arguedas, :xx):

“Son peligrosos porque forman parte de una banda por siglos segregada. Forman otro mundo. Hay que destruir primero esa banda. Esa... ¿cómo le diría? Esa nación metida dentro de otra (...) Debemos desintegrar esa baja masa que hemos mantenido por siglos unida. Agucemos primero, en quienes sea posible de esa gente, el estímulo de la ambición; unos contra otros; y luego el del predominio del individuo; que piquen el dulzor, o el veneno, de la ambición individual. Y los manejaremos y aprovecharemos. Y hay que quitarles esa lengua antigua en que tan bien, tan fulminantemente, se comunican, se enardecen, confabulan”.

En este sentido, pervive en Perú una concepción de los **indígenas como actores pre-modernos** y símbolo del atraso. El propio ex-presidente Alan García publicó durante su mandato un polémico artículo en prensa nacional, que aireaba su teoría del “perro del hortelano” aludiendo así a los nativos del país que se oponen al desarrollo: ni comen ni dejan comer. El propio García representa a la perfección a los *cholos* (mestizos) que “superaron” su condición indígena para insertarse en la modernidad urbana. Su artículo levantó ampollas y heridas profundas en amplios sectores campesinos e indígenas. Al final fue un *boomerang* que se volvió contra el presidente (véase recuadro 23).

Recuadro 23

El síndrome del perro del hortelano

“Así pues, hay muchos recursos sin uso que no son transables, que no reciben inversión y que no generan trabajo. Y todo ello por el tabú de ideologías superadas, por ociosidad, por indolencia o por la ley del perro del hortelano que reza: «Si no lo hago yo que no lo haga nadie» (...) Apenas la décima parte de los recursos mineros está en proceso de explotación, porque aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruía y los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las minas conviven con las ciudades sin que existan problemas y en todo caso eso depende de lo estricto que sea el Estado en la exigencia tecnológica a las empresas mineras y en negociar mayor participación económica y laboral para los departamentos donde estén las minas.”

Alan García. Presidente de la República
(*El Comercio*, 28 octubre 2007).

Contrapuntos al presidente

“Dice que nosotros no somos capaces, hasta él mismo ha dicho que somos los perros del hortelano y eso entristece mucho, él es una persona sabia terrenalmente, dice la palabra de Dios que la mucha sabiduría terrenal te convierte en animal diabólico, cómo va a permitir que nosotros somos una persona que no valemos nada”.

Telmo Alberca, Yanta (Piura)
(citado en FEPROCCA, 2010:172).

“Se nos ha presentado como los enemigos del desarrollo, como los que no dejamos progresar al país. Y por ello se han dado una serie de medidas con las que hoy se criminaliza el justo derecho a la protesta frente a los abusos del gobierno y las empresas”.

Magdiel Carrión, presidente CONA-CAMI (Nota prensa, 9 febrero 2011).

Además de la clase política, el mito del “indio atrasado” impregna también de lleno a la **clase empresarial**. En el libro pro-minero de entrevistas *El Síndrome del rescate*, Hans Flury, presidente de la minera *Southern Copper* expresa sin remilgos sus puntos de vista (Barnechea y Tumi, 2011:211): “Va a seguir habiendo conflictos de todas maneras, porque lamentablemente hemos aprendido que, a punta de golpes, atraemos al Estado y le sacamos algo. Y, de paso, a la minera la sacudimos para ver qué cae de su bolsillo (...) Los chilenos ahora tienen problemas con los mapuches, quienes obviamente quieren algo y también se han percatado de que haciendo bulla obtienen más”. Pero lo que es más elocuente. La publicación termina con un amplio listado de recomendaciones orientadas a mejorar la relación Empresa-Estado-Población. Algunas de ellas rozan el racismo cuando analizan el papel de las comunidades nativas:

*“Comunidades: una muerte lenta y anunciada
La estructura comunal está en proceso de inevitable descomposición,
que las industrias extractivas solo acelerarían*

En el Perú de hoy en día, las comunidades totalmente aisladas de Occidente son una minoría, básicamente quechua-hablante. En los lugares donde está la minería, la gran mayoría son comunidades tradicionales, que tal vez no siempre tienen una comprensión cabal de lo que pasa en el exterior, pero que están conectadas con él, especialmente a través de la radio (...) En contextos extractivos, la comunidad se activa para hacer frente común y negociar con la empresa, pero casi no funcionaría para nada más. Además de ser hasta cierto punto un rezago, todas las comunidades están en un proceso acelerado de privatización de tierras, por lo que el concepto mismo de comunidad estaría a punto de desaparecer”.

(Barnechea y Tumi, 2011:390-91)

En este contexto, las **mujeres rurales** están sometidas a un contundente fenómeno de **discriminación múltiple**. Experimentan el racismo y la discriminación por el hecho de ser mujeres, campesinas, pobres y expresarse en lenguas nativas (Cuadros, 2010:55). La minería moderna, además, trae otras consecuencias. En general, son ingenieros varones los portadores de este imaginario de la nueva minería con tecnología punta como acceso al desarrollo. Y se acaba imponiendo la idea del progreso como aceptación de un modelo foráneo. Llama la atención que los hombres siempre sean más permeables a aceptar lo que viene de fuera, y las mujeres sean consideradas “las depositarias de la cultura” y, por tanto, las más reacias a los valores modernos.

El imaginario de la modernidad ha sido **promovido de forma deliberada**, tanto por el gobierno como por las transnacionales mineras, que han destinado fuertes recursos para publicitar su mensaje de tecnología y progreso. Las campañas lanzadas por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), el principal *lobby* empresarial, constituyen un referente. “Perú, el país de la nueva minería”. “Con buena minería el Perú siempre gana”. “La minería que tú quieres existe”. Se trata de un imaginario que utilizan también las industrias afines a la minería. Por ejemplo, la transnacional *Volvo* vende sus camiones de tonelaje pesado en el Perú con el mensaje: “La minería está en nuestras venas” (véase fotografía). Es decir, la publicidad ha logrado crear una relación estrecha entre nueva minería e identidad nacional.



Foto: Miguel Castro

En este contexto, la **victoria de Humala** en junio 2011, aunque ajustada y con un alto grado de polarización social, puso encima de la mesa un cuestionamiento a los imaginarios hegemónicos del milagro económico y la modernidad. Esos ideales fueron superados, de hecho, por una demanda de políticas de equidad y redistribución social. Sin embargo, la reforma fiscal del sector minero realizada por el presidente Humala en septiembre de 2011 resultó mucho más tibia de lo anunciado y sembró dudas sobre su margen de maniobra para cambiar el modelo de desarrollo extractivista.

3.3 El imaginario de la *minería nacional* en Bolivia: ¿quimera o realidad?

“Explotación para los bolivianos con técnicos bolivianos”, así resume la FRUTCAS (Federación Regional Única de los Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud) su propuesta para industrializar el litio en el salar de Uyuni. “*La riqueza minera... ¡para todos los bolivianos!*”, proclama el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) en sus folletos publicitarios (véase imagen). Y lo que es más importante, la Nueva Constitución Política del Estado, aprobada en enero 2009, asienta el **ideal de soberanía** al otorgar el derecho de propiedad de los recursos mineralógicos al pueblo boliviano:

“Los recursos naturales son propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponde al Estado su administración en función del interés colectivo” (Art. 349, I)

Tras seis años de gestión de gobierno del MAS, la anhelada **recuperación de la minería pública sigue siendo una apuesta incierta**. Varios argumentos sostienen esta tesis:

²⁷ El ingenio de Huanuni operó en 2011 con un 40% de eficiencia productiva. De acuerdo al Ministerio de Minería y Metalurgia, el parámetro mínimo de eficiencia se sitúa en una tonelada de mineral al día por trabajador. El centro contaba con 4,800 trabajadores y sólo procesaba 1.200 Tn. diarias. En este sentido, la rentabilidad de Huanuni sólo se explica merced al alto precio del estaño. “De mantenerse la actual estructura de costos de Huanuni, una caída significativa en los precios del estaño nos podría dejar en una situación problemática”, reconoció Héctor Córdova, Viceministro de Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico. Por otro lado, Corocoro trabajó en 2011 sólo al 25% de su capacidad instalada debido a problemas sociales, de servicios e infraestructura. Véase La Razón, 21 agosto 2011.

- Nacionalizaciones puntuales

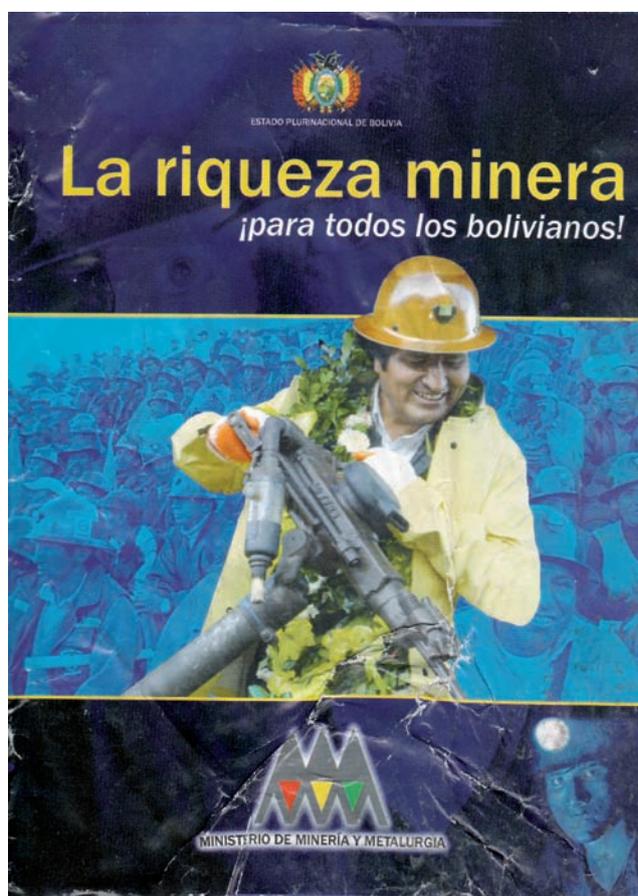
En sus inicios, el ejecutivo del MAS acometió medidas puntuales de “nacionalización”: el complejo minero de Huanuni (octubre 2006), y la compra de acciones de la metalúrgica de estaño Vinto (febrero 2007). En la actualidad ambas plantas orureñas operan en la órbita de la COMIBOL (Corporación Minera de Bolivia).

- Problemas de eficiencia empresarial

El alza de la cotización de los minerales en los últimos años ha dejado utilidades en las empresas públicas. De acuerdo al informe anual de gestión del MMM (2011), Huanuni ganó \$Us 41 millones en 2010, mientras que la utilidad neta de Vinto alcanzó Bs. 72 millones en 2010, lo que equivale a unas ganancias conjuntas de \$Us 50 millones. Sin embargo, los expertos han alertado de la baja eficiencia de estos centros mineros (en especial, de Huanuni, cuyos costes de producción resultan muy elevados).²⁷

- Disfunciones estructurales de COMIBOL

El reflote de la COMIBOL suscita amplios interrogantes, debido a la existencia de serias tramas burocráticas que bloquean su gestión. El CEDIB (2009) de Cochabamba ha alertado, además, del intento de liquidar la corporación estatal debi-



Fuente: publicidad institucional del MMM

do al “traspaso de sus pertenencias a privados y cooperativistas, lo que refuerza el sistema de concesiones”. Ese proceso de liquidación también estaría operando desde dentro, merced a la creación de nuevas empresas públicas con sedes en los departamentos productores fuera de la órbita de COMIBOL. Es el caso de la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM), encargada de explotar el yacimiento de hierro en Santa Cruz, o la fallida Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE), destinada a explotar el litio de Salar de Uyuni. Estas empresas departamentales reciben el traspaso de activos (libre de pasivos) y capital para inversiones productivas. La COMIBOL quedaría entonces como una empresa residual que preserva los pasivos, pero sin capacidad de desarrollar su capacidad operativa. Y su principal función se limitaría entonces a la firma de contratos de riesgo compartido con las transnacionales.

- Dimensión reducida

La minería estatal sigue siendo minoritaria en el panorama productivo nacional. Los datos son contundentes: según el anuario estadístico 2010 del Ministerio de Minería y Metalurgia, tan sólo un 7,8% de la producción minera tiene carácter estatal, frente al 59% de la gran minería y el 33,2% de la minería chica y cooperativista.

Con todo, hay que reconocerle al gobierno del MAS su tenacidad en levantar la **bandera de la industrialización de la minería**, y cumplir así la Nueva Constitución de 2009 que consagra la industrialización de los recursos naturales como “fin y función esencial del Estado” (art. 9). El programa del MAS se puede resumir en una frase: recuperar la minería pública para avanzar en la fundición de metales, y superar así el patrón de exportación de concentrados sin valor agregado. Para ello, el ejecutivo impulsó varios proyectos estratégicos: la planta de fundición de plomo y plata en Karachipampa (Potosí), en asocio con la canadiense *Atlas*; la siderúrgica del Mutún (Santa Cruz) en asocio con la india *Jindal Steel*; el complejo hidrometalúrgico de cobre en Corocoro (La Paz), en asocio con la coreana *Kores*; y, el más emblemático de todos ellos, la industrialización del litio en el Salar de Uyuni (Potosí), con capital estrictamente nacional.²⁸

Y pese a los esfuerzos, los avances han sido muy modestos hasta la fecha debido a múltiples factores. En general, la modalidad mixta de explotación basada en contratos de riesgo compartido con empresas transnacionales se ha revelado ardua y compleja. Razones técnicas explican las dificultades de arranque de los contratos, pero también la cantidad de intereses en juego (desconfianza entre las partes, problemas en la ejecución de boletas de garantía), como ha sido el caso del Mutún (*Jindal*) y Karachipampa (*Atlas*).²⁹ Así se explica que los datos oficiales sobre exportación minera revelen la pervivencia del modelo primario-exportador en Bolivia: el 78% de las exportaciones en 2010 fueron minerales, por tan solo un 22% de metales (MMM, 2011:38). El propio vicepresidente García Linera se ha visto en la obligación de dar explicaciones. En una entrevista televisiva concedida a la periodista Amalia Pando (agosto 2011), declaró que no “se puede hacer en cinco años lo que no se hizo en 180 años de vida republicana”. Y en un airado documento de descargo contra las acusaciones de los críticos al proceso de cambio, García Linera (2011b:96 y 151) aportó otros argumentos:

“¿Sabrán cuánto cuesta una petroquímica para avanzar los primeros peldaños en la superación de una economía primario-exportadora? Más de \$Us 1.000 millones, y una hidrometalúrgica para tratar lo minerales complejos, 500 millones... En fin, salir de la «dependencia tecnológica», dejar de ser una «economía primario-exportadora», garantizar la «soberanía alimentaria», no se hace con buenas intenciones, requiere millones de dólares de inversiones en distintas áreas de la economía del país”.

“La revolución es revolución precisamente porque tiene que cabalgar esa paradoja: acelerar la ejecución material de inversiones para satisfacer necesidades y requerimientos materiales de las organizaciones, y detener las inversiones para realizar la deliberación democrática con las organizaciones sociales para definir el tipo de obra que necesitan. Cada una de esas acciones implica la parálisis de la otra y la desilusión correspondiente por esa falla”.

²⁸ En los últimos años, el gobierno del MAS también ha diseñado otros proyectos relativos a dos refinerías de zinc (Oruro y Potosí), la reactivación de la planta de ácido sulfúrico de Eucaliptus (Oruro), la planta industrial de azufre de Capuratas (Oruro), o el lanzamiento de la Empresa Boliviana de Oro con oficina en Riberalta (Beni). Véase la Memoria Anual 2010 del Ministerio de Minería y Metalurgia.

²⁹ Se han producido, además, problemáticas particulares. El retraso del Mutún (*Jindal*), por ejemplo, está relacionado con la logística costosa y la presión de la transnacional india para que el Estado boliviano subvencionara el abastecimiento de insumos energéticos (véase Liégois, 2009). Por su parte, los retrasos de Corocoro (*Kores*) se han relacionado con el desvío de fuentes de agua y el incumplimiento del derecho a la consulta (véase Vargas, 2009 y 2010). En el caso del proyecto del litio, la irregularidad de lluvias sobre el salar en febrero de 2011 generaron problemas en las plataformas de acceso a las piscinas de evaporación.

¿Alimentan los retrasos del gobierno del MAS el **mito de la industrialización**? ¿Se trata de una quimera o es realmente factible? Para algunos, la aspiración boliviana carece de atractivo económico. El director de la División de Minerales y Recursos Naturales del Ministerio de Economía, Comercio e Industria del Japón, Yuko Yasunaga, manifestó el desinterés de su país a invertir en fundiciones de zinc en Bolivia debido al reducido tamaño del mercado boliviano y la lejanía de puertos para exportar: “Lastimosamente, en Bolivia no hay mercado interno para el zinc, para el estaño mismo, porque no está industrializada Bolivia”. Y añadió que Perú posee una ventaja competitiva, ya que cuenta con un buen sistema comercializador e infraestructura portuaria (Fides, 28 febrero 2011). Pero son opiniones interesadas que buscan abastecerse al menor coste (de hecho, Japón es el primer comprador de concentrados de zinc boliviano).



Centro minero de Huanuni (Bolivia). Foto: Iván Aranda.

En este contexto, el proyecto del litio representa todavía la esperanza de que el imaginario de la minería nacional es posible. Frente a viento y marea —y todas las presiones corporativas transnacionales—, pese a los retrasos, Bolivia se mantiene firme en su proyecto de empresa 100% estatal.

A falta de la puesta en marcha de los proyectos industriales, el rescate de la vieja minería estatal ofrece una imagen desconcertante, fruto de los altos índices de **contaminación ambiental**. El complejo minero de Huanuni es un buen ejemplo: sus instalaciones vomitan un flujo permanente de lodos grises al río, apenas contenidos por improvisados diques de cola (véase fotografía). Tras más de cien años de operación, el centro minero ha contaminado la subcuenca, dejando un rastro de tierra improductiva hasta el Lago Poopó. El desastre es de tal magnitud que mereció en noviembre de 2009 la declaratoria de Zona de Emergencia Ambiental para toda la Subcuenca de Huanuni (*PetroPress*, 2009, nº15:32).³⁰ Si ése es el imaginario de la minería nacional, tal vez sería preferible un modelo de minería privada con fuerte supervisión pública. ¿Es compatible el imaginario de minería nacional —soberana y digna— con la realidad de una minería ineficiente y contaminante? ¿Es posible una minería pública que sea limpia? ¿No es ése acaso uno de los desafíos cruciales del proceso de cambio en Bolivia?

³⁰ La declaratoria se instruyó mediante decreto supremo de la Presidencia de la República. Se estipuló la construcción de diques de colas por parte de la minera estatal Huanuni para contener los millones de metros cúbicos de desechos de líquido y metales pesados. Por otra parte, se acordó realizar inspecciones e investigaciones en las áreas contaminadas para determinar trabajos de mitigación.

Hay otro asunto relevante. ¿**Quién reivindica el imaginario**? ¿Quién lo sostiene y lo alimenta? En octubre de 2003, la industrialización de los recursos naturales fue bandera de los movimientos sociales que derrotaron a Sánchez de Lozada en la Guerra del Gas. Sin embargo, esa visión de país se ha diluido en los últimos años, merced al predominio de intereses sectoriales y corporativos (véase epígrafe 6.1). ¿Tienen las organizaciones campesinas e indígenas una agenda minera? ¿Figura la minería nacional entre las aspiraciones de los trabajadores del sector? No está claro. Pareciera que el gobierno del MAS se ha quedado solo en la defensa de la minería estatal. Los mineros del sector privado y cooperativista no quieren trabajar bajo la órbita de COMIBOL. Los trabajadores de *Inti Raymi* y *Sinchi Wayra* no quieren ni oír hablar de nacionalización, ya que supondría pérdida de beneficios sociales y salariales. Por otro lado, el sector cooperativo se declara en lucha frente a las intenciones del gobierno de “estatizar y proletarizar la minería en Bolivia”. De hecho, con motivo de la nacionalización Huanuni en 2006, se produjeron violentos enfrentamientos entre asalariados y cooperativistas, con el saldo final de 16 muertos.

Con todo, el imaginario nacional pervive con fuerza en el subconsciente colectivo de los pueblos andinos. En el corazoncito de cada ciudadano. Si no que le pregunten a las **transnacionales mineras** por qué no dudan en utilizar el nacionalismo en su propio provecho. Tras la ajustada victoria de Humala en junio 2011, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) no se quedó cruzada de brazos. A sus representantes les faltó el tiempo para cercar al nuevo presidente con el sacrosanto discurso de la seguridad jurídica para la inversión privada. Y lanzaron su propia campaña (www.perupaisminero.pe). Con motivo de la Copa América, la Sociedad emitió en julio un spot publicitario en el intermedio del partido de semifinales Perú-Uruguay (<http://www.youtube.com/watch?v=IKReyL5v5-E>). El ex-jugador y entrenador Juan Carlos Oblitas aludía a la derrota peruana con Chile en la Copa América de 1997 como el peor recuerdo de su vida, y argumentaba que el enemigo histórico les ganaba también en minería. Puesto 8º de Chile entre los países que atraen inversión minera frente al puesto 48º del Perú (véase imagen). Según el spot, las mineras en Perú pagarían más impuestos que en Chile, Canadá o Australia. “¿Vamos a dejar que Chile nos siga ganando en minería? Con buena minería, el Perú siempre gana”.... De la noche a la mañana, Oblitas se convirtió en el personaje más popular de las redes sociales peruanas. En *Facebook*, crearon una página bajo el apelativo “Oblitas te vendiste a las mineras y ‘salaste’ (diste mala suerte, ‘quenchaste’) a la selección” (que perdió 2-0). En *Twitter*, los usuarios crearon diversos *hashtags* como: #culpadeOblitas y #consejosdelciego, para burlarse en tono sarcástico del ex-futbolista. Se produjeron varios desmentidos en prensa por parte de expertos, que demostraban que los datos que utilizaba el comercial eran falsos.³¹ La reacción fue tal que el publicista pidió disculpas, y las mineras se vieron obligadas a retirar el spot de las televisiones... Pero el mensaje ya estaba posicionado. ¿Quién es más peruano? ¿Los actores anti-mineros o los que defienden la mina y el “desarrollo” nacional?³²

³¹ Los días posteriores, expertos y dirigentes sindicales se encargaron de desmentir el spot de la Sociedad Minera. De acuerdo a Echave, la carga tributaria utilizada en el spot suma el impuesto a la renta, las regalías y el aporte voluntario (que es optativo a las regalías), y además se olvidan de descontar todas las desgravaciones que reciben las mineras por reinversión de utilidades o construcción de carreteras. Véase La República, “Mineros en Perú no pagan más impuestos que en Chile”, 23 julio 2011; y Diario La Primera, “El Spot de Oblitas”, 27 julio 2011.



Fuente: <http://www.youtube.com/user/SNMPE>

³² El nacionalismo no es exclusivo de Perú o Bolivia. En Argentina, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) proyecta una imagen equívoca. Sus miembros asociados son mayormente empresas transnacionales y su denominación se justifica solamente por su territorio extractivo. No obstante, el nombre le permite jugar con el imaginario nacional de “lo propio”, “la industria nacional, de, por y para los argentinos”. Véase Antonelli (2009), p. 66.

3.4 La *integración regional fagocitada* por el sector extractivo y energético: ¿recursos naturales para la región?

Aplausos cerrados. El 24 de mayo de 2011 las cámaras de televisión recogieron los abrazos efusivos de los parlamentarios brasileños. El Congreso acababa de aprobar, por 410 votos a favor y 63 en contra, el nuevo Código Forestal que aborda el **levantamiento de restricciones a la Amazonía**. Hasta el último momento la presidenta Rousseff presionó en vano a los partidos aliados del gobierno para que no firmasen la cláusula de amnistía general a los delitos de deforestación cometidos hasta 2008. Pero ni siquiera pudo contener la disciplina en su propia formación política: hasta 35 diputados del *Partido dos Trabalhadores* (PT) dieron su voto a favor. Esa misma mañana Brasil se despertaba con la noticia del asesinato a tiros del activista medioambiental João Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, María do Espírito Santo, ambos defensores de la Amazonía. La votación y el asesinato son parte de un mismo movimiento político para el que la conservación ambiental impide el crecimiento económico. El todopoderoso sector de los agronegocios brasileños tiene bajo control la Cámara Baja a través de una tupida red de apoyos, y pelea por imponer una política extractivista que privilegia la exportación de materias primas y las ganancias a corto plazo. Pero la intensa batalla que se libra en la región amazónica tiene fuertes implicaciones para todo el continente y los esquemas de integración regional.

¿Integración de los pueblos? ¿Soberanía de los recursos naturales? ¿Apuesta por el mercado interno? ¿O subimperialismo brasileño en estado puro? En los últimos años, el proceso de integración regional en América Latina ha vivido un gran dinamismo, no exento de enormes lagunas. De hecho, predomina un esquema desordenado de **integración comercial sin una clara proyección política**. Una parte importante de los países de la región —Chile, Perú o Colombia— concibe la integración como un complemento para insertarse en la economía global. Y su principal apuesta ha sido acelerar la firma de TLC de carácter bilateral con los principales bloques económicos mundiales (EE.UU., UE o China). A su vez, los dos principales bloques subregionales —CAN y MERCOSUR— sufren un proceso de parálisis, y la CAN, en particular, una profunda crisis institucional. Impulsada en 2008, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) constituye la iniciativa más reciente de integración regional. El nuevo esquema nació con vocación política, pero tiene aún un escaso desarrollo institucional. En este contexto, la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) ha impulsado un modelo alternativo de integración a partir de una declarada doctrina de izquierda, programas de inclusión social y esquemas de cooperación Sur-Sur. Su limitado alcance geográfico (5 países y 3 islas caribeñas) no le ha impedido jugar un interesante papel simbólico.

En este contexto de integración lleno de recovecos, los países suramericanos firmaron en 2000 una agenda común de inversiones en materia de energía e infraestructuras para integrar físicamente el continente. Así nació la **Iniciativa de Integración Regional Sur Americana** (IIRSA), un paraguas de corredores interoceánicos, grandes represas y centrales hidroeléctricas, con una marcada lógica desarrollista y elevados impactos ambientales. ¿Un cambio hacia dónde? ¿En beneficio de quién? La acelerada expansión del cultivo industrial de soja en el corazón del continente —en el área fronteriza de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia—, y sus necesidades de abaratar costos de abastecimiento y transporte, ha puesto de relieve la verdadera orientación del IIRSA.

Las infraestructuras viales y energéticas no atienden las necesidades de las mayorías, sino responden más bien a los intereses del capital transnacional. Es más, la reproducción de un modelo económico que prima la exportación de materias primas ha propiciado la conformación de **conglomerados transnacionales de vocación multisectorial**. Grupos como la brasileña *Vale* combinan producción de minerales, agronegocios (soja,

comercio de alimentos y compraventa de insumos agrícolas), construcción (infraestructuras), transporte (carreteras, ferrocarriles y puertos logísticos de exportación) y energía (hidroeléctricas). Casi nada. Estos nuevos gigantes se erigen en los actores protagonistas del proceso de integración regional (véase recuadro 24).

Recuadro 24

Vale: una transnacional pulpo

Vale do Río Doce nació en Brasil en la década de 1930, tras la adquisición gubernamental de la *Itabira Ore Company*, una minera inglesa en Minas Gerais. Su producción de hierro abasteció la industria bélica de EE.UU. durante la 2ª Guerra Mundial. En los años 80, adquirió *California Steel Industries* junto con una siderúrgica japonesa. En 1997, la empresa fue **privatizada** en un proceso plagado de irregularidades, que hasta hoy es cuestionado en las cortes de justicia brasileña.

A partir de 2001, la empresa inició una **política agresiva de internacionalización**. En 2000, ingresó en Oriente Medio, adquiriendo el 50% de *Gula Industrial*; en 2002 inició proyectos mineros en Perú y Chile; y en 2003 creó la *Rio Doce Manganese Norway*. Pero fue la firma de un contrato de suministro con China el paso más decisivo (6 millones anuales de tn. de hierro a lo largo de 20 años). China concentra el 17% de sus ventas. El segundo hito fue la compra de la canadiense *Inco* en 2006, lo que hizo a la Vale la mayor productora mundial de níquel.

En la actualidad, la Vale opera en 30 países. Su estrategia de internacionalización busca el **control de toda la cadena productiva** “hacia atrás”. De este modo, el negocio siderúrgico le permite garantizarse el suministro primario de hierro. La inversión en presas hidroeléctricas (en especial, en Minas Gerais) le permite asegurarse el abastecimiento de energía. A su vez, el negocio logístico está al servicio del agronegocio y la siderurgia, transportando productos de acero, soja, fertilizantes y combustibles. Su actual expansión hacia los fertilizantes también tiene una dimensión internacional: los proyectos mineros en Argentina, Perú, Mozambique y Canadá apuntan a la producción de fosfatos.

Fuente: García (2010), pp. 42-43.

El alcance del IIRSA evidencia, además, un estrecho **vínculo entre inversión minera e infraestructuras energéticas**. La ingente demanda de logística y energía que requiere la megaminería sólo puede garantizarse con la construcción de nuevas autovías y centrales eléctricas. Así se justifica, por ejemplo, la futura construcción de una planta geotérmica en Laguna Colorada (Potosí). Se trata de una central de 50 MW en un área protegida para abastecer a la Minera San Cristóbal (*Sumitomo*), todo ello con financiación concesional del gobierno japonés (*Cambio*, 9 diciembre 2010). Del lado peruano, las represas proyectadas sobre el río Marañón abastecerán todos los proyectos en curso del distrito minero del sur de Cajamarca: Conga (Yanacocha-*Newmont*), el Galeno (*Lumina Copper*, subsidiaria de la china *Minmetals*), o Michiquillay (*Anglo American*), por citar sólo los más grandes.

A diferencia del ALCA que motivó, en los albores del siglo XXI, un amplio debate y multitud de plataformas sociales de resistencia, los proyectos del IIRSA se han llevado a cabo en silencio. Además, se advierte un desacople de escala entre las resistencias de carácter local frente a la lógica global de los capitales del sector extractivo. Por otro lado, el esquema de integración, basado en energía y *commodities*, contrasta con una **institucionalidad regional muy limitada para promover políticas de derechos humanos**. Apenas la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la órbita de la

Organización de Estados Americanos (OEA), y el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) poseen competencias en la materia.

Como ya se ha sugerido, un rasgo preocupante del proceso de integración regional alude al **papel hegemónico de Brasil**. El Gobierno de Lula da Silva (2002-10) adoptó un papel de bisagra entre los países del ALBA y Occidente, lo que aumentó su capacidad de influencia geopolítica. Pero además, la política exterior brasileña está estrechamente ligada a defender los intereses de sus transnacionales emergentes, ya sean de capital público o privado (Petrobras o Vale do Río). Y el Banco Nacional (BNDES) desempeña un papel de comparsa, como brazo financiero de proyectos de integración física.

3.5 Los “no-territorios”: ¿son los pasivos mineros y conflictos socioambientales sacrificios inevitables del progreso?

Ojos que no ven, corazón que no siente. Así se podrían definir los “no-territorios”, los **daños que no se miran** o que, en todo caso, se han naturalizado como coste inevitable del progreso: montañas de pasivos ambientales, contaminación de agua y tierras, suspensión de partículas en el aire, presencia de plomo en sangre... Como son incómodos, la sociedad en su conjunto optó por arrinconarlos de su conciencia colectiva. En Perú, la minería masiva es un fenómeno reciente de los últimos veinte años. De momento, las afectaciones mineras quedan lejos de los centros urbanos más poblados (con algunas excepciones notables como Cerro de Pasco). Los impactos se concentran en comunidades de la sierra, o en la orilla de los afluentes amazónicos, por lo que

aún es posible concebirlas como lejanos o de baja intensidad. En cambio, la fuerte tradición minera en Bolivia generó un fenómeno de naturalización de la contaminación minera en los departamentos mineros de Oruro y Potosí. Se acuñaron así palabras específicas como *copajira* para denominar las aguas contaminadas de los ríos. La muerte del Lago Poopó (Oruro) es el último episodio de este fatalismo (véase recuadro 25).

La máxima expresión de desterritorialización son los **enclaves mineros** abandonados a su suerte tras décadas de explotación minera. No son pocos los centros mineros

de la cordillera andina en Perú y Bolivia que se han convertido en zonas devastadas por la actividad minera. Las afecciones irreversibles en la agricultura, la dependencia económico-laboral, la inexistencia de políticas de cierre de minas y reconversión, y los efectos de desvalorización en la psicología colectiva, convierten estos lugares en jaulas o callejones sin salida. Los casos más emblemáticos son La Oroya (Junín) en Perú o la subcuenca de Huanuni (Oruro) en Bolivia (*Inti-Raymi* en Oruro). ¿Por qué no recogen los medios el drama de estos lugares? ¿Hay un futuro después de la minería? ¿Es posible una política pública de reconversión? Las comunidades de Poopó, Desaguadero, Huanuni y Antequera lograron en noviembre de 2009 la Declaratoria de Zona de Emergencia Ambiental para toda la Subcuenca de Huanuni (Oruro), afectada por graves problemas de contaminación minera (*PetroPress*, 2009, nº15:32).³³

Recuadro 25

La mina seca el Poopó

En las inmediaciones del lago operan más de 300 minas, que extraen plomo, estaño y oro, según el FOBOMADE. La contaminación minera ha desecado y colmatado el lago de residuos, haciéndolo retroceder 5 kilómetros en apenas tres años. La pesca de pejerrey ha desaparecido, y los rituales de matrimonio andino ya no se celebran en sus orillas salinizadas. Las comunidades aledañas al lago, como Alantañitas, se han quedado sin jóvenes, y la migración hacia Argentina o Santa Cruz se vive con naturalidad.

Fuente: La Razón, 30 agosto 2010.

³³ La declaratoria se instruyó mediante decreto supremo de la Presidencia de la República. Se estipuló la construcción de diques de colas por parte de la minera estatal Huanuni para contener los millones de metros cúbicos de desechos de líquido y metales pesados. Por otra parte, se acordó realizar inspecciones e investigaciones en las áreas contaminadas para determinar trabajos de mitigación.

¿De qué ha servido? Dos años después, la declaratoria no había movilizado recursos públicos. Más allá de los evidentes problemas ambientales, la minería ha provocado un **aumento exponencial de la conflictividad** en la región. Según informes de la Defensoría del Pueblo (2011) en Perú, el país registraba 214 conflictos en agosto de 2011. De ellos, el 56% se debían a causas socioambientales. Otro rasgo llamativo es que la conflictividad evoluciona hacia un patrón cada vez más multipolar:

- En la megaminería, se han recrudecido los conflictos entre comunidades y empresas por la restricción de agua (en áreas semidesérticas del altiplano), derrames tóxicos, la vulneración del derecho a la consulta y la abierta criminalización de la protesta, entre otros muchos factores. Los conflictos son protagonizados por empresas transnacionales, pero también por la minería pública como es el caso del complejo hidrometalúrgico de cobre en Corocoro (Vargas, 2009).
- La pequeña minería posee también crecientes niveles de conflictividad. La proximidad entre operaciones mineras y población, el uso de tecnologías contaminantes, unido a las condiciones precarias de explotación, han creado un cóctel explosivo. En los últimos años, se han disparado los avasallamientos de minas en Bolivia, que han enfrentando a comunidades campesinas con cooperativas y pequeñas empresas mineras.³⁴ Un contexto de todos contra todos, en el que está en juego el acceso a los beneficios extraordinarios que posibilita el auge de los minerales en los mercados internacionales. En este sentido, la expansión de la minería informal supone sin duda una democratización del acceso a la minería, pero genera también nuevos tipos de conflictividad social.
- Por último, la minería ilegal constituye otro factor de inestabilidad. Multitud de barcazas saquean oro en los ríos del Amazonas en Perú y Bolivia. Los actores ilegales no declaran su producción ni pagan impuestos en las regiones donde operan. Este tipo de minería genera, además, corrupción de funcionarios públicos, esquemas de semiesclavitud, tráfico de personas y circuitos de prostitución.

Los actores pro-mineros manejan una concepción negativa del conflicto. No entienden, como los teóricos de la “democracia radical”, que el conflicto es expresión de salud democrática. Y **los medios de comunicación** juegan un papel determinante en su interpretación sesgada. Tradicionalmente, la minería estuvo alejada del foco de los medios, por desarrollarse en espacios inaccesibles y periféricos. Es decir, los problemas eran invisibles. El aumento de la conflictividad, sin embargo, llevó la minería a la primera página de diarios y noticieros. En un estudio de la Universidad Católica de Lima, el periodista Sandro Macassi (2009 y 2011) ha revelado que el tratamiento informativo de los conflictos mineros utiliza fuentes parciales y organiza el discurso para orientar la interpretación de sus causas, la valoración de sus consecuencias y las posibles soluciones. Al final, los propios medios se constituyen en escenarios de los conflictos, y en una pugna —desigual— tanto por representarlos como por dominar sus interpretaciones. En la cobertura informativa de la consulta popular en Ayabaca para aprobar o no un proyecto minero (septiembre 2007), Macassi (2011:8) ha mostrado cómo los medios nacionales recurrieron a las autoridades del Ministerio de Energía y Minas, pero durante las semanas que se prolongó el conflicto no entrevistaron a los pobladores locales.

Para romper esas barreras de invisibilización y tergiversación, las organizaciones locales han ideado varias **estrategias de resistencia**. Las apuestas de comunicación alternativa, el manejo de blogs en Internet, la realización de “anti-mapas”, o las visitas de dirigentes a minas contaminadas son algunas de ellas (véase capítulo 7).

³⁴ Las tomas de la Mina Himalaya en el Cantón Cohoni (La Paz), la Mina Santa María en la Provincia Cercado (Oruro), o la Mina Santa Isabel en San Pablo de Sud Lipez (Potosí) son tan sólo algunos ejemplos. La Mina Himalaya fue tomada en octubre de 2007 por comunarios de la Central Agraria Cayinbana del Cantón Cohoni (Provincia Murillo, La Paz) desplazando a 105 trabajadores de la Empresa Minera Himalaya. La toma fue declarada ilegal por el Servicio Geológico y Técnico de Minas (SERGEOTECMIN). En marzo de 2009, un contingente policial se desplazó a la zona, pero fue emboscado con el saldo de cinco uniformados y un civil heridos. Según la empresa, la gente que se hizo cargo de la mina no paga impuestos al Estado. Véase La Prensa, 25 octubre 2009. En marzo de 2008, los comunarios de Puna Huaylluna (Provincia Bolívar, Cochabamba) se enfrentaron con los trabajadores de la mina de estaño Santa María, ubicada en territorio limítrofe (actualmente en conflicto) entre Oruro y Cochabamba. El avasallamiento dejó un muerto y ocho heridos. Véase La Razón, 27 marzo 2008.

3.6 La megaminería y el imaginario retórico de la *Responsabilidad Social Empresarial*: ¿algo peor que un lavado de cara?

PREMIO SOUTHERN-PERÚ
A la creatividad humana

Southern Copper-Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú convocan para el año 2011 al "Premio Southern-Perú y Medalla José de la Riva-Agüero y Osma" en las especialidades de Humanidades, Ciencias Sociales (incluidas Derecho y Economía) y Artes.

Este reconocimiento busca destacar los aportes significativos a la ciencia y la cultura nacionales realizados por personalidades, peruanas o extranjeras, comprometidas con nuestro país.

Los postulantes al premio deberán ser presentados por personas jurídicas legalmente reconocidas como instituciones académicas en el Perú: universidades, centros de investigación, colegios profesionales e instituciones públicas o privadas dedicadas a la actividad científica y académica.

El premio se halla dotado de una asignación única de 20,000 dólares americanos y de la "Medalla José de la Riva-Agüero y Osma".

Las bases del concurso se pueden recabar en el Vicerrectorado Académico de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Av. Universitaria cdra. 18 s/n San Miguel.
Apartado 1761 - Lima 100. Teléfono: 626-2000 anexo 4462
www.pucp.edu.pe/south

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Hasta el 30 de junio de 2011

SOUTHERN COPPER
SOUTHERN PERÚ

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

Premio minero a la creatividad minera.

Fuente: Publicidad en *La República*, 10/06/2011, p. 7.

¿Es posible disimular la contaminación ambiental? ¿Esconder sus daños debajo de la alfombra? Y más difícil todavía... ¿se puede fabricar el crédito social? ¿Es realmente posible? A estas alturas del siglo XXI, todo el mundo sabe que las empresas transnacionales no dan puntadas sin hilo. Un primer análisis crítico apunta que las mineras hacen uso de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para hacer frente a las fuertes críticas que reciben, financiar obras sociales, y **lavar así su imagen**. El universo de la RSE ha ampliado su radio de acción en los últimos años, abarcando áreas, no sólo de educación, salud y obras municipales, sino también de agua, ciencia y tecnología, creatividad empresarial, entre otros muchas:

En Perú, la enorme presencia de mineras transnacionales ha creado un mapa diverso de RSE. Algunas mineras como *Southern Copper* realizan concursos de creatividad humana en las especialidades de humanidades, ciencias sociales y artes. Todo ello en colaboración con la Universidad Católica de Lima, lo que les confiere más legitimidad (véase imagen 13). Las mineras más consolidadas, como Yanacocha, han depurado su estrategia de RSE en los últimos veinte años, hacia un enfoque de desarrollo integral, que recuerda los enfoques de cooperación de desarrollo de las ONG en los años 90, o incluso el enfoque de cooperación del ALBA (véase recuadro 26). La subsidiaria de New-

Recuadro 26

La RSE de Yanacocha

Desde mediados de los años 90, la minera Yanacocha ha ido ampliando su programa de RSE para cubrir cuatro **áreas estratégicas**:

- Gestión del agua (diques, revestimiento de canales, micro-reservorios familiares, sistemas de riego tecnificado y monitoreo de agua)
- Educación (construcción de infraestructuras, alfabetización y educación básica alternativa, matemáticas para todos y maestrías en educación rural)
- Salud (sistemas de agua potable y letrinas, viviendas saludables, cocinas mejoradas, seguridad alimentaria, cirugía gratuita para niños con labio leporino y ferias de salud)
- Desarrollo económico (fomento de emprendedores a través de la Asociación Los Andes Cajamarca-ALAC, y fomento agropecuario a través de la ONG FON-CREAGRO)

Fuente: www.yanacocha.com.pe

mont en Cajamarca opera, además, sus fondos de RSE a través de fundaciones y ONG afines, que tienen la capacidad de diluir el vínculo con la transnacional, convocar otros actores, captar más recursos —incluso de la cooperación oficial— y multiplicar así su influencia en la región.³⁵

En Bolivia, la trayectoria de RSE es más reciente y rudimentaria. La minera *Inti Raymi* (subsidiaria de *Newmont*) construyó un popular parque infantil en Oruro. El éxito popular de la instalación motivó que *Sinchi Wayra* (Glencore) construyera otra instalación recreativa en la ciudad. Pero sin duda es la Minera San Cristóbal (Sumitomo) la empresa que ha desarrollado una estrategia más afinada. La empresa ha creado una unidad médica en Toldos para prestar atención médica y servicio de emergencias. La empresa ofrece un seguro médico a los empleados y dependientes familiares, de gran valor en una zona aislada del sur de Potosí con graves carencias de cobertura sanitaria. La minera posee, además, otras tres líneas de responsabilidad: relaciones comunitarias, coordinación de reasentamiento/migración, e iniciativas de desarrollo sostenible.

Este esfuerzo de imagen de la industria minera en América Latina se ha visto acompañado de un **ritual de premiación**, orientado a crear una cultura de responsabilidad social en el sector. No hay minera que se precie en la región que no tenga un premio, ya sea nacional o internacional. Desde 1997, y con carácter bianual, el Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) concede premios a las empresas mineras que se destacan en gestión ambiental (*Premio Gildo Sá de Albuquerque*) y gestión social (*Premio Zonia Osorio de Fernández*).³⁶ También el *Reputation Institute* realiza sondeos periódicos de reputación corporativa en 41 países a nivel mundial. Y, por supuesto, existen también premios nacionales de RSE, como los que concede la asociación Perú 2021 en el país andino.³⁷

La socióloga argentina Antonelli (2008) ha revelado el entramado de intereses corporativos que se esconde detrás de las premiaciones de la OLAMI, al existir vínculos entre directivos de la institución con universidades que, a su vez, mantenían estrechos convenios de colaboración con las mineras galardonadas. Por otro lado, los premios otorgados incurren en **profundas contradicciones** si se comparan con las prácticas cotidianas de las mineras en sus respectivas áreas de explotación:

‡ *Premio Gildo Sá de Albuquerque 2008 a la minera argentina Bajo La Alumbra* La subsidiaria de *Barrick Gold* en Argentina logró el premio ambiental merced al plan “modélico” de revegetación de vegas del Proyecto Veladero. Además, en la Categoría Gran Minería fue galardonada también por su “Plan de Mejora del Sistema Educativo de las localidades de Andalgalá, Aconquija y Belén en la Provincia de Catamarca 2006-2008”.³⁸ La mala suerte hizo que el premio coincidiera en el tiempo con la condena del vicepresidente de la empresa por contaminación ambiental. La Cámara Federal de Tucumán procesó a dicha persona como presunto autor penal responsable de un delito de contaminación peligrosa para la salud.

³⁷ Perú 2021 es una asociación civil sin ánimo de lucro, conformada por un patronato de empresarios que, desde 1994, promueve la RSE como metodología de gestión empresarial. Representa, además, al *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* en Perú, una coalición de 180 empresas. Véase www.peru2021.org.

³⁸ Lo que la nota de los premios no decía es que Hugo Nielsen, el Secretario General de OLAMI en esa época, era también Secretario de Gestión Institucional del Centro de Estudios para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). El “Plan de mejora del sistema educativo en Catamarca”, por el que la Minera *Bajo La Alumbra* fue galardonado, fue un plan ejecutado en convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Es decir, el Ingeniero Nielsen de la OLAMI se estaba premiando a sí mismo.

³⁵ La AECID financió en 2010 a la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC, www.losandes.org.pe), en la órbita de la minera Yanacocha.

³⁶ Creado en 1984, el OLAMI está conformado por Unidades Nacionales de Coordinación de 16 países, donde están representados todos los actores vinculados al sector minero (empresas, trabajadores, organismos gubernamentales, universidades, profesionales, etcétera). OLAMI se identifica plenamente con los Objetivos del Milenio de las NN.UU., en especial los relativos a la reducción de la pobreza y del hambre y los que velan por la sustentabilidad ambiental, así como con los acuerdos logrados en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, donde se señaló que la minería, los minerales y los metales son importantes para el desarrollo económico y social de los países y esenciales para la vida moderna. Véase www.olami.org.ar.

U Premio Zonia Osorio de Fernández 2008 a la minera boliviana Inti Raymi
En 2008, la boliviana *Inti Raymi (Newmont)* logró el premio de gestión social. El premio fue compatible con las denuncias recibidas contra la minera orureña por causar elevados índices de contaminación en los lagos Poopó y Uru Uru.

U Premio Perú 2021 a la Responsabilidad Social y Sostenibilidad Ambiental 2010 a la minera Yanacocha
En la edición de 2010 de los Premios Perú 2021, la minera Yanacocha recibió triple reconocimiento por su aporte en temas de gestión del agua y salud en beneficio de la población de Cajamarca, obteniendo el primer lugar en la categoría *Multistakeholder*. El Programa de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil (PREDECI) mereció el segundo lugar en la categoría Sociedad Civil (Nota de prensa de Yanacocha, 29 noviembre 2010). De acuerdo al último inventario de pasivos ambientales realizado por el MEM, Cajamarca era el primer departamento en la lista. Y el que experimentó una mayor progresión al pasar de 20 en 2006 a 976 en 2010 (Passuni, 2011).

U Premio a la mejor reputación corporativa 2011 en minería a San Cristóbal (Potosí)

En un acto organizado por la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (CAINCO), San Cristóbal fue galardonada como la empresa con mejor reputación corporativa en su sector en Bolivia. La empresa salió ganadora del *Rep-Trak Pulse Bolivia 2011*, una encuesta a más de 1.778 personas en cuatro ciudades del país (La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba) (El Deber, 29 julio 2011). Sin embargo, el uso irresponsable del agua por parte de la minera, revelado en detalle por el Informe Morán, no fue problema para la concesión del premio.³⁹

³⁹ A cargo del geohidrólogo norteamericano Morán, el informe *Minando el Agua* (2009) lanzó algunos mensajes contundentes: “San Cristóbal extrae diariamente entre 42.000 y 50.000 metros cúbicos de aguas subterráneas, más agua que toda la ciudad de Potosí”. “Su consumo de aguas fósiles es mayor que la capacidad de recarga de la capa freática, lo que secará fuentes superficiales y bofedales”, y... “no paga por el agua que usa”.

Entre premio y premio, los gerentes de las empresas mineras han encontrado en la RSE un campo abonado, una **plataforma para vender discursos** que proyecten la mejor imagen de sí mismos y sus empresas. Sólo así se explica que los discursos de los directivos reproduzcan conceptos de ciudadanía, derechos y oportunidades:

“Creemos que la responsabilidad social no es un tema de papeles, ni de conceptos, teorías, o de simples intenciones. La responsabilidad social es un profundo compromiso de corazón. Es un error interpretar que la responsabilidad social es un repartir por repartir los recursos de la empresa. La responsabilidad social no es un compromiso chauvinista y no debe terminar, como decía el anterior expositor, con la promoción de una fiesta o una competencia de golf, y después nos vamos todos a casa y olvidamos el concepto. La responsabilidad social es algo que tiene que incorporarse en la piel, en el sentimiento de la gerencia. La responsabilidad social es un tema de OPORTUNIDADES, de oportunidades de crecer, crecer todos juntos, crecer con todas las partes interesadas en armonía y en el fondo compartir el éxito y el esfuerzo empresarial”.

*Humberto Rada, gerente de la Empresa Inti Raymi (Oruro)
Palabras pronunciadas en el Seminario de Responsabilidad Social en la Minería, organizado por OLAMI (septiembre 2005)*

“Nadie que reciba algo que no le ha costado ningún esfuerzo lo valora. Simplemente lo dará por sentado: «La empresa me lo tiene que dar» (...) Para nosotros lo básico es crear CIUDADANÍA. Y, para formar ciudadanos, hay programas de gobernabilidad en los que expertos enseñan cómo ser una comunidad organizada, que marca sus prioridades y que también tiene responsabilidad social. La responsabilidad social no solo es de las empresas grandes, es de todos, incluidos los individuos y las micro, pequeñas y medianas empresas”.

Eva Arias, presidenta del directorio de la minera Poderosa, citada en Barnechea y Tumi (2011), p. 175.

La RSE suele estar ligada a una estrategia de comunicación que busca la **emotividad y una puesta en escena con lo comunitario**. Y para ello escenifica una retórica iconográfica de su responsabilidad (Antonelli, 2009:77). No es raro encontrar en la página electrónica de las mineras, profusas galerías de fotos para mostrar su política de “buena vecindad”. Por lo general, muestran imágenes de comunarios sonrientes que proyectan la imagen de comunidades locales “beneficiadas” por la actividad minera. Los indígenas, campesinos, pobladores alejados son mostrados como comunidades felizmente integradas e incluidas gracias a la minería.

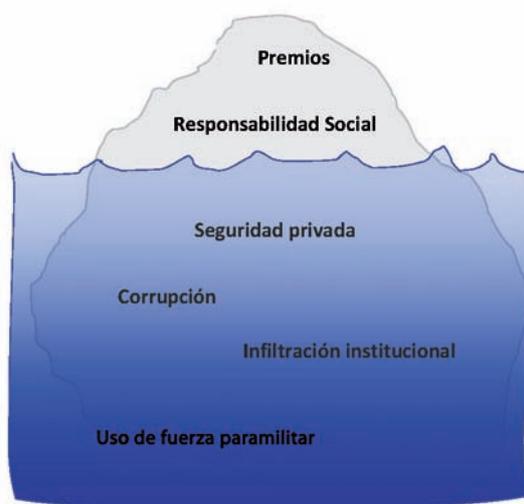
Además, la RSE persigue otra estrategia deliberada: **naturalizar la presencia minera** en la zona de explotación, estar presente en la vida cotidiana de la población local y lograr legitimidad. Por ese motivo, muchas mineras compran espacios en radios rurales y canales locales de televisión. O auspician fiestas populares y eventos culturales, tales como megaconciertos de música, festivales de poesía... Una acción más refinada consiste en elaborar material escolar para influir, con contenidos pro-mineros, en la etapa de formación educativa. Por ejemplo, el material producido por Bajo La Alumbra y Yanacocha ha presentado la minería como “naturaleza presente en la vida cotidiana” y ha minimizado la peligrosidad de elementos tóxicos como el cianuro, que “también está presente en la yuca que comemos” (Antonelli, 2009:78). Toda una enseñanza para las futuras generaciones.



Fuente: Publicidad en *La República*. 15 de diciembre de 2012

Pero la cosa no queda ahí. La industria minera andina incurre, en ocasiones, en **prácticas viciadas de RSE** destinadas a cooptar líderes campesinos e indígenas, o comprar voluntades de autoridades públicas. En Perú, la historia de las mineras transnacionales se proyecta por más de dos décadas, y los casos de corrupción y clientelismo político están a la orden del día. Aunque la presencia de transnacionales no es tan extendida en Bolivia, se advierten indicios en la misma dirección. Las cosas no contadas de la Fundación San Cristóbal son ejemplo de ello, incluyendo episodios de cooptación de dirigentes, maniobras disuasorias y prácticas clientelares, entre otras.

GRÁFICO 7: El iceberg de la RSE



Ojalá la RSE fuera un simple lavado de cara. Más bien, forma parte de una estrategia más amplia de **penetración en los territorios**. Constituye la parte más visible de un *iceberg* que esconde, bajo las aguas, políticas de seguridad privada, estrategias de infiltración en las instituciones públicas, servicio de inteligencia y, en ocasiones, incluso el uso de fuerzas paramilitares (véase gráfico 7). No pueden analizarse de forma separada. Todos esos elementos juegan roles complementarios y forman parte del objetivo último de controlar el territorio.

Desde una óptica más institucional, el auge de la RSE en los últimos años representa la **ausencia del Estado** como ente rector de la minería y fiscalizador de sus impactos. Sólo la ausencia de servicios públicos de salud y educación explica la proliferación de esquemas de RSE y el auge de la autorregulación. El máximo exponente de este fenómeno fue la implantación en Perú, mediante decreto gubernamental de Alan García, del Óbolo Minero Voluntario. Se trataba de un sistema que dotaba fondos de solidaridad (con aportes voluntarios de las mineras) para combatir la pobreza en sus áreas de intervención, gestionado por las propias empresas. Es decir, en lugar de recaudar impuestos, el Estado fomentaba la RSE. ¿Es ése un Estado “responsable”? Tras la reforma fiscal realizada por el presidente Humala en septiembre de 2011, el sistema quedó en el limbo.

CAPÍTULO 4

Las dificultades para construir nuevos imaginarios de resistencia

América Latina se ha revelado en los últimos veinte años como un laboratorio de nuevos imaginarios desde los movimientos sociales. Banderas de lucha tan potentes como tierra y territorio, soberanía alimentaria, derechos de la naturaleza, justicia ambiental o buen vivir se han alumbrado por diversos rincones del continente. Frente al avance irrestricto de los imaginarios que sostienen la extracción, estos nuevos ideales abren la puerta de la resistencia. Prefiguran un horizonte emancipatorio, pero lleno de barreras y limitaciones. En este capítulo se han analizado las dificultades existentes para construir el imaginario de la Madre Tierra, el Buen Vivir o la superación de los imaginarios masculinos de la extracción.

4.1 El imaginario de la *Madre Tierra* y las contradicciones del MAS en materia de políticas extractivas

Otro imaginario en juego, sin duda, es el de la *Pacha Mama* o Madre Tierra, un imaginario que ejerce un fuerte magnetismo y con gran capacidad de renovar discursos en los últimos años. Ligado a la **cosmovisión y cultura de los pueblos indígenas**, el imaginario apela a una dimensión colectiva, sagrada y espiritual, frente al enfoque exclusivamente material del extractivismo. En este sentido, se rescata el territorio no como medio de producción o mercancía de cambio, sino como espacio de reproducción identitaria y cultural. El imaginario está vivo entre los campesinos y pueblos indígenas de Los Andes. Así se expresan algunos comunarios afectados por la minería en Ayabaca, al norte del Perú (FEPROCCA, 2010:141-42):

“Para nosotros el territorio es algo muy sagrado, nuestro territorio es algo muy sagrado, nuestro territorio comunal es como si fuera nuestra casa, porque como se dice en nuestra comunidad tenemos algo en común que es nuestro territorio, que incluye el agua, el bosque, la biodiversidad, muchas clases de animales que tenemos ahí”.

(Darío William Flores, Santa Rosa de Pacaipampa)

“Es porque ellos se han metido sin permiso de la dueña de la comunidad; aquí la dueña de los territorios es la comunidad de Yanta, no es gente de China, extranjeros que vengan acá a meterse a nuestra tierra. Aquí los dueños somos nosotros, los que tenemos que ver por nuestra comunidad, aquí los acuerdos para designar regiones de la tierra son en asamblea general. Ella es la que da, no hay persona que diga yo te vendo este pedazo, no, todo es por asamblea general”.

(Cenecio Jiménez Peña, comunidad de Yanta)

Estas ideas de respeto a la madre tierra han impregnado notablemente los **procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia**. Refrendada en enero de 2009, la Nueva Constitución boliviana menciona en su preámbulo la existencia de la sagrada Madre Tierra como espacio natural del Estado Plurinacional. Además, la Constitución supuso un reconocimiento pleno de derechos, incluyendo el derecho al agua (en el capítulo de derechos fundamentales), el derecho al medio ambiente y un completo capítulo de derechos de las naciones y pueblos indígenas, que tiene por objeto respetar su relación armoniosa con la Madre Tierra (véase recuadro 28). La Constitución ecuatoriana (2008) introdujo un elemento adicional, al ser la primera constitución del mundo en presentar a la Madre Tierra como sujeto de derechos. El capítulo VII desarrolla los derechos de la naturaleza, incluyendo el derecho al respeto íntegro, a la protección y restauración.

Recuadro 27

La Nueva Constitución Ecuatoriana, 2008

Artículo 71. La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene **derecho a que se respete integralmente su existencia** y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Artículo 72. La naturaleza tiene **derecho a la restauración**. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Artículo 73. El Estado aplicará **medidas de precaución y restricción** para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

Artículo 74. Las personas, comunidades, **pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente** y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado.

La Nueva Constitución Boliviana, 2009

Preámbulo

En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonia, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdes y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas. Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia.

Artículo 16. I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. II. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población.

Artículo 30. I. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española. II. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las **naciones y pueblos indígena originario campesinos** gozan de los siguientes derechos

1. A existir libremente.
 2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.
 3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.
 4. A la libre determinación y territorialidad.
 5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
 6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
 7. A la protección de sus lugares sagrados.
 8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.
 9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.
 10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.
 11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.
 12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.
 13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.
 14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.
 15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.
 16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
 17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.
 18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.
- III. El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

Artículo 33. Las personas tienen **derecho a un medio ambiente** saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente.

“*Mi pedido a los presidentes y gobernantes de los cinco continentes (es) aprobar el agua como un derecho humano, además para cumplir con las metas del milenio, que Naciones Unidas declaró para la dotación de agua y saneamiento básico*”. Con estas palabras, Evo Morales presentó una iniciativa en Naciones Unidas para declarar el agua como derecho humano. El 29 de julio de 2010 Naciones Unidas aprobó la resolución en un éxito de la política exterior boliviana sin precedentes en la historia. De hecho, el gobierno de Morales ha hecho de la **defensa de la madre tierra un pilar de su política exterior**. La propia imagen internacional de Evo Morales está muy ligada a iniciativas como la mencionada declaración del agua como derecho humano, o la declaración del 22 de abril como día internacional de la Madre Tierra, así como a su posición atrevida en las cumbres internacionales del cambio climático. Tras el fracaso de la Cumbre de Copenhagen (2009), el gobierno de Morales convocó la Cumbre de los Pueblos en Tiquipaya (abril 2010) como espacio de encuentro de organizaciones sociales para debatir, a partir de 17 mesas de trabajo, los principales efectos del cambio climático que no fueron debatidos en Copenhagen. Conceptos nuevos como la deuda ambiental del Norte con el Sur, y propuestas como el Tribunal Internacional de Justicia Climática formaron parte de sus conclusiones. Con ese mandato, Bolivia participó en la siguiente Cumbre en Cancún (diciembre 2010). Y no tuvo problema en ser el único país del mundo en no firmar la declaración final para hacer valer sus ideas.

Este posicionamiento progresista contrasta, sin embargo, con el impulso de proyectos extractivistas al interior del país, que hacen prevalecer el pragmatismo a las consideraciones ambientales o los derechos indígenas. Lo que algunos intelectuales como el ecuatoriano Alberto Acosta (2009) o el uruguayo Eduardo Gudynas (2009) han denominado el **neoextractivismo** o *extractivismo progresista*, presente en varios países de la región latinoamericana. Al ligar el pago de los bonos sociales —destinados a los sectores más desfavorecidos— a la recaudación del Impuesto Directo de Hidrocarburos, el gobierno boliviano se vuelve dependiente de la explotación de los recursos naturales para poder llevar adelante su programa de cambio y transformaciones sociales. Y esa dependencia termina encontrando justificación en el bien común. Para el vicepresidente Linera (2011a:51-52), el gobierno del MAS tenía que hacerse cargo del “interés general” ante la deriva de las organizaciones sociales que se han replegado a sus demandas corporativas:

“De lo que se trataba entonces era de una movilización de dirigentes que habían perdido el horizonte del interés general del proceso, que dejaban de lado la búsqueda de reivindicaciones colectivas favorables para todos, y que se habían agrupado en torno a un sobredimensionamiento de lo gremial, lo corporativo, lo privado, que no sólo dejaba de lado los intereses de la inmensa mayoría de los pueblos indígenas del país, sino que dañaba su vínculo con todo el bloque popular”.

El “proceso de cambio” boliviano ha combinado, por tanto, una apuesta decidida por la inclusión social y la descolonización con la adopción de un modelo rentista de desarrollo. Sin duda, esa combinación comporta riesgos y contradicciones, pero... ¿podría haberse dado de otra forma? Más criticable resulta la posición del gobierno del MAS de **desconocer los conflictos socioambientales** en el país y hallar conspiraciones en las protestas indígenas. De hecho, el presidente Morales acusó a las organizaciones indígenas de utilizar el derecho a la consulta para chantajear y extorsionar a las empresas petroleras (*Erbol*, 28 abril 2011).

La tensión entre la necesidad de generar ingresos y rentas a corto plazo, por un lado, y el compromiso del MAS en materia de medio ambiente y derechos indígenas, por otro, ha provocado un **fuerte debate en el seno del gobierno** del MAS. Entre los pragmáticos (liderados por el vicepresidente Linera) y un sector más ambientalista (encabezado por el canciller Choquehuanca). Aunque se trata de un debate desigual ya que el sector ambientalista es menos influyente. Ciertamente, posee una retórica laborada, pero carece de propuestas concretas para contrapesar el avance del sector pragmático.

Y de últimas, la forma no siempre acertada de resolver dichas contradicciones, ha marcado un **progresivo alejamiento de las organizaciones sociales**, en especial, indígenas y sectores urbanos de clase media. La polémica Mesa 18 en la Cumbre de Tiquipaya (abril 2010), la crisis del “gasolinazo” (diciembre 2010), así como las sucesivas marchas indígenas en defensa del TIPNIS-Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (desde agosto-octubre 2011) han marcado los principales momentos de ruptura (véase epígrafe 6.3).

En consecuencia, la madre tierra y el medio ambiente se ha convertido en campo de lucha. ¿Quién la defiende? Y cómo no, las **minerías transnacionales** también han querido apropiarse del imaginario de la Madre Tierra para su propio beneficio. ¿Cómo si no explicar que cada vez son más las empresas que esconden su actividad extractivista bajo nombres indígenas con alusiones a la Madre Tierra? Una tendencia que, por ejemplo, no ha sido tan notoria en el sector de hidrocarburos:

- En Perú, la minera *Yanacocha* quiere decir “laguna negra” en quechua y su principal explotación ocupa los terrenos donde antes existía dicha laguna. El Banco Mundial posee un 5% de las acciones de la minera. Bajo el apelativo *Misqui Mayu* (Río Dulce, en quechua) se esconde la subsidiaria peruana de la poderosa Vale Do Río Doce brasileña.
- La transnacional norteamericana *Newmont Gold* opera en Bolivia bajo su subsidiaria *Inti Raymi* (“fiesta del Sol” en quechua), aludiendo así a la antigua ceremonia religiosa andina que se realizaba en honor al Dios Sol cada solsticio de invierno en Los Andes. Por otro lado, en 2005 la empresa minera Comsur (perteneciente al ex-presidente boliviano Sánchez de Lozada) fue comprada por la suiza Glencore, que cambió su nombre por el de *Sinchi Wayra* o, lo que es lo mismo, “viento fuerte” en quechua. ¿Debería estar prohibido por ley que las mineras utilizaran denominaciones en lenguas indígenas?

Por último, el **peligro del imaginario del “buen salvaje”** consiste en hacer depositaciones ciegas en la cultura indígena como guardiana *per se* de la naturaleza. La tentación, en este sentido, es presentar lo indígena como reserva espiritual del Occidente perdido. Un ejemplo sería contemplar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas por encima de cualquier otra consideración democrática. ¿Y si los indígenas deciden explotar un yacimiento en cabecera de cuenca? O un caso aún peor, un proceso de consulta viciado por la cooptación de autoridades comunitarias de manos de una poderosa minera o un mafia maderera... ¿Debe ser acaso la consulta indígena un designio sagrado? La percepción mitificada que tienen determinados sectores urbanos clase-medieros de los territorios indígenas puede conducir también a demandas extremas de conservación. La polémica en torno a la “intangibilidad” del TIPNIS, tras la marcha indígena de octubre de 2011, expresan este peligro. En todo caso, el imaginario del buen salvaje goza de gancho y poder magnético. La película *Avatar* (2009) de James Cameron es una buena muestra de cómo Hollywood, la máquina de imaginarios por excelencia, ya está poniendo todas sus energías en apropiarse del imaginario indígena y de la madre tierra. La película explota una buena cantidad de clichés sobre el mundo indígena, pero sin duda funciona desde un punto de vista estético y comunicacional. Y de taquilla. Cuentan que, tras ver la película, Evo Morales cursó una invitación personal al director para asistir a la Cumbre de Los Pueblos por el Cambio climático en Tiquipaya (abril 2010), que nunca aceptó.

4.2 El Buen Vivir: ¿cómo se aterriza?

El Buen Vivir o Vivir Bien engloba un conjunto de ideas que están surgiendo como alternativa a los enfoques tradicionales de desarrollo. La emergencia del concepto responde a una pluralidad de reflexiones críticas, rescates culturales y nuevas búsquedas, que se encuentran aún en un **estado germinal y exploratorio**. Es decir, se trata de un concepto en construcción, todavía impreciso. Pese a esa diversidad en ebullición, algunos pensadores como el ecólogo uruguayo Eduardo Gudynas (2011:1) defienden la idea de que es posible llegar a una “plataforma compartida del Buen Vivir desde distintas tradiciones de pensamiento”.

Un primer punto de partida es que el Buen Vivir surge de la **cosmovisión indígena**. Gran parte de los aportes proceden de la tradición de los pueblos andinos, pero también se encuentran ideas similares en los pueblos amazónicos, guaraníes o mapuches.⁴⁰ Eso hace que cualquiera de sus manifestaciones sean específicas a una cultura, una lengua, una historia y un contexto particulares. Las resistencias que vienen espontáneamente de los movimientos sociales han provocado un cambio que demanda un nuevo orden que exige y estimula la producción de los intelectuales hacia la construcción de nuevos marcos. En los últimos años, han sido los intelectuales aymaras bolivianos —María Eugenia Choque, Simón Yampara, el canciller David Choquehuanca (2010), o Fernando Huanacuni (2010), entre otros— los pensadores más activos en conceptualizar el nuevo término.⁴¹ Hasta tal punto que la provocadora antropóloga Alison Spedding plantea la interrogante de si el *suma qamaña* (buen vivir) no sería sino una invención de dichos intelectuales aymaras del siglo XXI (Uzeda, 2009). Desde una identidad indígena, pero también desde una posición posmoderna y un discurso culturalista. Sirva, en todo caso, la polémica para demostrar que se trata de un concepto vivo, que combina un trabajo de rescate cultural identitario con otro de construir nuevas utopías. En otras palabras, se trata de un nuevo imaginario.

El vigor de este nuevo anhelo de Buen Vivir ha motivado su debate en el seno de las asambleas constituyentes de Ecuador y Bolivia. Y que haya sido recogido en las **nuevas Constituciones** de ambos países. Por ejemplo, el artículo 8 del capítulo segundo de la Nueva Constitución boliviana, dedicado a los principios y fines del Estado, establece:⁴²

“El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: *ama qhilla*, *ama llulla*, *ama suwa* (no seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón), *suma qamaña* (vivir bien), *ñandereko* (vida armoniosa), *teko kavi* (vida buena), *ivi maraei* (tierra sin mal) y *qhapaj ñan* (camino o vida noble)”.

Otra constante es **apartarse de la senda de la modernidad** y reivindicar saberes tradicionales (Gudynas, 2011:11). De hecho, el vivir bien surge como un nuevo modelo civilizatorio y cultural alternativo tanto al capitalismo como a la modernidad. En este sentido, el vivir bien dialoga con las ideas occidentales de inclusión y justicia social. El antropólogo jesuita boliviano Xavier Albó explica cómo el “vivir bien” de todos se opone al “vivir mejor” de unos pocos (Plataforma Energética, 15 julio 2011):

“Esa actitud indígena es consistente con la de otros pueblos amazónicos del Ecuador, Perú y Brasil. (En) un evento con diversos grupos indígenas del sudoeste brasileiro sobre o *bem viver* (nuestro ‘vivir bien’), todos coincidían en ver las estradas (carreteras) y los *mega barragens* (represas) más como amenazas que como ventajas (...) En el fondo siguen estando en conflicto dos concepciones del desarrollo, en este caso, amazónico: el del vivir bien (todos), con un estilo moderado y sostenible, versus el de vivir mejor (sólo algunos a costa de los otros), con el que los menos poderosos y marginados de siempre siguen quedando más marginados”.

De fondo, late la reivindicación de un **nuevo paradigma de desarrollo**, que se diferencia no sólo del enfoque de *lucha contra la pobreza* defendido por la cooperación

⁴⁰ El Buen Vivir no está restringido al *sumak kawsay* o *suma qamaña* andino. Ideas similares se encuentran, por ejemplo, en el *shiir waras* (el buen vivir de los ashuar ecuatorianos, entendido como paz doméstica y vida armoniosa), o el *küme mongen* (el vivir en armonía de los mapuches del sur de Chile). Véase Gudynas (2011), p. 8.

⁴¹ También existe una corriente de economistas ecuatorianos que han trabajado fuertemente la temática, como Pablo Dávalos o René Martínez; así como dirigentes indígenas ligados a Pachakutik como Luis Macas (2010)

⁴² Este posicionamiento constitucional contrasta con los debates que siguieron a la elaboración de la Constitución Europea (2006), que definía Europa como una “economía social de mercado”. El NO en el referéndum holandés y, sobre todo, el NO francés terminaron por mandar el proyecto a un cajón.

internacional y los organismos internacionales, sino también del enfoque tradicional de desarrollo humano manejado por el PNUD. Apela a la construcción de un modelo propio, para el que no existen referentes mundiales. Lo que da pie al surgimiento de matices y diferencias interculturales. Por ejemplo, la constitución ecuatoriana consagra los derechos de la madre tierra y el derecho al control social, como caminos para el buen vivir (aunque luego estos mismos derechos se ven relegados por el interés general, cuya prevalencia reconoce también el artículo 85 de la constitución). Por su parte, la constitución boliviana establece que la industrialización de recursos naturales es un fin del Estado, para superar el patrón primario-exportador y vivir así mejor como país.

Pese a todo el esfuerzo conceptual, el Buen Vivir viene siendo un imaginario nuevo sin suficiente cable a tierra. ¿Cómo se aterriza en la práctica? ¿Y en términos de gestión pública? En Bolivia, algunas políticas estatales están inspiradas en los principios del buen vivir. La nacionalización de los hidrocarburos o la política de descolonización son

dos buenos ejemplos, si bien su alcance y significado se encuentran sometidos a niveles importantes de discusión y polémica. A este respecto, Gudynas (2011) ha identificado algunos desafíos del buen vivir en el siglo XXI (véase recuadro 29).

Recuadro 29

Desafíos del Buen Vivir

- Imaginarios urbanos del Buen Vivir
Un primer desafío reside en trascender el ámbito indígena y construir nuevos imaginarios urbanos del buen vivir (por ejemplo, abordando los problemas del mal vivir causados por el tráfico vehicular, el estrés laboral y otros males modernos de las ciudades).
- Espacios interculturales
Otra necesidad tiene que ver con la construcción de espacios horizontales de diálogo entre culturas. Pero el Buen Vivir no se limitaría a un proceso de “hibridación” que se sitúa en la frontera entre culturas vaciándolas de identidad. Al contrario, el Buen Vivir refuerza las identidades, al poner en juego lo esencial de las cultura y no sus márgenes.
- Despatriarcalización
Además, un desafío crucial reside en abordar el difícil entramado de la equidad de género en el mundo andino. Lo que sin duda conduce a revisar los patrones tradicionales del chacha-warmi (dualidad y complementariedad de géneros), y su distorsión en el tiempo.

Fuente: elaborado a partir de Gudynas (2011).

El gobierno boliviano del MAS ha realizado esfuerzos paralelos para confeccionar un novedoso **sistema de indicadores del Buen Vivir**. Para ello ha recabado apoyo externo de centros de investigación como la Iniciativa de Desarrollo Humano y Reducción de la Pobreza (OPHI, en inglés), adscrito a la Universidad de Oxford que difunde y aplica las ideas del economista heterodoxo Amartya Sen (Uzeda, 2009).⁴³ Desde marzo de 2011, una comisión intergubernamental debate también las conclusiones de cara a aterrizar el sistema de indicadores para medir el Buen Vivir.⁴⁴

Desde el movimiento de mujeres ligado al feminismo comunitario, se han hecho valiosos **aportes al buen vivir desde la óptica de género**. La activista boliviana Julieta Paredes cuestiona el mismo esquema del Plan de Igualdad de Oportunida-

⁴³ El centro OPHI cuenta con un marco integral de “desarrollo multidimensional”, busca introducir la ética y los valores en la teoría económica, y se concentra en la medición de dimensiones de la pobreza no tomadas en cuenta hasta el momento por los estudios tradicionales (por ejemplo, la violencia, vergüenza, bienestar psicológico, subjetivo, entre otros). Ha trabajado en Bhután, país que no reporta datos de comportamiento del PIB sino el crecimiento de la “felicidad nacional”. Como país budista entiende la felicidad de manera muy amplia (con nueve dimensiones), incluyendo la salud, la educación, o el empleo, pero también la vitalidad cultural, la espiritualidad y las relaciones con la naturaleza. Véase Uzeda (2009), p. 15

⁴⁴ La comisión está formada por Presidencia, Vicepresidencia, Cancillería, Viceministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio del Medio Ambiente, y la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), entre otras instituciones. Desde la cooperación internacional, se está también impulsando investigaciones y talleres y esfuerzos diversos tendentes a confeccionar un sistema de indicadores del Buen Vivir. En ocasiones, las iniciativas han podido pecar de seguir un enfoque muy marcologista.

⁴⁵ Se puede consultar el contenido del Plan en Paredes (2009).

des, y propone reemplazarlo por el Plan de las Mujeres para Vivir Bien. De hecho, la Asamblea Feminista elaboró para el Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales del Ministerio de Justicia (2008), un marco conceptual de políticas públicas para vivir bien. El *Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades: “Mujeres Construyendo la nueva Bolivia para Vivir Bien”* fue finalmente aprobado por el gobierno del MAS con rango de ley en marzo de 2010. El plan sugiere que las políticas públicas deben atender las dimensiones de cuerpo, espacio, tiempo, movimiento y memoria para recoger las necesidades y demandas de las mujeres. Un aterrizaje de esta metodología se encuentra en el *Plan Nacional de Género en Salud*, aprobado por el Ministerio de Salud en 2009.⁴⁵

Más allá de estos esfuerzos valiosos en términos de políticas públicas, se podría concluir que el Buen Vivir es aún un **imaginario sin una expresión cultural consolidada**. ¿Cómo lo representamos? ¿Qué artefactos ha creado el pueblo espontáneamente para expresarlo y cultivarlo? A diferencia del imaginario de la Madre Tierra que ha encontrado imágenes y banderas de enganche, el Buen Vivir no encuentra todavía asideros en el mundo tangible de los artefactos. No hay duda que se trata de otra línea de trabajo para el futuro.

4.3 La extracción como imaginario masculino: ¿cómo se rompe el círculo vicioso?

¿Son las mujeres “más ecologistas” que los hombres? O mejor habría que preguntar: ¿es la cultura femenina más ecologista que la cultura masculina? La pregunta ha traído de cabeza a las feministas que se han desafiado a contestarla. El **ecofeminismo** ha hecho de esta cuestión su principal bandera y razón de ser. La activista india Vandana Shiva propone una respuesta *esencialista*, al afirmar que las mujeres son más ecologistas por naturaleza, porque están más cercanas a lo natural (principalmente porque son las que paren criaturas) y porque son cuidadoras (por naturaleza también). En cambio, existe una posición más *constructivista*, defendida entre otras por la también india Bina Agarwal, que sostiene que las mujeres son más ecologistas que los hombres porque la división sexual y social del trabajo les ha asignado unos roles y tareas que las lleva a estar más cerca de la naturaleza y acusar su degradación (por ejemplo, cuidar a las criaturas, acarrear agua y leña, pesca artesanal, o agricultura de subsistencia).

Desde la óptica del ecofeminismo, las fuerzas que intentan “dominar la naturaleza” y “violar la tierra”, como la ciencia y la tecnología, son proyectos masculinos. El capitalismo financiero, por otro lado, ha terminado de consolidar dicha lógica, al reducir la naturaleza a un conjunto de recursos comerciables en los mercados. Otro proyecto masculino. La intuición y capacidad emotiva propia de la dimensión femenina, en cambio, constituiría el antídoto frente a la destrucción extractivista. Al estar ligadas a los ritmos de la naturaleza, las mujeres tienen tradicionalmente más sensibilidad para comprender la interconexión entre ésta y los seres humanos. En realidad, la **relación de las mujeres con la naturaleza** es una mística recurrente que se manifiesta en el propio idioma: la palabra “naturaleza” es de género femenino, los bosques son “vírgenes” y la tierra es nuestra “madre”. Identificar a las mujeres con naturaleza se volvió un proyecto positivo: las mujeres eran las guardianas del mensaje ecologista, las guardianas de las semillas, del agua o del ganado.

Las aspiraciones colectivas que rodean a la minería están fuertemente influidas por patrones masculinos. De hecho, la expansión de la minería se produce a través de la pervivencia en el tiempo de **imaginarios masculinizados**. Uno de los mitos fundacionales de la minería en Los Andes, el apresamiento y muerte de Atahualpa, recoge una pelea entre hombres —el último inca y el conquistador Pizarro— para reproducir la idea de la supremacía de una cultura sobre otra. El imaginario de las luchas heroicas

de la minería en Bolivia durante los años 50-60 del siglo XX se expresa en matanzas y confrontaciones, así como en rostros de dirigentes sindicales varones. La nueva minería con tecnología punta como acceso al desarrollo a la modernidad se revela también como un imaginario traído por ingenieros varones. Así se impone la idea del progreso como aceptación de un modelo foráneo. ¿Por qué son los hombres más permeables a aceptar lo que viene de fuera, y las mujeres, más guardianas de los valores culturales tradicionales? Es más, la asunción “forzada” de los patrones foráneos de progreso empuja a las mujeres a vivir enormes contradicciones culturales.

Las relaciones de dominación de género no han hecho sino retroalimentar y reforzar la primacía de la extracción sobre la conservación del medio ambiente en un **círculo vicioso**. La subordinación de lo femenino (y, por tanto, de las mujeres) conlleva la subordinación de la ética de los cuidados, lo que da vía libre a los patrones extractivos. Se explica así también porqué en los campos mineros se acentúa la división sexual del trabajo entre hombres y mujeres, o proliferan esquemas patriarcales basados en la prostitución y la violencia de género. Se produce, en realidad, una relación de dominación en cadena, en la que las mujeres, lo femenino y la naturaleza están en posición de subordinación. En suma, las industrias extractivas y las relaciones de dominación de género van de la misma mano.

Para las ecofeministas, la única forma de romper este círculo vicioso pasa por reconocer el potencial de las mujeres como cuidadoras. Para otras feministas, aquellas que luchan por la igualdad de derechos, esta solución es aberrante. Desde su punto de vista, el ecofeminismo estaría falseando estereotipos patriarcales y adueñándose de un insulto antiguo tomándolo como un cumplido (Biehl, 2011). Más allá de estas disputas teóricas, la pregunta inicial sigue en el aire: ¿Cómo se rompe el círculo vicioso entre patriarcado y economía extractiva? Como se ha pretendido demostrar, la pregunta requiere apertura para desafiar a miradas contrahegemónicas.

II. RESISTENCIAS



CAPÍTULO 5

Las resistencias desarticuladas de los movimientos sociales en Perú

5.1 Desarticulación del tejido social en torno a la minería en Perú

Una década después, la sombra del conflicto armado de los 90 se cierne sobre muchas áreas rurales del Perú, en especial, en la Sierra Sur del país. La **violencia política produjo un profundo quiebre en el tejido social**, que ha mediatizado, en gran medida, la articulación de un movimiento social en torno a la minería. Sendero Luminoso y la respuesta estatal distorsionaron las dinámicas sociales y políticas. Muchas organizaciones fueron infiltradas y se cortaron los lazos entre el campo y la ciudad. El conflicto armado originó, además, la estigmatización de los movimientos sociales, al ligar protesta con terrorismo. El Estado y las empresas mineras han utilizado la memoria del conflicto para desprestigiar las protestas, ligándolas de forma malintencionada con grupos armados.⁴⁶

Un segundo rasgo del contexto peruano se debe a la persistencia de un **hondo patrón de racismo interno**, que coexiste con una abierta fractura urbano-rural. La desvalorización campesina se traduce en descrédito de los sistemas andinos de producción frente a medios de vida más “rentables”. Las relaciones entre actores están impregnadas de desconfianza, lo que hace prevalecer los intereses particulares frente a los intereses colectivos.⁴⁷

Como ya se ha señalado, las políticas neoliberales y la privatización de la minería pública han generado una profunda **crisis de autonomía y representatividad de los sindicatos mineros** (véase epígrafe 1.2). Desde la privatización de la minería pública CENTROMIN en 1997, la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú (FNTMMSP) ha vivido una larga etapa de declive. La nueva mine-

⁴⁶ La violencia afectó de forma diferente al norte, sur, Amazonía y costa del país, generando diferentes procesos de desorganización. Un análisis detallado se encuentra en el Informe final de la Comisión de la Verdad (2003), en el tomo VIII, tercera parte, capítulo segundo dedicado a las secuelas sociopolíticas de la violencia.

⁴⁷ La Iglesia Católica ha jugado un papel notable de articulación, no exento de ambivalencia. De un lado, la jerarquía se ha alineado con el modelo neoliberal y sus promesas de alivio de la pobreza. Por otro, los sectores populares han dado apoyo para visibilizar los conflictos socioambientales generados por la minería y acompañar las resistencias.

⁴⁸ La Primera Plataforma de la CNMM demanda mejores condiciones en los campamentos mineros: vivienda digna, agua potable y servicios higiénicos, combustible, hospitales, colegios de nivel secundario, equipamiento de escuelas y bibliotecas, colegios con servicios básicos de agua, luz y baños, transporte y centros deportivos y recreativos. Tras una crisis institucional, la Central se logró rearticular en 2002 con una nueva agenda. Empezó a exigir el respeto al medio ambiente y estableció lazos con las comunidades de los entornos mineros. A diferencia de la federación masculina, las mujeres se han acercado a la problemática del personal minero de contratas y subcontratas (no sindicalizado). Véase García Naranjo (2009), p. 39; y Cuadros (2010).

⁴⁹ Pese a conservar su poder en el norte rural del país, las rondas campesinas sufren procesos de división. Conservan presencia en las comunidades, pero carecen de representatividad regional y/o nacional.

⁵⁰ El proceso de nacimiento de la CONACAMI se puede consultar en Vittor (2009), p. 199.

ría es intensiva en capital, pero precisa menos mano de obra. Además, la tercerización ha roto la articulación sindical. En la actualidad, tan sólo el 30% de los trabajadores mineros son asalariados (el 70% restante trabaja en régimen de subcontratas). La pérdida progresiva de afiliados cuestiona la representatividad de los sindicatos. Este contexto ha conducido también a una atomización de la lucha sindical (por empresa), las reivindicaciones corporativas y la pérdida de una visión nacional. Ante la amenaza de perder el empleo, los sindicatos mineros se han plegado a menudo a los intereses empresariales. En los enclaves mineros como La Oroya, son rehenes de las políticas de las transnacionales mineras y sus argucias para no respetar la legalidad vigente en materia de medio ambiente o salud. La Federación no ha tenido capacidad para incorporar una agenda ambiental a su discurso. De hecho, las agendas ambiental y laboral carecen de puntos de encuentro. En este contexto, la Central Nacional de Mujeres Mineras (CNMM-FNTMMSP) ha mostrado una agenda diferenciada. Sus demandas incluyeron históricamente la mejora de las condiciones de vida en los campamentos mineros, pero también han tenido sensibilidad hacia los temas ambientales y la situación laboral del personal de subcontratas.⁴⁸ Con todo, la lucha sindical ha discurrido por caminos distintos a los intereses de las comunidades afectadas por la minería. Esta divergencia ha propiciado incluso tensos conflictos. En La Oroya, por ejemplo, los sindicatos han boicoteado a las ONG que denuncian el incumplimiento del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) por parte de la minera *Doe Run*.

En los últimos años, el **papel de las federaciones campesinas ha sido débil**, en especial, frente al fenómeno extractivo. Tanto la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), como la Central Única Nacional de Rondas Campesinas (CUNARC) no han sido capaces de canalizar las reivindicaciones de las comunidades campesinas afectadas por la minería. ¿A qué se debe? Una primera explicación se encuentra en la cultura política vigente en el Perú. Los partidos políticos han utilizado tradicionalmente los sindicatos y federaciones campesinas como caja de resonancia de sus candidatos y programas. Algunos dirigentes campesinos utilizan los cargos ejecutivos para candidatear en la política nacional y regional. Esta instrumentalización partidaria de las organizaciones campesinas ha desvirtuado su lógica como espacios sociales. Pero también los pueblos andinos han atravesado procesos históricos de mestizaje, descampesinización y pérdida de identidad, que se han traducido en la dificultad histórica de articular el sur de la Sierra (con una identidad más arraigada) con el centro, el norte y la Amazonía.⁴⁹

En este contexto, el movimiento indígena ha sido el actor más visible en la crítica al modelo neoliberal extractivista, dado que la expansión de estas industrias amenaza sus espacios vitales. Tras varios años de lucha y resistencia, el conflicto de Bagua en 2009 significó un aldabonazo de visibilidad (incluso a nivel internacional). Para algunos analistas, el conflicto contribuyó a romper la invisibilidad de la diferencia étnica en el espacio público (Pajuelo, 2009). De hecho, la aparición de formas de solidaridad con la población indígena, de parte de población mestiza de ciudades intermedias, abrió la puerta a nuevas conductas no racistas y esparció el sentimiento anti-neoliberal por el país. En los últimos años, el movimiento amazónico ha demostrado una voz más consolidada que las organizaciones andinas. A raíz de Bagua, surgió el intento de construir una agenda andino-amazónica, con reuniones entre organizaciones. Sin embargo, en la actualidad tanto CONACAMI como AIDSESEP parecen atravesar una situación de crisis institucional, que impide profundizar en la anhelada articulación andino-amazónica:

- **CONACAMI (*Coordinadora Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería*)**
La incapacidad de las organizaciones campesinas nacionales para responder a los problemas de contaminación minera de las comunidades de la Sierra dio lugar en 1999 al nacimiento de la CONACAMI.⁵⁰ Durante los primeros años, su intervención en varios conflictos mineros cosechó éxitos y levantó muchas expectativas. Sin embargo, la asunción de una agenda indígena en 2003 supuso un viraje institucional que no fue entendido del todo por las bases. La actual crisis de la CONACAMI no

hace sino poner de relieve las limitaciones estructurales del mundo indígena andino (véase recuadro 30).

Recuadro 30

La crisis de CONACAMI

La organización optó por la vía de la reivindicación indígena en el II Congreso (2003), vinculando la lucha minera a la defensa de los derechos colectivos (en especial, tierra y territorio). Esta apuesta indigenista no conectó con muchas comunidades campesinas que no se reconocen indígenas, especialmente en el norte del país (Piura y Cajamarca). Otras zonas de la Sierra Central vieron forzado el giro indigenista, lo que produjo un vacío de representación. El III Congreso (2006) reconoció que el abordaje del tema de género era tangencial y protagonizado por mujeres, que demandaban mayor inclusión en actividades, pero no se logró debatir un enfoque de género que trascendiera el trabajo con mujeres (Cuadros, 2010:13).

La CONACAMI adolece también de **problemas de gobernabilidad interna** debido a liderazgos personalistas, disputas internas en clave electoral regional y desorden administrativo. Durante muchos años, el liderazgo de la Sierra Central no dejó paso a otros liderazgos emergentes, lo que dificultó la renovación de cargos. En el IV Congreso celebrado en abril de 2010, la organización fue incluso incapaz de designar una directiva.

Un último elemento para explicar la crisis se debe a los **efectos contraproducentes de la cooperación internacional**. Los amplios apoyos externos de ONG recibidos por la CONACAMI han alentado la asunción de una función de prestación de servicios. Para ello, se dotó con un equipo técnico propio (asesor legal, técnico de proyectos, comunicador y especialista en género). Este equipo, sin embargo, tiene una capacidad limitada para asesorar al conjunto de comunidades afectadas por la minería en el país. Ante la ineficiencia operativa de CONACAMI, algunas ONG buscaron tercerizar la administración de los proyectos de cooperación para lograr buenos niveles de ejecución financiera. Estas medidas no contribuyeron al fortalecimiento institucional de la organización en el largo plazo. Por último, las ONG financieras han hecho prevalecer, en ocasiones, sus propias visiones. De hecho, han inducido una agenda regional indigenista, que no siempre ha redundado en mayor claridad estratégica y en un proceso de maduración institucional.

Fuentes: Vittor (2009) y Cuadros (2010) y entrevistas.

- **AIDSESP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana)**
En la zona amazónica, la AIDSESP ha demostrado capacidad de representación y articulación. Esta fortaleza institucional se tradujo en un liderazgo natural en el debate sobre el anteproyecto de Ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas durante 2009 y 2010. Tras el Baguazo, la organización pareció replegarse en problemas internos. La retirada de su líder Pizango al extranjero, la persecución política a dirigentes y los rumores de malversación de fondos hicieron mella en la federación. Con todo, los pueblos indígenas amazónicos y sus organizaciones de primer nivel mantienen una fuerte presencia en las regiones y su aspiración de representación nacional.

5.2 Movimientos locales y regionales con tendencia a la atomización

- >>> *Febrero 2001*. Tambogrande. *Manhattan Minerals* quiere desplazar el pueblo para explotar un yacimiento de oro valorado en \$Us 1.000 millones. 27 y 28 de febrero. Paro y marchas que terminan con 15 habitantes y 25 policías heridos. Saqueo nocturno del campamento minero, con daños estimados \$Us 600.000 y 56 procesos penales abiertos contra dirigentes. 31 marzo. Asesinato de Godofredo García, presidente de la Asociación de Productores de Mango. 2 junio 2002. La alcaldía convoca una consulta vecinal que rechaza la minería con el 98,6% de votos.
- >>> *Septiembre 2004*. Cajamarca. Proyecto minero Quilish. 4,2 millones de onzas de oro en juego. Tras varios meses de movilizaciones, el Comité Cívico y el Frente de Defensa convocan paro regional el 15 de septiembre. Multitudinaria marcha ciudadana. El campo y la ciudad juntos. 10:00 AM. La plaza de armas rebosa por los cuatro costados en defensa del Cerro Quilish (fuente de agua de la ciudad): «¡Escucha Yanacocha, Cajamarca se respeta!». Ministerio de Energía y Minas retira la autorización a Yanacocha para continuar la explotación del cerro. Se levanta el bloqueo de la carretera. Abrazos, lágrimas, Cajamarca es el primer pueblo que hace retroceder a la *Newmont* (dueña de Yanacocha), la compañía de oro más poderosa del mundo.
- >>> *Septiembre 2007*. Piura. Proyecto Río Blanco. Tras varias marchas y asambleas, y la insistencia de las rondas campesinas y los frentes de defensa, los alcaldes provinciales de Ayabaca y Huancabamba y el alcalde distrital de Pacaipampa deciden convocar una consulta vecinal sobre el proyecto minero. 16 de septiembre. Desde las 7:00 AM los comuneros abarrotan la entrada del Estado Municipal Pampa de Lobo. Pese a las amenazas vertidas desde el gobierno, la consulta fue un éxito de participación. 17.971 votos registrados en las tres circunscripciones. 57,25% de participación. 1,38% votos afirmativos. 98,62% NO a la mina.
- >>> *Junio 2009*. Loreto. Bagua. Las organizaciones awajún, wampis y ashánicas mantienen dos meses de paro indefinido contra los decretos legislativos del TLC con EE.UU. que atentan contra sus derechos como pueblos indígenas. 5 junio. 5:30 AM. 639 efectivos de la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) inician el desalojo de la carretera Fernando Belaúnde en el tramo conocido como la “Curva del Diablo”. Una sucesión de enfrentamientos deja un saldo de 34 personas fallecidas. Guerra de cifras: 10 indígenas muertos y más de 20 policías.
- >>> *Abril 2011*. Islay. Proyecto minero Tía María. En 2010, el MEM encargó a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) una valoración del Estudio de Impacto Ambiental. La UNOPS reveló 138 observaciones y recomendó postergar su aprobación, pero la transnacional *Southern Cooper* insiste en llevar adelante el proyecto. El Frente de Defensa de Islay marcha hacia el gobierno regional para exigir la intangibilidad de las lomas de la localidad. Se radicalizan las protestas. La brutal represión policial provoca un muerto y decenas de heridos. 12 abril. El gobierno central decide finalmente cancelar el proyecto Tío María.
- >>> *Junio 2011*. Puno. “El aymarazo”. “Los aymaras de pie”. Son algunos de los titulares que abren las portadas de la prensa. Durante 50 días el Frente de Defensa de Recursos Naturales bloquea caminos y realiza un paro indefinido contra la minera Santa Ana (subsidiaria de *Bear Creek Mining*) en Huacullani. El proyecto atenta contra el Cerro Kaphia y la vocación agrícola de la zona sur de Puno. 29 mayo. Más de 500 pobladores toman la mina Poderosa en Orurillo. Las protestas, huelgas y bloqueos se intensifican por todas las provincias, multiplicando las pérdidas en el comercio. 27 junio. El ejecutivo central accede a las demandas antimineras.

Este podría ser un buen resumen de la resistencia social contra la minería en Perú. Una sucesión de conflictos que sacude incansablemente la geografía del país andino. Las portadas de algunos periódicos se inundan de imágenes impactantes y declaraciones elocuentes. Marco Arana (Cajamarca), Magdiel Carrión (Ayabaca), Alberto Pizango (Loreto y Amazonas), Pepe Julio Gutiérrez (Islay), Wálter Aduviri (Puno)... **Los movimientos locales y regionales** han surgido históricamente de forma reactiva a los conflictos. Los *líderes* se suceden como la pólvora, brillan un tiempo con luz propia, y luego pasan a segundo plano. Ninguno de ellos ha logrado aún una efectiva articulación política nacional. Algunos lo intentan como Marco Arana, sacerdote y líder del partido político *Tierra y Libertad*, o Magdiel Carrión, coordinador nacional de CONACAMI, pero no les resulta fácil articular agendas nacionales.

Históricamente, los procesos electorales locales y regionales han operado como factor disgregador de la movilización social, ya que la designación de candidatos políticos y la instrumentalización de los movimientos marcaban con frecuencia las estrategias de alianzas. Y claro, **los transnacionales** saben explotar los flancos débiles. En las regiones mineras, impulsan una depurada estrategia de desarticulación del tejido social, que distorsiona las relaciones entre Estado y sociedad civil (véase epígrafe 1.2.4). El Grupo Norte, por ejemplo, ha diseñado una estrategia activa de enfrentamiento entre comunidades, a través de nuevos instrumentos: la utilización de cordones sociales de seguridad para preservar sus intereses, o la promoción de marchas sociales a favor del empleo y la paz. El resultado de su política de responsabilidad social y sus acciones de infiltración institucional es una **sociedad dividida entre actores pro y anti-mineros**. Este clima de extrema polarización propicia, a su vez, el posicionamiento de mensajes extremadamente simplificados, como el que atribuye a la minería “desarrollo y empleo” para las regiones. Además, la falta de alternativas económicas y la enorme asimetría de recursos entre unos y otros favorecen la difusión de mensajes pro-mineros.

¿Es posible hacer un balance de los movimientos peruanos? Como ha señalado el investigador inglés Bebbington (2007b:48), el aporte más importante de los movimientos sociales peruanos ha sido “politizar” el desarrollo minero mediante la creación de esferas públicas a nivel “glocal”, en las que las actividades extractivas se volvieron un tema de debate público.⁵¹ Y a nivel más amplio, los análisis han coincidido en señalar la **ausencia de un sujeto político**, capaz de recoger la problemática minera y articularla en una agenda nacional (urbano-rural).

⁵¹ La “glocalización” se refiere al proceso por el cual los actores sociales y/o económicos “piensan globalmente para actuar localmente”.

Desde la victoria de Humala en junio de 2011, algunas cosas parecen haber cambiado. La articulación nacional ha sido asumida como apuesta política por organizaciones y movimientos sociales, lo que ha abierto nuevos espacios de protesta. En febrero de 2012, rondas campesinas, frentes de defensa y otras organizaciones promovieron la **I Marcha Nacional por el Agua** desde Cajamarca hasta Lima, pasando por distintas regiones y municipios afectados por los impactos de la industria minera. A su llegada a la capital, tuvo lugar una histórica y masiva movilización que reunió a sindicatos, estudiantes, colectivos ambientalistas, organizaciones feministas, defensores y defensoras de derechos humanos que apoyaron el reclamo del derecho humano al agua. Al final de la marcha, el recién creado Tribunal Nacional de Justicia Hídrica hizo entrega a congresistas de dos propuestas de ley para: 1) declarar libres de actividad minera las cabeceras de cuenca; y 2) prohibir el uso de cianuro y mercurio en la minería.⁵²

⁵² El enorme eco que concitó a nivel nacional, unido al importante rechazo generado por el megaproyecto minero Conga en Cajamarca, han encendido las alarmas del sector privado, que ve peligrar su actual inversión y las ganancias previstas y comprometidas. En este escenario, el sector privado, ha desplegado una intensa batería de estrategias de presión e incidencia hacia estamentos gubernamentales a nivel nacional.

La marcha se encuadró en la larga serie de tentativas de articular un sujeto social de resistencia capaz de aunar agendas ambientales de distintas zonas del país. Sin embargo, y a diferencia de otros intentos, originó una apropiación inusitada por parte de organizaciones de todo el país, y Lima en particular. Para consolidarse como sujeto político en Perú es necesario ligarse de algún modo a las clases medias de Lima. Pero existe una enorme brecha entre la gran capital y el resto del país, como lo puso de relieve la votación presidencial de junio 2011. Lima engulle, absorbe y transforma las identidades. Alberga también una clase media emergente (migrantes de primera o segunda generación) con sensibilidad hacia las problemáticas serranas y amazónicas, pero sin suficientes espacios de expresión y acción política.

⁵³ Se ha extendido una idea generalizada de que los conflictos no tienen la misma tipología que hace unos años, lo que requiere, desde los movimientos sociales y organizaciones afines, nuevas estrategias para entenderlos y acompañarlos. La adecuada gestión de conflictos sociales relacionados con las industrias extractivas sigue siendo una asignatura pendiente del gobierno peruano, con independencia de su posicionamiento e ideología.

⁵⁴ En primer lugar, las empresas mineras no reconocen a las mujeres como interlocutoras válidas para negociar con la comunidad. De igual modo, las mujeres indígenas sufren discriminación cuando asisten a las oficinas de la administración pública a demandar un servicio, exigir un derecho o interponer una denuncia.

Otro factor nuevo es el rol que juegan algunos gobiernos regionales. Amparado en un amplio respaldo de la población rural, el ejecutivo de Santos en Cajamarca decidió, a fines de 2011, sumarse al rechazo que motiva el proyecto de Minas Conga en un pulso sin precedentes al gobierno central y empresas transnacionales. Este nuevo escenario abre un debate “dormido” hasta la fecha, relacionado con la **descentralización y competencias regionales para gestionar recursos y territorio**. El debate trasciende incluso el nivel regional para bajar hasta las comunidades locales, que reivindican que el derecho a la consulta conlleve la capacidad de decidir. Este contexto, pese a que prefigura un aumento de la conflictividad, abre también la puerta a un escenario de dinámica positiva de conflictos, en el sentido de profundizar y descentralizar la democracia.⁵³

5.3 ¿Cuál es el papel de las mujeres en las resistencias peruanas?

“Hay que saber cuáles son las prioridades, compañeras. Eso de la violencia de género es una agenda occidental. La prioridad es la criminalización contra la protesta”. Las palabras han sido atribuidas a un conocido dirigente de la CONACAMI, con motivo de la reunión preparatoria para una cumbre de pueblos indígenas. La anécdota sirve para describir la situación de **discriminación que viven las mujeres** también al interior de las luchas mineras. Como ha señalado el estudio de impactos mineros en Las Bambas y Tintaya impulsado por Julia Cuadros (2010:35-39 y 56), las mujeres son discriminadas, tanto por el hecho de ser mujer como por su condición indígena y/o campesina. La discriminación se produce desde diversos ámbitos e instituciones, ya sea desde las empresas mineras, las oficinas públicas o las propias organizaciones sociales.⁵⁴ La discriminación encierra una problemática múltiple. Por un lado, no se reconocen los derechos de las mujeres y, por otro, las propias mujeres desconocen sus derechos. Cuando los conocen mínimamente, no los exigen por temor a represalias, vergüenza o baja autoestima. Las mujeres tienen un acceso desigual a la propiedad de la tierra o a los servicios educativos. Además, las zonas mineras registran altos índices de violencia de género. Una última dimensión de la discriminación alude al déficit de participación política de las mujeres en las comunidades andinas y su exclusión de las consultas realizadas por la industria minera.⁵⁵

En este sentido, un factor dinamizador ha sido la constitución de **asociaciones de mujeres afectadas por la minería**, tales como la Asociación de Tintaya (Cusco), o las asociaciones distritales de Challhuahuacho, Tambobamba en Las Bambas (Apurímac). Creadas para recibir beneficios de las empresas mineras, las asociaciones han contribuido también a mejorar la participación política de las mujeres, especialmente en los procesos de consulta y diálogo minero (Cuadros, 2010:34). En la consulta celebrada en Tambogrande (Piura) en 2002, las mujeres desempeñaron un papel importante, lo que dio lugar un año después a la creación de la Asociación Distrital de Mujeres de Tambogrande (ADIMTA). La Asociación de Mujeres de Tintaya se incorporó a la Mesa de Diálogo con la minera Xstrata a fines de 2007, lo que permitió visibilizar el problema de la violencia sexual contra las mujeres (expresado en 4 casos y 2 embarazos). A nivel nacional, la FEMUCARINAP (Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú) ha tratado de recuperar el movimiento organizativo de mujeres y **romper con la cultura asistencialista** de los comités del Programa Vaso de Leche. Una tarea nada fácil tras la huella que dejaron los diez años del gobierno de Fujimori.

⁵⁵ La mayor parte de las consultas realizadas por la industria minera adolecen de un sesgo de género, ya que no incluyen la participación de las mujeres. En muchos casos, la consulta se produce a través de organizaciones mixtas, en las que las mujeres no asumen cargos de responsabilidad. Además, no identifican demandas diferenciadas entre hombres y mujeres. Véase Cuadros (2010), p. 54.

La pregunta sigue en el aire. ¿Qué papel juegan las mujeres en la resistencia? Una buena pregunta para la que aún se requiere sistematizar experiencias e impulsar más investigaciones. En 2010, la FEPROCCA de Piura se animó a sistematizar siete años de luchas de las comunidades de Ayabaca contra el proyecto minero de *Río Blanco Copper* (antes Majaz), que amenazaba sus páramos, bosques de neblina, y su medio de vida basado en la agricultura.⁵⁶ Con la ayuda del colectivo PDTG, recuperaron la memoria de las luchas, realizaron entrevistas y recopilaron fotografías emblemáticas de las marchas, las detenciones ilegales, los funerales o la consulta vecinal de 2007. El fruto del trabajo se plasmó en un documento de bella factura, cuyo contenido se divide en tres partes: crónica de la lucha, visión de las comunidades y entrevista al líder. Luminoso y completo, con un solo pero: Apenas una página y media dedicada al papel de las mujeres en la resistencia.⁵⁷ Es decir, el **rescate de las luchas con mirada de género sigue siendo un reto pendiente**. Además del consabido rol de “primera línea” que juegan a menudo las mujeres en los enfrentamientos con la policía, los testimonios recogidos en Ayabaca sugieren otros roles en clave interna que no dejan de ser subsidiarios (FEPROCCA, 2010:149):

“Acá las mujeres participan en las reuniones para poner orden; a veces, cuando hay reunión y hay bastante gente se ponen a conversar o dormir y no prestan atención; por eso el comité femenino –como se le llama acá a la organización de mujeres de rondas– está cuidando el orden en una esquina, en otra esquina, así para que guarden silencio, que no vayan a salir afuera, para que pongan atención a la reunión. Poner orden.”

(Floresmila Chanta, comunidad de Yanta)

5.4 Las redes peruanas de ONG con vocación de actores sociales en minería: sus aportes y límites

A diferencia de Bolivia, las ONG peruanas se han articulado en redes nacionales como la Red Muqui o la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Frente a unas organizaciones sociales débiles, desarticuladas o en crisis de liderazgo, las ONG ambientales y de derechos humanos han jugado un **rol protagónico en las resistencias mineras**, capitalizando las destrezas técnicas para hacer análisis, incidencia y difusión pública:

- **Red Muqui** (www.muqui.org)
El muqui es un duende de la mitología andina que habita en las minas, y ha dado su nombre a la red formada por más de 20 organizaciones que, repartidas por todo el país, trabajan en minería y derechos humanos. Surgió en 2003 desde el ámbito social de la Iglesia, a partir de la articulación del Frente de Defensa de Tambogrande. Se nutre de los equipos técnicos de las diferentes ONG que la integran para poder abordar y compartir un análisis en todo el país. Desde la óptica de la clase media que integra las ONG, la Red aborda una visión regional de las problemáticas de la minería, identificando, por ejemplo, los problemas de minería informal en el norte, o los de minería y salud en los yacimientos históricos de la Sierra Central (La Oroya). Cuenta con un equipo técnico propio. La Red ha centrado su labor de reflexión e incidencia política en cinco temáticas: agua, derecho a la consulta, minería artesanal e informal, ordenamiento territorial y, más recientemente, la promoción de alternativas de desarrollo en regiones mineras. Una de sus principales limitaciones se refiere precisamente a su labor de comunicación e incidencia política.⁵⁸
- **Coordinadora Nacional de Derechos Humanos**
Por su parte, la Coordinadora vigila las violaciones de derechos cometidas por las industrias extractivas y protagoniza los esfuerzos para luchar contra la criminalización de la protesta a nivel de incidencia en leyes. Desde hace algunos años, la Coordinadora se ha emplazado a ampliar la agenda de derechos humanos, desde los civiles y políticos hacia los económicos, sociales, culturales y ambientales (DES-

⁵⁶ La empresa Río Blanco Copper pertenece al consorcio chino Zijin. En abril 2007 adquirió el proyecto a la empresa minera Majaz (subsidiaria de la inglesa Monterrico Metals). La empresa Zijin posee una larga lista de desastres ambientales y violación de derechos humanos en China. Véase Gómez (2010).

⁵⁷ De las 21 personas entrevistadas en la sistematización, 5 fueron mujeres. El documento reúne los testimonios de acuerdo a 14 ejes transversales: agua, lucha, territorio, rondas campesinas... Las mujeres es uno de ellos.

⁵⁸ La Red ha tenido algunos desencuentros estratégicos con la CONACAMI en los temas de defensa legal y judicialización de demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

⁵⁹ Esta línea de trabajo se ve reforzada por el trabajo de la Defensoría del Pueblo, que ha extremado su monitoreo a las industrias extractivas. En los últimos años, ha publicado documentos de trabajo como el dedicado a “Minería, desarrollo sostenible y dchos. ciudadanos” (2005), e informes especiales relativos a conflictos socioambientales por actividades extractivas (2007), el derecho a la consulta de pueblos indígenas (2009) o el conflicto de Bagua (2010).

CA). Fruto de esa apuesta, se han incorporado ONG ambientales a la Coordinadora, incluso en sus órganos de gobierno (caso de Grufides).⁵⁹ El servicio legal de la Coordinadora lidera los recursos de anticonstitucionalidad interpuestos a los decretos de criminalización del Gobierno de Alan García.

Prueba de la buena coordinación interinstitucional es el **Observatorio de Conflictos Mineros del Perú (OCMIP)**. Conformado por tres ONG ambientales (Cooperación, Grufides y Fedepaz), constituye una valiosa herramienta de análisis en torno a conflictos mineros. Se ha convertido además en altavoz de luchas, reflexiones y reivindicaciones en términos de políticas públicas. El Observatorio adopta igualmente un enfoque de casos emblemáticos. Pretende ir más allá de lo meramente informativo y publica informes de análisis a partir de una selección regional de conflictos. Para la difusión de información utiliza el formato de informes de análisis (en versión papel y electrónica). A diferencia del Observatorio Boliviano de Conflictos Mineros (OBCOM), el OCMIP está concebido como un instrumento y no integra organizaciones sociales en su composición.

¿Cuál ha sido la mayor limitación de las ONG? Para el investigador británico de la Universidad de Manchester, Anthony Bebbington (2009a:43), las ONG peruanas han logrado influencia a nivel local e internacional, pero mucha menos a nivel nacional. De hecho, las redes de ONG en torno a la minería **no han logrado un enganche con la opinión pública**. Las ONG hacen uso de canales estrechos y autorreferenciados de difusión y debate. Las agendas mínimas de incidencia no logran traspasar el umbral de los

Recuadro 31

Campaña “Alternativas al extractivismo”

Con motivo de la campaña electoral de 2011, las redes de ONG activas en derechos humanos y medio ambiente se desafiaron a demandar un cambio de rumbo en la política extractiva. Reunieron recursos para realizar una modesta campaña en prensa. Y lanzaron una **agenda mínima de cinco** puntos durante el mes de febrero en las páginas del diario *La República*:

- Una ley de consulta previa, libre e informada
- Discutir en serio dónde sí y dónde no debe haber actividades extractivas: debemos ordenar el uso de nuestro territorio
- Que se evalúe rigurosamente la viabilidad socio-ambiental de las políticas de promoción de inversión y explotación de los recursos naturales
- Un mayor consumo de energías renovables de mínimo impacto: Conservemos la Amazonía para las futuras generaciones
- Que todas las empresas mineras se comprometan a pagar regalías, que ya no utilicen más beneficios tributarios y que paguen un impuesto a las sobreganancias

La agenda incorporaba demandas de las organizaciones sociales, reivindicaciones de los gobiernos regionales, e incluso guiños a la población urbana, como la defensa de la Amazonía y la promoción de energías renovables. A fines de marzo, dos semanas antes de la primera vuelta electoral, la red lanzó un **foro público** sobre Alternativas al Extractivismo (<http://alternativasalextractivismo.blogspot.com>), con la participación de expertos y representantes de partidos políticos, tales como Alianza por el *Gran Cambio-PPK* (Kuczynski), *Gana Perú* (Humala), *Perú Posible* (Toledo) y *Solidaridad Nacional* (Castañeda). Los organizadores del evento propusieron una amplia batería de preguntas. Sin embargo, los candidatos utilizaron el espacio para vender la imagen verde de sus programas, sin entrar a discutir ideas ni propuestas entre ellos. ¿Tan difícil es debatir? Los representantes de *PPK* y *Gana Perú* se enzarzaron en una agria polémica a cuenta de si las comunidades nativas eran o no actores pre-modernos. Ése fue el principal debate de la noche, que evidenció una notable distancia de la clase política con las preocupaciones ambientales. La campaña tuvo cierto eco: el impuesto a las sobreganancias mineras fue asumido por *Gana Perú* (Humala) en su programa electoral y se convirtió en tema de debate público. Sin embargo, fue una gota en el océano mediático, dominado por los mensajes pro-mineros.

papelógrafos y las campañas de prensa experimentan enormes dificultades para hacer llegar sus mensajes (véase recuadro 31). Los comunicados, ruedas de prensa, o los seminarios de expertos, se antojan métodos desfasados de comunicación e incidencia en el nuevo contexto minero peruano. Mientras tanto, las transnacionales y el gobierno peruano despliegan sus potentes aparatos de comunicación. No lo hacen sobre ideas ni argumentos racionales sino que apelan a los imaginarios colectivos. “Perú en el mundo”. “Con buena minería, el Perú siempre gana”. En definitiva, se trata de una lucha profundamente asimétrica. El contexto tampoco ayuda. No existe una cultura arraigada de derechos en el Perú.

El neoliberalismo se ha instalado con tanta fuerza en el imaginario popular que los derechos individuales tienen primacía sobre los derechos colectivos.

Con todo, muchas ONG hacen un buen trabajo de acompañamiento de los movimientos locales de resistencia. Tal vez por eso se han intensificado las **campañas de persecución y descrédito** contra ellas, con acusaciones infundadas de narcotráfico y vínculos terroristas. El conflicto de Bagua en 2009 fue aprovechado por el gobierno para acentuar su política de criminalizar la protesta y perseguir a las ONG que apoyaban a AIDSESP. Las cuentas de Intermón-Oxfam y Entrepueblos, entre otras instituciones de cooperación, fueron fiscalizadas con celo por el gobierno peruano. Pero tal vez el caso más delicado sea el de la ONG Grufides, víctima de espionaje, atentados y acciones de desinformación y difamación (véase recuadro 32). La Asociación Guarango recogió los hechos en el documental “Operación Diablo” dirigido por la documentalista canadiense Stephanie Boyd (véase trailer en www.guarango.org/diablo). En febrero de 2011, el documental ganó el premio *The International Human Rights Film Award*, otorgado por la Fundación *Cinema for Peace* de Alemania, en un evento paralelo al Festival de Cine de Berlín.

Recuadro 32

Espionaje a Grufides

En un edificio de seis pisos cercano a la ONG Grufides, la policía desarticuló en noviembre de 2006 una red de espionaje y requisó equipos informáticos, abundante material fotográfico, reportes y disfraces. En la organización trabaja el sacerdote Marco Arana, apodado “El Diablo” por los espías por defender los derechos de las comunidades campesinas frente al atropello minero. La investigación del diario La República reveló que los espías había sido pagados por C&G Investigaciones, empresa del excapitán de la policía César Cáceres subcontratada, a su vez, por la empresa de seguridad Forza. La misma empresa contratada por la minera Yanacocha para proteger sus instalaciones.

Fuente: La República, 3 diciembre 2006 y Documental “Operación Diablo”, 2009.

Las tensiones al interior del “proceso de cambio” en Bolivia

6.1 El alejamiento de los sectores sociales del MAS: ¿distancia sin rupturas?

Dicen que no hay idilio político que dure más de cinco, seis, ocho años a los sumo. El poder desgasta, y más a un gobierno de los movimientos sociales. Ciertamente, la **primera legislatura del MAS** (2006-09) contó con un apoyo popular masivo. El escenario de enfrentamiento con las élites del Oriente contribuyó a cohesionar el movimiento indígena y campesino alrededor del MAS. El mayor espacio simbólico de dicha articulación fue, sin duda, la Asamblea Constituyente (2006-07), en la que el Pacto de Unidad de las organizaciones sociales logró plasmar demandas y conquistas históricas en la Nueva Constitución Política del Estado, aprobada por referéndum en enero 2009. Los momentos de máxima dialéctica con la derecha (2007-08) alentaron un tipo de movilización social por oposición, cuya fortaleza residía en la activación de flujos altamente reversibles entre las organizaciones sociales y el propio MAS. De este modo, las fronteras sociales y políticas basculaban en un perímetro permeable de acuerdo a la coyuntura. Por su parte, la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), a modo de Estado Mayor de los movimientos sociales, garantizaba lectura política, reacción y capacidad de convocatoria.

La contundente victoria de Evo Morales en diciembre 2009 (con un 64% de los votos) abrió, sin embargo, una nueva etapa política. La derrota de la denominada “media luna” supuso un punto de inflexión en el “proceso de cambio”. Diluido el enemigo externo, las organizaciones sociales se replegaron hacia sus demandas corporativas y sectoriales, y la **segunda legislatura del MAS inauguró un escenario de conflictividad social**. Durante 2010, las organizaciones sociales afines al gobierno ampliaron sus demandas sectoriales y los conflictos con el gobierno se sucedieron sin solución de continuidad: el gremio de maestros (abril), la Central Obrera Boliviana (mayo), Confederación Indígena del Oriente de Bolivia (junio), el Comité Cívico de Potosí (julio), la asociación de coccaleros de los Yungas (septiembre)...⁶⁰ El Pacto de Unidad dejó de ser operativo y apenas se rearticuló para presentar anteproyectos conjuntos de ley en casos muy específicos (tales como la Ley del Racismo y de la Madre Tierra), pero se produjo un repliegue general de las organizaciones hacia sus intereses sectoriales.

⁶⁰ De acuerdo a los informes de conflictividad social en Bolivia de la Fundación UNIR (2011), los conflictos pasaron de 249 a 589 entre el 1er y 2do semestre de 2010. En el 2do semestre, los principales temas conflictivos fueron las medidas económicas/situación económica (19%), la gestión administrativa (15%) y las demandas laborales (14%).

El nuevo contexto puso a prueba la capacidad negociadora del gobierno, que en algún momento se enrocó en posiciones maximalistas. En palabras del vicepresidente García Linera, el ejecutivo era el único que podía garantizar el bien común ante la deriva de las organizaciones sociales. Muy a su pesar, el gobierno debía tomar momentáneamente las riendas del proceso a la espera de que las organizaciones recuperaran la cordura y la mirada nacional. ¿Ha raptado el gobierno la legitimidad de los movimientos sociales? ¿La agenda de conflictos ha puesto al gobierno a merced del ritmo y compulsión reivindicativa de las organizaciones sociales? Lo cierto es que los **golpes de autoridad se combinan con espacios de consulta** a los movimientos sociales, incluso con notables rectificaciones como la que siguió a la crisis del gasolinazo en diciembre de 2010. “Gobernar obedeciendo al pueblo”, insiste la propaganda oficialista. Una parte significativa de las clases medias se ha alejado de esta consigna, que sigue concitando apoyo entre los sectores populares. La falta de un rumbo definido de parte del gobierno en 2011-12 también ha desencadenado un quiebre del Pacto de Unidad y crisis interna en algunas organizaciones sociales. La división generada ha sido aprovechada por el propio gobierno para “enrocarse” en posturas que no tienen la legitimidad social mayoritaria pero sí cuentan con el beneplácito y apoyo de representativos sectores sociales, campesinos e indígenas.

Otros factores han añadido más complejidad al proceso. El Gobierno del MAS abrió también la puerta a que las organizaciones sociales ejercieran tareas de poder y participasen en el aparato público. Fruto de este nuevo rol, el “proceso de cambio” terminó por transformar la cultura política de las organizaciones sociales, así como la propia dinámica de movilización social. El reparto de “pegas” (puestos de trabajo) y cuoteo de cargos entre dirigentes nacionales de organizaciones campesinas (en especial, de la CSUTCB, las Bartolinas y la CNCIB) ha podido actuar como “pegamento” del MAS (Do Alto y Stefanoni, 2009), pero también ha generado una suerte de **descabezamiento de las organizaciones campesinas**, en términos de liderazgos políticos. ¿En qué se manifiesta? En una brecha creciente entre dirigencias y bases, así como en una insuficiente canalización de demandas:

- El alineamiento de los secretarios ejecutivos de las confederaciones con las posiciones oficiales del MAS ha socavado la capacidad de análisis crítico. ¿Dónde queda la capacidad de hacer propuestas creativas? De igual modo, los dirigentes abandonan los reclamos incómodos hacia el ejecutivo (tales como el derecho a la consulta previa), y bajan el listón del control social.
 - A nivel interno, la participación de dirigentes en puestos de gobierno ha dejado a las organizaciones sociales sin liderato en términos de agendar, demandar y presionar. Por ejemplo, las centrales campesinas de Oruro y Potosí, que padecen problemas de contaminación minera, no encuentran eco a sus preocupaciones en las matrices nacionales.
 - Los dirigentes intermedios y regionales, por su parte, se han quedado en “tierra de nadie”. Participan en actividades de formación y debate (promovidas por ONG), que no tienen, sin embargo, repercusión orgánica.
 - Por otro lado, los cargos electos del MAS se han distanciado de sus organizaciones de procedencia. A menudo, son asimilados por la maquinaria del MAS y dejan de responder orgánicamente a las organizaciones.

¿Y las organizaciones sociales que trabajan en el sector de la minería? La evolución de los **sindicatos mineros** en los últimos años ha motivado que sus demandas cobren un tinte salarial, dejando a un lado las reivindicaciones de clase ligadas al movimiento obrero. La FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia) atraviesa un proceso de transición y recomposición interna, ligado a la emergencia de nuevos estilos de liderazgo y negociación con el gobierno, el recambio generacional de dirigentes y la transformación sociológica de las bases. Al igual que en Perú, el tema ambiental tiene dificultad para entrar en la agenda sindical.

Por su parte, el **sector cooperativista** constituye la retaguardia de los movimientos sociales. El sector ha acumulado un considerable poder económico y político en el actual “proceso de cambio”. El auge de la cotización de los minerales en los últimos años ha rendido pingües ganancias a los socios de las cooperativas. Además, las diputaciones y senadurías en manos de los cooperativistas garantizan al sector una ascendencia e influencia directa en el MAS. ¿Son los socios cooperativistas los nuevos “baroncitos” de la minería? ¿Hasta cuándo postergar un debate público sobre el modelo cooperativista y sus consecuencias sociales y ambientales? Su actitud corporativa sugiere que operan como *lobby* para mantener el *status quo* de la minería y frenar las reformas legales. El investigador del CEJIS, Miguel Vargas (2009a:19) ha descrito su papel en el debate sobre el anteproyecto de ley minera:⁶¹

“La inclusión de un título especial de derechos de las Naciones y Pueblos Originarios y comunidades campesinas en el anteproyecto de Ley de Minera, discutido entre el Ministerio de Minería y cooperativistas mineras, mineros sindicalizados y empresarios mineros, se ha visto paralizada por la franca oposición de los cooperativistas a las modificaciones propuestas (...) bajo el argumento de que éstas imposibilitarían el desarrollo de sus actividades”.

En definitiva, el “proceso de cambio” atraviesa una trama confusa de alianzas, desencantos, desertiones y reencuentros. Pese a la escenificación permanente de crisis, algunos analistas han indicado que se trata de un proceso inclasificable en el que las rupturas definitivas con el MAS parece que se acercan pero no terminan de materializarse. La opinión pública salva la figura de Evo Morales, atribuyendo los errores a sus asesores y ministros. Y la reconciliación termina restañando heridas y puentes. Para el investigador Jorge Viaña (2010), esa relación de *continua interlocución y ruptura* entre el gobierno y las organizaciones sociales se caracteriza por un claro tutelaje estatal y actos de violencia simbólica hacia los disidentes:

“Se da una ruptura, incluso se llama «traidores» a los funcionarios del gobierno, pero luego se retoma esta tensa relación de interlocución y rupturas relativas, que se mantienen en un cierto nivel de conflictividad, nunca se da una ruptura definitiva o de más largo plazo. Pero parecería que tampoco se da un proceso de cooptación total de las organizaciones (...) los despliegues autodeterminativos (...) se dan siempre en medio de los permanentes e incesantes actos de violencia simbólica y tutelaje de las estructuras más altas de las jerarquías del aparato MAS y del núcleo dirigente del ejecutivo”.

6.2 Dispersión de esfuerzos y redes paralelas de ONG en minería: ¿un reino de taifas?

El florecimiento de ONG durante la época neoliberal (1985-2005) habla por sí mismo de una sociedad impotente, incapaz de canalizar aspiraciones sociales, políticas y económicas. En este periodo, una gran parte de las ONG bolivianas se hizo funcional al neoliberalismo y asumió roles de protagonismo social que no le correspondían. La irrupción del “proceso de cambio” ha sido tan contundente que ha **interpelado profundamente el rol de las ONG**. ¿A quién representan? ¿Cuál debe ser su rol tras el regreso del Estado boliviano? ¿Por qué han perdido prestigio social?⁶²

Algunas instituciones han tratado de eludir los cuestionamientos. Financiadas con fondos norteamericanos, una gran parte de las **ONG ambientalistas** ha contribuido a construir una agenda sesgada hacia los temas de conservación, forestería comunitaria, o servicios ambientales en áreas protegidas. Es el caso de Conservación Internacional, la Sociedad Mundial de Conservación (WCS), la Fundación Puma, la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) o Wolfor, entre otras. Se presenta el medio ambiente como una

⁶¹ El largo e interminable debate sobre el anteproyecto de la Ley Minera se ha caracterizado por una suerte de “endogamia minera”, que ha restringido e impedido la participación de otros ministerios o sectores sociales y campesinos afectados por la actividad minera.

⁶² Una amplia reflexión sobre la crisis de las ONG y sus roles en el “proceso de cambio” boliviano se encuentra en Rodríguez-Carmona (2009), pp. 285-94. El accionar de algunas ONG especializadas en el área de industrias extractivas suscita interrogantes. ¿Por qué algunos investigadores de ONG se empeñan en aparecer como los nuevos sacerdotes del conocimiento? ¿Se han convertido las industrias extractivas en una hacienda de expertos?

preocupación urbana ligada a la conservación (control de especies en extinción, reservas de fauna y flora, inventariado de biodiversidad, investigación de riqueza genética). Configurado como reducto de USAID, este sector ha atraído a aquellos profesionales e intelectuales que toman la bandera de lo ambiental como espacio “no político” o no politizable (para evitar así tomar posición explícita en el proceso de cambio). Sin embargo, el enfoque ha contribuido a invisibilizar las violaciones de derechos humanos que generan las industrias extractivas (casi siempre en manos del capital transnacional). Al presentarse la conservación como enfoque despolitizado del desarrollo, se esconde que el negocio del medio ambiente está al servicio de intereses empresariales transnacionales. No hay que olvidar que la intervención de estas ONG en áreas protegidas ha dado lugar a episodios de piratería biogenética y apropiación indebida de servicios ambientales.

A finales de los 90, varias ONG bolivianas empezaron a trabajar en el área de las industrias extractivas y los derechos humanos, alentadas por los conflictos que creaban las empresas petroleras. El trabajo en minería ha sido más reciente, centrándose primero en las regiones del altiplano. La gravedad de la problemática motivó que se produjeran intentos de articulación nacional, que perseguían conformar espacios conjuntos de trabajo entre organizaciones sociales e instituciones. Sin embargo, el clima de rivalidad existente entre ONG ha fomentado **redes paralelas y desarticuladas en la minería**. Las diferencias se originan por personalismos, enfoques ideológicos, pero se deben también a una competición por espacios de legitimidad social, influencia pública y recursos de la cooperación internacional. ¿Se trata de un reino de taifas?:

- Un fenómeno predominante es la “onegización” de los observatorios de industrias extractivas que ha dado lugar a una ensalada de siglas (véase gráfico 8). Cada ONG financia su propia plataforma de acción y reflexión. Por ejemplo, el CEDLA promueve la Plataforma Energética (www.plataformaenergética.com), administra el

OBSERVATORIOS Y PLATAFORMAS COMO HONGOS



OBIE (Observatorio Boliviano de Industrias Extractivas) junto con CEADDESC, y publica el boletín *El Observador*; el CEDIB edita *Petro-Press* y participaba en el OBCOM (Observatorio Boliviano de Conflictos Mineros), de cuyo boletín informativo se encarga actualmente el Colectivo CASA; la LIDEMA impulsa su propia Comisión de Minería y realiza monitoreo a través de su Observatorio Ambiental. Más reciente es la apuesta del CEADL por impulsar el Boletín del Observatorio Boliviano de los Recursos Naturales (OBRN). La pluralidad de observatorios puede ser una riqueza en términos de construir una memoria colectiva de los conflictos, ya que amplía las lecturas y aproximaciones. Sin embargo, refleja también el interés de las instituciones por proyectar su trabajo y ganar áreas de influencia.

- Algunas instituciones como FOBOMADE (Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo), LIDEMA (Liga de Defensa Medio Ambiente) se han estructurado incluso como redes nacionales en sí mismas. Sin embargo, esa apuesta no asegura presencia ni articulación nacional. Algunas de esas redes son incluso meramente formales y no tienen coordinación operativa.
- Otro fenómeno vigente se relaciona con la apropiación de casos emblemáticos. Algunas ONG compiten por entrar en determinadas zonas mineras en conflicto y/o resistencia para poder realizar investigación de forma exclusiva. Los casos emble-

máticos se convierten así en campo de disputa, y las instituciones cuidan la información como oro pulido para poder difundir y hacer incidencia.

- Esta dispersión de esfuerzos genera lo que los dirigentes sociales llaman “cruce de eventos”, es decir, la convocatoria de talleres y capacitaciones paralelas, en un mismo día o semana, lo que no favorece la articulación de organizaciones sociales.
- En ocasiones, las rivalidades se han trasladado incluso a la relación de asocio con las organizaciones campesinas e indígenas. Por ejemplo, FOBOMADE trabaja en Oruro con el Colectivo CASA que, a su vez, realizó acompañamiento histórico a la FRUTCAS (hoy en día a la CONAMAQ). Por otro lado, LIDEMA trabaja con CEPA (ONG también orureña), que tiene a su vez una relación privilegiada de asocio con la CORIDUP. No existe articulación entre ambas líneas de trabajo.

En definitiva, hay proyectos, informes, revistas y boletines, observatorios de análisis, plataformas, foros de discusión, pero no suficiente debate público ni construcción de una posición nacional. Esta incapacidad de articularse ha traído consecuencias negativas. Por ejemplo, los espacios nacionales no han tenido eco ni capacidad de convocatoria. Tanto la CGIAB como el OBCOM atraviesan una situación de crisis interna:

- CGIAB (Comisión para la Gestión Integral del Agua en Bolivia)
Creada en 2002 tras la Guerra del Agua en Cochabamba, la Comisión se constituyó como plataforma de ONG bolivianas para coordinar acciones de incidencia en políticas de agua (www.aguabolivia.org). Su composición revela una combinación técnica y política, con ONG de acción e instituciones académicas.⁶³ El CGIAB ha sido capaz de articular iniciativas interesantes, como la financiación del Informe Morán (2009) para monitorear el uso del agua de la Minera San Cristóbal. Sin embargo, la falta de visión estratégica, la escasa inserción con los procesos políticos del país y las disputas internas de liderazgo han terminado convirtiéndola en un espacio formal sin capacidad de acción estratégica.
- OBCOM (Observatorio Boliviano de Conflictos Mineros)
Creado en 2008, el OBCOM ha tratado de consolidarse como espacio de articulación entre ONG y organizaciones campesinas para denunciar la violación de derechos en el marco de los conflictos mineros.⁶⁴ En la actualidad, atraviesa igualmente una crisis de conducción estratégica debido a la confluencia de diferentes intereses en su interior y a la pugna de liderazgos entre instituciones. Ante la falta de reuniones internas periódicas, lo único que opera es el boletín informativo que edita el Colectivo CASA.
- OIEDC (Observatorio de Industrias Extractivas y Derechos Colectivos)
Creado en 2012, como plataforma de difusión y denuncia, en una iniciativa conjunta entre el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (Colectivo CASA) y la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, para el seguimiento de casos de conflictos entre actividades extractivas y comunidades indígenas originarias.

⁶³ A fines de 2010, el CGIAB estaba integrada por Agua Sustentable, CENDA, Centro Agua, Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental, CESU, CIPCA, FOBOMADE, Fundación Abril, Fundación Solon, IHH, PROMIC y SENAMHI, entre otras. Tiene su sede en Cochabamba. Agua Sustentable ha presentado su salida en junio de 2010.

⁶⁴ A fines de 2010, el OBCOM estaba conformado por el CEDIB, CEPA, el CGIAB, el Colectivo CASA, la CORIDUP (Coordinadora en Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero y Lagos Uru-Uru y Poopó), FOBOMADE, FRUTCAS, y la Subcentral ACRE (Antequera Provincia Poopó del Departamento de Oruro), entre otros.

6.3 La emergencia de una *oposición “ambiental”* al MAS: con capacidad creciente de convocatoria

Las contradicciones del MAS en materia de políticas extractivas han motivado que varios sectores sociales hayan encontrado en el medio ambiente un flanco fértil de oposición al gobierno. La confluencia imprecisa, pero creciente, de organizaciones indígenas, ONG ambientales, sectores urbanos, intelectuales y ex-funcionarios del gobierno define los contornos de dicho espacio de oposición “ambiental”. La discusión y aprobación de las nuevas leyes fundamentales que siguieron a la NCPE puso a las **organizaciones indígenas** (CONAMAQ y CIDOB) frente al gobierno. Tanto la Ley del Régimen Electoral como la Ley Marco de Autonomías no incorporaron suficientemente las demandas indígenas relacionadas con las circunscripciones de sus territorios, la integración territorial (conversión automática de TCOs en unidades territoriales), población mínima de acceso a la autonomía indígena, procedimiento de aprobación del estatuto de autonomía y mecanismos de financiación, entre otros asuntos.⁶⁵ La marcha indígena impulsada por la CIDOB (junio 2010) no fue apoyada por todas las afiliadas ni tampoco encontró la solidaridad de las organizaciones campesinas. Sin embargo, la movilización de los líderes indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro Sécore (TIPNIS) contra los planes de construir una carretera en 2011 desbordaron todas las previsiones.

⁶⁵ El Gobierno del MAS argumentó que las demandas de la CIDOB estaban fuera de la Constitución. El Ministro de Autonomías acusó incluso a la CIDOB de utilizar la negociación de autonomía indígena para exigir cuota de cargos.

⁶⁶ Las 17 Mesas de la Cumbre abordaron las temáticas de causas estructurales, armonía con la naturaleza para vivir bien, derechos de la Madre Tierra, referéndum mundial sobre el cambio climático, tribunal de justicia climática, migrantes climáticos, pueblos indígenas, deuda climática, visión compartida, Protocolo de Kyoto y compromisos de reducción de emisiones, adaptación al cambio climático, financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología, bosques, peligros del mercado de carbono, estrategias de acción, agricultura y soberanía alimentaria.

La polémica **Mesa 18 de la Cumbre de Tiquipaya** fue el primer intento de articulación. Con motivo de la Cumbre de los Pueblos por el Cambio Climático en Tiquipaya (abril 2010), se conformaron 17 mesas para discutir los temas que no se habían debatido en la Cumbre de Copenhague (2009).⁶⁶ La CONAMAQ y algunas ONG ambientalistas propusieron conformar la Mesa 18 para discutir los impactos y conflictos provocados por los proyectos extractivos y los megaproyectos energéticos en el país. El gobierno no lo vio con buenos ojos. Se negó a incluir la mesa en el programa oficial, bajo el argumento de que no se podía enturbiar el evento internacional con problemas de “ámbito local”. “Los trapos sucios se lavan en casa, no en una cumbre internacional”. Las organizaciones campesinas decidieron finalmente no asistir, pero sí las organizaciones indígenas y varias instituciones de desarrollo.⁶⁷ El documento final fue sometido a votación, pero no fue “cocinado” con las organizaciones sociales. El acto levantó las críticas del MAS y fue calificado como una “orgía de ONGs” por el vicepresidente García Linera. Pese a las declaraciones de acción conjunta, los frágiles equilibrios de la mesa no dieron lugar a una articulación posterior.⁶⁸

La **crisis del “gasolinazo”** en diciembre de 2010 marcó, sin duda, un punto de inflexión en la relación del gobierno con las organizaciones sociales, ya que logró concitar críticas de muy diferentes sectores y logró una movilización masiva. Armado de argumentos económicos, el gabinete se decidió a eliminar la subvención al diésel para el mercado interno que suponía una factura creciente para el presupuesto público. De la noche a la mañana, el gobierno promulgó un decreto de nivelación de precios, y el precio de los carburantes se duplicó, lo que generó una espiral incontrolable de precios que afectó a bienes básicos como el transporte público. La airada movilización de las organizaciones sociales en la calle paralizó el país. El gobierno tuvo que dar marcha atrás, y congelar la medida.

⁶⁷ Entre las instituciones que participaron en la Mesa 18 se encuentra el CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu), la CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia), y las ONG FOBOMADE, CENDA, CEJIS, CEDLA, UNITAS, PROBIOMA, y CESU entre otras.

⁶⁸ La declaración final de la cumbre denunció explícitamente los megaproyectos de infraestructura, la invasión de proyectos extractivistas, la privatización y mercantilización del agua y la militarización de territorios expulsando a los pueblos indígenas (véase <http://cmpcc.org/acuerdo-de-los-pueblos>). La Mesa 2 sobre “Armonía con la naturaleza para vivir bien” debatió vivamente sobre aspectos de contaminación minera. El debate dio lugar a la conformación posterior de un grupo de trabajo entre organizaciones del continente para seguir trabajando la temática de minería.

Un grupo de 39 intelectuales, liderado por el Chato Prada y conocidos ex-funcionarios del gobierno del MAS, abanderó en junio 2011 el **Manifiesto por la Reconducción del Proceso de Cambio**. El documento acusó al ejecutivo de restaurar las viejas estructuras neoliberales, endeudar el país, ahondar el modelo extractivista, aplazarse en materia de industrialización, y violar las reglas más elementales de separación de poderes en democracia. Las críticas, con cierto sustento en la realidad, adoptaron, sin embargo, un tono duro y desmesurado que ignoraba los logros del MAS. ¿Pretendían capitalizar el desgaste político del gobierno? La respuesta del vicepresidente no tardó en llegar. En un enrabiado documento titulado *El Oenegismo: enfermedad infantil del derecho*, García Linera (2011b: 163) se defendió de las críticas extractivistas:

“¿Por qué tenemos que pagar nosotros con nuestro «inmovilismo productivo», con nuestra miseria y desvinculación (que genera pobreza) las consecuencias de la orgía depredadora de los países industrializados? Como país y como sociedad tenemos derecho a mantener un intercambio metabólico con la naturaleza para satisfacer las necesidades tanto del ser humano como de la propia naturaleza”.

Y denunció el negocio medioambiental de las transnacionales, así como la apropiación de la bandera ambientalista por parte de las ONG y las oligarquías cruceñas. En los últimos años, se han sucedido acusaciones por parte del Gobierno del MAS de infiltración de USAID, dirigidas tanto a ONG (por ejemplo, CEJIS) como a organizaciones sociales (caso de CIDOB, o la Confederación de Comunidades Interculturales en Caranavi).

La **marcha indígena por la defensa del TIPNIS** (agosto-octubre 2011) marcó, por su parte, un quiebre profundo (y tal vez definitivo) con las organizaciones indígenas. La obstinación del presidente Morales por construir la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el interior del parque natural y territorio indígena, con financiación brasileña, acabó nuevamente en una rectificación gubernamental. La VIII marcha indígena logró concitar la simpatía de los sectores urbanos de clase media y aumentar el descontento con el MAS. Paso a paso, la causa ambiental ha ganado capacidad de convocatoria, especialmente en sectores indígenas, clases medias y partidos opositores. La apuesta del gobierno parece más encaminada a mantener su apoyo entre las clases populares y sectores campesinos.

6.4 ¿Cuál es el papel de las mujeres bolivianas en los debates sobre minería?

Otra buena pregunta que requiere tiempo para ser contestada. En primer lugar, la acción de las mujeres mineras bolivianas parece orientada a la **lucha por la igualdad de derechos** en el ámbito laboral. En sus últimos congresos, la Organización de Mujeres Mineras y la Organización Nacional de Socias Trabajadoras Palliris han demandado beneficios sociales (seguro de salud y jubilación), seguridad laboral, cargos jerárquicos y participación política en el debate sobre la ley de minería. Los avances siguen siendo muy lentos en un contexto con fuertes raíces patriarcales, donde todavía rige la prohibición de acceso de las mujeres en algunas minas, como el Cerro Rico de Potosí. Poco a poco, las mujeres se sacuden el mito ancestral que liga su presencia al “ahuyentamiento” de los minerales. Los datos disponibles sugieren que su trabajo en la minería de socavón se ha incrementado en los últimos años (véase recuadro 33).

A nivel nacional, el debate ambiental de la minería ha sido protagonizado por visiones masculinas desde las organizaciones campesinas e indígenas. En los seminarios sobre industrias extractivas en los que participa la CONAMAQ, por ejemplo, los *tatas* (dirigentes varones) inauguran con discursos la sesión de trabajo, mientras que las *mamatayas* (esposas de los dirigentes) realizan los rituales aymaras con coca y alcohol. El perfil de la confederación campesina de mujeres Bartolina Sisa ha sido

⁶⁹ Conformada en 2000, la Red Nacional de Mujeres y Minería engloba al Comité Nacional de Amas de Casa CONACMIN, la Organización Nacional de Socias Trabajadoras Palliris (integrada en FENCOMIN), la Organización Nacional de Esposas de Trabajadores Cooperativistas (FENECOM), mujeres de la sociedad civil y ONG. Cuenta con cinco comisiones: medio ambiente, comunicación, economía familiar, minería responsable e internacional.

⁷⁰ Por ejemplo, el “Manual de Responsabilidad Social y Ambiental con Equidad de Género para Cooperativas Mineras” impulsado por Cumbre del Sajama (2009:13) sugiere: “Las mujeres juegan un rol muy importante como eje familiar, ya que son ellas como hijas, esposas y madres quienes velan por brindar a sus familias y comunidad mejores días, por ello es importante su participación para que una buena educación pueda ser recibida y practicada por todos.” La atribución a las mujeres de la responsabilidad social y ambiental de los emprendimientos mineros puede perpetuar el rol reproductivo de la mujer, al hacerla depositaria del mandato de “cuidar” a las personas y el medio ambiente. Otro riesgo es reducir el desafío ambiental a tareas de saneamiento y manejo de residuos.

Recuadro 33

La lucha de las mujeres contra los mitos de los socavones

“Sólo con la lucha por obtener presencia como socias, con voz y ejercicio de voto, consiguieron la conquista de sus espacios”, explica Cecilia Molina, directora de CEPROMIN. El investigador José Antonio Condori, precisa que las mujeres lograron reconocimiento como socias cooperativistas recién en el Congreso de 2001. Antes, las acciones de los cooperativistas fallidos no eran heredables a la viuda, sino que su titularidad se transfería al hijo mayor. Cuando una mujer quedaba viuda y no tenía hijos varones, perdía la acción en la cooperativa. Algunos fenómenos nuevos estarían marcando un cambio de tendencia. Por ejemplo, la existencia de yacimientos explotados sólo por mujeres. Es el caso de una cooperativa localizada en la región de Chorolque, en el sur del departamento de Potosí, impulsada por 200 mujeres que prefieren mantener la explotación minera entre ellas. Molina cita otro ejemplo. En la región minera de Atocha (también en Potosí), las mujeres conservaron durante tres gestiones la secretaría de educación y cultura de una cooperativa dirigida por varones. Las limitaciones para ellas se mantienen cuando reciben áreas de explotación pobres en minerales.

Fuente: Chávez, IPS, 27 mayo 2011.

el trabajo con mujeres mineras, como Cumbre del Sajama, prestan servicios de capacitación en género tanto a transnacionales mineras como agencias de cooperación. Promueven, además, la estrategia de minería responsable a pequeña escala. Esta apuesta corre, sin embargo, el peligro de despolitizar el enfoque de género, al reducir la participación política de las mujeres a una agenda de responsabilidad social y ambiental que reproduce sus roles reproductivos tradicionales.⁷⁰

La mayor parte de ONG que promueven los derechos humanos en las industrias extractivas, en cambio, no se han interesado por la agenda de minería y género.⁷¹ “Los hombres son los que más sufren en la minería”, es el pensamiento más común, “¿por qué nos tendríamos que centrar en las mujeres?”. Algunas ONG han desarrollado incluso poderosos **antituerpos** frente al género. A menudo, los celos anidan en directivos y técnicos varones que llevan su mochila patriarcal a cuestas, pero existen otros factores. Algunos responsables de ONG aducen también razones políticas para rechazar su aplicación. ¿Es el enfoque de género una agenda impuesta desde las ONG financieras del norte? ¿Una moda pasajera? Y en todo caso, ¿cuál ha sido el resultado de las capacitaciones en género aceptadas a regañadientes en los últimos años? Ciertamente, la aplicación distorsionada del enfoque de género no ha sido de gran ayuda. Reducir su alcance emancipador a la celebración de talleres puntuales y discontinuos, a la aplicación de herramientas estandarizadas, o a la promoción de grupos de mujeres artesanas, ha colocado al “género” como un jarrón chino en una estantería. Molesto, incómodo, incitador de bromas y chistes. ¿Es posible reconducir el camino? ¿Tiene sentido promover los derechos en la minería con equidad de género en el contexto andino? Y regresando a la pregunta inicial: ¿Qué papel juegan las mujeres en los debates y resistencias?

⁷¹ Entre las ONG que trabajan en minería se puede incluir al CEADDESC, CEDIB, CEDLA, CEJIS, CEPa, Colectivo CASA, Fobomade, y Lidema, entre otras. No se conoce que alguna de ellas trabaje en minería con una apuesta de incorporar la mirada de género a su trabajo.

bajo, al menos en los medios de comunicación. El discurso del MAS en las cumbres internacionales sobre cambio climático subraya la necesidad de reconocer la deuda ecológica, y rechaza rotundamente la división ambiental del trabajo en el planeta (que reserva el rol de guardaparques a los países pobres). Esa posición remite a una dialéctica Norte-Sur tan justa como necesaria, ¿pero es suficiente? ¿Podría una mirada femenina hacer también aportes en términos de gobierno de los bienes comunes? De igual modo, la voz de los intelectuales críticos ha sido capitaneada por varones.

La agenda de minería y género ha sido impulsada por algunas ONG y redes, entre las que se encuentra CEPROMIN, CISEP, o la Red Nacional de Mujeres y Minería (RNMM).⁶⁹ Algunas consultoras especializadas en

El universo de la resistencia minera

¿En qué consiste la resistencia? Los movimientos sociales de lucha frente a la minería, formados por organizaciones sociales, instituciones de apoyo (ONG) y gobiernos locales, han desplegado un amplio abanico de estrategias de acción con resultados muy dispares. En este epígrafe se han recogido algunas iniciativas a modo de inventario, para dar cuenta de la riqueza y heterogeneidad de acciones que se están llevando a cabo, tanto a nivel local y regional como nacional y global. Por último, se ha añadido un apartado sobre acciones culturales para describir un nuevo tipo de resistencia que hace un uso consciente de los imaginarios.

7.1 Acciones de defensa del territorio

- *Asambleas, paros, marchas y caravanas de denuncia*
Además de la defensa del Cerro Quilish en Cajamarca (véase capítulo 8), otra resistencia sonada ha sido la de las comunidades de Ayabaca contra el proyecto minero Río Blanco en el departamento de Piura. En un documento de sistematización, la Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca (FEPROCCA, 2010) y un equipo facilitador han recogido una crónica de la lucha durante más de seis años. El relato incluye asambleas, reuniones informativas, mítines, foros regionales, creación de frentes de defensa, rechazo de donación de mineras, marchas de sacrificio, paros y procesos de consulta. La represión de los opositores causó la muerte de cuatro dirigentes a manos de la policía, la tortura de 32 comuneros en el campamento minero en 2005 y decenas de heridos (CONACAMI, 9 febrero 2011).
- *Procesos autogestionados de consulta*
Una de las estrategias más visibles ha sido la promoción de procesos de consulta. En Perú, ha predominado un modelo de referéndum popular vecinal (no vinculante), mientras que en Bolivia se han dado los primeros pasos para impulsar procesos de consulta a pueblos indígenas reconocidos por el Estado, tras la aprobación de la Nueva Constitución en 2009.
- *Actos de protesta simbólica*
Entre los actos de protesta simbólica se encuentran, por ejemplo, el rechazo de donaciones y regalos de las mineras. En esa línea se expresa Jorge Carrión, miem-

bro de Yanta, una de las comunidades en resistencia de Ayabaca (FEPROCCA, 2010:169):

“Claro, los de la mina venían con el presidente y traían por ahí sus paquetes de sal, su saco de arroz, fideos, dejaban ahí y el presidente notificaba a los tenientes y les entregaba sin dar a conocer cómo era, de dónde venían, hasta que últimamente se detectó que era de la mina. Últimamente fue el señor Fernando, él estaba haciendo todo esto; ya con Ramiro ya no aceptamos, no a la minería, ningún regalo de ninguna clase. Vinieron también en el periodo del señor Betancor, han estado gestionando mochilas y una motobomba, después trajeron cuadernos que se quemaron totalmente en la provincia de Ayabaca. En una marcha que veníamos de Río Blanco se quemó los cuadernos en la plaza de Ayabaca”.

- *Visitas de inspección a instalaciones mineras*

Las comisiones de visita a las instalaciones mineras tienen por objeto poner en conocimiento de las autoridades los desmanes o amenazas de los proyectos mineros. Ante la preocupación que motiva el proyecto de Minas Conga en Cajamarca, un grupo de congresistas visitó las lagunas de El Perol en Celendín a principios de julio de 2011. La visita sirvió para que las autoridades de Yanacocha profundizaran sus explicaciones y para que los comunarios presentes expresaran nuevamente su rechazo al proyecto, en presencia de autoridades regionales, nacionales, y ante un grupo de congresistas (véase http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_sYMrFdthAk).

- *Intercambios de experiencias*

Las visitas que hicieron dirigentes ronderos de Ayabaca a los centros mineros de La Oroya y Cerro de Pasco fueron claves para reforzar la conciencia crítica de los impactos mineros a largo plazo, y articular su posición de NO a la minería. Así lo ponen de manifiesto diferentes testimonios (FEPROCCA, 2010:53 y 135):

“Hemos estado en Cerro de Pasco y conocemos de cerca la realidad, así que no nos vengán con engaños que van a realizar más mesas técnicas, lo único que queremos es que se vayan los mineros de Río Blanco”. (Magdiel Carrión, delegado de Comunidad de Yanta)

“De acuerdo a nuestras organizaciones de base, de nuestras rondas campesinas, nosotros seguiremos luchando para así decirle al Estado que respete nuestros derechos y no los viole, como en el caso de Cerro de Pasco, que se están viviendo diferentes tipos de enfermedades... los niños con plomo en la sangre”. (Jimmy Chuquicusma Calle, comunidad de Pacaipampa)

- *Acompañamiento y capacitación a organizaciones sociales*

Una parte importante del trabajo de las ONG se relaciona con la capacitación y asistencia técnica a coordinadoras regionales, grupos de afectados, plataformas de defensa, y organizaciones indígenas, entre otras muchas. Las estrategias son muy variadas, desde capacitaciones y asistencias técnicas puntuales a acompañamientos más políticos. Por ejemplo, CEJIS La Paz en Bolivia realiza un acompañamiento periódico a los encuentros de secretarios de recursos naturales de organizaciones campesinas e indígenas. En dichos encuentros se trabaja un espacio de capacitación sobre coyuntura política, análisis de avances legislativos y se socializan propuestas para definir estrategias de incidencia (CEJIS, 2009, 2010 y 2011).

7.2 Análisis y difusión de información

- *Auditorías y estudios ambientales independientes*

Otra acción interesante consiste en el impulso de estudios ambientales paralelos a los oficiales para poder contar con argumentos de peso frente a las verdades “científicas” de las mineras. Pero requiere recursos. Por ejemplo, la Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, y los Lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP) exigió realizar una auditoría a los pasivos ambientales de la minera *Inti Raymi*, paralela a la que lleva adelante la empresa PCA Ingenieros. Félix Laime, presidente de la organización, exponía sus razones ante la prensa (*Cambio*, 14 mayo 2010):

“Sabemos que esta trasnacional (Inti Raymi), subsidiaria de Newmont, ha utilizado hasta el año 2002, 80.000 toneladas de cianuro de potasio. Estos pasivos ambientales están tapados con tierra, dicen que están encapsulados, pero la verdad es otra”.

- *Observatorios de análisis*

En los últimos años, han proliferado los observatorios de análisis en el sector extractivo. Muchos de ellos operan a través del seguimiento de conflictos y denuncias en torno a casos emblemáticos. Las experiencias del OCMIP en Perú y OBCOM en Bolivia plantean estrategias diferentes de acción (véanse capítulos 5 y 6). El enfoque de conflictos y casos emblemáticos, impulsado tradicionalmente por los observatorios de análisis, adolece de limitaciones pues se han centrado tradicionalmente en difundir conflictos, denuncias y noticias sobre casos emblemáticos, pero el desafío es mucho mayor. ¿Cómo generar información más útil para la acción? En este sentido, algunas instituciones están trabajando con fichas sobre proyectos mineros y/o contenedores de información geográfica que permiten realizar un manejo detallado por capas de información. Otra idea es ordenar la información de acuerdo al capital de procedencia de las explotaciones mineras (de este modo, se puede tener una visión más clara de la actuación geográfica de las transnacionales y conectar así luchas paralelas).

- *Campañas e información alternativa*

Algunos frentes de defensa en Perú han explorado nuevas vías de comunicación. La resistencia de Celendín al proyecto de Minas Conga (Cajamarca), por ejemplo, ha desarrollado un blog en internet que incluye noticias, documentos, videos, audios e incluso canciones de protesta (<http://celendinlibre.blogspot.com>). Una asamblea de vecinos en Catamarca (Argentina) ideó los “anti-mapas” para denunciar la retórica ambiental de la mina Bajo La Alumbrera (véase recuadro 34).

Recuadro 34

Los “anti-mapas”

La Asamblea de Vecinos por la Vida de Andalgalá (Catamarca, Argentina) ha realizado en un friso el “antimapa” de la mina Bajo La Alumbrera, en el que muestra los diferentes territorios afectados por las operaciones mineras, desde el yacimiento hasta el puerto de exportación en Rosario. Mediante dibujos simples representa las condiciones materiales del proceso y muestra, con fotografías tomadas in situ, los tramos de rotura del ducto sin reparar, otras roturas taponada con trapos, etc. Conforman así el mapa de lo no-dicho que desnuda la retórica de la “nueva minería” a cielo abierto por lixiviación.

Fuente: Antonelli (2009), p. 80.

7.3 Acciones legales y judiciales

- Defensa legal de dirigentes*

La creciente criminalización de la protesta ha motivado falsas acusaciones por terrorismo y otros delitos contra comunarios y dirigentes campesinos e indígenas. Por esa razón, la defensa legal se ha convertido en una estrategia necesaria de trabajo, especialmente en Perú. Gran parte de los esfuerzos de trabajo de la CONACAMI están destinados a denunciar los casos de criminalización (www.conacami.org). Algunas ONG incorporan gabinetes especializados de abogados para realizar esta labor, que en ocasiones ha arrojado logros positivos en términos de archivo de casos. Así ha ocurrido con la denuncia contra Mario Tabra, Magdiel Carrión y otros 33 personas más —incluyendo alcaldes, abogados, comuneros y defensores del medio ambiente— en Huancabamba y Ayabaca (Piura), realizada por la empresa Minera Río Blanco *Copper* (antes Majaz) (OCMIP, 2009:8). Esta línea de trabajo ha producido también un desencuentro entre organizaciones campesinas y ONG. Algunos dirigentes ven la defensa legal en términos de notoriedad e incidencia política, mientras que los asesores legales de las ONG la practican como una herramienta exclusiva de protección legal de las personas.
- Denuncias a las empresas ante la justicia ordinaria*

La utilización creciente de fuerzas paramilitares por parte de las mineras colombianas ha creado una situación de violación alarmante de los derechos humanos. Los casos han salpicado a las transnacionales mineras *Drummond* y a El Cerrejón (propiedad de BHP Billinton, Anglo American y Glencore), entre otras muchas mineras (Martínez, 2007). Dada la impunidad imperante en Colombia, la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos, Químicos y de Industrias Similares de Colombia (Funtraenergética) decidió recurrir a la justicia en EE.UU. Una vieja ley (de más de dos siglos de antigüedad) sirvió a una jueza de Alabama para llevar a juicio a la minera *Drummond* por el asesinato de tres sindicalistas en 2001 (Martínez, 2007).
- Denuncias a los Estados por incumplimientos y violaciones de derechos*

En los últimos años, se ha multiplicado el número de audiencias públicas sobre industrias extractivas celebradas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, así como los casos presentados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Costa Rica. En noviembre 2009, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) realizó una audiencia ante el CIDH para exponer la situación de las comunidades indígenas afectadas por el IIRSA. Los proyectos de infraestructura presentados ante la CIDH fueron la Carretera Santa Cruz –Puerto Suárez (Bolivia), la construcción de Represas en el Río Madeira (Brasil) y la carretera Interoceánica Sur (Perú) (CAOI, 2009).
- Judicialización para resarcimiento de víctimas*

Los mecanismos de judicialización de casos para resarcimiento de las víctimas son largos y están llenos de riesgos. En el mejor de los casos, las demandas contra las mineras pueden motivar que las indemnizaciones lleguen demasiado tarde, cuando el daño sobre el territorio ya está hecho y es irreparable. Después de diez años de litigios puede ocurrir incluso que la empresa haya abandonado el territorio. Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han incluido meras recomendaciones al Estado peruano, no vinculantes, para remediar los daños ocasionados y reparar la violación de derechos humanos.
- Los peligros de “privatización” de la justicia*

La vía judicial ha abierto la puerta a procesos de “privatización” de la justicia, que traducen los conflictos socioambientales en litigios entre actores privados (entre personas y empresas), situando la problemática en el ámbito privado, y desligándola así del terreno de las políticas públicas. En La Oroya (Junín), varios bufetes

norteamericanos de abogados han buscado clientes para demandar a la minera *Doe Run* por contaminación en salud. Contactan así con niños afectados por plomo en sangre para representarlos en cortes norteamericanas. La vía judicial ha dado lugar también a casos de arbitraje extrajudicial favorables a las mineras, ya que por montos irrisorios de dinero logran exonerar su responsabilidad por los daños ambientales ocasionados. Así ocurrió con motivo del derrame de mercurio en Choropampa (Cajamarca) en 2000. La Minera Yanacocha (subsidiaria de *Newmont*) llegó a un acuerdo con el Alcalde de Cajamarca que reconoció un pago de 3 millones de dólares. El acuerdo contenía una cláusula que liberaba de responsabilidad a la minera, al tiempo que impedía a cualquier otra “unidad gubernamental” del Perú presentar nuevos reclamos sobre el caso (OCMIP, 2009:16). Alrededor de la mitad de la indemnización se destinó a pagar a los abogados.

7.4 Incidencia política

- *Interlocución con funcionarios de máximo nivel*
Es la vía preferida de muchas organizaciones campesinas en Bolivia. La dirección de la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinas del Altiplano Sud (**FRUTCAS**), cuyo ámbito de influencia coincide con el de la minera transnacional San Cristóbal (*Sumitomo*) y el proyecto de industrialización del litio, mantiene reuniones periódicas con el Presidente Evo Morales para expresar sus preocupaciones y demandas. El Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales tiene como función recoger las demandas insatisfechas y detectar conflictos potenciales. Los viajes a La Paz y las visitas a diferentes dependencias del gobierno forman parte de una cultura de incidencia política muy arraigada entre las organizaciones campesinas bolivianas.
- *Incidencia legislativa en leyes nacionales*
La aprobación de la Nueva Constitución en Bolivia en enero 2009 abrió una etapa de promulgación legislativa. En este contexto, gran parte de las organizaciones sociales se han lanzado a realizar incidencia legislativa. Es el caso de las organizaciones indígenas CONAMAQ y CIDOB, que han elaborado sendas propuestas sobre la Ley Marco de Consulta Previa. También en Perú las organizaciones indígenas se han mostrado muy activas en el proceso de discusión y aprobación en el Congreso de una Ley de Consulta.
- *Campañas de incidencia nacional*
David contra Goliath. Las campañas de incidencia política de los movimientos sociales resultan una gota en el océano frente a la comunicación oficial del gobierno y las transnacionales. Por esa razón, tienen que aprovechar momentos de alta intensidad mediática. En las elecciones presidenciales peruanas de 2011, un grupo de ONG lanzó una modesta campaña en medios nacionales para pedir un nuevo acuerdo de gobernabilidad para la industria extractiva (<http://alternativasalextractivismo.blogspot.com>). En otros casos, las campañas tienen que ser creativas para captar la atención del público. Es el caso de la campaña que una institución realizó mediante el envío de cartas a edificios de San Isidro-Lima por supuestas empresas mineras para comunicar la existencia de concesiones mineras e instar los consiguientes “traslados urbanos”. En Bolivia, la Coordinadora en defensa de la cuenca del Río Desaguadero, los lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP) ha organizado ferias de animales con malformaciones genéticas para demostrar los efectos de contaminación minera.
- *Conformación de plataformas interinstitucionales*
La incidencia política conlleva el trabajo en red para sumar esfuerzos y recursos. En Perú, las redes nacionales en el ámbito de la sociedad civil poseen un origen eclesástico, ya que la Iglesia católica ha tenido siempre clara su organización reticular en la sociedad. Es el caso de la Red Muqui (ligada a la Conferencia Episcopal

de Acción Social), la Mesa de Lucha contra la Pobreza (relacionada con la Iglesia de base) o la Coordinadora de Derechos humanos (con las Vicarías).

- *Foros de debate*
En general, los foros de debate se desarrollan en las grandes ciudades. Los hoteles y auditorios de La Paz y de Lima (especialmente, de esta última) son los lugares elegidos por las ONG para organizar foros abiertos de debate, con la participación de expertos ambientales, organizaciones sociales, políticos y, en ocasiones, miembros del ejecutivo. Este tipo de eventos suele convocar a público universitario, organizaciones de afectados, activistas y sectores de la clase media. En algunos casos, el formato se inicia con la presentación de un libro o un informe de investigación para dar paso luego a la discusión. En los últimos años, se advierte, sin embargo, un desgaste en la fórmula, ya que este tipo de actos se ha convertido en un ritual con formas convencionales, en un espacio técnico a la medida de los expertos, con escasa capacidad de provocar una reflexión social más amplia.
- *Acompañamiento a gobiernos municipales y regionales*
Otra área de trabajo de las instituciones (ONG) ha sido apoyar y asesorar técnicamente a gobiernos locales y regionales, para enfrentar mejor los impactos de la minería. En este sentido, la Red Muqui Norte del Porte resolvió orgánicamente en 2011 intensificar como red el acompañamiento a gobiernos locales y el fortalecimiento de modelos de co-gestión territorial.
- *Incidencia en políticas regionales*
En Cajamarca, varias instituciones y ONG han elaborado una intensa actividad de incidencia en materia de gestión ambiental. Uno de sus principales aportes ha sido el desarrollo de herramientas de gestión pública. Los procesos de Zonificación Económica y Ecológica y el impulso de Planes de Ordenamiento Territorial (POT) deben muchos de sus avances al impulso que se ha hecho desde la sociedad civil.

7.5 Acciones en la esfera regional y global

- *OCMAL (Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina)*
A fines de los 90, se produjeron los primeros intentos de articulación en red en materia de minería y derechos humanos a raíz del trabajo de las instituciones Acción Ecológica (Ecuador), OLCA (Chile) y CEPA (Bolivia). La sucesión de seminarios internacionales, visitas, intercambios de experiencias, pasantías y publicaciones conjuntas dio lugar a la *Red Sub-regional de Minería, Medio Ambiente y Comunidades* en 2002. Este espacio, sin embargo, no dio los frutos esperados debido a la falta de recursos humanos y financieros para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en los diferentes encuentros. En este contexto, el OCMAL constituye la apuesta de articulación regional que ha tenido mayor continuidad. Institucionalizado en 2007, el Observatorio integra alrededor de 40 organizaciones de once países de la región, especialmente andinos y centroamericanos (véase www.conflictosmineros.net). Ha realizado una valiosa tarea de difusión de conflictos mineros, pero posee limitaciones que impiden un mayor nivel de incidencia en políticas públicas. En la práctica, opera como plataforma de encuentro.
- *CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas)*
De forma paralela, las organizaciones indígenas de países andinos han estrechado sus relaciones, a través de esquemas de intercambio y acompañamiento de dirigentes durante la celebración de congresos. La constitución formal de la CAOI en 2006 abrió un nuevo espacio de articulación.⁷² Integrada por organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, la CAOI ha care-

⁷² Entre 1998 y 2005, se registraron intensas acciones de intercambio y acompañamiento de CONACAMI por parte de sus homólogas ecuatoriana (ECUARUNARI) y boliviana (CONAMAQ), lo que contribuyó al aprendizaje recíproco y la afirmación de una identidad cultural con proyección política (Vittor, 2009:202-3). Una constante de los congresos indígenas es la preocupación por los impactos de proyectos extractivos y mineros.

cido, sin embargo, de fuerza como plataforma, lo que pone de relieve los límites de la articulación regional. Sin embargo, en los últimos años ha dado importantes pasos hacia una revisión crítica del IIRSA con mirada regional.⁷³

- *Redes regional de seguimiento del IIRSA*

Las iniciativas regionales frente al IIRSA constituyen una oportunidad de articulación regional. Sin embargo, la estrategia de movilización y resistencia ha operado de forma parcelada por país, lo que le ha restado comprensión de las problemáticas y capacidad de acción (Ribera, 2009). El análisis del IIRSA ha estado ausente de los foros regionales de la sociedad civil. De hecho, la Declaración de la Cumbre de los Pueblos de Lima (2008), paralela a la Cumbre de Mandatarios de Estado, no hizo ninguna mención específica al tema. En Perú, opera una red de seguimiento del IIRSA desde la sociedad civil (www.seguimiento-iirsa.org). La red se ha estructurado a partir de cuatro grupos de trabajo para cubrir las zonas Norte, Centro, Sur y Nacional del país. Todas las organizaciones comparten una preocupación por los impactos que puedan darse alrededor de los proyectos de corredores bioceánicos, pero con un interés creciente en los proyectos de infraestructura e industrias extractivas conexos a esos corredores.

- *Redes de solidaridad Norte-Sur*

La Red Birregional UE-ALC “Enlazando Alternativas” se ha articulado a partir de la organización de encuentros alternativos a las cumbres oficiales entre la Unión Europea (UE) y América Latina y Caribe (ALC), que se celebran cada dos años (www.enlazandoalternativas.org). La red se formó en la Cumbre de Viena (2007). Desde entonces, la red se ha focalizado en tres temas birregionales: Tratados de libre comercio, corporaciones transnacionales e integración regional alternativa. No operan como espacios de incidencia, pero sí como espacios de encuentro entre organizaciones. Se advierten algunos síntomas de agotamiento en la fórmula. En realidad, se han convertido en espacios para compartir experiencias y hacer contactos de trabajo. Sirven más a los activistas del Norte para estar al corriente de lo que pasa en el Sur, que como un espacio de articulación propiamente dicho. Integrada por ONG españolas, la *Plataforma de Seguimiento a las Industrias Extractivas (PSIE)* (www.extractivas.org) pretende dar seguimiento a los conflictos socio-ambientales, e influenciar en las problemáticas comerciales y la responsabilidad de las transnacionales españolas. El OMAL (Observatorio de Multinacionales en América Latina, www.omal.info) es un proyecto impulsado por Paz y Dignidad en 2003 para realizar seguimiento a las transnacionales españolas en el continente. Conformada en 1999, la *Red Alerta Minera* de Canadá (www.miningwatch.ca) es una iniciativa pan-canadiense apoyada por organizaciones del medio ambiente, justicia social, sindicatos e indígenas, de todo el país. Cuenta con un pequeño personal trilingüe (inglés, francés y español) que lleva a cabo el monitoreo y análisis necesarios del comportamiento de la industria.

- *Tribunales éticos*

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) es una iniciativa no gubernamental que somete a juicio las violaciones a los derechos humanos, laborales y ambientales cometidas por las transnacionales europeas en la región latinoamericana. Ha sido una iniciativa interesante de cara a sensibilizar sobre la actuación de las transnacionales europeas en la región, en todos los sectores económicos. Este tribunal ha llevado a cabo dos sesiones sobre “Políticas Neoliberales y Transnacionales Europeas en América Latina y el Caribe”, donde se analizaron más de 25 empresas transnacionales con base en la UE y sus subsidiarias (entre ellas, Repsol YPF, Unión Fenosa, Suez, Unilever, Ence, Botnia, Shell, y bancos como BBVA y ABN-AMRO).

- *Cumbres de los Pueblos por el Cambio Climático*

Constituyen un espacio generado desde el Sur. La Cumbre de Tiquipaya (abril 2010) realizada en Bolivia mostró una enorme vitalidad para discutir nuevas ideas y propuestas, mientras que la Cumbre de Cancún (diciembre 2010) generó unas expec-

⁷³ En enero 2008, la CAOI coordinó un taller informativo sobre el IIRSA en La Paz con la participación de organizaciones indígenas y campesinas del continente. El taller sirvió para emitir una resolución de los Pueblos Indígenas sobre el IIRSA y lanzar una campaña a favor de su reorientación. La propuesta de reorientación incluyó un mecanismo de consulta a varios niveles para llegar al “consentimiento libre, previo e informado” (véase <http://www.inesc.org.br/publicaciones/manifestos/resolucion-de-pueblos-indigenas-sobre-el-iirsa>). En su II Congreso (marzo 2010), la CAOI rechazó el IIRSA por los impactos que generan los megaproyectos, e instó a los gobiernos a no seguir otorgando concesiones a las industrias extractivas y hacer efectiva la consulta previa, libre e informada de los pueblos originarios.

tativas que no pudo cubrir. A modo de balance, se puede concluir que las cumbres han ganado un espacio en los medios de comunicación y han impulsado una agenda global a partir de problemáticas ambientales. De algún modo, han contribuido a gestar un nuevo fermento identitario de sociedad civil a escala planetaria.

- *Campañas de incidencia a nivel global*

En mayo de 2010, el OCMAL asumió la campaña argentina para prohibir el cianuro en la minería y la lanzó en toda América Latina. La campaña incluyó el seguimiento de casos emblemáticos, la documentación de accidentes y eventos de contaminación, las denuncias de riesgo, y la sistematización de legislación y elaboración de proyectos de ley en cada país (véase <http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-general/lanzan-campana-latinoamericana-contra-el-cianuro>). La campaña se apoyó en la resolución del Parlamento Europeo (5 mayo 2010) que prohíbe el uso de cianuro en las minas de la UE., e insta a la propia Comisión Europea y a los Estados Miembros a transpolar la medida en sus propias normativas.⁷⁴

⁷⁴ La campaña fue meramente reactiva, pero careció de un propósito mayor. Planteaba que las organizaciones nacionales podían adherirse, pero no quedaba claro cuál era el valor añadido de una campaña regional, ni su relación con las campañas y organizaciones nacionales.

- *Intervencionismo accionario*

Algunas instituciones han adquirido pequeños paquetes de acciones de empresas transnacionales para intervenir en las juntas de accionistas. A esta acción se la denomina intervencionismo accionario. Es el caso de las ONG Intermón-Oxfam o Setem, que han realizado preguntas incómodas en las juntas de empresas españolas como Repsol y Santander, respectivamente. Los resultados de esta estrategia no han sido muy halagüeños, ya que la repercusión de las intervenciones resulta puntual y los directivos de las empresas se las ingenian para responder con corrección política y guante blanco. Su gran limitación es que acepta la cancha de juego del capitalismo como espacio de resistencia, lo que restringe mucho su capacidad transformadora.

- *Incidencia en grupos de accionistas mayoritarios*

Otra estrategia ha sido realizar esfuerzos de incidencia con grupos “sensibles” de accionistas mineros. Algunos miembros de la institución Grufides de Cajamarca viajaron hasta Denver, la sede de la *Newmont*, para apelar a la ética en Yanacocha. La interlocución no resultó, sin embargo, fácil y se produjeron múltiples problemas de comunicación. Más éxito han tenido los esfuerzos dirigidos a los fondos públicos de pensiones, que manejan inversiones globales. Ante las denuncias contra la *Barrick Gold* en Argentina, el fondo noruego incluyó esta empresa en su lista negra (El País, 15 septiembre 2011). De igual modo, el observatorio *Swedwatch* (www.swedwatch.org) publicó un informe en 2011 sobre las inversiones del fondo sueco de pensiones en *Newmont*, *Barrick Gold* y *GoldCorp*, que tenía invertido 1.341 millones de coronas en las tres mineras. El informe puso de relieve graves problemas de ética empresarial.⁷⁵

- *Encuentros internacionales de afectados por transnacionales mineras*

La unión hace la fuerza. Así lo entendieron los representantes de organizaciones brasileñas, sindicatos y comunidades en lucha contra la Vale cuando convocaron el Primer Encuentro Internacional de “Atingidos pela Vale do Río Doce” en abril de 2010. Por primera vez, participantes de Canadá, Mozambique, Chile, Perú, Argentina y Nueva Caledonia viajaron a Río de Janeiro para denunciar los problemas de actuación de la transnacional en sus respectivos países. A diferencia de las trans-

⁷⁵ El informe de Swedwatch (2011) reveló problemas evidentes en las áreas de medio ambiente y derechos humanos. En el caso de Yanacocha (Newmont), el estudio de campo realizado en agosto de 2011, encontró graves problemas sociales: “Además, el investigador encontró signos de violencia y abusos directos por parte de la empresa de Yanacocha hacia la población local. Los problemas han ocurrido durante tiempo prolongado; así mismo, han recibido la atención de varias organizaciones y de los medios de comunicación en el extranjero, pero no en Suecia. Al investigador de Swedwatch no se le permitió entrar en el área de la mina o reunirse con los representantes de la empresa (...). El hecho de que la empresa minera haya decidido vigilar y documentar la visita de Swedwatch, en lugar de hacer comentarios sobre la información y responder a las preguntas, refuerza la imagen de una empresa poco transparente y reacia a dialogar con las partes interesadas”.

nacionales del “primer mundo”, la Vale no aplica un doble patrón de comportamiento, pero sí aplica una “carrera para atrás”. Es el caso de los derechos laborales en Canadá, Itabira, Congonhas, Parauapebas y Barcarena; de comunidades que luchan por compensaciones justas y en contra de los desplazamientos forzados, como en Mozambique y Açailândia; del uso de milicias armadas en Perú y en Río de Janeiro; de la falta de respeto a las poblaciones indígenas en Nueva Caledonia y el norte de Brasil; o de los riesgos de contaminación ambiental en Chile, Argentina, Serra da Gandarela, Ourilândia do Norte y Canaã dos Carajas (García, 2010:43).

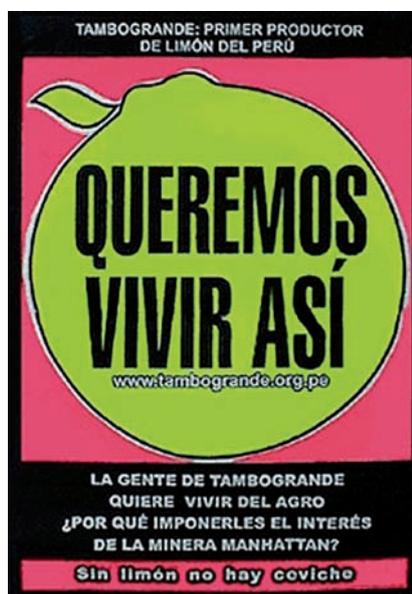
7.6 Acciones culturales alternativas

Algunas de las acciones expuestas en los epígrafes anteriores poseen también una dimensión cultural. Desde esa óptica se puede hacer una **relectura de las acciones de resistencia en clave cultural**. Así, por ejemplo, las *marchas* constituyen artefactos escénicos en sí mismas, ya que constituyen expresiones culturales espontáneas de protesta. Atuendos, pancartas, canciones, coros, lemas... son parte de una coreografía de carne y hueso que permite reproducir la resistencia. Otro caso interesante de analizar son los *tribunales éticos*, ya que constituyen artefactos escénicos en el sentido más literal. El Tribunal Permanente de los Pueblos simula un juicio contra las transnacionales para llamar la atención sobre un caso determinado. Utilizan un escenario judicial como artefacto de simulación, si bien usan criterios judiciales y hacen uso también de la legislación internacional. Apelan al imaginario de la justicia global, ése es su mayor aporte. Han servido para visibilizar casos que, en ocasiones, han seguido luego un curso judicial, y han generado también espacios de encuentro entre afectados; pero la puesta en escena se ha convertido en un ejercicio manido. Es una representación, todo el mundo lo sabe, pero termina generando unas expectativas de justicia que no puede satisfacer. La fórmula parece haberse desgastado en los últimos años hasta convertirse en un festival de casos, que desfilan por el escenario y que pugnan incluso por hacer un pronunciamiento propio de cara a los medios de comunicación. En resumen, el anhelo de una justicia mundial no genera identidad colectiva, de ahí su desgaste como fórmula de protesta.

Más allá de estos ejemplos, es posible identificar algunas acciones de resistencia que han utilizado la cultura como su principal arma. Se trata, en todos los casos, de iniciativas que han trabajado de forma consciente el **rescate y recreación de imaginarios**, mediante la elaboración de artefactos de protesta contra la minería:

- Campaña de Tambogrande (2001):
“Sin limón, no hay ceviche”

La resistencia de Tambogrande frente al intento de la minera canadiense *Manhattan Minerals* de explotar oro en la zona fue un caso pionero de intervención cultural. La campaña apeló al imaginario agrícola del valle, sector que emplea al 68% de la población del distrito. La producción agrícola genera un movimiento de \$Us 40 millones anuales. El valle de San Lorenzo de Tambogrande exporta 50.000 Tn de mangos por año y provee el 40% de los limones que consumen los peruanos. Los creadores de la campaña utilizaron el limón como artefacto de resistencia para contraponerlo al ceviche, y crear así un vínculo entre productores y consumidores en clave de identidad nacional.⁷⁶ No en vano el ceviche (una deliciosa mezcla de pescado marinado en jugo de limón) es el principal plato del Perú y fuente



⁷⁶ La idea original de la campaña surgió de Paul Gogin (alias Chiqui Viejo), si bien el diseño fue implementado posteriormente por Toronja, una conocida agencia de comunicación.

de orgullo nacional. El mensaje, por tanto, era que el ceviche peligraba si la mina acababa con la producción de limones del valle.

La campaña se inició en Lima en 2001. Pegaron vistosos afiches con mensajes provocadores por toda la ciudad: “¡Acabemos con el ceviche!”; “Ceviche en peligro”; “¿Se imagina el ceviche sin limones?”. Una *troupe* de danzantes marchaba por las calles vistiendo disfraces de limones y se detenían ante las cámaras de televisión. La campaña fue un éxito que encendió el sentimiento de identidad nacional peruano. El arte, la música y las tradiciones culturales ayudaron a

que la lucha de Tambogrande destacara entre los cientos de campañas de derechos humanos que se disputan la atención. La campaña fue también antesala de la primera consulta popular que se llevó a cabo en el Perú. Grupos de música folclórica, como “Somos Tambogrande”, compusieron e interpretaron canciones de protesta en formato de baladas y vales tradicionales (véase recuadro 35). Sus canciones fueron pasadas en las emisoras de radio locales como parte de la campaña por la consulta. Con una participación superior al 70%, Tambogrande rechazó la mina con un 98,6% de los votos. Al día siguiente, las acciones de *Manhattan* se derrumbaron un 26% en la bolsa de Toronto (Guarango, 2004).

- *Serie de documentales cortos “Los conquistadores no han muerto” (2009-10)*

Con sede en Cochabamba, el Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) es una de las ONG que más esfuerzos ha realizado de comunicación alternativa en Bolivia, a través de publicaciones, boletines, documentales audiovisuales y noticieros interculturales (www.cedib.org). Uno de sus aportes más valiosos ha sido la serie de documentales: “Los conquistadores no han muerto”, un conjunto de ocho vídeos cortos sobre la gran minería en Bolivia, que exploran sus impactos ambientales y conflictos laborales. El propio título del material audiovisual apela al imaginario de la *soberanía nacional* para cuestionar la creciente transnacionalización de la minería boliviana. “La Colonia continúa”, el primero de los ocho vídeos, aborda una visión histórica y la vigencia del modelo primario-exportador. La tapa del DVD combina las tres carabelas de Colón y un moderno camión de transporte de mineral (véase fotografía). El artefacto se completa con una guía didáctica para utilizar los documentales como material de formación popular o en espacios de vídeo-debate.

“La Colonia continúa”, el primero de los ocho vídeos, aborda una visión histórica y la vigencia del modelo primario-exportador. La tapa del DVD combina las tres carabelas de Colón y un moderno camión de transporte de mineral (véase fotografía). El artefacto se completa con una guía didáctica para utilizar los documentales como material de formación popular o en espacios de vídeo-debate.

- *Documentales largos de la Asociación Guarango*

En los últimos diez años, la asociación peruana *Guarango Cine y Vídeo* se ha ganado a pulso muy buen crédito con la elaboración de películas documentales de excelente calidad (www.guarango.org). Sus documentales han obtenido el reconocimiento con numerosos premios en festivales de cine internacionales, y han sido retransmitidos por canales

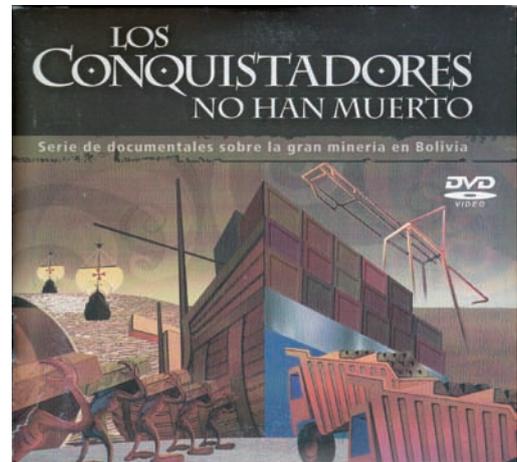
Recuadro 35

Tambogrande

Tambogrande despensa del Perú.
De tus grandezas, el agro es mejor
Y tus riquezas grabadas están
En el glorioso escudo nacional.

Tambogrande tiene su valle
que es hermoso y es San Lorenzo
La agricultura y ganadería es tu producción
Su modelo de desarrollo eligió
Y en democracia dijo “agro sí y minas no”.

Fuente: Guarango (2004), p. 20.



Fuente: CEDIB, DVD de documentales, 2009-10

de televisión como *BBC World*, *Discovery Channel*, *TeleSur*, *TV Perú*, *Red TV* y *Canal N* del Perú, entre otros medios masivos. Es decir, su cine documental tiene vocación de acceder a circuitos comerciales para conectar con un público mayor. La serie sobre comunidades y medio ambiente ha lanzado documentales emblemáticos, tales como “Choropampa, el Precio del Oro” (2002), “Tambogrande: mangos, muerte, minería” (2007), y “Operación Diablo” (2010). El trabajo de Guarango se enmarca en el esfuerzo colectivo de crear memoria audiovisual de las resistencias mineras. La propia elaboración del artefacto (el documental) se convierte también en un espacio de contacto con activistas.

- *La última reina de Cerro de Pasco*

Situada en la sierra central del Perú, Cerro de Pasco es una ciudad partida al medio por un tajo minero a cielo abierto, un inmenso agujero. ¿Qué memoria puede construir una persona cuando el espacio físico que habita está sometido a un cambio violento? Cuando se sabe que el suelo que se pisa se va minando y se abre bajo nuestros pies... Estas preguntas son las que llevaron a la antropóloga Elizabeth Lino a crear un proyecto nuevo de comunicación para recuperar la memoria y la identidad de las personas que habitan espacios mineros (<http://laultimareina.com/elproyecto>):⁷⁷

“La última reina” es un proyecto performático y multidisciplinario (visual, antropológico, literario, plástico y documental). Propone una mirada a un espacio en constante desaparición debido a la explotación minera, así como la reflexión en torno a la construcción de la memoria a partir de la relación sujeto–espacio. En este caso, un espacio que se transforma de manera caótica, vertiginosa y voraz”.

La artista utiliza su propio cuerpo como medio de expresión. Desde 2009, ha creado un personaje público como artefacto provocador: una reina con banda, cetro, corona, guantes de piel e himno nacional de fondo. Sus *performances* se dirigen a combatir el imaginario del Perú como país de la nueva minería. Para ello, repite con ironía los lemas oficiales del *lobby* minero: “Cerro de Pasco, la minería que tú quieres”. “Ven y vota al Tajo Raúl Rojas en Cerro de Pasco como Maravilla Universal y Paisaje Cultural Histórico del Perú”. “Con el apoyo de la empresa minera *El Perú Avanza*” (<http://www.youtube.com/watch?v=eYshP4BoYZ8>). O viste una polera (camiseta) con la “P” del Perú dibujada sobre la ciudad: “No queremos ser un tajo” (véase imagen 16). Su arte tiene también un hueco para la reflexión de género (“Tierra de machos”). Recopila *huaynos* y otras canciones tradicionales, tales como “Mala Chola”, que hacen gala de un romanticismo a tajo abierto, impregnado de un machismo ancestral. La página electrónica del proyecto resulta un contenedor de videoclips, audios, galerías de fotos, fondos de pantalla, y está concebida para facilitar la interacción con los internautas, la descarga de archivos, el envío de comentarios, o la participación en redes sociales como *facebook* o *twitter* (www.laultimareina.com). Es decir, el proyecto hace uso de Internet como nuevo lugar de encuentro.

⁷⁷ En una entrevista realizada por los reporteros del blog Cuarto de Azotea, Elizabeth Lino confiesa que su proyecto artístico nace del dolor. Un día regresó a su natal Cerro de Pasco y se dio cuenta que aquello no era normal. De pequeña, había creído que todas las ciudades del mundo tenían un agujero al medio como Cerro de Pasco. Véase <http://www.youtube.com/watch?v=ecv-TtGf3Rc>.

NO QUEREMOS SER UN TAJO



Fuente: <http://laultimareina.com>

CAPÍTULO 8

Resistencias mineras como lucha de imaginarios: dos experiencias

8.1 La defensa del cerro Quilish en Cajamarca: continúa la amenaza

El ingreso de Yanacocha en Cajamarca: la “nueva minería que forja progreso” y la mafia Fujimori-Montesinos

Tras diez años de exploración, en 1990 comenzaron los estudios de factibilidad. La minera aprovechó el plácet neoliberal del gobierno de Fujimori para iniciar sus actividades en 1992. La primera barra de oro doré (70% de oro y 30% de plata) se obtuvo el 7 de agosto de 1993 del yacimiento Carachugo. El entonces presidente Fujimori mostró la barra en diversos medios de comunicación, asegurando que ese oro traería progreso a Cajamarca. Esa fue la principal consigna: “Cajamarca y Yanacocha, **trabajando juntos por el progreso**”, un lema que fue mutando de piel a lo largo de dos décadas para proyectar todos los imaginarios y promesas posibles: empleos asalariados en la mina, desarrollo rural, modernidad, agua...

El accionariado inicial de Yanacocha incluía a la compañía francesa *Bureau de Recherches Géologiques et Minières* (BRGM), con el 24,7% de las acciones. En 1998, los dos socios mayoritarios, *Newmont* y Benavides, dieron un golpe de mano para hacerse con su paquete

Recuadro 36

La minera Yanacocha en cifras

- La **inversión inicial** ascendió a \$Us 36,6 millones.
- La **mina de oro a cielo** abierto se extiende por los yacimientos de Carachugo (desde 1993), Maqui Maqui (1994), San José Sur (1996), Yanacocha (1997), La Quinoa (2001) y Cerro negro (2003).
- Posee cuatro áreas de lixiviación y dos instalaciones de procesamiento. Explota un **área de 16.000 ha.** (de un área total de 26.000 ha.)
- Yanacocha es la **mina más rentable de América Latina** (y la segunda mina de oro más grande del mundo, tras una ubicada en Tanzania).
- En Cajamarca, Yanacocha produce **el oro más barato del mundo.** En 2005, el coste se situaba 110 \$/onza (frente a un costo promedio de 240 \$/onza de Newmont).
- Durante 1996-2004, la minera obtuvo \$Us 5.725 millones de ingresos, y pagó \$Us 103 millones en concepto de **canon** a Cajamarca (apenas un 1,8% de sus ingresos).
- “**El diamante de la corona de la reina**”, así llamaban a Yanacocha en los cuarteles generales de la Newmont en Denver (Estados Unidos).

Fuente: Salas (2005), p. 15 y Ministerio de Energía y Minas.

⁷⁸ Uno de los videos de Montesinos muestra al entonces asesor de inteligencia del presidente reunido en la famosa salita del Servicio Nacional de Inteligencia con el Vocal Supremo Jaime Beltrán. En esa reunión, Montesino le solicitó al vocal votar a favor de Newmont-Benavides, quienes finalmente lograron un fallo positivo de cuatro votos contra tres. Pero no queda ahí la cosa. El entonces embajador francés en Lima, Antoine Blanca, declaró que Newmont pagó por el caso más de \$Us 10 millones a un abogado, un dinero destinado a sobornos. Las autoridades anticorrupción poseen otra grabación de la reunión que sostuvo Montesinos con Lawrence Kulander (representante de Newmont). De acuerdo a la declaración judicial del ex-asesor de Montesinos, Rafael Merino Bartet, en esa reunión Kurlander le habría abonado \$US 4 millones al entonces jefe de inteligencia. Véase La República, 4 diciembre 2003.

te de acciones. El litigio sobre la propiedad de la mina se resolvió con un **soborno en los tribunales**, y la intercesión del asesor Vladimir Montesinos en la operación.⁷⁸ Pese a los claros signos de delito, el Banco Mundial (poseedor del 5% de las acciones a través de la Corporación Financiera Internacional) nunca quiso darse por enterado.

Los abusos de Yanacocha y la criminalización de líderes campesinos

El inicio de las operaciones de Yanacocha estuvo acompañado de amenazas a los campesinos que no querían venderles sus tierras. La **compra de tierras** estuvo plagada de abusos: “A las buenas se paga, a las malas habrá juicio”. La minera ofrecía a los campesinos 100 o 200 soles por la hectárea de tierra. Y les prometían trabajo en la mina, apoyo para la educación de los hijos, reubicación en zonas agrícolas, incluso seguro de vida que cubría los gastos de sepelio... Luego de ocho meses de firmado el contrato, los campesinos recibían una notificación que les conminaba a desocupar las tierras.

La mina Yanacocha está ubicada en la cabecera del Valle de Cajamarca, donde nacen las subcuencas del Río Grande y Porcón. Esta ubicación hace que la actividad minera basada en lixiviación con cianuro entrañe especial peligro. Los **primeros descuidos** no tardaron en producirse. En 1994, las labores de perforación de la mina contaminaron tierras y aguas de los campesinos del Cerro Quilish. Dos canales de televisión (Global TV Local y TV Norte, el canal municipal) difundieron el vídeo independiente realizado por la Vicaría de Solidaridad que denunciaba dichos abusos. Como contrataque la minera difundió su célebre vídeo: “*Yanacocha la mina que no contamina*”. Dos años le tomó a la transnacional meterse en el bolsillo a la mayoría de los medios de comunicación locales. En 1996, los principales noticieros de la región ya se hacían eco de los imaginarios de Yanacocha: “minería responsable”, “minería ecológica”, “minería que forja progreso”...

Pero a medida que Yanacocha ampliaba sus explotaciones, **los abusos se fueron agravando**. Entre 1998 y 2000, las protestas campesinas se incrementaron contra el deterioro de la calidad del agua y la desaparición de algunos manantiales en el Cerro Quilish, que atribuían a la actividad minera adyacente y la anuencia de las autoridades de la municipalidad provincial. La institución FEDEPAZ (Jahncke y Leyva, 2002) y el activista ambiental Iván Salas (2005: 27 y 40) han recogido el testimonio de varios casos:

→ Junio 2000. Derrame de mercurio en Choropampa

En accidente fortuito, un camión de transporte vertió 151 kg. de mercurio. El mercurio metálico se volatilizó en el ambiente, afectando a más de 1.000 pobladores, en su mayoría mujeres y niños pequeños, lo que generó un grave problema de salud pública. Yanacocha nunca reconoció la dimensión de la tragedia. Es más, el Ingeniero Peter Orams puso un aviso en la puerta del centro comunitario telefónico, ofreciendo comprar el mercurio recogido por la población a 100 soles/kg., lo que ocasionó mayor intoxicación (Jahncke y Leyva, 2002:41). La población se enteró entonces que la minera manejaba mercurio y arsénico en la lixiviación del oro, sustancias tóxicas que no se contemplaban en el Estudio de Impacto Ambiental que la minera presentó al inicio de la explotación, tal y como denunció la Defensoría del Pueblo (2001). Diez años después, la población afectada presenta serias secuelas y sigue esperando justicia.⁷⁹

⁷⁹ La contaminación con mercurio metálico ocurrida en Choropampa es considerada la mayor ocurrida en el mundo en el sector minero. Ocho años después del derrame, el Ministerio de Salud (2008) reconocía en el Informe N° 188-2008-DGSP/DSS/MINSA que “existen problemas de salud en los pobladores de ambas localidades que actualmente no están siendo atendidos por diversos factores: cobertura del seguro Pacífico insuficiente, falta de aseguramiento a todos los pobladores, sistemas inadecuados de referencia y contra referencia de pacientes, insuficientes recursos humanos, equipamiento en los centros y puestos de Salud (...)

De un total de 18 casas evaluadas, 7 resultaron contaminadas por mercurio elemental con valores mayores a los establecidos por EPA- 1997”. La población sigue reportando la existencia de temblor corporal, insomnio, irritabilidad del carácter, pérdida de memoria, fuertes dolores articulares, sarpullido intermitente, epistaxis o hemorragia nasal, desmayos, ceguera e intensos dolores renales. Un análisis detallado del caso se encuentra en Marco Arana (2009) y María Teresa Arana (2010).

- *Marzo 2001. Muerte de truchas en Porcón y Puruay* (Provincia de Bambamarca)
Los análisis realizados por la Dirección de Medio Ambiente de Pesquería y la Universidad Nacional de Trujillo revelaron la presencia de altos índices de plomo, hierro, zinc, arsénico y mercurio (Jahncke y Leyva, 2002: 98-105). El entonces gerente de la minera, Federico Schwalb, declaró en un canal local de televisión que “las truchas habían muerto por ahogamiento”. Cuando los campesinos denunciaron que los sapos habían desaparecido de la zona, el gerente repuso que la muerte de sapos se debía a una plaga mundial.
- *Diciembre 2002. Desvío ilegal del camino real de la comunidad La Apalina*
Yanacocha cambió ilegalmente el camino real que une la comunidad con Cajamarca para instalar la pila de lixiviación con cianuro de la explotación “La Quinua”. El incidente terminó con enfrentamientos, y Yanacocha denunció a dirigentes ronderos por daños en un tractor.
- *Diciembre 2003. Aparición de mercurio en el grifo de viviendas urbanas en Cajamarca*
El domingo 14 de diciembre en una vivienda de la Urbanización Amauta apareció nuevamente mercurio en el grifo (la quinta vivienda en Cajamarca). A las 2.35p.m. la Fiscal constató que el mercurio salía de la cañería de agua.

Pese a ser denunciados, todos estos atropellos no dieron lugar a una rectificación y reparación de los daños. Antes al contrario, los **demandantes fueron enjuiciados** con acusaciones de agitación social y desorden público. La Asociación de Defensa y Educación Ambiental (ADEA) publicó una lista de 51 enjuiciados por Yanacocha (véase recuadro 37). “Antes nuestra lucha era por la tierra, ahora es por el agua”, manifestaba Félix Llanos, dirigente campesino de Combayo, con motivo de un bloqueo de carreteras en Cajamarca hacia la minera Yanacocha. Pero el grito podría venir también de la provincia de Celendín, donde el proyecto Minas Conga (*Newmont* y Buenventura) o el proyecto Galeno (*Lumina Copper*, subsidiaria de *China Minmetals*) pretenden explotar en cabecera de cuenca.

La desarticulación del tejido social en Cajamarca: una estrategia deliberada

Una estrategia paralela ha sido dividir a la sociedad cajamarquina. Como es tradicional en Perú, la cultura de participación política local está fuertemente mediatizada por las dinámicas electorales. Las organizaciones campesinas operan como trampolín político de dirigentes, lo que ha consolidado una **cultura política de divisiones y personalismos**, así como la desconfianza generalizada hacia las dirigencias. Así las cosas, la Federación Departamental de Rondas Campesinas y Urbanas de Cajamarca (FEROCAUP), la histórica ronda ligada al Partido Comunista del Perú (PCP-Patria Roja) se ha mostrado históricamente más preocupada por consolidar la dirección social y política que por recoger las demandas de las bases.

Esta cultura fue aprovechada al milímetro por Yanacocha. De hecho, la minera dio apoyo a una **federación rondera paralela**, la denominada Federación de Rondas Campesinas Femeninas del Norte del Perú (FEROCAFENOP), con base en 13 provincias de Cajamarca y el control de un grupo de líderes vinculados entre sí por lazos de sangre y relaciones clientelares.⁸⁰ En un estudio sobre el movimiento rondero en Cajamar-

Recuadro 37

Yanacocha enjuició y persiguió a 51 dirigentes

- Lot Saavedra Carrasco (alcalde de Choropampa)
- Reinhard Seifert (presidente del Frente Defensa)
- Gómer Vargas Cueva (alcalde de Huambocancha Baja)
- Eriberto Ventura (líder de las rondas campesinas)
- Jorge Olivera Gonzáles (dirigente estudiantil universitario)
- Jorge Malca (dirigente universitario)

Fuente: Boletín de ADEA, citado en Salas Rodríguez (2005), p. 29.

⁸⁰ Creada en 1996, la FEROCAFENOP tiene su sede en Cajamarca. La Federación afirma aglutinar a la Federación de Rondas Campesinas Femeninas de la Provincia de Cajamarca y a la Coordinadora Provincial de Caseríos Afectados por la Minería en Cajamarca (COPROCAMIC).

ca, el sociólogo Raúl Chacón (2002) ha descrito cómo Yanacocha cooptó a Segunda Castrejón, dirigente de la organización. A mediados de 1999, la lideresa suscribió con la minera un convenio para distribuir microcréditos en el departamento (del que se benefició personalmente al cobrar más intereses de lo debido). Además, el personaje fue escogido por la CONACAMI para organizar su rama regional en Cajamarca. Grave error estratégico, ya que la dirigente se peleó con otros dirigentes coordinadores, y la CONACAMI nunca tuvo arraigo en Cajamarca. No hace falta decir que Yanacocha se frotaba las manos con este juego de ambiciones personales, rencillas, divisiones, dobles discursos y corruptelas, que generaba, en definitiva, el **desprestigio rondero**.

El 5 de marzo de 2004, el Frente de Defensa de Cajamarca convocó una marcha en defensa del Quilish. Ese mismo día, el dirigente Julio Marín —ligado a las rondas campesinas de Segunda Castrejón— habló durante 40 minutos en una radio local de cobertura rural (Salas, 2005:53):

“Los campesinos no deben ir a la protesta ciudadana porque ésta solo conviene a los ecologistas, quienes se aprovechan de los campesinos para sacar dinero. Lo mejor es que los campesinos de alrededor del Quilish hablen con la minera y se pongan de acuerdo; la mina trae desarrollo, los de la ciudad no deben meterse en los problemas de los campesinos”.

Quedaba así clara la segunda parte de la estrategia: **separar al campo de la ciudad**. Al poco tiempo, se hicieron públicos las escrituras de compra (fechadas en abril de 2001) de dos terrenos de 19 y 12 ha. por un monto de 100.000 \$Us. Los compradores eran Segunda Castrejón y diferentes miembros de su familia. En el mapa de actores realizado por el consultor Dante Vera (2004) para el Grupo Norte, Segunda Castrejón aparecía como dirigente aliada de la mina.

Recuadro 38

La penetración minera

“(En Cajamarca) existen enormes desigualdades de poder, de fondos y de otros recursos entre los actores. Este poder distorsiona las instituciones de gobernanza, no sólo porque las empresas mineras terminan cubriendo los costos operativos de oficinas públicas y de mesas de concertación. También distorsiona porque crea sistemas de incentivos (por) los cuales muchos de los actores involucrados terminan pensando en la posibilidad de acceder a recursos de, y puestos de trabajo con las empresas. Yanacocha tiene varios empleados quienes antes trabajaron con ONG, organizaciones sociales y entidades públicas. En tal contexto, la posibilidad de que los movimientos sociales influyan en la gobernanza parece remota. Sin embargo, los casos nos muestran que, de todas maneras, ha habido influencias”.

Fuente: Bebbington (2007), p. 43.

En una interesante investigación sobre movimientos sociales y gobernanza ambiental en Perú y Ecuador coordinada por la Universidad de Manchester, Bebbington (2007b: 40-43) concluyó que la **dispersión de discursos y proyectos políticos** al interior del movimiento social cajamarquino ha sido fuente de debilidad permanente. La coexistencia de discursos nítidamente anti-mineros, demandas de nacionalización, y apuestas por buscar relaciones más fructíferas con Yanacocha (a través de optimizar el canon minero) ha dejado a la sociedad en una situación de vulnerabilidad frente a la minera (véase recuadro 38). Una opinión similar ha expresado Martín Tanaka (2009:73), investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP):

“Los altos niveles de desconfianza y descontento que enfrenta la empresa en Cajamarca se expresan en recurrentes episodios de protestas y conflictos, cuyas demandas, sin embargo, parecen ser asimilables por la empresa, en tanto se caracterizan por su carácter localista, desarticulado y en ocasiones pragmático. En general, existen en Cajamarca agudos problemas de acción colectiva, así como de representación social y política, que se expresa también en altos niveles de fragmentación.”

La “guerra en los medios” y la campaña de desprestigio a los ambientalistas

El ex-párroco de Porcón y activista de derechos humanos, Marco Arana (2007a), ha descrito el negocio sucio de la prensa, que puso a los ambientalistas en el ojo de mira:

“El negocio de la prensa sucia era sencillo: alabar a la mina cuando les daba publicidad y atacarla cuando dejaba de hacerlo. Llegaron «periodistas» de otras regiones. De pronto, resultaban dirigiendo periódicos, seminarios, quincenarios, en blanco y negro, a todo color, dirigían programas televisivos y radiales atacando en todos ellos a los líderes ambientales. El presidente del Frente de Defensa Ambiental en Cajamarca era llamado «nazi», «ladrón», «homosexual» por un par de «periodistas» que eran de los más mordaces, pues exhibían como hoja de vida el ser familiares de prominentes miembros del poder judicial, compadres o asesores del algún gerente de Yanacocha”.

La prensa afín a la minería operó una descarada estrategia para desacreditar a **los grupos ecologistas**, a los que dedicó apelativos como “extremistas”, “agitadores sociales”, o “ecovivos”. Pero, además, lanzó acusaciones infundadas de “recibir plata del extranjero”, “querer cerrar la mina”, o “financiarse del narcotráfico” (Salas, 2005:26). Por su parte, Arana (2007a) ha evidenciado otras **prácticas viciadas** de este tipo de periodismo, que dan cuenta de la verdadera dimensión de la “guerra en los medios”:

- Clonación de prensa para sacar del mercado a la prensa independiente.
El legendario “El Observador”, de corte ambientalista, fue clonado por otro semanario (“El Espectador”), que salió con el mismo formato, los mismo colores y el mismo precio, pero con información diametralmente opuesta.
- Contratación de periodistas de extrema derecha.
En octubre de 2002, el área de comunicación de Yanacocha contrató al limeño Luis Rey de Castro para calentar la campaña electoral. Su paso por Cajamarca fue un fracaso, ya que sembró envidias en otros periodistas pro-mineros, que le dijeron a la minera que por menos plata, podían hacer mejor el trabajo.
- Utilización de periodistas para filmar a los participantes en protestas
- Fiestas, buffets de lujo y cursos en hoteles limeños
Talleres de periodismo ambiental, reuniones de trabajo en las oficinas de Yanacocha y la celebración del Día del Periodismo fueron creando lazos de familiaridad, que se tradujeron en compadrazgos entre periodistas y gerentes intermedios de la minera. El dueño del periódico de mayor circulación de Cajamarca podía tener a sus dos hijos estudiando en el exclusivo colegio bilingüe donde estudian los hijos de los mineros de mayor rango (600 dólares de pago mensual).

En febrero de 2004, **el carnaval se convirtió en un espacio de protesta**. Con el fin de maquillar su deteriorada imagen contrató al grupo musical *Bella Bella* y al grupo cómico de *Los Chistosos*. Cada vez que los artistas contratados mencionaban a Yanacocha, recibían silbidos y pitidos. La organización ecologista Ecovida convocó un concurso de coplas relacionadas con el tema minero. Las letras de las coplas ganadoras sonaron en los carnavales por las calles de la ciudad. La copla “corrupción minera” resulta una crónica en clave de humor de la guerra en los medios (véase recuadro 39).

Recuadro 39

Coplas de carnaval

Corrupción Minera

Yanacocha envenena
con mercurio diariamente
a Cajamarca condena
llega tanto delincuente.

Radios, diarios tan sobones
periodistas muy vendidos
muertos de hambre y huevones
mercenarios y prendidos.

Las truchas se ahogan

Acaca'o mi Cajamarca
la jodió la minería
porque aparte de mercurio
nos trajo la putería.

Los pendejos de la mina
nos quieren cojudear
que las truchas se ahogan
porque no saben nadar.

Fuente: Salas (2005), pp.
32 y 52.

La defensa del Quilish en 2004: "fuente de agua y de vida"

La resistencia social se focalizó en el cerro Quilish, centro de todas las amenazas contra la población urbana y rural del departamento. Ya en 1990, la alcaldía provincial de Cajamarca había encargado un estudio técnico ambiental para determinar el establecimiento de una Zona Reservada Protegida Municipal. El informe final puso de manifiesto la **importancia neurálgica del Quilish** (véase recuadro 40), y alertó del peligro que suponía su explotación minera: "De concretarse la explotación de los yacimientos La Quinua y Cerro Quilish-Cerro Negro, se verán afectadas inevitablemente la cantidad y calidad de las aguas de los ríos Porcón y río Grande" (Salas, 2005:38-39).

Desde 2000, se sucedieron los acontecimientos, un toma y daca parecido a los movimientos de piezas en una **partida de ajedrez**, a brazo partido entre las autoridades locales, el gobierno nacional y Yanacocha:

Recuadro 40

El cerro Quilish en cifras

- El Cerro Quilish opera como una esponja natural, debido a la existencia de afloramientos rocosos fracturados y una cubierta de pastos altoandinos, que permiten retener e infiltrar el agua de lluvia en su interior. Además, la parte alta posee un ecosistema típico de jalca, poblado con especies vegetales endémicas.
- En el Quilish nacen los ríos Porcón y Grande, que abastecen el 72% del agua consumida en Cajamarca a través de la planta de tratamiento de agua "El Milagro".
- La planta fue construida antes de la explotación minera en Cajamarca y, por tanto, no está preparada para tratar aguas contaminadas por minería. El Quilish dista 8,56 km. de la planta en línea recta; de la bocatoma del Río Porcón a la planta, apenas un kilómetro.
- 15.000 campesinos habitan las subcuencas Porcón y Grande, repartidos en las comunidades de Porcón, Puray, Huambocancha, Tres Molinos, Tual, Cince, Las Viscachas y La Ramada. Esta población vive de la agricultura de subsistencia, por lo que el sistema de canales de riego resulta crucial para sostener su medio de vida.
- Se estima que el cerro tiene 4,2 millones de onzas de oro.

Fuente: Salas (2005), p. 39, 57 y 61.

2000 5 Octubre	<u>Ordenanza Municipal 012-200-CMPC, que declara al Cerro Quilish como "Zona Reservada Protegida Municipal"</u> Ante las presiones de la población, la alcaldía municipal de Cajamarca promulgó la ordenanza, que también protegía a las microcuencas de los ríos Quilish, Porcón y Grande. La Minera Yanacocha entendió que la ordenanza atentaba contra sus intereses e interpuso varios recursos de amparo que fueron declarados improcedentes, lo que la motivó a apelar ante el Tribunal Constitucional del Perú.
2002 26 julio	<u>Acuerdo de Concertación y Gobernabilidad Local de Cajamarca</u> El acuerdo fue firmado, en el Obispado de Cajamarca, por el Frente Perú Renovador (Perú Ahora), el APRA, Unidad Nacional y Perú Posible de cara a las elecciones municipales y regionales de finales de 2002. El punto 3 del acuerdo dedicado a la sostenibilidad ambiental declaraba "garantizar la intangibilidad del Quilish si el estudio de impacto ambiental demuestra que no es técnicamente viable". Es decir, una puerta abierta a las tesis de Yanacocha, y una jugada maestra de la minera.
2003 7 abril	<u>Sentencia del Tribunal Constitucional, que autorizaba a la minera a explorar y explotar la zona previa realización de un Estudio de Impacto Ambiental.</u> El abogado de Yanacocha manifestó ante el tribunal que no había población en el entorno de la zona.
2003 Finales	<u>Auditoría ambiental de Yanacocha</u> Realizado por la consultora INGETEC, el informe incluía 278 recomendaciones a Minera Yanacocha, y mostraba las deficiencias de su manejo en gestión ambiental. ⁸¹
2004 16 julio	<u>Resolución directorial del Ministerio de Energía y Minas 361-2004-MEM/AAM, que autorizaba el reinicio de exploraciones en "Quilish, Cuenca Porcón y Yanacocha Sur".</u>
15 sept.	<u>Paro regional y movilización masiva en Cajamarca</u>
16 sept.	<u>Resolución directorial del Ministerio de Energía y Minas 427-2004-MEM/AAM, que impedía a la Minera Yanacocha continuar con las labores de exploración.</u>
5 nov.	<u>Resolución directorial del Ministerio de Energía y Minas 467-2004-MEM/AAM, que revoca la resolución 361 y deja sin efecto la autorización para explorar el "Quilish".</u>

⁸¹ En la misma línea, Stratus Consulting hizo público un estudio hidrogeológico de la microcuenca de Porcón, en el que se concluye que las afectaciones de la calidad de las aguas podían causar daños severos al ecosistema; el estudio concluye que, entre otras cosas, en algunos lugares el recurso hídrico ha desaparecido por completo.

⁸² Una cronología de los sucesos de septiembre de 2004 en Cajamarca se puede encontrar en Salas (2005), pp. 68-88. Las movilizaciones populares incluyeron vigiliadas por la noche en el atrio de la catedral, el bloqueo de la carretera de acceso a Yanacocha o el paro cívico del 15 de septiembre. Por su parte, la minera desplegó una completa batería de medidas de intimidación: acciones de desinformación, contratación de un contingente policial de Chiclayo, contratación de pandilleros para sembrar el caso, infiltración de agentes en el movimiento campesino, ofertas de empleo a dirigentes, e incluso distribución de cartas difamatorias y amenazas anónimas por teléfono.

La resolución de julio del MEM a favor de la exploración del Quilish fue la gota que colmó el vaso. Los meses de julio y agosto experimentaron un aumento de la conflictividad social y ambiental, en torno a las operaciones de Yanacocha en la zona. Protestas, marchas, bloqueos de carreteras fueron la antesala de las **movilizaciones multitudinarias** de septiembre, que alcanzaron su clímax el 15 de septiembre, cuando en la Plaza de Armas de Cajamarca se reunieron 70.000 ciudadanos para exigir la intangibilidad del Cerro Quilish.⁸² La presión social logró que el 16 de septiembre el MEM impidiese a Yanacocha continuar sus labores de exploración. Meses más tarde, en noviembre, una nueva resolución ministerial revocaba la autorización y la dejaba sin efecto.

¿Por qué tuvo éxito el movimiento de resistencia en 2004? Por primera vez, un departamento del Perú lograba **articular una defensa de carácter regional** contra la minería. El imaginario del Quilish como “fuente de agua y de vida” tuvo la virtud de tender puentes campo-ciudad y convocar a varios sectores. El Comité Cívico de Lucha por la Defensa de la Vida y el Medio Ambiente en Cajamarca aglutinó a más de 27 organizaciones sociales. Líderes campesinos y bases ronderas, usuarios de canales de riego, sindicatos regionales, maestros sindicalizados (SUTEP), colegios profesionales, organizaciones barriales, grupos ecologistas y jóvenes universitarios fueron los puntales de un nuevo sujeto social, que contó con el apoyo también de alcaldes distritales y congresistas afines. El Quilish movilizó también a las provincias del Norte de la región que bajaron para solidarizarse. La movilización en torno al Comité Cívico encontró una agenda clara: la suspensión de las exploraciones de Yanacocha y la demanda de intangibilidad del cerro. Sin embargo, dicha declaratoria nunca llegó a firmarse. La ordenanza quedó paralizada por la inacción de las autoridades y porque el gobierno de Alan García quitó a las alcaldías la competencia de declarar áreas protegidas.

El Quilish fue un acierto en medio de la búsqueda de caminos de resistencia. La defensa del cerro intentó tocar, además, la **fibra de la identidad**. Precisamente por ser fuente de agua, el cerro posee otros significados en el imaginario campesino. El sacerdote y activista Marco Arana (2007b) ha hecho un trabajo de rescate de la tradición oral andina del cerro que liga el agua a la presencia de oro.⁸³ Hasta hace poco, el cerro estaba lleno de pequeños altares rituales y apachetas. Los campesinos challaban allí agua bendita, alcohol, ajíes, sal, velitas amarradas, mechones de lana o pedacitos de cuero para proteger su ganado. Para ellos ha sido un cerro tutelar, protector. Ahora bien, ¿esta relación espiritual es suficiente para un rescate de identidad? ¿A quiénes convoca? La dimensión de *Apu* Sagrado ha sido, incluso, discutida por algunas voces de la Iglesia que sostienen que el Quilish no constituye un referente histórico religioso como los *apus* del Cuzco o El Brujo en La Libertad. La realidad es que la población campesina del Quilish ha vivido un rápido proceso de aculturación en las últimas décadas, que ha hecho que muchas de estas prácticas estén en retroceso.

⁸³ Campesinos mayores de Porcón relatan que sus antepasados contaban que en la hendidura que existía en el centro de la cumbre del Quilish -hoy desaparecida tras los primeros trabajos de exploración de Yanacocha- “había una pileta de oro de la cual brotaban dos corrientes de agua, una que va para el Cerro Negro y otra para Cajamarca pueblo, el agua era cristalina y pura, muy rica para beber”. Lo que demuestra que agua y oro estaban ligados en la tradición oral andina. Véase Arana (2007b), p.4.

El repliegue estratégico de Yanacocha después del Quilish: la apropiación del agua

Tras el traspies del Quilish, los responsables de Yanacocha impulsaron una **campaña de buena vecindad**. Contrataron al grupo de teatro “Algo vi pasar” y organizaron talleres internos con los empleados de la mina para cultivar buenos modales y no generar rechazo entre la población. Cada trabajador de la empresa tenía que elegir un vecino cercano y mantener con él una relación de apadrinamiento (visitarlo de forma periódica, hacerle un regalo por navidad...). Así se conseguía tender ese cordón social de seguridad para proteger a la minera.

Pero hicieron más cosas. Durante los años 90, Yanacocha había centrado su estrategia de RSE en desarrollo rural. Sus inversiones en educación con un claro enfoque de inclusión social (alfabetización, matemáticas para todos y maestrías en educación rural), así como en salud (cirugía gratuita para niños con labio leporino) recuerdan a los programas de cooperación impulsados entre los países del ALBA (por ejemplo, la Operación Milagro, o “Yo sí Puedo”). Pero la minera cubría también intervenciones relacionadas con *apoyo a emprendedores* (a través de ALAC-Asociación Los Andes Cajamarca) y *fomento agropecuario* (vía la ONG FONCREAGRO). Es decir, la minera tuvo la habilidad de cubrir todo el espectro sectorial e ideológico de la cooperación. Pero no fue suficiente. Tras el traspies del Quilish en 2004, Yanacocha aprendió la lección y **focalizó su RSE en el agua**. Con la misma filosofía: cubrir todas las escalas posibles, de la A a la Z. De este modo, la minera financió represas, recuperó tajos mineros para convertirlos en reservorios (de acuerdo a una política de “cierre creativo de minas”), rehabilitó canales de regadío, e impulsó microrreservorios para familias, piscigranjas con agua reciclada y monitoreo participativo del agua (<http://elaguaprimeroblogspot.com>). Roque Benavides, gerente general de Buenaventura (accionista peruano de Yanacocha), ha resumido el nuevo discurso en pocas palabras: “Primero el agua, después la mina” (véase recuadro 41).

“Primero el agua, después la mina”

“El manejo del agua es fundamental. El proyecto de la Zanja, donde ingresó una turba que incendió el campamento en 2003, logró entrar en operación a partir del primero de septiembre de 2010. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Electrificar 28 pueblos alrededor de la mina y construir una represa de agua, que se llena en la época de lluvias y regula las aguas de todo un valle a lo largo del año. Nosotros sembramos agua primero y luego entramos a operar. El tema del agua, en la vertiente occidental de los Andes, es fundamental (...) Soy un convencido de que las mineras tenemos que construir represas a lo largo de la cordillera, pero bien arriba, porque si las construyes a 2.000 ó 2.500 metros de altura se sedimentan.

Roque Benavides
Gerente General de Minas Buenaventura

Fuente: Barnechea (2011), p. 188.

“Las lluvias en Cajamarca alcanzan para llenar 100 vasos de agua. Uno es para Yanacocha, cuatro son para la ciudad, 25 son para la agricultura y 70 vasos sobran. Setenta. Agua más que suficiente para repartir entre todos. Sin embargo, esa enorme cantidad de agua se desperdicia en el mar...” (y el encuadre acaba mostrando la desembocadura de un río en el mar). Con este tipo de comerciales de corta duración, la minera **redobló sus esfuerzos de comunicación** en un primer momento. De ese modo, popularizó comerciales como “Agua hay en Cajamarca” (véase imagen 17), que indicaban que sólo el 15 % del agua es utilizado por la minería frente a un 70% que se pierde en el mar. Y logró posicionar su mensaje en la sociedad cajamarquina.



Fuente: <http://www.youtube.com/user/yanacochacajamarca>

En una segunda campaña, el equipo de comunicación de la minera decidió **enfrentar directamente las críticas ambientales**. Lanzó una serie de vídeos con un título elocuente: “El agua en Cajamarca: Mitos y realidad”. Un material audiovisual más sofisticado, que incluía animaciones, un protagonista (un muñeco con un casco minero), una voz en *off* (cálida y personalizada) y una banda sonora envolvente:

“Seis meses de lluvia, seis meses de época seca. ¿Cómo hacer para evitar esos 70 vasos de agua que se desperdician cada año? Ésa era la pregunta que nos hacíamos constantemente en Yanacocha”.



Y, una por una, contraargumentaba todas las acusaciones vertidas contra la minera: Mito 1: “Por culpa de Yanacocha no hay agua en Cajamarca”.

Fuente: <http://www.youtube.com/user/yanacochacajamarca>

Mito 2: “Yanacocha nos devuelve el agua contaminada”. Mito 3: “La minería destruye la agricultura”. Mito 4: “Cuando Yanacocha se vaya todo quedará destruido y sin agua”. El muñeco minero terminaba sobreponiéndose a los mitos (véase imagen 18) y el vídeo terminaba con un mensaje contundente:

“La minería en cabecera de cuenca es una oportunidad para vivir mejor (...) Yanacocha no compete con Cajamarca para el uso del agua. Somos sus aliados en la búsqueda de mayores reservas de agua”.

La intensa campaña de Yanacocha se posicionó en canales de televisión, espacios radiales e Internet, poniendo a las **organizaciones sociales a la defensiva**. Ante la intensidad de la campaña, varios grupos y colectivos se vieron en la obligación de responder las mentiras de la minera con vídeos de confección artesanal.

La crisis de Combayo en 2006 y los nuevos aprendizajes de Yanacocha

En noviembre de 2005, representantes de Combayo y Yanacocha firmaron un acta de labores conjuntas en la zona, que preveía dar trabajo a empresas comunales así como construir un canal de riego e implementar un monitoreo conjunto de los recursos hídricos. Tras las **promesas incumplidas de Yanacocha**, la comunidad de Combayo se levantó contra la minera en agosto de 2006, mediante la ocupación de instalaciones mineras y el bloqueo de carreteras. Los incidentes se cobraron la vida de un campesino, que falleció con heridas de bala. Por orden del fiscal, la policía registró los almacenes de Forza (la empresa de seguridad privada de Yanacocha) y encontró un arsenal de munición, calificado por la policía como “armas de guerra”. El 25 de agosto, el gerente de Asuntos Externos de Yanacocha, Ricardo Morel, anunció la “paralización indefinida” de las actividades de la minera en la zona. El anuncio sirvió para poner a unas comunidades (con personal contratado por la minera) en contra de otras. El conflicto se resolvió con un acuerdo de 11 puntos, que incluía la construcción de una carretera, la instalación de plantas potabilizadoras de agua, el compromiso estatal de monitorear la calidad del agua, y la realización de un estudio de “afianciamento hídrico” de la cuenca.

Fruto de estos sucesos, Yanacocha aprendió que los compromisos directos con las comunidades podían traer un efecto directo de *boomerang*. La lección fue bajar el perfil de interlocución directa con las comunidades y **redoblar los esfuerzos de infiltración institucional**. En los siguientes años, la minera incrementó la dotación de asesores en el gobierno regional, amplió su influencia en los gobiernos municipales, y participó activamente con técnicos en la plataforma de discusión del Plan Regional de Desarrollo. Su nuevo discurso fue: “nos ponemos debajo de los poderes locales”.

Escarceo de imaginarios

En 2007, las organizaciones sociales lanzaron una campaña para combatir el imaginario de *responsabilidad social* de Yanacocha. “¿Te la creíste?” era el guiño de complicidad para referirse a los mensajes de la minera. Los creadores de la campaña llegaron a la conclusión de que la identidad cajamarquina giraba alrededor del carnaval, pero que el dinero jugaba también un rol destacado. Fabricaron billetes falsos de cien dólares con frases como “ellos se llevan la plata de Cajamarca”, y regaron el *Quinde Shopping Plaza* con miles de esos billetes.

Los mineros no tardaron en responder. Aprovecharon el auge nacionalista que produjo la designación de *Machu Pichu* como una de las siete maravillas del mundo en julio de 2007. Y patrocinaron la campaña cajamarquina para **postular Baños del Inca** (situado en una de las áreas naturales de expansión de Yanacocha) al concurso paralelo que se hizo para designar las **siete maravillas del Perú**. Apelaron al imaginario de la *madre tierra* ligado al orgullo regional, y desarrollaron una campaña para que la gente participara en la votación. No hace falta decir que Baños del Inca quedó entre las siete primeras. Yanacocha había logrado su objetivo: abanderar una lucha ambiental en la región.

La modernidad en disputa

El auge de la minería aurífera trajo una oleada migratoria a la ciudad, que experimentó un fuerte crecimiento poblacional en las últimas dos décadas. Ese fenómeno demográfico estuvo asociado a la emergencia de una clase acaudalada de personal profesional y obrero ligado a la mina. Por su nivel de ingresos, este grupo se ha convertido en una **nueva élite social** que termina siendo la nueva clase dominante al desplazar el rol que antes tenían en la ciudad los descendientes de hacendados (Vega-Centeno 2011). Para satisfacer las necesidades de este grupo emergente, se han dinamizado varios sectores de la economía, tales como el comercio; el transporte aéreo; el sector inmobiliario; los centros educativos de élite; los restaurantes de lujo, o los *night clubs*, casas de juego y prostíbulos próximos al paradero de autobuses que recogen y devuelven al personal obrero de la empresa. De igual modo, la presencia de la minería ha consolidado a Cajamarca como nodo central de las empresas de servicios ligados a la mina (incluyendo desde maquinaria pesada y comunicación, hasta salud y entretenimiento). Este desarrollo de nuevos servicios ligados a la globalización ha transformado la economía regional.

Otra palanca de modernidad ha sido la **gestión municipal** en manos del empresario Marco La Torre (2007-10). Su lema fue “Cajamarca con progreso”. Financiado con el Fondo Minero de Solidaridad, la construcción del Complejo *Qhapac Ñan* (terrapuerto, coliseo y centro cívico en una zona cercana al Camino Inca) estaba dirigido a brindar infraestructura atractiva para las empresas y la población migrante profesional procedente de Lima (Niño y Pérez, 2011:16).⁸⁴ Sin embargo, su edificación resultó un símbolo criticado de modernidad, y ahondó la mala percepción sobre los políticos locales.⁸⁵ Mayor éxito ha tenido, sin duda, el *Quinde Shopping Plaza*, convertido en el mayor artefacto de la modernidad minera, una modernidad que ejerce un poderoso efecto demostrativo sobre las clases medias y populares de la ciudad. La mayor parte de la población cajamarquina adopta una postura de observadores: una modernidad que se mira pero no se toca (véase epígrafe 3.2).

En definitiva, la **modernidad no es inclusiva**. Proyecta un imaginario para un segmento minoritario de la población, que define la dinámica de la ciudad. De una población económicamente activa de 60.000 personas, se estima que alrededor de 10.000 trabajan directamente para la minería y otros 10.000 trabajadores estarían ligados a servicios a la mina. Es decir, un tercio de la población (Althaus, 2007). ¿Y el resto? La modernidad ha traído consigo una espiral de inflación. No en vano Cajamarca se sitúa como la cuarta ciudad más cara del Perú (Arana, 2011). Pero también ha traído segmentación urbana y fracturas sociales (Vega-Centeno, 2011).⁸⁶ Los índices de desarrollo hablan de un departamento cada vez más desigual, donde persiste la pobreza y se amplían las brechas entre el área rural y urbana (Niño y Pérez, 2011). Pero también una región que registra uno de los menores crecimientos económicos en la última década del Perú, lo que implica que las ganancias de la minería son derivadas hacia Lima y el extranjero (Barrantes *et al*, 2011). Los mecanismos de empleo temporal de la mina terminan, además, generando frustración, y el agua regresa de nuevo como preocupación. Las restricciones de agua surgen ante los ojos de todos como el coste de la modernidad, que la pone seriamente en cuestión.

⁸⁴ El propio nombre del complejo *Qhapac Ñan* (camino o vida noble, en quechua) remite al imaginario del buen vivir.

⁸⁵ En una encuesta realizada por la Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de Cajamarca en 2009 (Niño y Pérez, 2011:17), se puso de relieve la percepción sumamente negativa que la población local tiene de las autoridades políticas y judiciales de la ciudad, las cuales son definidas como “corruptas” y “vendidas a la minería”. Esta valoración se agrava entre los habitantes con mayor tiempo de permanencia en la ciudad, sugiriendo que los barrios más tradicionales son también los más afectados por la desatención municipal.

⁸⁶ En un interesante estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el urbanista peruano Pablo Vega-Centeno (2011) ha analizado los efectos invisibles de la minería en el urbanismo de Cajamarca. Yanacocha no cuenta con infraestructuras físicas en la ciudad, sino que aplica un modelo de producción flexible y organizado a través de unidades de gestión semiautónomas conectadas a una red de pequeñas y medianas empresas. Ello no es óbice para que su huella sea muy palpable en el tejido urbano de la ciudad. Crecimiento desordenado, inversión inmobiliaria descontrolada, urbanización dispersa y desaparición del valle son algunos de los impactos indirectos de la minería en la ciudad.

Los nuevos planes de Yanacocha: Minas Conga y Quilish 2016

Yanacocha no ha tirado la toalla. En abril de 2011, el vicepresidente de Operaciones de *Newmont*, Carlos Santa Cruz, hizo unas declaraciones en el *día del inversor* de la empresa en Nueva York, anunciando planes de **explotación del Quilish para 2016**: “Necesitamos recordar que Cerro Quilish es uno de los mejores depósitos mundiales de oro que no está todavía desarrollado”, si bien “el proyecto depende de las aprobaciones de autoridades y la comunidad”.

Sin embargo, ante el contratiempo sufrido en el Quilish, la minera readaptó su estrategia para expandirse hacia el distrito de Celendín con el **proyecto Conga** (cobre, oro y plata), cuya extensión duplicaría la actual superficie de Yanacocha. El minado de Conga se completaría en aproximadamente 19 años, de los cuales se procesaría mineral durante los 17 últimos años. El proyecto contempla, además, transportar los concentrados minerales a un puerto de la costa norte mediante el uso de camiones para su despacho al mercado internacional. Al estar situado en cabecera de cuenca, el proyecto entraña el máximo riesgo. El Estudio de Impacto Ambiental propuso alegremente sustituir el conjunto de lagunas de El Perol por reservorios de agua, lo que ha generado una honda preocupación entre la población local y un fuerte rechazo por parte del Frente de Defensa (<http://celendinlibre.blogspot.com>).



Proyectos mineros en el sur de Cajamarca.

Fuente: Foto tratada por Grufides

Así las cosas, la nueva estrategia de reubicación de Minera Yanacocha no ha surtido efecto y el rechazo social al proyecto Conga se ha multiplicado y extrapolado a escala nacional e internacional. En palabras del ex viceministro del Ambiente, José de Echave, el conflicto por Minas Conga viene generado por un estrés social y ambiental, asociado a una **expansión minera descontrolada** y, en consecuencia, a un impacto acumulativo de presencia minera en la región. No en vano, Cajamarca pasa por ser unos de los departamentos más concesionados del Perú. De acuerdo a las estadísticas del INGEMMET, el 48,5% del territorio regional estaba concesionado en junio de 2011. Y lo que es peor, muchas de esas concesiones se han operativizado ya en un mosaico de proyectos mineros, tales como el proyecto La Zanja de la empresa Buenaventura, el proyecto Cerro Corona (a cargo de la empresa sudafricana Gold Fields), el proyecto Tantahuatay (operado por *Southern Cooper*), el proyecto Galeno (a cargo de *Lumina Copper*, subsidiaria de la china *Minmetals*), el proyecto Michiquillay (*Anglo American*) o el citado proyecto Conga (Yanacocha), entre otros (véase foto satelital en imagen 19). La proliferación de proyectos mineros en cabecera de cuenca ha convertido el Sur de Cajamarca en un queso *gruyère* y a Conga, en el nuevo símbolo de lucha a la estela del Quilish.

Pero también desempeña un **valor estratégico para los planes de explotación minera**. Si finalmente el megaproyecto de Minas Conga, pese al rechazo oficial, saliera adelante, estaríamos ante un histórico punto de quiebre, una puerta abierta que daría vía libre, no sólo a la explotación del Quilish, sino a la de otros emprendimiento mineros “parados” por rechazo social, como por ejemplo los de Tambogrande en Piura.

El conflicto de Minas Conga ha puesto también de manifiesto la demostrada **invisibilización del Ministerio de Ambiente (MINAM)** y la falta de una real autoridad ambiental en el país para la toma de decisiones sobre los proyectos extractivos. Con motivo de la

aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Conga, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) solicitó asesoramiento a otros estamentos gubernamentales. Por muy ilógico que pueda parecer, nunca solicitó apoyo al propio MINAM. Tuvo que ser este ministerio quien solicitara al MINEM el EIA para revisarlo. El informe de revisión concluyó una serie de observaciones que consideraban inviable el proyecto en las condiciones estimadas por la empresa. Por primera vez, el rigor técnico se hacía valer en la evaluación de nuevos proyectos mineros, lo que provocó la primera crisis seria del gobierno de Humala y el descabezamiento del propio MINAM. Al mismo tiempo, el conocimiento público del informe alentó aún más el rechazo social al proyecto, con el inesperado apoyo y respaldo de todo el gobierno regional, liderado por la figura de su presidente, Gregorio Santos.

A mediados de 2012, el conflicto seguía abierto. Se han encargado contrainformes, estudios de peritaje internacional, y se han elaborado nuevas recomendaciones sobre el EIA. Las promesas no se han hecho esperar: mayores cantidades de agua y más de 10.000 puestos de trabajo para el pueblo de Cajamarca. Todo ello no ha evitado que el conflicto se radicalizara más, y que se hayan organizado varias Marchas Nacionales y Regionales en defensa del agua como derecho humano y en contra del Proyecto Conga. El conflicto ha encontrado un inusitado apoyo público y social en todo el país y, en especial, en Lima, histórico feudo de mentalidades e imaginarios pro empresariales.

La hegemonía minera: una lucha desigual de imaginarios

Tras veinte años de presencia en la zona, no hay duda que Yanacocha ha aprendido algunos de sus errores y ha demostrado capacidad para depurar su estrategia en el tiempo.⁸⁷ Pero también han vuelto a aparecer los “fantasmas” asociados al Quilish y Combayo, fruto de lo que José de Echave ha denominado impactos acumulativos y el estrés social y ambiental en la zona. Pese al significativo peso del rechazo al proyecto Conga, se perpetúa la historia de David contra Goliat. La proliferación de proyectos mineros está consolidando el **modelo extractivo en el sur de Cajamarca**. Las luchas y resistencias se multiplican como hongos, pero las mineras unen estrategias y disponen de suficientes recursos para aplacarlas o desgastarlas con el paso del tiempo. La vocación productiva del departamento fue tradicionalmente agropecuaria (con una importante producción lechera), pero la minería logró arraigar la idea de que se trataba de una actividad de subsistencia que no permitía salir de la pobreza. Lo perverso del imaginario de la pobreza es que desactiva la identidad colectiva e individualiza la sociedad.⁸⁸ Las provincias del norte de Cajamarca (Jaén y San Ignacio), en cambio, poseen una fuerte identidad productiva ligada al café orgánico, lo que les ha permitido resistir mejor los intentos de penetración minera. Impulsadas por los jesuitas, las radios locales y los centros de promoción campesina han desplegado una intensa labor de irradiación cultural, que no ha tenido lugar en el sur del departamento.

La lucha del Quilish en su momento, y la de Conga en la actualidad, ponen de relieve la enorme **dificultad para contrarrestar los imaginarios mineros** por parte de las organizaciones sociales. El Quilish y las lagunas amenazadas por Conga son “fuente de agua y vida”, pero los intentos de recrear el imaginario de la *Madre Tierra* ligado a la cultura andina no han prosperado. La sola mención de la existencia de *Apus* o *lugares sagrados* es rápidamente neutralizada por los actores pro-mineros, que insisten en que se trata de un rescate artificial y nostálgico, sin pies en la tierra. Y lo atribuyen a “cuentos”, “animismos” y “supersticiones”. Una vez más, el poder omnipresente de la modernidad.

Más allá de estas consideraciones, la **“batalla” del agua se ha trasladado al terreno técnico**, y las discusiones versan sobre la importancia hídrica y las características hidrológicas e hidrogeológicas de los lugares amenazados por la minería, principalmente las cabeceras de cuenca. De un lado, los informes financiados por organizaciones ambientalistas destacan la extrema importancia del rol de recarga hídrica de estos lugares para mantener el actual ecosistema altoandino. Por otro, los informes financiados por la

⁸⁷ La apropiación del desarrollo rural en los años 90 fue una primera vía de penetración, que enarboló la bandera del desarrollo social. Nada más y nada menos que salud y educación inclusiva. Sin embargo, el discurso del agua ha sido mucho más poderoso: robó a la resistencia minera su principal imaginario, y lo dejó huérfano de nuevos referentes colectivos. Así se explica que Yanacocha pueda vender su imagen de responsabilidad ambiental: piscigranjas de truchas con agua reciclada versus pobreza, tratamiento de agua con ósmosis inversa versus atraso secular. Sin embargo, los aprendizajes no han sido siempre exitosos. De hecho, la estrategia desplegada en Conga por Yanacocha no ha sido la más acertada, y ha encontrado una enconada oposición por parte de la población local.

⁸⁸ Además, la producción lechera de Cajamarca es acopiada por el grupo empresarial Gloria, que mantiene una alianza estratégica con la minera Yanacocha.

empresa (y el Estado) relativizan este aspecto y sugieren la acumulación de agua mediante represas como la mejor forma de duplicar la disponibilidad de agua durante todo el año.

¿Es posible revertir estos argumentos? ¿O se trata de una batalla perdida? Cuando Arana (2011) lanza en Internet su artículo “Los cajamarquinos no nos merecíamos esta modernidad” su alegato parece un grito en el desierto. El sacerdote argumenta que la “modernidad minera” ha hecho de Cajamarca una ciudad más insegura (consumo de drogas, delincuencia común, crimen organizado), más *insostenible* (racionamiento de agua, viviendas tugurizadas, congestión de vehículos, contaminación del aire y botaderos de basura en los márgenes de los ríos) y más *indeseable* (precios caros). ¿Es realmente la minería origen de todos los males? En todo caso, ¿es suficiente denunciar los efectos negativos de la minería? ¿Conecta ese lenguaje moralista con las aspiraciones de desarrollo que tiene la población?

En resumen, la amenaza latente revela que los imaginarios pro-mineros gozan de buena salud. Y que **no existen aún imaginarios en positivo**, que jubilen la pobreza y traduzcan el “buen vivir” en una identidad colectiva. ¿Existen alternativas productivas a la minería? ¿Tienen éstas potencial para convocar un imaginario alternativo con vocación colectiva? Dicho de otro modo, el principal desafío pasa por construir una nueva identidad cajamarquina, viva y tangible, que haga frente al *bulldozer* de la modernidad minera.

8.2 El NO a la minería de Challapata en Oruro: “50 años de producción sin contaminación”

Challapata “la hermosa”, vergel del altiplano de Oruro

Challapata se encuentra en el altiplano boliviano, es la segunda ciudad del departamento de Oruro. Durante 1890-1950 fue cuna de turistas europeos cuando se construía la línea férrea Antofagasta - Oruro - La Paz, época en la que construyeron fábricas de alcoholes, clavos, jabones y velas. Pero su historia está fuertemente ligada a la construcción de la **Represa Tacagua** en 1961, la segunda represa construida en Bolivia tras la Revolución del 52. La creación de un completo sistema de canales de riego permitió desarrollar cultivos de forrajes y una extensa ganadería vacuna. Hasta tal punto que Challapata ha sido reconocida como *Capital Agrícola, Ganadera e Industrial Lechera* del departamento de

Recuadro 42

Challapata en cifras

- La ciudad posee una población de **25.000 habitantes**.
- Se estima que la producción agrícola alcanza 12.000 ha. de forraje (alfalfa, cebada y avena), que sirven de alimento a las **11.000 cabezas de ganado vacuno** y 60.000 cabezas de ganado ovino.
- La producción lechera asciende a **36.000 litros de leche/día** en época de lluvias y 19.000 en época seca.
- La producción agropecuaria de la zona genera un movimiento económico de **\$Us 5 millones al año**.
- **La represa Tacagua** tiene un superficie de más de 2 ha. y una reserva de 28 millones de m³ de agua.
- La Asociación de Regantes cuenta con más de **1.500 asociados**.
- Los socios hacen un pago mínimo de 20 bolivianos mensuales por hectárea de riego. La recaudación se invierte en el mantenimiento de la infraestructura.

Fuente: Erbol, 24 abril 2011 y La Prensa, 12 junio 2011

Oruro. Además, juega un papel importante en las rutas de comercio y contrabando con Chile (especialmente de automóviles).

La **feria agrícola anual** se realiza desde hace más de cincuenta años durante la cuaresma. En ella, los participantes muestran el gran potencial productivo en ganado vacuno, ovino, camélido en sus diferentes razas, producción de forrajes, productos agrícolas (papa, quinua, y haba), así como en transformación de productos (leche, carne, quesos, yogurt).

La economía productiva ha dado lugar a un fuerte tejido organizativo en torno a la **Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riego Nº 2 Tacagua** (AUSRNT), que ha protagonizado la resistencia minera desde los años 90. El logo de la organización de regantes rescata el imaginario de la agricultura y la ganadería lechera (véase recuadro 42).

El último hito del municipio productivo de Challapata es la instalación de una **planta procesadora de leche**, yogurt y queso, a cargo de la empresa estatal Lacteosbol. Inaugurada oficialmente por el presidente Morales en febrero de 2011, la planta ha supuesto una inversión de \$Us 1 millón (con maquinaria de Irán y donación de Venezuela). La planta tiene capacidad para procesar 18.000 litros de leche por día.

La resistencia frente al consorcio EMUSA-Orvana en 1994

El Colectivo Casa de Oruro ha sistematizado la resistencia de Challapata contra los proyectos de explotación aurífera a cielo abierto del Cerro Achachucani. En un estudio coordinado por Emilio Madrid (2002) se encuentran las claves del conflicto de 1994 con el consorcio formado por EMUSA y la canadiense Orvana.⁸⁹ La **fase de prospección** se inició en 1993. Los primeros dinamitazos, unido a la falta de información ofrecida por la empresa, dispararon las alarmas entre los actores locales.

A inicios del conflicto, las autoridades campesinas decidieron organizar un **viaje a la instalación minera de Inti Raymi en La Joya** para obtener más información sobre las características de esa nueva tecnología de minería a cielo abierto. Durante la visita realizada en noviembre de 2003, los representantes constataron que la minería a cielo abierto requería de grandes extensiones de tierra, que la explotación minimizaba el empleo de mano de obra, y que el procesamiento del oro requería el uso de cianuro. El viaje resultó fundamental para desbaratar el imaginario de modernidad de la nueva minería:

“Lo que se ha podido ver es que se trabaja todo a maquinaria, no hay gente que trabaje, esa poca gente que trabaja lleva anteojos, hociqueras, casco... con eso se quiere decir que se corre riesgo para la SALUD y que están utilizando químicos para procesar el oro, el olor es muy fuerte no se puede aguantar. No existen animales, plantas muy pocas y chatos. Creo que hacen producir oro con puro químicos, ello significa para nosotros un peligro grande. Otro que se ha observado es que la empresa ha construido sus pozos de lixiviación, para ello ocuparon extensiones superficies de tierra; más después también construyeron diques de colas que las mismas son enormes de varios kilómetros”.

Recuadro 43

Cerro Achachucani en cifras

- La exploración realizada por el consorcio EMUSA-Orvana concluyó que el yacimiento aurífero contenía 2,3 millones de onzas de oro.
- La composición geológica de la zona ofrece, además una adición potencial de 1,2 millones de onzas de oro.
- El cerro se ubica a 500 metros de la represa Tacagua.

Fuente: Madrid et al (2002)

⁸⁹ A mediados de 1993, Luis Garabito transfirió todas sus concesiones mineras en Challapata por un millón de dólares a EMUSA (Empresa Minera Unificada Sociedad Anónima), empresa que también era accionista de la mayor explotación minera a cielo abierto en el país, a cargo de Inti Raymi en la localidad de La Joya. Las concesiones obtenidas por EMUSA pasaron luego a ser parte de un contrato de riesgo compartido con la minera canadiense Orvana para ejecutar el denominado “proyecto Pederson” para explotar oro a cielo abierto en el cerro Achachucani.

“Con esta experiencia las comunidades de Challapata rechazamos rotundamente la instalación minera en el sector de riego porque, a criterio nuestro, la NUEVA MINERÍA es mucho más contaminante que las minas antiguas de plata, estaño. La mina sólo expidió aguas de copajira que es contaminante, por su compuesto, pero no así como ahora que utilizan reactivos tóxicos que daña el medio ambiente; de darse esta situación, significaría hacer desaparecer nuestros animales, cultivos y que nuestros hijos nazcan con malformaciones congénitas”.

Isidro Mollo, comunidad Catariri, 20 noviembre 2000
[entrevista realizada por Emilio Madrid (2002), p. 15]

Ante la negativa de los responsables del proyecto minero a brindar explicaciones, las **acciones de resistencia** se precipitaron durante el mes de enero de 2004:

- 6 enero** Cabildo abierto de organizaciones sociales
Los regantes convocaron a un cabildo a las organizaciones de la región para analizar los impactos del proyecto minero. Tras las discusiones, decidieron conformar un comité de defensa del medio ambiente. Su primera medida fue convocar a Luis Garabito, supuesto propietario de la concesión, a explicar el alcance del proyecto en una asamblea general.
- 12 enero** Toma simbólica de las instalaciones del proyecto minero
Ante la incomparecencia del concesionario en la fecha prevista, las comunidades tomaron simbólicamente las instalaciones mineras y establecieron un plazo de 24 horas para el retiro del equipo de prospección. Además, se resolvió desconocer al subprefecto por no haber respaldado las movilizaciones y estar identificado con el proyecto minero.
- 15 enero** Bloqueo de caminos en la ruta Oruro-Potosí
Al cumplirse el plazo sin recibir comunicación oficial de la empresa, miles de comunarios bloquearon el camino a la altura de la Represa Tacagua.
- 18 enero** Retención de comisión negociadora
El bloqueo sirvió para presionar a las autoridades departamentales y gestionar la presencia de Luis Garabito. Sin embargo, la comisión se retrasó cinco horas lo que caldeó los ánimos. Cuando Garabito manifestó la negativa a retirar la instalación minera del área, la población obligó a toda la comisión a trasladarse a pie a la localidad de Challapata (distante 9 km.), para proseguir la reunión. Cuando se evidenció que ni la comisión ni el ex-propietario de la concesión tenía facultades resolutivas sobre el proyecto minero, se convocó a una nueva reunión para el 24 de enero (con la presencia ésta vez de los representantes del consorcio EMUSA-Orvana).
- 24 enero** Reinicio y ampliación de los bloqueos
Los representantes gubernamentales y empresariales no se presentaron en la zona. El incumplimiento motivó el reinicio de los bloqueos, ampliándolos también a la línea férrea (de vital importancia para el transporte de pasajeros y mercancías). La radicalización de los bloqueos obligó al ejecutivo de Sánchez de Lozada a plantear la intermediación del vicepresidente indígena Víctor Hugo Cárdenas. Tras el viaje de una comisión a La Paz, se convocó una nueva reunión en Challapata para el 4 de febrero.
- 4 febrero** Movilización masiva contra el proyecto minero
Más de 10.000 comunarios se concentraron en las puertas de la Alcaldía para recibir a la comisión de alto nivel. La comisión designada por el Cabildo de Challapata expuso los logros de la región en producción agropecuaria. Por su parte, la Comisión de Gobierno explicó las potencialidades de la futura operación minera y argumentó su importancia para el desarrollo nacional. Al entender que existía una identificación plena del

gobierno con los intereses de la minera, los asistentes rechiflaron a la comisión e intentaron, como medida extrema, tomar a sus miembros como rehenes. La comisión logró escapar de los ambientes de la Alcaldía con la protección del ejército, se refugiaron en la unidad militar acantonada y huyeron por la noche hacia Llalagua. Estos hechos significaron la ruptura de las negociaciones, pero también la paralización de las operaciones de prospección.⁹⁰

En todo el desarrollo del conflicto, se evidenció la **estrategia errada de la minera**, al aliarse con la Cámara Departamental de Minería. En plena época del neoliberalismo, la Cámara declaró que las protestas atentaban contra el progreso regional, además de ahuyentar a la inversión extranjera:

“La Cámara Departamental de Minería solicitó garantías al gobierno para continuar la prospección y evaluación del yacimiento de oro en las inmediaciones de Challapata (...) El pedido de la Cámara sostiene que mientras el gobierno se empeña en impulsar la economía del país y la reactivación de la minería, a través de la atracción de capitales internos y externos, elementos negativos, movidos por intereses mezquinos, ahuyentan la inversión privada frenando el crecimiento de una población como Challapata, que necesita de una actividad productiva”.

(*La Patria*, 16 enero 1994)

Sin embargo, Challapata ya tenía una actividad productiva exitosa: la ganadería lechera. Por ese motivo, el imaginario del progreso (versus la agricultura), y su vinculación a la atracción de la inversión extranjera, no prendió en la población local. El consorcio minero había **perdido la batalla de los imaginarios** y todas sus acciones fueron inútiles, pese a contar con el apoyo del Gobierno central. Amenazaron con procesar a los actores locales que había tomado las instalaciones. Responsabilizaron a las ONG y políticos de izquierda de estar detrás de las movilizaciones. Intentaron dividir a los comunarios, ofreciendo compensaciones económicas a las comunidades más cercanas al cerro Achachucani (se escucharon rumores de \$Us 1.000 por hectárea de tierra). Exigieron el reestablecimiento del imperio de la ley, y se atrevieron incluso a sugerir medidas severas y la represión violenta contra las protestas... Todas esas iniciativas a la desesperada no surtieron efecto:

“Enrique Arteaga (...) aclaró que otras instancias del Gobierno central, como el Ministerio de Gobierno y el prefecto de Oruro, no hicieron nada para restablecer el imperio de la ley. No estamos proponiendo el uso de las fuerzas o la movilización de tropas o la policía para reestablecer el principio de autoridad en la zona (...) lo que queremos es que se haga cumplir la ley y se garantice los derechos de los dueños de la empresa San Bernardino”.

(*La Patria*, 21 junio 1994)

En cambio, las comunidades usuarias de la represa en Challapata demostraron una gran **capacidad de tejer alianzas**, lo que le dio un carácter regional al conflicto (Madrid, 2002).

Por un lado, surgió una alianza natural urbano-rural, ya que la mayoría de los vecinos de Challapata provienen de comunidades aledañas, mantienen relaciones de parentesco, y continúan vinculados a la producción agropecuaria. El conflicto supuso también la renovación de lazos de solidaridad intercomunal. Por ejemplo, la organización de regantes logró al apoyo de las comunidades del cantón Qaqachaqa, quienes participaron activamente durante la segunda fase de bloqueos. Para ello, mediaron acuerdos para un respaldo futuro de los usuarios de riego en caso de agudizarse el conflicto de los qaqachaqas con el ayllu laimes. Pero más allá de la habilidad de buscar alianzas, el respaldo generalizado a las comunidades de Challapata expresa también su peso económico y social en la región.

⁹⁰ Los trabajos de prospección minera fueron suspendidos por un periodo de seis meses, si bien se reanudaron en agosto de 1994 y concluyeron en 1996. Los estudios de exploración arrojaron datos satisfactorios. Sin embargo, la fase de explotación nunca llegó a activarse.

La construcción de un respaldo legal a la vocación agropecuaria de Challapata (1995-2011)

Tras la retirada del consorcio minero EMUSA-Orvana de Challapata, las organizaciones sociales y las autoridades locales se esforzaron en construir un tupido **entramado legal** para preservar la vocación productiva del municipio. Los instrumentos jurídicos de protección impulsados incluyen resoluciones municipales y prefecturales, pero también leyes y decretos del gobierno nacional. Se trata de una completa lista que ha continuado sumando resoluciones hasta la actualidad:

1994 febrero	Declaratoria de Challapata como “Capital Agrícola, Ganadera y Comercial del Departamento de Oruro (Resolución del consejo municipal)
2003 24 octubre	Declaratoria de las Provincias Avaroa y Cercado como “Región Industrial Lechera del Occidente Boliviano” (Ley 2516 de la República, durante el gobierno de Carlos Mesa)
2004 5 marzo	Declaratoria de la Provincia Avaroa como “Zona Agrícola y Ganadera del Occidente Boliviano” (Ley 2632 de la República, durante el gobierno de Mesa)
2006 17 mayo	Declaración de prioridad regional de la limpieza y dragado de la represa Tacagua (Ley de la República 3395, durante el gobierno de Evo Morales):
2007 23 mayo	Disposición de abandono de las actividades de exploración del Cerro Achachucani dirigida a <i>Castillan Resources</i> (Resolución prefectural 205/207 de la Prefectura de Oruro)
2011 4 febrero	Rechazo isofacto a la exploración minera de la empresa <i>Castillan Resources</i> (Voto resolutivo de la Asociación de Regantes de Tacagua)
2011 8 mayo	Declaratoria de la feria de Challapata como “Expoferia del altiplano Boliviano” (Resolución del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario)

A esta lista habría que sumar la instalación de una **planta procesadora de leche** de la empresa estatal Lacteosbol. En febrero de 2011, el presidente Morales se desplazó a Challapata para inaugurar oficialmente las nuevas instalaciones. Más allá de su rol industrial —y su todavía pendiente rentabilidad—, la planta desempeña un papel de escudo y protección frente a la amenaza minera. Al fin y al cabo, supone un esfuerzo inversor por parte del gobierno central (alrededor de \$Us 1 millón), cuyo futuro se vería también comprometido por la actividad minera. Además, la planta puede generar un vínculo interesante entre productores y consumidores de leche en todo el departamento de Oruro.

La nueva estrategia de responsabilidad social de *Castillan Resources* (2007-11)

Tras el conflicto de 1994, el proyecto minero quedó paralizado durante un largo periodo de tiempo. En septiembre de 2005, la concesión cambió de dueño y el “proyecto Pederson” pasó a llamarse “**proyecto Achachucani**”. La minera canadiense *Castillan Resources* se hizo con una opción de compra por el 90% del proyecto a la empresa *Maximus Resources Limited* (quedando el 10% restante de la propiedad en manos de Orvana y EMUSA). Especializada en la fase de exploración minera, la empresa canadiense posee un equipo técnico de relaciones sociales y comunitarias (véase recuadro 44).

El alza imparable del oro en los mercados internacionales no tardó en reactivar el conflicto. En 2007, la empresa desplazó equipos y personal para retomar las prospecciones. El Colectivo Casa ha analizado la nueva estrategia de ingreso de la minera en los últimos años. De acuerdo a Friedrich (2011:20-21), se pueden identificar, al menos, tres ejes centrales en la **nueva estrategia de responsabilidad social**:

- Incidencia y lobby en la Gobernación de Oruro

El 5 de octubre de 2010, los representantes de la empresa realizaron una presentación del proyecto minero en la Unidad de Comunicación de la Gobernación de Oruro, ante la Secretaría de Minería y la Secretaría de la Madre Tierra de la gobernación, y la presencia de miembros de la Comisión de Minería de la Asamblea Departamental (*La Patria*, 6 octubre 2010).

- Intensa campaña publicitaria

A fines de 2010, la minera lanzó una fuerte campaña en radio y televisión local, exaltando los supuestos beneficios de la explotación minera. Sus *spots* explotaban el imaginario del progreso, ligado, en esta ocasión, no tanto a la inversión extranjera *per se*, sino a la creación de empleos y la generación de regalías:

“... durante esto están haciendo sus actividades, sus panfletos, todo, convenciéndoles a la base más que todo y las poblaciones aledañas con sus talleres, convenciendo, o en otras palabras, lavando el cerebro”

Luis Nava Chiri, Subalcalde de Challapata

[Entrevista realizada por Sarah Friedrich (2011), p. 21]

- Contratación de consultores locales

La minera recurrió también a la contratación de consultores especializados en relaciones comunitarias, responsabilidad social y metodologías participativas. Es el caso, por ejemplo, de la consultora Cumbre del Sajama, que coordinó en la localidad un taller-seminario sobre “El medio ambiente y los recursos naturales para el desarrollo de Challapata” (febrero 2010).⁹¹ En julio de 2011, la minera coordinó con la Secretaría de Minería de la Gobernación de Oruro un nuevo taller de socialización en Challapata, con el fin de informar a la población local sobre su enfoque de responsabilidad social empresarial (respeto a los derechos humanos, medio ambiente y madre tierra, el derecho al trabajo, la seguridad social, la salud y la educación). Además, el taller pretendía discutir propuestas de desarrollo regional (en base a la disponibilidad futura de regalías mineras) y, por último, una propuesta para realizar una consulta pública con la participación de todos los pobladores (acorde con la nueva Constitución Política del Estado). Pero su invocación al imaginario de la responsabilidad social y ambiental fue en vano. El taller fue obstaculizado por la población local, quien expulsó a los representantes de *Castillian Resources* de las dependencias del recinto militar donde iba a tener lugar el taller (*La Patria*, 14 julio 2011).

Recuadro 44

Castillian Resources en cifras

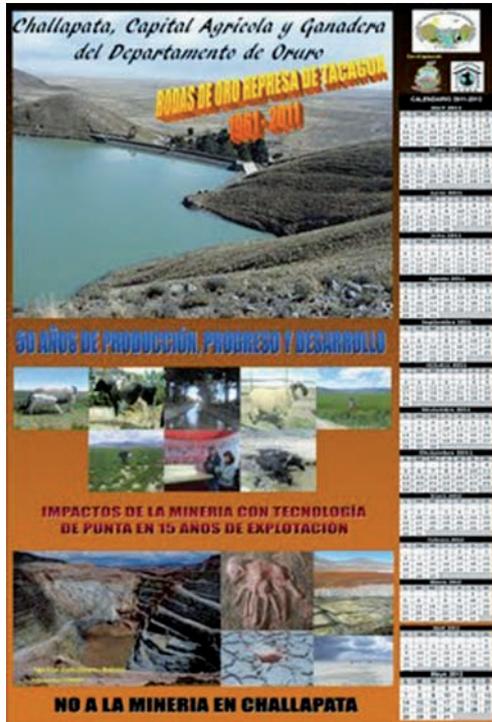
- La transnacional minera canadiense tiene sede en Toronto. Cotiza en el mercado de valores TSX-Venture y en la bolsa de Frankfurt, con una capitalización de \$Us 36,9 millones (oct. 2011).
- Se trata de una minera *junior* especializada en exploración y desarrollo de yacimientos de oro, cuya misión es poner en valor proyectos mineros para venderlos luego por un mayor precio a mineras *major*.
- De acuerdo a la página web, el gerente del proyecto en Bolivia es Osvaldo Arce Burgoa, ingeniero que ha trabajado como consultor para COMSUR, Sajama, Inti Raymi, Newmont, Barrick y BHP Billinton, entre otras.
- La empresa promete invertir \$Us 5-10 millones en exploración. Si los resultados son positivos, asegura que invertirá otros \$Us 200 millones.

Fuente: www.castillian.ca y CEDIB (2011).

⁹¹ De acuerdo a la información brindada en la página web de Cumbre del Sajama, el taller “logró un acercamiento con la comunidad de Challapata para identificar sus intereses y percepciones en relación a un potencial proyecto minero. Se logró un cambio de actitud en los pobladores de las comunidades sobre el tema ambiental y la protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, apoyando a crear una cultura ambiental en las comunidades y fomentando el desarrollo sostenible. Se creó un espacio de intercambio y reflexión sobre la utilización de los recursos naturales de Challapata, especialmente agrícolas y mineras para su desarrollo económico sostenible”. Véase <http://www.cumbredelsajama.com/es/?opc=ofertas>.

La resistencia de Challapata frente a *Castilian Resources* (2010-11)

En respuesta al hostigamiento publicitario de la empresa, las comunidades, organizaciones sociales y autoridades locales de Challapata convocaron una asamblea general el 4 de febrero de 2011. La asamblea emitió una **resolución de rechazo a la actividad minera**, que fue entregada en persona al



Fuente: <http://regantestacagua.blogspot.com>

presidente Morales con motivo de la inauguración de la planta de procesamiento de lácteos el 9 de febrero. El voto resolutivo instaba, además, a la Alcaldía Municipal de Challapata a promulgar una ordenanza prohibiendo la exploración minera de *Castilian Resources* en la zona.

A pesar de las advertencias, la empresa no cesó su campaña mediática y de incidencia política. Y las organizaciones de Challapata respondieron con la campaña **“50 años de producción sin contaminación”**. Coordinada por la Asociación de Regantes, la Alcaldía de Challapata y el Colectivo Casa, el objetivo principal de la campaña fue posicionar el mensaje “Lechería Sí, Minería No” en Challapata, a partir de difundir las potencialidades de la zona y los impactos negativos derivados de las operaciones a cielo abierto con lixiviación de cianuro. Para ello, la campaña trabajó activamente en la elaboración de argumentos socioeconómicos y ambientales, así como en la visibilización del potencial agrícola de Challapata. Todo

ello, mediante el despliegue de un abanico integral de acciones y herramientas:

- Celebración festiva del 50º aniversario de la represa Tacagua
Las bodas de oro incluyeron un programa de desfiles cívicos y discursos de autoridades, que se convirtieron en un espacio privilegiado de reivindicación de la agricultura y ganadería (véase afiche). Entre las consignas, se podía leer: “Represa Tacagua: fuente de agua para el riego y para la vida”. Las autoridades del gobierno departamental dieron un claro respaldo a la resistencia contra la *Castilian*:

“Esta represa es para el departamento de Oruro la más importante fuente de almacenamiento de agua para impulsar la producción agrícola y pecuaria que ha generado una economía sustentable y en armonía con la madre naturaleza. Por esa razón el 2010 ratificamos como Gobierno Autónomo Departamental nuestro compromiso de que, en este sector, no puede haber actividad minera”.

Edgar Sánchez, Secretario General del
Gobierno Autónomo Departamental de Oruro
(*La Patria*, 28 abril 2011)

- Stand en la Expo FERIA de Challapata
Impulsado por los regantes de Challapata, el Colectivo Casa y el grupo Juventud Ecologista, el stand atendió consultas y distribuyó folletos y afiches de la campaña (véase recuadro 45).
- Foro Debate sobre minería a cielo abierto
Celebrado en mayo de 2011, el foro reunió a las autoridades originarias del CONAMAQ (*Suyus Jatun Quillakas Azanajaki, Suyu Sura*, y Consejo de *Ayllus y Markas* de Cochabamba), al CORIDUP (Coordinadora en defensa de la cuenca del Río Desaguadero, los Lagos Uru Uru y Poopó), y a la Asociación de regantes del Distrito II Tacagua. El foro sirvió para consolidar el sujeto social y político de oposición al proyecto minero, y rechazar cualquier intento de consulta y división:

“Los chapalteños, regantes, productores, pueblos originarios y pobladores hemos manifestado ya tajantemente nuestro absoluto rechazo al emprendimiento minero en Achachucania, razón por la cual nos oponemos a cualquier maniobra tendente a realizar actividades de consulta dirigidas por el interés transnacional, y exigimos el inmediato respeto a nuestra negativa a la explotación de oro en Achachucani”.

Resolución del Foro Debate sobre minería a cielo abierto en Achachucani
(Comunidad de Vuelta Blanca, 13 mayo 2011)

Cabe señalar también que las **ONG han jugado un rol de acompañantes** y asesoría técnica. La labor del Colectivo Casa ha sido fundamental para diseñar la campaña, elaborar materiales audiovisuales y sistematizar la experiencia. Otras ONG como el CEDIB se han centrado en talleres de capacitación. En definitiva, las organizaciones sociales han sido las protagonistas del proceso, pese a las denuncias por parte de la minera de que un pequeño grupo de personas y ONG propician violencia y malmeten a la población local.

El imaginario de la producción lechera frente al imaginario minero de la extracción

“Challapata es considerada como la capital agrícola-ganadera bajo una ley, porque aquí en Challapata se produce casi alrededor de 36.000 litros de leche al día. Entonces, si nos contaminan a nuestros alfares, ¿con qué vamos a alimentar el ganado? Y además hay dos leyes del Gobierno central, que somos capital agrícola-ganadera y capital agrícola-industrial del departamento de Oruro. Este último se ha implementado la planta de leche Lacteosbol, la empresa del presidente, del Estado, donde ahora con leche challapateña se está produciendo para el desayuno escolar, y no solamente para el desayuno escolar, sino también para el subsidio materno infantil”.

Gladis Brañez, administradora de la Asociación de Regantes
[Entrevista realizada por Sarah Friedrich (2011), p. 40-42]

Recuadro 45

Instrumentos de la campaña

- Vídeos y fotos
Toda la campaña está acompañada de spots publicitarios.
- Material gráfico de difusión (Folletos informativos, afiches, calendarios)
- Blog en Internet
La asociación de regantes maneja un blog donde se reportan actividades y se incluye una selección de noticias. Además, se puede descargar el compendio de los instrumentos legales de protección del carácter agrícola de Challapata, así como los materiales audiovisuales de la campaña (fotos, vídeos).

Fuente: <http://regantestacagua.blogspot.com>

Uno de los logros de la resistencia de Challapata ha sido el manejo de argumentos socioeconómicos a favor de la ganadería (con cifras) por parte de las organizaciones sociales. Y la apropiación de un discurso lechero, en el que la planta de la empresa estatal Lacteosbol resulta el último eslabón. En definitiva, se trata de una lucha que ha trabajado con mimo la elaboración de **imaginarios en positivo**. Primero la reafirmación de lo propio, y luego la crítica a la minería.

Se trata, además, de un imaginario ligado nítidamente a una identidad colectiva construida durante décadas. Así como Oruro se ganó a pulso el apelativo de “capital boliviana del folclore” (por sus carnavales), Challapata es “capital ganadera del altiplano”, lo que se ha revelado como una eficaz fuente de identidad como ciudad intermedia. Pero también apunta a una **identidad productiva**. De hecho, la denominación de origen de la “leche challapateña” resulta otro vector de resistencia, que concita el apoyo de políticas públicas, como la inversión de una planta lechera por parte de la empresa estatal Lacteosbol o la promoción del desayuno escolar con alimentos elaborados localmente con fondos municipales. Como concluye Emilio Madrid (2002), director del Colectivo Casa, “en este conflicto, lo ambiental está íntimamente ligado con lo económico; no se trata sólo de un conflicto por la preservación estética de la naturaleza, sino de la preservación de una forma económica por la cual las comunidades se relacionan con su entorno natural”.

Desde esa claridad, la asociación de regantes no ha eludido la **lucha de imaginarios cuerpo a cuerpo**, sin complejos de inferioridad. La pelea se presenta incluso a nivel de fraternidades en las fiestas del Carmen. Un miembro de la Asociación de Regantes narra la rivalidad entre los «mineritos» y la «morenada regantes»:

“Challapata no es una zona minera, sino es una zona netamente agrícola-ganadera-lechera, es la actividad propia, legítima de la región, pero aquí se presenta una fraternidad que se denomina los «mineritos» en la festividad del 16 de julio. Entonces con esto, ¿qué está haciendo la empresa? Quiere tal vez impresionar a la gente de Challapata con su fraternidad los «mineritos», para que ellos puedan tener acceso y trabajar en el cerro Achachucani. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esta situación. Pero más al contrario nosotros tenemos una fraternidad de la «morenada regantes». Esto hace que tengamos representatividad institucional como regantes, agropecuarios, lecheros, esta fraternidad nos representa a la institución, como una manera más de contrarrestar a la actividad minera”.

Francisco Tomás de la Cruz, ex-presidente de la Asociación de Regantes
[Entrevista realizada por Sarah Friedrich (2011), pp. 35-40]

III. CONCLUSIONES

CAPÍTULO 9

¿Cómo se construyen los imaginarios de resistencia minera?

Desde tiempos inmemoriales, la **minería ha despertado procesos de identidad colectiva**, tal vez como ninguna otra industria sobre la faz de la tierra. Prueba de ello es el imaginario heroico de las luchas mineras en Bolivia en el siglo XX. O los abundantes mitos de origen que rodean la minería en la cultura andina. El Cerro Rico de Potosí y la omnipresente figura del Tío en Bolivia, o el duende Muqui en Perú, constituyen algunos de los mitos que han acompañado el extraordinario desarrollo de la minería de socavón en los últimos tres siglos. Sin embargo, la irrupción de la megaminería a cielo abierto en los últimos veinte años es harina de otro costal. Todavía no existe perspectiva suficiente para analizar cuáles son sus mitos fundacionales, pero sí para constatar cómo las transnacionales mineras intentan apropiarse de la memoria histórica y llevar el agua de los imaginarios a su propio molino.

En la última década, la **industria minera transnacional** ha trascendido su habitual despliegue de publicidad en los medios, o los esquemas de Responsabilidad Social Empresarial. Van mucho más allá del marketing. En realidad, todos esos instrumentos están al servicio de una estrategia mayor: su gran **apuesta es lograr un cambio cultural en las poblaciones locales**. Apelan a la tecnología del futuro, al principio de diálogo y concertación como los pilares de esa nueva cultura minera. Lo que no dicen es que el objetivo último de su apuesta pasa por manipular los imaginarios colectivos para lograr penetrar y ocupar territorios, y ampliar así sus proyectos de exploración y explotación minera al mínimo costo. En otras palabras, lo que está en juego es un proyecto de colonialismo hegemónico en el siglo XXI.

Esa nueva estrategia de la industria minera ha generado una **inevitable disputa de imaginarios**. El mito de la modernidad y la lucha contra la pobreza constituyen los principales elementos culturales sobre los que se asienta el avance de la nueva megaminería. Anidan en el subconsciente colectivo con tal fuerza que llegan a justificar los enormes costes ambientales del nuevo patrón de extracción a cielo abierto. Su consu-

mo abusivo de agua, la proliferación de conflictos sociales y el reguero de pasivos son presentados como costes inevitables del progreso. Esta estrategia de comunicación minera se ha hecho tan omnipresente que las organizaciones sociales se han visto obligadas a responder a partir de sus propios imaginarios de resistencia. Tierra y territorio, soberanía alimentaria, derechos de la naturaleza, justicia ambiental o buen vivir han sido algunas de las nuevas banderas para frenar el avance imparable de la extracción minera. **La lucha es palpable en los medios de comunicación, en las vallas publicitarias y en las poleras de los activistas, pero también en las obras de infraestructura, en el urbanismo de las ciudades próximas a los yacimientos mineros, en los planes de desarrollo regional.** La industria minera pone toda la carne en el asador para consolidar su hegemonía en los medios de comunicación y adueñarse así del subconsciente cultural de las poblaciones locales.

Como nunca antes en la historia, la nueva minería responde a las lógicas de la globalización y la transnacionalización del capital. Sin embargo, y pese a lo que pudiera parecer a simple vista, su primer motor propulsor no es económico sino cultural. Es el gran relato de la modernidad el que alienta la extracción minera y minimiza sus impactos adversos. Es más, **ese problema cultural no se puede enfrentar desde los esquemas de gobernanza o desde un enfoque de derechos. Pareciera más profundo y requiere un abordaje distinto.** Desde las organizaciones, ONG y universidades se recogen argumentos para un debate a fondo sobre la minería. La agenda no ha hecho más que ampliarse. Al debate histórico sobre el impacto de la minería en la salud, se han unido otros referidos al derecho al agua, el derecho a la consulta previa, la gobernanza ambiental y fiscalidad, o el rol de la minería de pequeña escala. En Bolivia, además, se discute intensamente sobre industrialización; y en Perú sobre transición al post-extractivismo. Pero muchos de esos debates que remiten a argumentos racionales no acaban de calar en una opinión pública, atrapada por la lucha de imaginarios. En otras palabras, **la lucha de imaginarios polariza el debate**, a favor y en contra de la mina, mucho más que las cuestiones técnicas. Son los imaginarios los que, de última, abren la puerta o inhiben los debates mineros. Conforman un sustrato cultural mucho más profundo que los programas de los políticos, los argumentos técnicos de los expertos, o las agendas de las ONG.

9.1 Los diferentes procesos de construcción de imaginarios

¿Cómo construye la industria minera sus imaginarios? ¿Y cómo lo hacen las resistencias? ¿Se trata de una lucha entre iguales? Como resulta obvio, las transnacionales mineras gozan de mayores recursos económicos para desarrollar sus estrategias de comunicación y penetración cultural. Sin duda, ésta es una primera dimensión de asimetría, pero tal vez no sea la más importante ni la más definitoria. Un análisis detenido revela que se trata, en realidad, de procesos muy distintos. Los recursos de los que dispone la industria minera y las organizaciones sociales son diametralmente opuestos, y eso origina procesos de construcción de imaginarios que no tienen nada que ver el uno con el otro (véase recuadro).

La industria minera se *apropia e instrumentaliza* imaginarios

En primer lugar, la industria minera transnacional se **apropia e instrumentaliza los imaginarios** existentes en la sociedad. Sus departamentos corporativos de comunicación y estrategia empresarial dedican no pocas energías a estudiar cuáles son los imaginarios, aspiraciones colectivas y preocupaciones vigentes en la población local, así como a diseñar la mejor forma de neutralizar sus principales banderas de resistencia. En Cajamarca, Yanacocha se ha aprovechado del discurso de la lucha contra la pobreza. La vo-

CUADRO 1: Procesos de construcción de imaginarios

	INDUSTRIA MINERA TRANSNACIONAL	MOVIMIENTOS SOCIALES (RURALES)	MINERÍA PÚBLICA BOLIVIANA
Manejo de imaginarios	<ul style="list-style-type: none"> • Se apropian e instrumentalizan imaginarios • Construyen imaginarios de nuevo cuño 	<ul style="list-style-type: none"> • Combaten imaginarios • Rescatan y recrean imaginarios 	<ul style="list-style-type: none"> • Canaliza y proyecta imaginarios • Reinterpreta imaginarios
Tipo de imaginarios	Remiten a una identidad colectiva (sin necesidad de sujeto) y al beneficio individual	Remiten a una identidad colectiva (ligada a un sujeto social)	Remiten a una identidad colectiva nacional
Artefactos	Deliberados y de acción repetitiva Artefacto = publicidad, inversiones sociales y ambientales, centros comerciales	Expresión cultural espontánea Artefacto = territorio con identidad, conflicto con legitimidad	Deliberados Artefacto = símbolos nacionales, publicidad estatal, empleo público
Recursos disponibles	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos económicos • Recursos humanos altamente cualificados • Organización jerárquica, cadena de mando • Visión global • Intereses privados (cooptación sistemática) • Seguridad privada y/o fuerza paramilitar • Infiltración institucional • Estrategia de comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> • Propiedad del territorio • Trabajo y sistemas de producción • Organización en red, autogestión • Articulación local y regional • Sueños y utopías • Movilización social • Movilización política • Campañas puntuales 	<ul style="list-style-type: none"> • Recursos económicos limitados • Capacidad de regulación y fiscalización • Organización burocrática • Visión nacional • Intereses nacionales • Fuerza militar • Acceso al aparato del Estado • Estrategia de comunicación
Asimetría de poder	<ul style="list-style-type: none"> • Poder económico y fuerzas de seguridad • Poder organizativo (propósito claro, cadena de mando y aprendizaje corporativo) • Poder de ordenar los intereses del entorno • Poder mediático (presencia en medios) 	<ul style="list-style-type: none"> • Poder social (capacidad de movilización) • Escaso poder económico • Poder organizativo limitado (propósitos múltiples, cultura asamblearia y aprendizaje difuso) 	<ul style="list-style-type: none"> • Poder estatal y militar • Poder económico limitado • Poder organizativo limitado (cultura burocrática, aprendizaje institucional) • Poder mediático limitado
Identidad	<p>“Soy lo que compro” “Soy donde compro”</p>	<p>“Somos lo que defendemos” “Somos lo que producimos”</p>	<p>“Somos lo que exportamos” “Somos lo que empleamos”</p>

cación productiva de la región fue tradicionalmente agropecuaria (con una importante producción lechera), pero la minera logró arraigar la idea de que se trataba de una actividad de subsistencia que no permitía salir de la pobreza. Lo perverso de la pobreza es que desactiva la identidad colectiva e individualiza la sociedad. Tras la derrota del Quilish en 2004, Yanacocha aprendió de sus errores e intensificó su campaña orientada a “cosechar agua”. Mensajes como “Primero el agua, después la mina”, “Agua SI, oro SI” se han convertido en nuevos lemas para buscar la legitimidad social. Es decir, las mineras transnacionales preparan el terreno, ensayan nuevos mensajes, impulsan inversiones de responsabilidad social, bajan su perfil cuando no tienen éxito, acomodan sobre la marcha sus áreas naturales de expansión, y vuelven sobre sus pasos, al cabo de varios años, para cercar su objetivo con nuevas artimañas.

Para ello, las mineras transnacionales hacen uso de **artefectos deliberados de acción repetitiva**. Emiten *spots* de publicidad, programas de radio, financian programas de lucha contra la pobreza, levantan represas, construyen centros comerciales o granjas ecológicas junto a las minas, con una intencionalidad clara de diseminar el mito de la modernidad y la necesidad de impulsar la minería para combatir la pobreza. Todo paso que dan, toda inversión que realizan, cumple un rol milimétrico para incidir en la opinión pública y crear un estado a favor de la “modernidad minera”. En este sentido, los artefactos operan sobre una doble dimensión: colectiva e individual. Inaugurado en 2006, el *Quinde Shopping Plaza* de Cajamarca es el mayor artefacto que la industria minera ha creado en la ciudad para representar la modernidad. El centro se ha convertido en un territorio ocupado por las clases pudientes ligadas al negocio minero, y apela a una nueva identidad colectiva cajamarquina insertada en la globalización, que puede mirar de tú a tú a la capital limeña. Pero el artefacto opera también en el subconsciente individual a través del consumo. Las salas de cine, la bisutería, la ropa de moda, o la electrónica más avanzada crean un vínculo personal con la modernidad. Esa doble interacción, como grupo y como individuos, que permiten los artefactos mineros hace que sean peligrosamente eficaces. La construcción y consolidación de los imaginarios se produce por repetición, usando las técnicas de la publicidad.

Cuentan para ello con **multitud de recursos**. Su principal baza es la disponibilidad de recursos económicos, pero también de recursos humanos altamente cualificados, una organización jerárquica, cadena de mando, seguridad privada y, en ocasiones también, fuerza paramilitar (por ejemplo, en el caso de Colombia, o en las áreas de minería transfronteriza). No tienen reparo, además, en aprovecharse de los intereses particulares a través de la cooptación sistemática de autoridades locales o la corrupción de funcionarios públicos. En los últimos tiempos, aprendieron también que la interlocución directa con las comunidades debe ser acompañada por una estrategia de infiltración institucional a todos los niveles (gobiernos locales y regionales, universidades, medios de comunicación, plataformas de la sociedad civil...). Otro recurso a su favor es la visión global con que acometen su negocio, lo que amplía sus márgenes locales de maniobra y hace más elástico el uso del tiempo. La capacidad para diseñar e implementar estrategias activas de comunicación constituye un importante recurso a la altura de su talonario.

Los movimientos sociales de resistencia combaten, rescatan y recrean imaginarios

¿Cómo defienden los movimientos sociales sus territorios? Una primera tarea, sin duda, consiste en **combatir imaginarios**. Dedicán una enorme cantidad de esfuerzos a contrarrestar los argumentos mineros, demostrar su falsedad o develar sus promesas engañosas. “Esta no es la modernidad que queremos”, tituló el sacerdote Marco Arana un artículo en prensa para contraargumentar el imaginario minero en Cajamarca. “Spot publicitario sobre minería diría «medias verdades» sobre impuestos” fue la respuesta de expertos y dirigentes sindicales para desmontar los datos falseados que proporcionaba el famoso comercial minero retransmitido en la Copa América de 2011, que aseguraba que las mineras en Perú pagaban más impuestos que en Chile, Canadá o Australia. Y así una infinita lista de desmentidos,

denuncias, contraargumentarios y versiones alternativas. ¿Sirve de algo? Con ser necesaria, esta estrategia reactiva no es suficiente, y puede volverse incluso en contra de los movimientos sociales. Porque cede la iniciativa a las estrategias comunicacionales mineras y porque, además, proyecta mensajes en negativo. La denuncia constante de los males mineros puede resultar un discurso apocalíptico, incapaz de conectar con los sectores más jóvenes de la población y sus legítimas aspiraciones de modernidad.

Pero los movimientos también **rescatan y recrean ideales**. Los procesos identitarios son profundamente dinámicos, y necesitan mirar tanto al pasado como al futuro. Una primera tarea pasa por identificar los valores e iconos más valiosos en la historia, pero la labor no termina hasta recrear e inscribir la nueva identidad en las coordenadas actuales. Esa tensión entre pasado y futuro impregna los nuevos imaginarios de resistencia minera en Los Andes, ligados, por ejemplo, a la *Madre Tierra*, el *Buen Vivir*, o la justicia ambiental. Al cuestionar la modernidad como un valor inmanente, estos imaginarios poseen una clara vocación transformadora. Representan sueños e utopías de largo arraigo. Sin embargo, las organizaciones sociales experimentan dificultad para encarnarlos en la realidad.

Ciertamente, el gobierno del MAS en Bolivia ha tenido un papel protagónico en atezar el imaginario de la **madre tierra** en asideros tangibles, tales como el reconocimiento de territorios y autonomías indígenas, la celebración del Día Internacional de la Madre Tierra (24 de abril), o el reconocimiento del derecho al agua por Naciones Unidas (julio 2010). Sin embargo, las contradicciones de dicho gobierno en materia de políticas extractivas han generado confusión y desencanto sobre el alcance y significado del imaginario. El progresivo alejamiento de las organizaciones sociales del MAS expresa el intento de rescatar el potencial transformador del imaginario en su máxima expresión. Por otro lado, el imaginario del **buen vivir** goza desde hace un lustro de una discusión intelectual y filosófica de alto nivel, pero no cuenta aún con artefactos tangibles que permitan su interacción y reproducción.

Para las resistencias mineras, los **artefactos surgen como una expresión cultural espontánea**. El territorio con identidad o el conflicto con legitimidad (escenificado en los medios de comunicación) constituyen dos de sus expresiones más tradicionales. Ambos artefactos se convierten en espacios privilegiados para convocar identidad y reproducir la resistencia. Como subproductos de la cultura, estos imaginarios remiten a una identidad predominantemente colectiva. Es el caso de la lucha por el agua en Cajamarca posibilitada a través de una articulación amplia de organizaciones sociales, frentes de defensa y colectivos urbanos. Pese a su matriz colectiva, los imaginarios de resistencia operan también en el terreno de las pulsiones básicas individuales. “Si no hay agua, no voy a poder regar ni dar de comer a mi familia”. La versión urbana de este temor sería: “Si no hay agua, no voy a poder cocinar ni poner la lavadora”. Pero hay un aspecto más. Al ser una construcción cultural, estos artefactos toman tiempo, incluso décadas, en encontrar forma y cuerpo. De algún modo, requieren el tránsito de varias generaciones y una complicidad intergeneracional para consolidarse.

¿De qué **recursos** disponen las organizaciones sociales? Su principal arma es la propiedad del territorio. Cuentan también con la fuerza del trabajo y la creación de sistemas locales de producción. Su forma de organización en red y las dinámicas de autogestión no responden a los principios de cohesión organizativa y cadena de mando. La cultura asamblearia ralentiza, de hecho, la toma de decisiones, y la capacidad de reacción inmediata. En cambio, su mayor recurso reside en la movilización social y política. Portan sueños y utopías colectivas, a diferencia de la industria minera que se apoya en intereses particulares para prosperar. En ocasiones, los movimientos sociales recaban apoyo de fondos públicos (y de cooperación internacional) para realizar campañas puntuales.

En los últimos años, se advierte un nuevo fenómeno. Algunas organizaciones sociales han entendido que la lucha tenía una importante vertiente cultural y han diseñado **artefactos intencionales**. Algunos ejemplos son la campaña en Tambogrande contra

Manhattan Minerals (2001): “Sin limón, no hay ceviche”, o los documentales que la asociación Guarango ha producido sobre las resistencias mineras en Choropampa, Cajamarca y el propio Tambogrande. En Bolivia, el CEDIB elaboró en 2009 un DVD de documentales “Los conquistadores no han muerto” para denunciar la creciente transnacionalización de la minería y reivindicar ese imaginario tan boliviano de la soberanía nacional. Se trata, en todos los casos, de esfuerzos novedosos orientados a poner en juego imaginarios de resistencia que buscan conectar con un público mayoritario apelando a su identidad colectiva.

La minería pública del gobierno del MAS canaliza y reinterpreta imaginarios

Como gobierno de los movimientos sociales, el gobierno de Evo Morales en Bolivia **canaliza y proyecta imaginarios**. Hay que recordar que la nacionalización e industrialización de los recursos naturales constituye una bandera de los movimientos sociales bolivianos. La Guerra del Gas contra el presidente Sánchez de Lozada en 2003 dio lugar a la llamada “agenda de octubre”, que incluía la convocatoria de una asamblea constituyente y la nacionalización del gas. Pero los movimientos sociales fueron más lejos. Fruto de la Asamblea Constituyente (2006-07), las organizaciones sociales articuladas en el Pacto de Unidad lograron consagrar el artículo 9 de la Nueva Constitución que establece como “fin y función esencial” del Estado la industrialización de los recursos naturales.

En esa canalización, el MAS también **reinterpreta los imaginarios**. De este modo, el ejecutivo de Evo Morales estableció un vínculo de sangre entre las rentas extractivas y el pago de bonos a los sectores excluidos del país. Lo que supone reinterpretar la lucha contra la pobreza en términos de inclusión simbólica. Para justificar esta apuesta por las industrias extractivas, el vicepresidente Linera rechaza pagar los platos rotos de la “orgía depredadora” de los países industrializados y reivindica el derecho a “mantener un intercambio metabólico con la naturaleza para satisfacer las necesidades del ser humano”. La recuperación de la explotación de Huanuni para la COMIBOL es el buque insignia del imaginario de la **minería nacional**, si bien su desarrollo en la práctica está lleno de contradicciones. ¿Es compatible el imaginario de minería nacional —soberana y digna— con la práctica ineficiente y contaminante de Huanuni? ¿Es posible soñar con una minería pública que sea limpia? ¿Hasta qué punto es real el imaginario de la minera estatal que supone tan sólo el 7,8% de la producción minera boliviana de 2010?

La COMIBOL, la corporación de minería pública, ha hecho uso de **artefectos deliberados**, tales como los símbolos patrios o la publicidad estatal para comunicar su estrategia básica: nacionalizar para industrializar la minería. Para ello, dispone de **recursos propios**. Si bien su presupuesto económico es limitado, el Estado cuenta con capacidad de regulación y fiscalización, fuerza militar, el acceso al aparato estatal y la defensa de los intereses nacionales. Sin embargo, la COMIBOL adolece de una anquilosada organización burocrática que frena muchos de sus proyectos emblemáticos de **industrialización**. El complejo siderúrgico del Mutún (en asocio con la minera india *Jindal*), la planta hidrometalúrgica de cobre en Corocoro (con la coreana *Kores*), la planta metalúrgica de Karachipampa en Potosí, o el proyecto del litio en el Salar de Uyuni (con capital 100% boliviano) han sufrido retrasos sistemáticos. Con todo, el litio como nuevo símbolo nacional, portador de una industria minera limpia ligada a las nuevas tecnologías, constituye el mejor bastión del MAS en el terreno de los imaginarios.

9.2 Una lucha desigual y asimétrica de imaginarios: ¿en qué términos?

Sin duda, existe un gran desbalance entre los recursos que manejan la industria minera transnacional, los estados y las comunidades locales en resistencia. Se pueden identificar tres dimensiones de asimetría. La principal asimetría se corresponde con la **disponibilidad de recursos económicos**. El proceso de globalización ha generado corporaciones mineras cuyo presupuesto anual supera con creces el presupuesto público de los países. De hecho, los países pequeños como Bolivia experimentan no pocas limitaciones para impulsar una minería estatal y se ven obligados a acudir a esquemas de capital mixto para explotar e industrializar su minería. Esa asimetría de recursos económicos se expresa en sus términos más crudos en la comparación con las organizaciones locales, cuya dimensión y escala les proporciona un acceso limitado a recursos económicos.

La segunda asimetría se debe a la **diferencia de ritmos**. Mientras las corporaciones mineras cuentan con dispositivos de acción rápida, las organizaciones sociales requieren tiempo para engrasar y poner en juego sus recursos. No digamos los aparatos burocráticos del Estado, que se mueven con lentitud. Mientras los artefactos utilizados por la industria minera para proyectar sus imaginarios tienen efectos a corto plazo, los movimientos sociales suelen gestar sus artefactos en largos procesos de construcción cultural. Pero además, las transnacionales pueden enfrentar un manejo más elástico del tiempo. Al operar en ámbito global, pueden desplazar y acomodar continuamente sus áreas de expansión a escala planetaria. Se mueven en un territorio virtual, practicando una suerte de trashumancia global. No tienen problema en congelar un proyecto y esperar diez años si las perspectivas de rentabilidad son buenas. O incluso tercerizar la fase de exploración para no exponerse directamente.

Una tercera fuente de asimetría se debe al **poder acumulativo de la industria minera**. La lucha de imaginarios se revela más equilibrada en el punto de partida, antes que la megaminería ha podido entrar y consolidar su influencia en un territorio. Una vez que lo ha hecho, es muy difícil revertir su hegemonía, debido a su capacidad de tejer una tupida red de intereses creados o de infiltrarse, incluso, en las instituciones del Estado. La permanencia en un territorio otorga, además, a las mineras un enorme margen de aprendizaje corporativo. Ensayará y probará nuevos movimientos en el tablero de ajedrez. Moverá sus fichas con paciencia.

En otras palabras, las **resistencias exitosas son puntuales**. En términos generales, el avance minero parece, hoy por hoy, incontestable en el mundo, y en América Latina en particular. En ese contexto, los focos de resistencia podrían estar cumpliendo una función legitimadora, ya que visibilizan los límites ambientales de la minería y justifican así su negocio global.

En la última década, el **Perú se ha convertido en un gran laboratorio de la industria minera** para América Latina. En el país andino, las mineras transnacionales han ensayado estrategias sagaces de apropiación e instrumentalización de imaginarios, y han probado prototipos de artefactos, que con seguridad podrán ser replicados en otros países de la región. Todo indica que del Perú van a salir los consultores más reputados para asesorar a las mineras en áreas claves como relacionamiento comunitario, gestión cultural, o estrategias de comunicación.

9.3 ¿Qué imaginarios tienen mayor potencial de resistencia?

¿Qué imaginarios tienen mayor potencial de resistencia? ¿Qué lecciones se pueden extraer de las experiencias de resistencia en Cajamarca y Challapata? Sin duda, no son casos comparables, ya que obedecen a contextos sociopolíticos y escalas mineras muy diferentes, pero ofrecen algunas pistas para la reflexión. La primera tiene que ver con el grado de cohesión social, ya que **no existe imaginario sin cultura, organización ni identidad colectiva**. A este respecto, Cajamarca se caracteriza por una cultura política y organizativa fragmentada, que refleja también una identidad regional en proceso de desmembración y mutación. Challapata es un contexto distinto, ya que se trata de un municipio con una fuerte identidad local que se traduce en organizaciones fuertes y cohesionadas. No es casualidad que los imaginarios de resistencia prendan mejor en el segundo caso que en el primero.

Lo interesante de la defensa del Quilish y Conga en Cajamarca es que se concibe el agua en su dimensión territorial y política. Es decir, el cerro y las lagunas amenazadas se han convertido en símbolo de resistencia que liga el agua, la cabecera de cuenca y el territorio en un único estandarte de lucha. Pero también revela que la **lucha por el agua genera una rápida articulación, al tiempo que desencadena procesos mucho más frágiles —y no tan inmediatos— de construcción de identidad colectiva**. Es decir, el agua constituye en Cajamarca un imaginario discontinuo. Convoca, concientiza y aglutina, pero esa lucha no se ha sostenido en el tiempo. ¿Perdurará ahora tras el caso de Minas Conga y la defensa de las cuatro lagunas? Lo que no cabe duda es que el agua se ha terminado convirtiendo en un imaginario en disputa, astutamente reapropiado por la política de las empresas mineras orientada a “cosechar el agua” y construir represas como compensación a los proyectos mineros.

Pero no es el único caso. Otras banderas han sido igualmente robadas por la industria minera. Si algo caracteriza a la **nueva industria minera es su capacidad para apropiarse e instrumentalizar imaginarios**. En Cajamarca, la RSE de Yanacocha ha abarcado intervenciones en salud y educación con inclusión social (que recuerdan a los programas del ALBA), proyectos de desarrollo rural (al estilo de las intervenciones de ONG de los años 90), y apoyo a emprendedores (en la línea de enfoques neoliberales de cooperación). La minera ocupa así un amplio espectro ideológico para maximizar su influencia en la región.

Aunque no gozan de credibilidad entre la población local, los **esquemas de RSE de las mineras son mucho más que un lavado de imagen**. Forman parte de una política de generar un cordón social de seguridad en torno a las minas, ofrecen una pantalla paraestatal y sirven para articular los intereses creados por las mineras en las regiones (redes clientelares de empleo y trabajo social).

Pese a haber surgido como rescate de la cultura indígena andina, el **imaginario de la madre tierra no es ya patrimonio exclusivo de los pueblos indígenas**. En los últimos años, las mineras han adoptado en Los Andes un agresivo discurso de responsabilidad ambiental, capaz de invertir cualquier prueba de contaminación en su contra. Financian incluso campañas para promover la nominación de un lugar próximo al yacimiento como maravilla de la naturaleza. Cada vez más, adoptan también nombres indígenas relacionados con los recursos naturales. *Yanacocha* (laguna negra) y *Misqui Mayu* (río dulce) en Cajamarca, o *Inti Raymi* (fiesta del sol) y *Sinchi Wayra* (fuerza del viento) en Oruro, son tan solo algunos ejemplos. ¿No debería estar prohibido que las transnacionales utilizaran las lenguas nativas para disfrazar sus propósitos?

En este contexto, la aplicación del **derecho a la consulta se perfila como el campo más duro de batalla**, y un dolor de cabeza para los gobiernos progresistas de la región. ¿Se ha convertido en un nuevo imaginario? Lo cierto es que muchos dirigentes indígenas reivindican el Convenio 169 de la OIT en un programa de máximos: el *derecho a la consulta* previa con carácter vinculante. Y lo repiten una y otra vez hasta convertirlo en un *mantra*, en la

solución mágica a todos los problemas, en un imaginario infalible de lucha. Sin embargo, se trata de un derecho altamente susceptible de manipulación. Las transnacionales mineras ya están ensayando nuevos enfoques de relacionamiento comunitario para usar la consulta como vía para legitimar su ingreso en los territorios.

Lo nacional constituye otro imaginario claramente en disputa. En Bolivia, la identidad nacional es un imaginario muy polivalente, que sirve tanto para alentar como combatir la extracción minera. La minería nacional ha sido tradicionalmente un imaginario de identidad colectiva que ha sostenido la industria minera. En el pasado, operó como imaginario de luchas heroicas. En la actualidad, el gobierno del MAS lo utiliza para recuperar un esquema de minería pública no siempre eficiente ni respetuoso con las normas ambientales más básicas. Al mismo tiempo, el propio gobierno y organizaciones sociales siguen apelando a la soberanía nacional para combatir la presencia de transnacionales en el sector, si bien el gobierno ha optado por una modalidad de capital mixto (contratos de riesgo compartido con transnacionales) para industrializar la minería. ¿Y en el país vecino? El imaginario del Perú como país de la nueva minería ha calado con fuerza entre amplios sectores sociales, ávidos de progreso y modernidad.

Por último, la integración regional no responde al principio de “recursos naturales para la región”. Antes al contrario, el programa IIRSA y la creciente hegemonía brasileña en la región revelan un **patrón de integración regional fagocitado por el sector extractivo y energético**. De hecho, la reproducción de un modelo económico que prima la exportación de materias primas ha propiciado la conformación de conglomerados transnacionales de vocación multisectorial. Grupos como la brasileña *Vale* combinan producción de minerales, agronegocios (soja, comercio de alimentos e insumos agrícolas), construcción (infraestructuras), transporte (carreteras, ferrocarriles y puertos logísticos de exportación) y energía (hidroeléctricas). Son estos nuevos gigantes los que se erigen en actores protagonistas del proceso de integración regional.

¿Qué queda entonces? ¿Es posible albergar alguna esperanza en esta lucha desigual? ¿O se trata de una batalla perdida? Entre todas las apuestas, los **imaginarios de resistencia ligados a la vocación productiva local/regional y a la protección de fuentes naturales de agua son los que mejor han funcionado** porque remiten a una identidad colectiva. Ciertamente, las provincias del norte de Cajamarca (Jaén y San Ignacio), con una clara vocación agrícola ligada al café orgánico, han resistido mejor los intentos de penetración minera. Impulsadas por los jesuitas, las radios locales y los centros de promoción campesina han desplegado una intensa labor de irradiación cultural, que no ha tenido parangón al sur del departamento (convertido por la minería en un queso *gruyère*). Y no es un caso aislado. La defensa de la industria lechera en Challapata (Oruro) resulta otro ejemplo ilustrativo. La organización de regantes ha librado una lucha consciente de imaginarios con la industria minera. “La leche es primero”, “50 años de producción sin contaminación”, fueron algunos de los lemas de su campaña en 2011 contra el intento de *Castilian Resources* de poner en explotación el Cerro Achachucani, a tan solo 500 metros de la represa de la que depende la industria lechera. La propia represa se convirtió en un artefacto anti-minero, y la celebración festiva de su 50º aniversario, a bombo y platillo, fue un acto de reivindicación cultural e identitaria, que materializó discursos y compromisos públicos de las autoridades regionales.

En este sentido, **Bolivia se revela como un laboratorio de nuevos imaginarios** de resistencia. Lo fue en el pasado, y lo sigue siendo en la actualidad. La minería nacional, la industrialización de la minería, tierra y territorio, soberanía alimentaria, la defensa de la *madre tierra*, justicia ambiental, feminismo comunitario, derecho a la consulta, y el *buen vivir* constituyen un rico fermento cultural difícil de igualar. En ese tapiz de sueños y utopías existe un juego continuo de reapropiaciones y recreaciones entre el Estado y los movimientos sociales. A veces como aliados, a veces como adversarios. No es posible entender el vuelo que ha tomado el imaginario de la *madre tierra* sin el apoyo explícito –si se quiere, contradictorio e incoherente también– del gobierno del MAS. Como tampoco se puede comprender la consulta sin las críticas vertidas por las organizaciones indígenas contra la política extractivista del MAS. Se trata incluso de un juego reversible de ida y vuelta, ya que las organizaciones

sociales también se apropian de los imaginarios estatales. Es el caso, por ejemplo, de los mineros cooperativistas que se han apropiado de la épica de las luchas sindicales mineras para consolidar su emergencia como productores mineros.

9.4 ¿Cuáles son los desafíos para crear imaginarios de resistencia?

¿Cómo se construyen imaginarios de resistencia? De vuelta a la pregunta inicial, un primer requisito consiste en promover articulación social. Sin la construcción sólida de un **sujeto social con identidad** no hay resistencia posible contra la industria minera. Ello requiere tender puentes entre áreas urbanas y rurales, entre la sociedad civil y los gobiernos locales y regionales, entre productores y grupos ecologistas, entre dirigentes veteranos y nuevas generaciones. La construcción de un sujeto debe contemplar una dimensión identitaria explícita, ya que la cultura y la identidad colectiva se revelan como poderosas armas de resistencia. Es precisamente en las sociedades desarticuladas, con procesos de *descampesinización*, donde la minería encuentra las puertas abiertas para su penetración.

El **acceso a la información** se revela otra condición necesaria, ya que los medios nacionales y locales de comunicación (prensa, radio y televisión) responden a intereses corporativos no siempre imparciales. En ese sentido, las universidades públicas, los centros de documentación, y los estudios independientes desempeñan un papel clave para contar con una versión fiel de los impactos ambientales de la megaminería, la fiscalización de su actividad y su rendición de cuentas. La *sistematización* de la información —a través, por ejemplo, de bases de datos referenciadas—, y su *presentación* física —en formatos audiovisuales como mapas, fichas, infografías, viñetas o ilustraciones— constituyen también áreas cruciales de trabajo.

Un tercer reto consiste en **combatir los imaginarios que sostienen la extracción minera**. Para ello es necesario develar la manera en que la industria minera y los gobiernos manipulan los imaginarios que están operando en el subconsciente colectivo. Se trata de un arduo trabajo de observación, seguimiento de medios, análisis, deconstrucción, y revelación de informaciones sensibles, entre otras muchas tareas. En definitiva, no basta con garantizar el acceso a la información libre e independiente, sino que se hace necesario también proveer un análisis con valor añadido.

Pero tampoco la denuncia es suficiente. Las estrategias meramente reactivas, a la defensiva, pueden estar condenadas al fracaso. Resulta imprescindible trabajar una **contrapropuesta en el terreno de los nuevos imaginarios alternativos al extractivismo**. Rescatar y recrear, por ejemplo, los imaginarios de la *madre tierra*, el *vivir bien*, el *desarrollo territorial con identidad*, o las propuestas más recientes de *transición al post-extractivismo*. En Perú, se han explorado intentos de ligar la producción agropecuaria con la nueva cocina peruana como forma novedosa de crear un vínculo entre productores y consumidores en el marco de una nueva identidad nacional: el *comer rico*. Estas iniciativas pretenden territorializar la comida, identificando la denominación de origen de cada ingrediente.

Otra tarea consiste en rescatar el **papel de las mujeres en las resistencias mineras**. Si se conviene que la lucha contra la megaminería posee hondas raíces culturales, el papel de las mujeres se revela entonces determinante, ya que son ellas las portadoras tradicionales de los valores culturales en las comunidades rurales, campesinas o indígenas. No en vano son mujeres las artistas que han protagonizado las acciones culturales de resistencia minera en Perú, como es el caso de Elisabeth Lino (la “última reina de Cerro de Pasco”) o Stephanie Boyd (documentalista de Guarango).

Por otro lado, los aportes del **feminismo comunitario** boliviano son vitales para entender el rol de las mujeres desde una perspectiva intercultural, así como para abrir el espectro de análisis y trascender los enfoques de género basados exclusivamente en patrones de igualdad.

La resistencia debe cubrir **varios tableros de juego de forma simultánea**: combatir, rescatar, recrear, contraproponer... y evitar los riesgos de poner todos los huevos en la misma cesta. Porque el riesgo de apropiación y cooptación de la industria minera es muy elevado.

Los imaginarios de resistencia no se pueden improvisar ni diseñar a golpe de talonario. Sería un error que los movimientos sociales reprodujeran las formas en que la industria minera arma sus estrategias de comunicación. Como se ha intentando demostrar, se trata de procesos distintos que obedecen a recursos y formas organizativas diferentes. Los movimientos sociales harían bien en ser **fieles a sí mismos** y confiar en sus fortalezas y posibilidades.

Lo que sí se revela como un campo nuevo de resistencia son las **acciones culturales**. La elaboración y discusión colectiva de *artefactos* (para rescatar y recrear imaginarios) se revela un nuevo espacio de resistencia, con un potencial todavía no suficientemente aprovechado. En este contexto, la exploración de medios de *comunicación alternativa*, y la búsqueda de nuevas formas de comunicación resultan cruciales. Algunas iniciativas en este sentido tienen que ver con el impulso de *blogs* en Internet, documentales audiovisuales, películas de ficción, relatos, teatro político, noticieros interculturales, fiestas comunitarias, conformación de comparsas y canciones de carnaval, festivales musicales, *performances* en la calle, o incluso esquemas de contracultura, entre otras.

Por último, los imaginarios de resistencia, ligados a un sujeto social apropiado de su identidad colectiva, se revelan también como el mejor argumento para impulsar estrategias de **incidencia política**. Se lograría también así romper las dinámicas autorreferenciadas de las ONG a la hora de posicionar el debate en la esfera pública. Y trascender algunas de las herramientas más gastadas de incidencia, como pueden ser los informes de incidencia, las agendas estratégicas o los convencionales desayunos de trabajo con autoridades, en la búsqueda de un nuevo horizonte de hacer política desde abajo.

¿Y cuál debería ser el **rol de las ONG** e instituciones de apoyo? Su función principal es acompañar a las organizaciones sociales a sacar adelante sus retos de resistencia, brindando asistencia técnica, asesoría legal, o prestando un servicio de información y análisis. Pero las instituciones pueden también jugar su propia actoría a partir de su pertenencia a un movimiento social. Si las ONG siguen estando integradas por profesionales urbanos que se perciben a sí mismos como expertos en posesión del conocimiento, entonces no pueden pretender formar parte de la resistencia ni tampoco entender sus dinámicas identitarias y culturales.

BIBLIOGRAFÍA

1. IMAGINARIOS SOCIALES

- CASTORIADIS, Cornelius (1975), *La institución imaginaria de la sociedad*. Buenos Aires, Tusquets (edición de 1993).
- CABRERA, Daniel H. (2004), *Imaginario social, comunicación e identidad colectiva*. Pamplona, Universidad de Navarra, Facultad de Comunicación, Documento de trabajo (http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf).
- CABRERA, Julio, Figueira, Aliaga y Carretero (2009), “Pobre Latinoamérica rica: reconstrucción del imaginario Latinoamérica”, en *Sociedad Hoy* (revista de la Universidad de Concepción, Chile), nº 19, pp. 10-21
- RANDAZZO, Francesca (2011), “Introducción: La irremediable intromisión de los imaginarios”, en Juan R. Coca, et al (eds.) *Nuevas posibilidades de los imaginarios sociales*. Badajoz/A Coruña, Asociación Cultural TREMN/CEASGA (Centro de Estudios y Análisis Social de Galicia) (<http://www.tremn.org/documents/Nuevas%20posibilidades%20def.pdf>).
- UFP (2008), *As dimensoes imaginarias da natureza*. Recife, Universidad Federal de Pernambuco, Departamento de Ciências Sociais, Núcleo interdisciplinar de pesquisa sobre o imaginario XIV Ciclo de Estudos sobre o Imaginario (http://www.univ-montp3.fr/ufp5/irsa/telechargements/XIV_Ciclo_De_Estudos_Sobre_O_Imaginario_ANAIS.pdf)

2. LA PROFUNDIZACIÓN DEL MODELO EXTRACTIVISTA

Región Andina

- ACOSTA, Alberto (2009), *La Maldición de la Abundancia*. Quito, CEP/Abya Yala/Swissaid (<http://www.cepecuador.org/document/Lamaldiciondelabundancia.pdf>).
- ALIMONDA, Héctor (coord.) (2011), *La naturaleza colonizada: Ecología política y minería en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO/Ediciones Ciccus, Colección Grupos de Trabajo (<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/grupos/alimonda.pdf>).
- ANTONELLI, Mirta Alejandra (2009), “Minería transnacional y dispositivos de intervención en la cultura: La gestión del paradigma hegemónico de la minería «responsable y el desarrollo sustentable»”, en SVAMPA, Maristella y Mirta. A. Antonelli (ed), *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Buenos Aires, Biblos, pp. 51-101.
- (2008), *Las estrategias corporativas de fabricación del crédito social: A propósito del Premio OLAMI a Minera Bajo La Alumbreira*. Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba (Secyt-UNC) (<http://www.noalamina.org/mineria-argentina/mineria-general/proposito-premio-olami-minera-alumbreira>).
- ARIAS, María Eugenia (2009), “IIRSA: lógicas de interconexión, lógicas interconectadas”, en SVAMPA, Maristella y Mirta. A. Antonelli (ed), *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Buenos Aires, Biblos, pp. 103-21
- BEBBINGTON, Anthony (2009a), “Nuevas políticas extractivas en América Latina: La paradoja de la riqueza: ¿cómo traducir rentas extractivas en desarrollo territo-

- rial”, en Fundación Tierra (2009), *Bolivia Post-Constituyente: Tierra, territorio y autonomías indígenas*. La Paz, Fundación Tierra, Memoria Seminario Internacional, 26-28 octubre de 2009, pp. 75-78 (http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=200).
- (2007b), *La glocalización de la gobernanza ambiental: relación de escala en los movimientos socio ambientales y sus implicaciones para la gobernanza ambiental en zonas mineras en el Perú y el Ecuador*. Univ. Manchester/Global Greengrants/CEPES/Oxfam (http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/publications/reports/glocalizacion_espanol.pdf).
- BIEHL, Janet (2011), “¿Son las mujeres «más ecologistas» que los hombres?”, en *Le Monde Diplomatique* (edición boliviana), nº 38 nueva época (julio 2011), pp. 24-25.
- De ECHAVE, José (2011), *Responsabilidad social y ambiental en la industria minera*. Lima Cooperación (http://www.cooperacion.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=142:responsabilidad-social-y-ambiental-en-las-industria-minera&catid=51:derechos-colectivos-e-industrias-extrativas&Itemid=107).
- Equipo MMSD en AL (2002), *Minería, minerales y desarrollo sustentable en América del Sur*. Londres, IIED/WBCSD/CIPMA/IDRC. (<http://www.wbcsd.org/DocRoot/D2QHcCXtQYbVZgLKOKhQ/africammsd.pdf>).
- FUSER, Igor (2010), “De la «diplomacia compañera» al mercado: La política exterior del Gobierno de Lula”, en *Le Monde Diplomatique* (edición boliviana), Año 3, nº 29 (septiembre 2010), pp.4-7.
- GOMEZ, Emma (2010), Zijin, crónica de una empresa con serios problemas. Lima, CooperAcción (<http://www.cooperacion.org.pe>).
- GONZÁLEZ-POSSO, Camilo (2011), *La minería y el crimen*. Bogotá, INDEPAZ (http://www.indepaz.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=587:la-mineria-y-el-crimen&catid=73:mineria-petroleo-y-recursos-naturales&Itemid=103).
- GREENPEACE (2011), *Barrick: minería responsable de destruir los glaciares*. Buenos Aires, informe de incidencia (http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2011/cambio_climatico/barrick_mineria_responsable.pdf).
- GUDYNAS, Eduardo (2009), *El Nuevo Extractivismo del Siglo XXI: Diez tesis urgentes sobre el extractivismo bajo el progresismo sudamericano actual*. Washington DC, IRC, Programa Américas (<http://www.ircamericas.org> y <http://www.redge.org.pe/content/materiales-del-curso>).
- MARTÍNEZ, Helda (2007), “Sindicalistas de la minería denuncian la persecución de las transnacionales estadounidense”, en *Rebelión* (21 marzo 2007), (<http://www.rebelion.org/noticias/2007/3/48528.pdf>).
- MOORE, Jennifer (2009), *Mitos y realidades de la minería transnacional*. (http://deslinde.org.co/IMG/pdf/6_Mineria_LISTO.pdf).
- SVAMPA, Maristella (2011), “Modelos de desarrollo, cuestión ambiental y giro ecoterritorial”, en Alimonda (coord.), H. Alimonda, *La naturaleza colonizada: Ecología política y minería en América Latina*. Buenos Aires, CLACSO/Ediciones Ciccus, pp. 181-218.
- SVAMPA, Maristella y Mirta. A. Antonelli (2009), *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*. Buenos Aires, Biblos.
- VOCES DE ALERTA (2011), *15 Mitos de la Megaminería Transnacional*. Montevideo, Librería de Humanidades- Kronopios- De la Mancha, Colectivo Voces de Alerta.
- VILLEGAS, Pablo (2009), “La minería transfronteriza, a través de los límites entre el Neoliberalismo y el Socialismo del Siglo XXI”, en *PetroPress* nº 16, pp. 24-27 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- (2009), “El rol central de la IIRSA en el modelo de desarrollo vigente en Bolivia”, en *PetroPress* nº 18, pp. 4-10 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).

Perú

- AFRODITA (2010), *Convenio de colaboración recíproca con el Ejército Peruano*, 3 mayo 2010.
- APRODEH (2007), *Serios peligros para los derechos humanos: Los once decretos del Gobierno de Alan García*. Lima, Asociación Pro Derechos Humanos. (<http://www.aprodeh.org.pe/criminizacion/documentos/crimi.pdf>).
- ARELLANO, Javier (2011), *¿Minería sin fronteras? Conflicto y desarrollo en regiones mineras del Perú*. Lima, IEP/PUCP/Universidad Ruiz de Montoya.
- (2008), “Resurgimiento minero en Perú: ¿Una versión moderna de una vieja maldición”, en *Revista Colombia Internacional* (Universidad Andes), nº67, pp. 60-83 (<http://colombiainternacional.uniandes.edu.co/view.php/307/index.php?id=307>).
- BARNECHEA, Álvaro y F. Tuni (2011), *El Síndrome del Cuarto del Rescate*. Lima, Paraca Comunicaciones/Southern Copper/AECID.
- BASTIDAS, María (2009), “Minería, movimientos y mujeres: impactos y respuestas. Los casos de San Mateo de Huanchor, Choropampa y Callao”, en José de Echave, R. Hoetmer y M. Palacios (eds), *Minería y territorio en el Perú: Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*. Lima, Programa Democracia y Transformación Global/ CONACAMI/ CooperAcción/ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Colección Diálogos y Movimientos, pp. 245-86.
- BEBBINGTON, Anthony (ed.) (2007a), *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de las transformaciones territoriales*. Lima, IEP/ CEPES, Serie Minería 2 (http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes-publications/books/Mineria_y_Mov_Soc_Conclusiones.pdf).
- CARRANZA, Benjamín Joas (2010), *Diagnóstico de la situación socio ambiental de la zona Algamarca-Cajabamba*. Cajamarca, Gob. Regional de Cajamarca, Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente.
- CEDIB (2009), “En Perú: Traspaso de concesiones entre transnacionales en las fronteras con Ecuador, Chile y Bolivia”, en *PetroPress* nº 14, p. 21 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- COELHO, Maria Emília (2011), “La invasión de mineros chinos en Perú”, en *((O)) eco Amazonia Reportagens* (<http://www.oecoamazonia.com/es/reportajes/peru/151-a-invasao-chinesa-nos-garimpos-do-peru>).
- CONACAMI (2011), “La «Bancada de Yanacocha» y el financiamiento electoral”, *Nota de Prensa*, 9 de febrero (www.conacami.org).
- COOPERACIÓN (2011), *Doe Run busca ampararse en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Perú*. Lima, Nota de Prensa. 6 enero (http://www.cooperacion.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=362:doe-run-busca-ampararse-en-el-tratado-de-libre-comercio-&catid=75:cooperacion-informa&Itemid=101).
- (2010), “Precisando la situación de la Doe Run”, en *Boletín Actualidad Minera del Perú*, nº 136, pp. 1-2 (http://www.cooperacion.org.pe/index.php?option=com_content&view=section&id=13&Itemid=71).
- (2010), *Doe Run, sacándole la vuelta a la norma*. Lima, Nota de Prensa, 18 agosto.
- (2010), *Doe Run una vez más no garantiza el cumplimiento del PAMA*. Lima, Nota de Prensa, 6 junio 2010.
- (2007), *Tributación y distribución de las sobreganancias mineras en Perú*. Lima, Cooperación, documento de trabajo.
- CUADROS, Julia (2011), “Las alternativas limpias son posibles: minería artesanal”, en *Bajo la Lupa*, nº 15, pp. 14-15 (<http://www.bajolalupa.org/15/15-06.pdf>).
- (2010), *Impactos de la minería en la vida de hombres y mujeres en el Sur Andino: Los casos de Las Bambas y Tintaya*. Lima, CooperAcción.
- De ECHAVE, José (2011), *Perú: Wikileaks, empresas mineras y embajadas*. Lima, Cooperación (<http://www.cooperacion.org.pe>).
- (2005), *Las Inversiones de Empresas Mineras Canadienses en el Perú: El Caso Tambogrande y la Necesidad de Implementar Reformas*. Lima, informe (http://www.miningwatch.ca/sites/miningwatch.ca/files/Peru_case_study_0.pdf)

- De ECHAVE, José, A. Díez, L. Huber, B. Revesz, X. R. Lanata y M. Tanaka (2009), *Minería y conflicto social*. Lima, IEP/CIPCA/CIES/Centro Bartolomé de las Casas.
- De ECHAVE, José; R. Hoetmer y M. Palacios (2009), *Minería y territorio en el Perú: Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*. Lima, Programa Democracia y Transformación Global/ CONACAMI/ CooperAcción/ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Colección Diálogos y Movimientos.
- GARCÍA, Alan (2007), “El síndrome del perro del hortelano”, en *El Comercio*, 27 octubre 2007.
- GAN PERÚ (2011), *La Gran Transformación: Plan de Gobierno 2011-16*. Lima, Gana Perú, Comisión del Plan de Gobierno.
- GÓMEZ, Emma y V. Gamonal (2010), *Líneas Directrices de la OCDE: Doe Run Perú- La Oroya*. Lima, CooperAcción.
- GUIULFO, Luis (2006), *Cajamarca: Lineamientos para un política de desarrollo minero*. Cajamarca, ALAC/PCI/CDE (<http://www.losandes.org.pe/downloads/2006/libros/10.pdf>).
- INGEMMET (2011), *Atlas catastral minero*. Lima, Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (http://www.ingemmet.gob.pe/index_ingemmet.htm).
- MACASSI, Sandro (2011), *Los medios en el ciclo de vida de los conflictos: Aportes de la comunicación a la gobernabilidad en tiempos de crisis*. Lima, Universidad Católica de Lima (<http://www.ulima.edu.pe/revistas/contratexto/2.pdf>).
- (2009), “Medios y conflictos sociales entre el rating y el activismo”, en *Diálogos de la Comunicación (Revista Académica de la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social)*, nº 78 (enero-julio), pp. 1-11 (http://www.dialogosfelafacs.net/revista/upload/articulos/pdf/articulopdf_155.pdf).
- MORALES, Jessica (2009), *Plan de Acción del Grupo Norte para el proceso de desarrollo de la Zonificación Económica y Ecológica– Ordenamiento Territorial (región Cajamarca)*. Cajamarca, estudio de consultoría realizado para el Grupo Norte.
- MEM (2011), *Anuario Minero 2010*. Lima, Ministerio de Energía y Minas (<http://www.minem.gob.pe/publicacion.php?idSector=1&idPublicacion=382>).
- (2011), *Minería peruana: contribución al desarrollo económico y social*. Lima, Ministerio de Energía y Minas (<http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/LIBROS/CONTRIBUCION09.pdf>).
- (2010), *Minería peruana: contribución al desarrollo económico y social*. Lima, Ministerio de Energía y Minas (<http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/LIBROS/CONTRIBUCION2.pdf>).
- (2007), *Anuario Minero 2006*. Lima, Ministerio de Energía y Minas.
- (2006), *Inventario de Pasivos Ambientales Mineros 2006: informe preliminar*. Lima, Ministerio de Energía y Minas, Dirección General de Minería (<http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/PUBLICACIONES/INFORMES/PASIVOS/DATA/INFORME%20JUNIO%202006.pdf>).
- MONGE, Carlos (2011), “¿De cuánto hablamos cuando hablamos del aporte minero de 3.000 millones de soles?” en *LaMula* (<http://carlosmonge.lamura.pe/2011/09/20/de-cuanto-hablamos-cuando-hablamos-del-aporte-minero-de-3-000-millones-de-soles/carlosmonge>).
- PAJUELO, Ramón (2005), *Medioambiente y salud en La Oroya: Sistematización de un Programa de Intervención*. Lima, CooperAcción.
- PASSUNI, Silvia (2011), *Los pasivos ambientales en el Perú*. Lima, Cooperación. (http://www.cooperacion.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=508:los-pasivos-ambientales-mineros-en-el-peru&catid=93:actualidad-minera-nd-146&Itemid=71)
- PINTO, Vladimir (2009), “Reestructuración neoliberal del Estado peruano, industrias extractivas y derechos sobre el territorio”, en José de Echave, R. Hoetmer y M. Palacios (eds), *Minería y territorio en el Perú: Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*. Lima, Programa Democracia y Transformación Global/ CONACAMI/ CooperAcción/ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Colección Diálogos y Movimientos, pp. 87-106.
- RedGE (2011), *Doe Run usa el TLC para presionar al Estado Peruano: Organizaciones sociales califican de inaceptable*. Lima, nota de prensa, 6 enero.

- RIVAS, Carlos (2009), *Línea de base del Proyecto Mitigación de la desertificación y adaptación del cambio climático en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y la zona alta de la provincia de Caylloma*. Arequipa, documento de trabajo.
- TORRES, Víctor (2010), *El TLC Perú-China: ¿Oportunidad o amenaza? Posibles impactos para el Perú*. Lima, RedGE, Cuaderno Globalización con equidad nº 5.
- VAN DE STEEN, Tom (2010), *Visita a La Oroya: Minería y Metalurgia en Junín, los casos de Morococha y La Oroya*. Lima, Cooperación/Diakonia (http://www.cooperacion.org.pe/documentos/Informe-Oroya_Morococha.pdf).
- VERA, Dante (2004), *Minería: Oportunidades y Amenazas en la Región de Cajamarca*. Cajamarca, estudio de consultoría realizado para el Grupo Norte.
- YANACOCCHA (2010), "Yanacocha es nuevamente galardonada por buena gestión en Responsabilidad Social. Cajamarca, *Nota de Prensa*, 29 noviembre 2010 (<http://www.yanacocha.com.pe/sala-de-prensa/ultimas-noticias/yanacocha-es-nuevamente-galardonada-por-buena-gestion-en-responsabilidad-social/>).

Bolivia

- ABSI, Pascale (2009), *Los Ministros del Diablo: El trabajo y sus representaciones en las minas de Potosí*. La Paz, PIEB/IRD/IFEA.
- ASCARRUNZ, María Eugenia (2009). *Diagnóstico de daño genotóxico en niños y madres de la ciudad de Oruro, expuestos a contaminación polimetálica*. Informe Final. Oruro: PIEB.
- BOSSI, Fernando Ramón (2010), "Entrevista con Evo Morales: 'Sin derechos de la Madre Tierra no hay derechos humanos'", en *Le Monde Diplomatique*, edición boliviana, nº 26, mayo 2010, p. 7.
- CEDIB (2009), "Estructura neoliberal de la minería en Bolivia", en *PetroPress* nº 13, pp. 28-29 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- (2009), "Crisis de la minería bajo el dominio de las transnacionales", en *PetroPress* nº 15, pp. 26-31 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- (2009), "Historia de un engaño: La Comunidad La Joya cuenta", en *PetroPress* nº 15, pp. 18-20 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- (2009), "El Lito en Bolivia", en *PetroPress* nº 13 (enero), pp. 18-24 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- CEDLA (2010), *Minería en Bolivia: Beneficio de pocos y pobreza de muchos. Caso proyecto minero Poopó*. Oruro, Memoria del Foro Debate "Minería Hoy: Desarrollo Regional y Conflicto, Caso Mina-Poopó", Separata de prensa (29 junio 2008) (<http://www.cedla.org/system/files/separata.pdf>).
- CEDLA (2010), "Formas de consolidación de la hegemonía transnacional en la minería: Contratos de arrendamiento o de riesgo compartido", en *El Observador* (Boletín del Observatorio Boliviano de Industrias Extractivas), Año 5, nº 9, pp. 1-12 (http://www.cedla.org/system/files/boletin_OBIE%209.pdf).
- COLLQUE, Juan y Pablo Poveda (2010), "Hegemonía transnacional en la minería boliviana", en *Le Monde Diplomatique* (edición boliviana), Año 3, nº 28 (agosto 2010), pp.4-7.
- CRESCO, Carlos (2009), "Los riesgos del 'Gran Salto Industrial' boliviano: Aproximaciones desde el caso de la Mina San Cristóbal", en Morán (2009), *Minando el agua: La mina San Cristóbal, Bolivia*. Potosí, FRUTCAS-FSUMCAS, pp. 50-54 (<http://aguabolivia.org/wp-content/uploads/2009/12/informe-robert.pdf>).
- DÍAZ CUELLAR, Vladimir (2011), "La minería bajo el dominio de las transnacionales" en *PetroPress* nº 25, pp. 20-26 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- GARCÍA LINERA, Álvaro (2011a), *Las tensiones creativas de la revolución: la quinta fase del Proceso de cambio*. La Paz, Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (<http://www.vicepresidencia.gob.bo/Tensiones.pdf>).
- (2011b), *El «oenegismo», enfermedad infantil del derechismo (o cómo la «reconducción» del Proceso de Cambio es la restauración neoliberal)*. La Paz, Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (<http://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/el-oenegismo.pdf>).

- GUACHALLA, Osvaldo (2010), "La exacerbación de la política extractivista del MAS", en *Boletín OBIE (Observatorio Boliviano de Ind. Extractivas)*, IV:8, pp. 11-16 (http://www.cedla.org/obie/system/files/boletin_OBIE%208%20PDF.pdf).
- JORDÁN, Ronaldo (ed) (2010), *Excedente y renta en la minería mediana: Determinantes del crecimiento minero 2000-09*. La Paz, UMSA/PIEB.
- LIÉGOIS, Chantal (2010), "Minando el agua: mina San Cristóbal", en *PetroPress* nº 18, pp. 11-15 (<http://cedib.org/bp/PP18/pp182.pdf>).
- (2009), "¿Hacia dónde va el megaproyecto del Mutún", en *PetroPress* nº 17, pp. 14-20 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- LÓPEZ CANELAS, Elizabeth (2011), *Aproximaciones a los impactos de la minería en la vida de las mujeres casos de Huanuni y Coro Coro*. Bolivia. Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales (<http://www.redlatinoamericanademujeres.org/2011/04/aproximaciones-los-impactos-de-la.html>).
- LÓPEZ, Elisabeth (ed.) (2010), *El costo ecológico de la política minera en Huanuni y Bolívar*. La Paz, PIEB/Embajada Real de Dinamarca.
- MELO, Mario (2009), "Cinco razones jurídicas para oponerse a la nueva ley minera", en *PetroPress* nº 13, pp. 30-32 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- MICHARD, Jocelyn (2008), *Cooperativas Mineras en Bolivia: Formas de organización, producción y comercialización*. Cochabamba, CEDIB. (<http://www.cedib.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/Cooperativas-MinerasBR.pdf>).
- MMM (2011), Informe de Gestión 2010. La Paz, Ministerio de Minería y Metalurgia (<http://www.mineria.gob.bo/Documentos/Difusion/InformeGestion2010.pdf>).
- (2011), *Memoria Institucional 2010*. La Paz, Ministerio de Minería y Metalurgia (<http://www.mineria.gob.bo/Documentos/Difusion/MemoriaMMM2010.pdf>).
- (2010a), *Proyecto de Ley de Pensiones para el Sector Minero*. La Paz, Ministerio de Minería y Metalurgia (http://www.mineria.gob.bo/Documentos/Proyecto_Ley-Pensiones_SectorMinero.pdf).
- (2010b), Conclusiones del seminario taller nueva ley minera realizado del 7-10 junio 2010 en Huajchilla. La Paz, Ministerio de Minería y Metalurgia (<http://www.mineria.gob.bo/Documentos/Conclusiones%20Seminario%20Taller%20Nueva%20Ley%20Minera.pdf>).
- MORALES, Juan Antonio y J. L. Evia (1995), *Minería y crecimiento económico en Bolivia*. La Paz, Universidad Católica de Bolivia/IISEC documento de trabajo 03/01 (<http://www.iisec.ucb.edu.bo/papers/1991-2000/iisec-dt-1995-03.pdf>).
- MORÁN, Robert (2009), *Minando el agua: La mina San Cristóbal, Bolivia*. Potosí, FRUTCAS, FSUMCAS (<http://aguabolivia.org/wp-content/uploads/2009/12/informe-robert.pdf>).
- PETROPRESS (2009), "Historia de un engaño: La comunidad La Joya cuenta...", en *PetroPress*, nº 15 (junio), pp. 18-20 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- RIBERA, Marco Octavio (2009), *La Amenaza del IIRSA en Bolivia*. La Paz, Observatorio Ambiental de LIDEMA (<http://www.lidema.org.bo/mamb/EIIRSA.pdf>).
- (2008), *Problemas socio-ambientales de la minería en Bolivia*. La Paz, Observatorio Ambiental de LIDEMA (<http://www.lidema.org.bo/mamb/Eambiental.pdf>).
- RODRÍGUEZ, Apolonia (2009), *Estudio del impacto del cierre del pasivo ambiental Atocha-Telamayú*. La Paz, Observatorio Ambiental de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) (<http://www.lidema.org.bo>).
- TAPIA, Ingrid (ed.) (2010), *La herencia de la mina: Representaciones sobre la contaminación minera en Potosí*. La Paz, PIEB/Embajada Real de Dinamarca.
- TAPIA, Rosario (ed.) (2010), *Minería y conflictos socioambientales en Cantumarca*. La Paz, PIEB/Embajada Real de Dinamarca.
- (2009), "Conflictos socioambientales generados por la minería en Cantumarca", en *Tinkazos*, nº 27, pp. 71-82.
- TEJADA, Alicia (2011), *Situación de la minería en tierras bajas de Bolivia*. Cochabamba, CEDIB (versión preliminar de investigación).

3. RESISTENCIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Región Andina

- CAOI (2009), *Situación de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto Iniciativa para la Integración de Infraestructuras Suramericana (IIRSA)*. Washington, Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, exposición en audiencia temática regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2 noviembre 2009 (http://www.4shared.com/file/239225950/93740735/Reporte_IIRSA_Audiencia_CIDH_2.html).
- CEDIB (2010), “Crónica de conflictos mineros en América Latina en diciembre 2009-enero 2010”, en *PetroPress* nº 18, pp. 34-5 (<http://cedib.org/bp/PP18/pp182.pdf>)
- (2009), “Crónica de conflictos mineros en América Latina en septiembre-octubre 2009”, en *PetroPress* nº 17, pp. 34-5 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>)
- (2009), “Crónica de conflictos mineros en América Latina diciembre 2008-enero 2009”, en *PetroPress* nº 13, pp. 34-35 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- CMPPC (2010), *Declaración de Tiquipaya: Acuerdo de los Pueblos*. Cochabamba, I Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, declaración de 22 abril de 2010.
- GARCÍA, Ana S. (2010), “Nuevo precedente de lucha en el capitalismo actual: I Encuentro Internacional de los Afectados por Vale”, en *Revista Pueblos*, nº 43, pp. 41-44. (http://www.revistapueblos.org/IMG/pdf_Pueblos_43_verano2010.pdf).
- GUDYNAS, Eduardo (2011), “Buen Vivir: Germinando alternativas al desarrollo”, en *América Latina en movimiento*, nº 462, pp. 1-19 (febrero 2011). (<http://www.ambiental.net/publicaciones/GudynasBuenVivirGerminandoALAI11.pdf>).
- HUANACUNI, Fernando (2010), “Paradigma occidental y paradigma indígena originario”, en *América Latina en movimiento*, nº 452, pp. 17-22 (febrero 2010) (<http://alainet.org/publica/452.phtml>).
- MACAS, Luis (2010), “Sumak Kawsay: la vida en plenitud”, en *América Latina en movimiento*, nº 452, pp. 14-16 (febrero 2010) (<http://alainet.org/publica/452.phtml>).
- PADILLA, César (2009). *OCMAL: Una larga historia de articulaciones en América Latina*. Quito, Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (<http://www.conflictosmineros.net/quienessomos/historia-de-ocmal>).
- (2009), “El caso de CONACAMI en el contexto latinoamericano”, en José de Echave, R. Hoetmer y M. Palacios (eds), *Minería y territorio en el Perú: Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*. Lima, Programa Democracia y Transformación Global/ CONACAMI/ CooperAcción/ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, *Colección Diálogos y Movimientos*, pp. 157-84.
- PE (2010), *Resolución del Parlamento Europeo sobre la prohibición general del uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea*. Bruselas, Parlamento Europeo, 5 mayo 2010 (<http://www.noalamina.org/descargas/category/11-minera-internacional?download=233%3Aresolucion-del-parlamento-europeo-de-5-de-mayo-de-2010-sobre-la-prohibicin-general-del-uso-de-las-tecnologas-mineras-a-base-de-cianuro-en-la-unin-europea&lang=es>).
- SEDE, Soledad (2011), “La Ley de Protección de los Glaciares”, en *PetroPress* nº 22, pp. 19-22 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- TADDEI, Emilio, J. Seoane, y C. Algranati (2011), *Minería transnacional y resistencias sociales en África y América Latina: Experiencias de resistencia y de movilización social frente a las estrategias corporativas de las compañías Vale (Brasil) y AngloGold Ashanti (Sudáfrica) en Argentina, Colombia, Perú, Angola y Mozambique*. Diálogo de los Pueblos/GEAL/iBase (<http://www.extractivismo.com/documentos/MineraiTransnacionalResistenciasAfricaALatr.pdf>).

Perú

- ALAYZA, Alejandra y E. Gudynas (2011), *Transiciones: Postextractivismo y alternativas al extractivismo en el Perú*. Lima, CEPES/RedGe/CLAES.
- ANAYA, James (2009), *Observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía y los sucesos del 5 de junio en las Provincias de Bagua y Uctubamba*. NN.UU, Informe de relator (<http://blog.dhperu.org/?p=4342>).
- BEBBINGTON, Anthony (ed.) (2007a), *Minería, movimientos sociales y respuestas campesinas: una ecología política de las transformaciones territoriales*. Lima, IEP/CEPES, Serie Minería 2 (http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes-publications/books/Mineria_y_Mov_Soc_Conclusiones.pdf).
- CMV (2003), *Informe final*. Lima, Comisión de la Verdad y la Reconciliación (<http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php>).
- CONACAMI (2011), “Exigimos fin de la criminalización de líderes de la frontera Norte del Perú”, *Nota de Prensa*, 9 de febrero (www.conacami.org).
- (2011), “CONACAMI Perú exige la derogatoria de los decretos de urgencia incostitucionales”, *Nota de Prensa*, 9 de febrero (www.conacami.org).
 - (2011), “Exigimos fin de la criminalización de líderes de la frontera Norte del Perú”, *Nota de Prensa*, 9 de febrero (www.conacami.org).
 - (2011), “Más de mil comuneros criminalizados en todo Perú”, *Nota de Prensa*, 9 de febrero (www.conacami.org).
 - (2011), “Fiscalía pide 13 años de cárcel para Mario Tabra, dirigente comunal de Ayabaca”, *Nota de Prensa*, 9 de febrero (www.conacami.org).
 - (2011), “Mujeres indígenas exigen respeto a territorios ancestrales”, *Nota de Prensa*, 9 de febrero (www.conacami.org).
 - (2011), “Ayabaca: Detienen a tres dirigentes ronderos”, *Nota de Prensa*, 4 de marzo (www.conacami.org).
 - (2011), “Por la libertad de expresión y el derecho a la reunión pacífica”, *Nota de Prensa*, 21 de marzo (www.conacami.org).
 - (2011), “Magdiel Carrión: Indígenas son criminalizados por ejercer justicia en sus territorios”, *Nota de Prensa*, 25 de marzo (www.conacami.org).
 - (2011), “Tía María desaprobado”, *Nota de Prensa*, 25 de marzo (www.conacami.org).
 - (2011), “Piden que se declare zona intangible a las lomas de Islay”, *Nota de Prensa*, 31 de marzo (www.conacami.org).
 - (2011), “Gobierno trata de imponer Tía María a la fuerza”, *Nota de Prensa*, 31 de marzo (www.conacami.org).
 - (2011), “Un muerto y decenas de heridos deja represión de huelguistas en Islay”, *Nota de Prensa*, 12 de abril (www.conacami.org).
 - (2011), “CONACAMI saluda solución al conflicto de Islay”, *Nota de Prensa*, 12 de abril (www.conacami.org).
 - (2011), “Paro de 24 horas en Angaraes contra minera Pampamali”, *Nota de Prensa*, 13 de mayo (www.conacami.org).
 - (2011), “Angareños con paro de 24 horas le dicen ¡No! a la minería”, *Nota de Prensa*, 13 de mayo (www.conacami.org).
 - (2011), “Un muerto deja protestas contra minera Buenaventura en Oyón”, *Nota de Prensa*, 13 de mayo (www.conacami.org).
- DEFENSORÍA del PUEBLO (2010a), *Discurso de la Defensora del Pueblo ante la Comisión que investiga los sucesos ocurridos en las Provincias de Bagua y Uctubamba*. Lima, Defensoría del Pueblo (<http://www.defensoria.gob.pe/docum-defensoriales.php>).
- (2010b), *Reporte de Conflictos Sociales n° 75 (mayo)*. Lima, Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad (<http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales-reportes.php>).
 - (2009), *Reporte de Conflictos Sociales n° 68 (octubre)*. Lima, Defensoría del Pueblo, Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad (<http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales-reportes.php>).
 - (2007), *Los Conflictos Socioambientales por actividades extractivas en el Perú*. Lima, Defensoría del Pueblo, Informe Extraordinario (<http://www.defensoria.gob.pe/inform-extraordinarios.php>).

- (2005), *Minería, Desarrollo Sostenible y Derechos Ciudadanos: Una aproximación inicial desde la Defensoría del Pueblo*. Lima, Defensoría del Pueblo, documento de trabajo (<http://www.labor.org.pe/descargas/Informe%20Defensoria%20Mineria.pdf>).
- De ECHAVE, José (2008), *El movimiento constituido por las organizaciones vinculadas a la lucha por los derechos de las comunidades frente a las industrias extractivas*. Lima, Informe de consultoría encargado por Oxfam.
- FEPROCCA (2010), *La resistencia de las comunidades de Ayavaca*. Lima, CONACAMI/ Federación Provincial de Comunidades Campesinas de Ayabaca.
- GUARANGO (2004), *Tambogrande: vale más que oro*. Lima, revista educativa, octubre 2004 (http://www.guarango.org/tambogrande/downloads/booklet_es.pdf).
- OCMIP (2009), *Quinto Informe del Observatorio de Conflictos Mineros*. Lima, Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.
- OROZCO, Olinda (2010), *Organización, pobreza y desarrollo con enfoque de género: el caso de las mujeres mineras pallaqueras del sur medio del Perú*. Lima, Instituto Redes de Desarrollo Social (<http://mineriartesanalperu.pe/mujeres/ORGANIZACION,%20POBREZA%20Y%20DESARROLLO%20CON%20ENFOQUE%20DE%20GÉNERO.pdf>).
- OXFAM (2009b), *Conflictos mineros en el Perú: Condición crítica*. Lima, Oxfam América (<http://es.oxfamamerica.org/noticias/publicaciones/Informe%20Mineria%20y%20Conflictos.pdf>).
- PAJUELO, Ramón (2009), “Derechos indígenas y explotación de recursos naturales en Perú: La tragedia de Bagua”, en Fundación Tierra (2009), *Bolivia Post-Constituyente: Tierra, territorio y autonomías indígenas*. La Paz, Fundación Tierra/International Land Coalition, Memoria del Seminario Internacional, 26-28 octubre de 2009, pp. 71-74 (http://www.ftierra.org/ft/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=200).
- PTDG (2009), *Sí pues, el territorio es nuestro*. Lima, Colección Arte para la Transformación Global (una historia ilustrada y contada por Alfonso López).
- RED MUQUI (2011), *Propuesta para una agenda concertada sobre minería y desarrollo: Principales temas para el debate*. Lima, Red Muqui, marzo 2011.
- REVESZ, Bruno (2009), “Tambogrande: de la defensa del agro a la defensa del derecho a decidir”, en De Echave et al (coord.), *Minería y Conflicto Social*, Lima, IEP/CIPCA/CBC/CIES, pp. 17-44.
- Sociedad Civil Peruana (2011), *Alternativas al Extractivismo: Por un nuevo acuerdo de gobernabilidad social, ambiental y económica frente a las industrias extractivas y las grandes inversiones*. Lima, red de organizaciones de la sociedad civil peruana (<http://alternativasalextractivismo.blogspot.com/>).
- SWEDWATCH (2011), *Swedish pensions invested in problematic mines in Latin America*. Estocolmo, SwedWatch (se puede consultar un resumen en español en http://www.swedwatch.org/sites/www.swedwatch.org/files/resumen_del_informe_de_swedwatch_0.pdf).
- TABRA, Mario (coord.) (2010), *La resistencia de las comunidades de Ayavaca*. Lima, CONACAMI/FEPROCCA.
- VITTOR, Luis (2009), “CONACAMI y el despertar del mundo indígena en el Perú”, en José de Echave, R. Hoetmer y M. Palacios (eds), *Minería y territorio en el Perú: Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización*. Lima, Programa Democracia y Transformación Global/ CONACAMI/ CooperAcción/ Universidad Nacional Mayor de San Marcos, *Colección Diálogos y Movimientos*, pp. 185-217.

Bolivia

- ARANIBAR, Ana María (2003), *La minería con rostro de mujer*. La Paz, DANIDA, Programa de Cooperación Danesa al Sector de Medio Ambiente.
- CEDIB (2009), “Las comunidades consiguen la declaratoria de zona de emergencia ambiental de la subcuenca Huanuni”, en *PetroPress* n° 17, pp. 30-31 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- (2009), “Se creó el Observatorio Boliviano de Conflictos Mineros”, en *PetroPress* n° 13, p. 27 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).
- CEJIS (2010), *Definición de la política plurinacional sobre los derechos de la Madre Tierra, Industrias extractivas y transformación de conflictos socioambientales*. La Paz, CEJIS Regional La Paz, Memoria del 3er Encuentro de Secretarios de RRNN de Organizaciones Indígenas, Originarias y Campesinas, 18 y 19 enero 2010.
- (2009), *Profundización del modelo de gestión de los Recursos Naturales en Bolivia*. La Paz, CEJIS Regional La Paz, Memoria del 1er Encuentro de Secretarios de RRNN de Organizaciones Indígenas, Originarias y Campesinas, 7 y 8 de julio 2009.
- CHÁVEZ, Franz (2011), “Las mujeres vencen los mitos de los socavones”, en *Inter Press Service (IPS)*, junio 2011 (<http://ipsnoticias.net/print.asp?idnews=98428>).
- CHOQUE, María Eugenia (2009), *Chacha Warmi: Imaginarios y vivencias en El Alto*. El Alto, Las Gregorias. AECID/SI.
- CHOQUEHUANCA, David (2010), “Hacia la reconstrucción del buen vivir”, en *América Latina en movimiento*, n° 452, pp. 8-13 (febrero 2010) (<http://alainet.org/publica/452.phtml>).
- Colectivo CASA (2010), *Si nuestros recursos naturales se van, sólo nos quedará la pobreza: Cartilla de difusión de la investigación: “El costo ecológico en la política minera de Oruro”*. Oruro, Colectivo CASA.
- Do ALTO, Hervé y P. Stefanoni (2009), *El MAS, un partido en tiempo heterogéneo*. La Paz, PNUD, Programa de Fortalecimiento Democrático, documento de trabajo.
- Do ALTO, Hervé (2008), “De la Révolution aux ONG, les «compagnons de route» de Evo Morales”, en *France-Amérique Latine Magazine*, n° 94 (<http://www.franceameriquelatine.org/index.php?m=2&idmag=46>).
- Fundación UNIR (2011), *Informe sobre conflictividad en Bolivia (enero a junio 2011)*. La Paz, Gerencia de Información, Investigación y Análisis de conflictos (<http://www.unirbolivia.org>)
- (2011), *Informe sobre conflictividad en Bolivia (julio a diciembre 2010)*. La Paz, Gerencia de Información, Investigación y Análisis de conflictos (<http://www.unirbolivia.org>).
- (2010), *Informe sobre conflictividad en Bolivia (enero a junio 2010)*. La Paz, Gerencia de Información, Investigación y Análisis de conflictos (<http://www.unirbolivia.org>).
- FRUTCAS (2008), *Plan de Desarrollo Regional Integral del Sudeste de Potosí*. Uyuni.
- GARCÍA LINERA, Álvaro (2010), *La potencia plebeya: Acción colectiva e identidades indígenas obreras y populares en Bolivia*. La Paz, CLACSO/Comuna.
- LAGOS, María (2009), *Nos hemos forjado así: al rojo vivo y a puro golpe. Historias del Comité de amas de casa de Siglo XX*. La Paz, Plural.
- LARA, Shirley y Pablo Regalsky (2011), “La Cumbre sobre el Cambio Climático de Tiquipaya y la mese rebelde”, en *Artículo Primero*, n° 21, pp. 193-201.
- MADRID, Emilio (2011), “Minera San Cristóbal: una nueva imagen empresarial para una vieja forma de minería”, en *Artículo Primero*, n° 21, pp. 103-08.
- MJ (2008), *Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades: “Mujeres Construyendo la Nueva Bolivia para Vivir Bien”*. Lima, Ministerio de Justicia, Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales (www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/anexos/descargarAnexo/758).
- OBIE (2008), *Ficha de Empresa Minera Inti Raymi S.A. (EMIRSA)*. La Paz, Observatorio Boliviano de Industrias Extractivas (<http://plataformaenergetica.org/obie/content/2091>).
- OBCOM (2009), “Contra la criminalización de la protesta social en el sudoeste potosino por parte de la minera San Cristóbal de la Sumitomo”, en *PetroPress* n° 17, pp. 29 (<http://cedib.org/index.php?/petropress/>).

- (2009), “Litio con soberanía nacional y gestión ambiental solo con un proyecto 100% estatal y control social”, en *PetroPress* nº 15, pp. 33 (<http://cedib.org/index.php?petropress/>).
- PACTO de UNIDAD (2007), *Un nuevo modelo de gestión de los recursos naturales en Bolivia*. La Paz, Pacto de Unidad
- PAREDES, Julieta (2009), *Plan Nacional de Género en Salud: Mujeres saludables y organizadas para Vivir Bien*. La Paz, Ministerio de Salud y Deportes. (http://www.sns.gob.bo/documentos/investigacion/Plan_de_genero_en_Salud_CORREGIDO_Y_ENTREGADO_12_-2_-2010.pdf).
- PRADA, Raúl et al (2011), *Por la recuperación del proceso de cambio para el pueblo y con el pueblo*. La Paz, Coordinadora Plurinacional de la Reconducción, Bolpress, 22 junio (<http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011062207>),
- RNMM (2010), *Memoria del X Encuentro de la Red Nacional de Mujeres y Minería*. Oruro, SENTEC, 13-15 marzo (<http://mineriartesanalperu.pe/MEMORIA%20X%20ENCUENTRO%20RED%20NACIONAL%20DE%20MUJERES%20Y%20MINERIA.pdf>).
- RODRÍGUEZ-CARMONA, Antonio (2009), *El Proyectorado: Bolivia tras 20 años de ayuda externa*. La Paz, Plural.
- UNITAS (2010), *Informe de la Primera Consulta Nacional: Las organizaciones de la sociedad civil como actores de desarrollo*. La Paz, Foro sobre la Eficacia del Desarrollo de las OSC/UNITAS, 7-8 julio (<http://www.cso-effectiveness.org/IMG/pdf/bolivia.pdf>).
- UZEDA, Andrés (2009), *Suma Qamaña, visiones indígenas y desarrollo*. Cochabamba, CISO/UMSS (<http://www.bibliocomunidad.com/web/fichatecnica.php?idlibro=6951>).
- VARGAS, Miguel (2010), “El anacronismo del proceso de consulta en *Jach’a Suyu Pakajaqi*: entre el reconocimiento del derecho y la voluntad política para su cumplimiento”, en Iván Bascopé (coord.), *Lecciones aprendidas sobre consulta previa*. La Paz, CEJIS Regional La Paz.
- (2009a), “Derecho de Consulta, Participación y Consentimiento Libre, Previo e Informado para las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas”, en *PetroPress* nº 16, pp. 18-21 (<http://cedib.org/index.php?petropress/>).
- (2009b), “¿Se encuentra realmente el Estado Plurinacional en camino de implementar un nuevo modelo de gestión de los recursos naturales? *Jach’a Suyu Pakajaqi* y la reconstitución del territorio ancestral para la defensa de los derechos colectivos y los recursos naturales”, en *PetroPress* nº 17, pp. 25-28 (<http://cedib.org/index.php?petropress/>).

4. ESTUDIOS DE CASO

Cajamarca

- ALTHAUS, Jaime (2007), *La revolución capitalista en el Perú*. Lima, Fondo de Cultura Económica, Informe de desarrollo urbano 2009.
- ARANA, Marco (2011), “Humala nos prometió defender el cerro Qulish”, en *La República*, 16 septiembre 2011 (<http://www.larepublica.pe/16-09-2011/marco-arana-humala-nos-prometio-defender-el-cerro-quilish>).
- (2011), “Los cajamarquinos no nos merecíamos esta modernidad”, en *Diario Prensa Libre Mundo*, 9 julio 2011 (<http://diarioprensalibremundo.com/?q=notas/marco-arana-defensor-de-los-pobres>).
- (2009), “El caso del derrame de mercurio en Choropampa y los daños a la salud en la población rural expuesta”, en *Revista Perú Med. Exp. Salud Pública*, Vol 26(1), pp. 113-18. (www.scielo.org.pe/pdf/rins/v26n1/a19v26n1.pdf).
- (2007a), *Yanacocha y la guerra de los medios*. Cajamarca, Grufides (<http://www.cajamarca.de/aktuell/medios.pdf>).

- (2007b), *La defensa del Cerro Quilish: ¿una cuestión romántica?*. Cajamarca, Grufides (http://www.conflictosmineros.net/component/docman/doc_view/283-cerro-quilish-razones-de-su-defensa-16-03-07?tmpl=component&format=raw).
- ARANA, María Teresa (2010), “Género y medio ambiente, nuevas tensiones y desafíos para la política pública”, en Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC), *Instituto de Estudos de Gênero, Seminário Internacional: “Fazendo Gênero: Diásporas, Diversidades, Dislocamentos”*, 23-26 agosto 2010 (http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278258078_ARQUIVO_GeneroyMedioambiente,NuevasTensionesyDesafiosparalaPoliticaPublica-MARIATERESAARANA2010.pdf).
- (2005), “Representaciones sociales de las mujeres cajamarquinas sobre la contaminación medioambiental minera”, en Melisa Luyo (eds), *Género y Gestión de Recursos Naturales: Resumen de Investigaciones, Experiencias y Lecciones Aprendidas*. Lima, SEPIA, Programa de Becas de Tesis Maestría, pp. 51-82. (http://www.sepia.org.pe/index.php?fp_cont=890).
- BARRANTES, Roxana et al (2011), *Las posibilidades de desarrollo regional inclusivo*. Lima, Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
- BEBBINGTON, Anthony (2007b), *La glocalización de la gobernanza ambiental: relación de escala en los movimientos socio ambientales y sus implicaciones para la gobernanza ambiental en zonas mineras en el Perú y el Ecuador*. Universidad Manchester/Global Greengrants/CEPES/Oxfam (http://www.sed.manchester.ac.uk/research/andes/publications/reports/glocalizacion_espanol.pdf).
- CHACÓN, Raúl (2002), “Rondas campesinas de mujeres, participación social y política, y problemática ambiental en Bambamarca”, en Melisa Luyo (eds), *Género y Gestión de Recursos Naturales: Resumen de Investigaciones, Experiencias y Lecciones Aprendidas*. Lima, SEPIA, Programa de Becas de Tesis Maestría, pp. 83-108 (http://www.sepia.org.pe/index.php?fp_cont=890).
- CONACAMI (2011), “La «Bancada de Yanacocha» y el financiamiento electoral”, *Nota de Prensa*, 9 de febrero (www.conacami.org).
- DEFENSORÍA del PUEBLO (2001), *El caso de derrame de mercurio que afectó a las localidades de San Sebastián de Choropampa, Magdalena y San Juan, en la Provincia de Cajamarca*. Lima, Defensoría, Informe Defensorial nº 62 (<http://www.defensoria.gob.pe/inform-defensoriales.php>).
- EL QUINDE (2011), *Quinto aniversario de El Quinde Shopping Plaza*. Cajamarca, folleto publicitario (<http://www.elquinde.com.pe/cajamarca/web/secciones/eventos.php>).
- GOB. REG. de CAJAMARCA (2011), *Pronunciamento ante el derrame de aguas ácidas por la Minera Yanacocha EIRL*. Cajamarca, Gob. Regional, Gerencia de Recursos Naturales.
- GRUFIDES (2010), *Pronunciamento sobre acusaciones en el caso Business Track*. Cajamarca, 19 junio 2010.
- GUIULFO, Luis (2006), *Cajamarca: Lineamientos para un política de desarrollo minero*. Cajamarca, ALAC/PCI/CDE (<http://www.losandes.org.pe/downloads/2006/libros/10.pdf>).
- JAHNCKE, Javier y A. Leyva (2002). *Crónica de la presencia de minera Yanacocha en Cajamarca*. Lima, FEDEPAZ/Oxfam.
- NIÑO HERRERA, Rodrigo y A. Pérez (2011), “La modernización de Cajamarca: Imaginarios sobre minería y desarrollo urbano”, documento presentado en el IV Congreso Latinoamericano de Opinión Pública de WAPOR en Belo Horizonte (Brasil), marzo (http://www.waporbh.ufmg.br/papers/Rodrigo_Alonso_Nio_Herrera.pdf).
- SALAS RODRÍGUEZ, Iván (2006), “Nueva estrategia de la barbarie minera”, en *América Latina en Movimiento*, Agencia Latina de Información (ALAI), 18 julio 2006 (<http://alainet.org/active/12939&lang=es>).
- (2005), *Quilish Hora Cero: Cajamarca, la lucha de un pueblo que defiende su vida y dignidad*. Cajamarca (<http://www.rebellion.org/docs/27178.pdf>).
- SÁNCHEZ, Milton (2010), *Minería en Celendín: Conflictos e intereses*. Cajamarca, Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC).

- SÁNCHEZ, Sergio (2011), “No hay agua en Cajamarca porque están desapareciendo los colchones acuíferos”, en *El Mercurio*, 3 septiembre 2011 (www.mercuriocajamarca.com).
- TANAKA, Martín y Carlos Meléndez (2009), “Yanacocha y los reiterados desencuentros: gran afectación, débiles capacidades de acción colectiva”, en De Echave et al (coord.), *Minería y Conflicto Social*, Lima, IEP/CIPCA/CBC/CIES, pp. 73-97.
- VÁSQUEZ, Mirtha (2010), *Los nuevos escenarios de conflictos mineros*. Cajamarca, GRUFIDES, presentación de diapositivas.
- VEGA-CENTENO, Pablo (2011), “Los efectos urbanos de la minería en el Perú: del modelo de Cerro de Pasco y La Oroya al de Cajamarca”, en *Revista Apuntes*, Vol. 38, n° 68, pp. 109-36 (http://www.up.edu.pe/revista_apuntes/SiteAssets/Apuntes_68_Articulo_4_Vega_Centeno.pdf).
- VERA, Dante (2004), *Minería: Oportunidades y Amenazas en la Región de Cajamarca*. Cajamarca, estudio de consultoría realizado para el Grupo Norte.

Challapata

- Colectivo CASA (2011), *Regantes y pobladores de Challapata rechazaron rotundamente socialización de actividades mineras*. Oruro, Nota de prensa, 10 julio 2011.
- (2011), *Gobernación de Oruro ratifica que no puede haber minería en Challapata*. Oruro, Nota de Prensa, abril 2011.
- CEDIB (2011), *¿¿¿Minería de oro a cielo abierto... en Challapata???* Cochabamba, CEDIB (http://www.cedib.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/consecuencia_mineria_cedib.pdf).
- CUENCA, Ángela (2011), “Challapata: 50 años de producción sin contaminación”, en *Respuesta Colectiva*, Vol 2, n° 3, pp. 10-11 (
- (2011), “Regantes y pobladores de Challapata rechazaron rotundamente socialización de actividades mineras”, en *Respuesta Colectiva*, Vol 2, n° 2, p, 8 (http://www.constituyentesoberana.org/3/destacados/072011/250711_1.pdf).
- FRIEDRICH, Sarah y E. Madrid (2011), *Historia de la lucha antiminera de Challapata 1993-2011*. La Paz/Oruro, Colectivo CASA (borrador de agosto 2011).
- MADRID, Emilio et alter (2002), “Historia de la minería de oro en Bolivia: la lucha de Challapata (Oruro), en E. Madrid et alter (2002), *Minería y comunidades campesinas: ¿coexistencia o conflicto?* La Paz, PIEB.

Gobiernos de diferentes orientaciones políticas en América Latina apuestan por un **modelo económico fuertemente dependiente del sector extractivo**, lo que ha generado unos niveles de conflictividad social sin precedentes en la región.

Hoy en día, **el auge de la minería** responde a lógicas del mercado global y transnacionalización del capital. Sin embargo, **su motor propulsor no es únicamente económico, sino también cultural**. La publicidad o la responsabilidad social están al servicio de una estrategia mayor: lograr el cambio cultural en las poblaciones locales y ampliar los vínculos clientelares. Para ello construyen discursos e imaginarios de la minería como vía privilegiada de acceso a la modernidad y lucha contra la pobreza. Y no dudan en apropiarse de los imaginarios colectivos ligados a la madre tierra, o la lucha por el agua.

La presente publicación pretende mostrar cómo **el debate de ideas alrededor de la minería no es racional sino que se dirime también en el terreno cultural**.

¿Cómo construye la industria minera sus imaginarios? ¿Y cómo lo hacen las resistencias desde la sociedad civil? ¿Se trata de una lucha asimétrica?

Esta publicación pretende, en resumen, dar algunas pistas para acercarnos, analizar y entender los conflictos y resistencias mineras desde una mirada alternativa.